

Por una información responsable: deontología y práctica
del derecho de rectificación en la prensa española

Victoria Moreno Gil

en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de Doctor en
Investigación en Medios de Comunicación

Universidad Carlos III de Madrid

Director:
Carlos Maciá Barber

Getafe, 2019

Esta tesis se distribuye bajo licencia “Creative Commons **Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada**”.



A Sergio, Daniela y Laia, los pilares de mi vida.

A Isabel, mi madre y mi mayor apoyo.

A mi hermana Cristina, por estar tan cerca a pesar de vivir tan lejos.

A toda mi familia y amigos, especialmente a María, Leti, Raquel;
y a Luis, por ser el responsable de que comenzara esta andadura.

Os quiero.

AGRADECIMIENTOS

Gracias especialmente a mi mentor y director de tesis, Prof. Dr. D. Carlos Maciá Barber. En él he encontrado durante todos estos años apoyo incondicional, buenos consejos y mucha paciencia.

Mi agradecimiento al resto de profesores del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual y al personal de la Escuela de Doctorado de la Universidad Carlos III de Madrid por prestarme su ayuda siempre que lo he necesitado.

Gracias también a aquellos que un día me cerraron la puerta. Hoy les agradezco haberme hecho más fuerte y tenaz.

ÍNDICE

Índice de tablas, figuras e imágenes	7
Resumen	9
<i>Abstract</i>	11
Tabla de abreviaturas y acrónimos	13
 1. Introducción	
1.1. Justificación del tema	15
1.1.1. Originalidad	17
1.1.2. Relevancia	18
1.1.3. Transferencia del conocimiento	19
1.1.4. Interés personal	19
1.2. Objeto, objetivos e hipótesis	20
1.2.1. Objeto de estudio	20
1.2.2. Objetivos de la investigación	21
1.2.3. Hipótesis de trabajo	22
1.3. Contexto espaciotemporal del estudio	23
1.4. Estructura de la tesis doctoral	24
1.5. Límites de la investigación	26
 2. Marco teórico	
2.1. El derecho de rectificación en España	27
2.1.1. Origen histórico-jurídico del derecho de rectificación en España	27

2.1.1.1. Los conceptos de rectificación y réplica	34
2.1.1.2. La Ley 4/1980, de 10 de enero, reguladora del Estatuto de la Radio y la Televisión Española	35
2.1.2. El derecho de rectificación en España: LO 2/1984, doctrina y jurispru- dencia	41
2.1.2.1. Delimitación general y exposición de la problemática.....	41
2.1.2.2. Fundamentación	45
2.1.2.3. Naturaleza jurídica	46
2.1.2.4. Derecho subjetivo y perspectiva institucional	47
2.1.2.5. ¿Derecho fundamental? ¿Límite a la libertad de comunicación?	50
2.1.2.6. Contenido y objeto	51
2.1.2.7. Titulares y obligados	56
2.1.2.8. Procedimiento de ejercicio	59
2.1.2.9. La obligación del medio de comunicación	62
2.1.2.10. La acción de rectificación	64
2.1.2.11. La rectificación voluntaria y la retractación	69
2.2. El derecho de rectificación en el derecho comparado	70
2.2.1. Derecho internacional	70
2.2.2. Consejo de Europa y Unión Europea	74
2.2.3. Los modelos europeo y anglosajón	81
2.3. Doctrina y jurisprudencia	95
2.3.1. La STC 168/1986, una interpretación restrictiva y errónea del derecho de rectificación	95
2.3.2. Estado de la cuestión en la doctrina y valoración personal	102
2.3.2.1. Un derecho de rectificación en pos del Estado democrático	103
2.3.2.2. Naturaleza penal de un derecho... ¿fundamental?	104

3. Metodología

3.1. Marco metodológico	114
3.1.1. Análisis cuantitativo y cualitativo	115
3.1.2. Validez y confiabilidad de las técnicas de análisis	122
3.1.3. Objetivos y puesta en práctica	124
3.2. Marco del trabajo de campo	125
3.2.1. Diseño de la investigación. Material y método	125
3.2.1.2. Rectificación en la prensa española (1984-2017). Selección de la muestra	125
3.2.1.3. Cuestionarios de opinión a directivos, <i>ombudsman</i> , asociaciones de prensa y asociaciones de consumidores	129

4. Resultados

4.1. Rectificación en la prensa española (1984-2017)	139
4.1.1. Obtención de resultados	139
4.1.1.1. Resultados individuales por diario	139
4.1.1.2. Resultados en conjunto, análisis comparativo	149
4.1.2. Análisis y discusión de resultados	155
4.1.2.1. <i>El País</i>	155
4.1.2.2. <i>El Mundo</i>	158
4.1.2.3. <i>La Vanguardia</i>	161
4.1.2.4. <i>Abc</i>	163
4.1.2.5. Conclusiones	165
4.1.3. Conclusiones del análisis cuantitativo de los escritos de rectificación	166
4.2. Cuestionarios de opinión a profesionales y usuarios	170
4.2.1. Obtención de resultados	170
4.2.1.1. Responsables de diarios	170
4.2.1.2. <i>Ombudsman</i>	180

4.2.1.3. Asociaciones de prensa	188
4.2.1.4. Asociaciones de consumidores y usuarios	198
4.2.2. Análisis de resultados	200
5. La responsabilidad de los medios	
5.1. Deontología, autorregulación y rectificación	221
5.1.1. El derecho de rectificación en los códigos éticos. Breve repaso histórico y principales manuales en España	224
5.1.2. Recomendaciones de los códigos en torno a la rectificación	234
5.1.3. La figura del Defensor u <i>ombudsman</i>	235
5.1.4. Los Consejos de Prensa	237
5.1.5. Asociaciones de usuarios y otros colectivos	239
5.2. Premura, precariedad, intereses espurios y actitud negligente.....	240
5.3. ¿Qué impide a los medios rectificar?	241
5.4. Ejemplos de la insignificancia de los escritos de rectificación	243
5.5. El difícil acceso del ciudadano a los medios	259
6. Conclusiones	261
7. Futuras líneas de investigación	268
8. Referencias bibliográficas	270
9. Anexos	278

Índice de tablas, figuras e imágenes

Tablas

Tabla 1. Evolución histórica del derecho de rectificación en la legislación española	39
Tabla 2. El derecho de rectificación en la legislación comparada.....	91
Tabla 3. Resumen de los principales resultados de los cuestionarios	216

Gráficos

Para *El País*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *Abc*:

Gráfico 1. Resultados del análisis cuantitativo de escritos de rectificación	141
Gráfico 2. Número total de escritos de rectificación publicados en función de cómo se autodefinen	
Gráfico 3. Número total de escritos de rectificación publicados en función de cómo los titula el diario	
Gráfico 4. Número total de escritos de rectificación publicados por año	
Gráfico 5. Número total de escritos de rectificación publicados por año en cada diario	151
Gráfico 6. Porcentaje que representa el número total de escritos de rectificación publicados en cada diario	
Gráfico 7. Número total de escritos de rectificación publicados en cada diario por secciones	
Gráfico 8. Número total de escritos de rectificación publicados en cada diario en secciones distintas a <i>Cartas al director</i>	152
Gráfico 9. Número total de escritos de rectificación publicados por cada diario según su extensión	
Gráfico 10. Número total de escritos de rectificación publicados por cada diario en función de su referencia a la LO 2/1984	153

Gráfico 11. Número total de escritos de rectificación publicados en cada diario según la literalidad en su reproducción	
Gráfico 12. Número total de escritos de rectificación publicados en función de cómo los titula el diario diario	154
Gráfico 13. Número total de escritos de rectificación publicados en cada diario según cómo se autodefinen	
Gráfico 14. Número total de escritos de rectificación publicados en cada diario según la defensa de la honorabilidad o el buen nombre	
Gráfico 15. Número total de escritos de rectificación publicados en cada diario en función de su tratamiento noticioso	155
Gráfico 16. Número total de escritos de rectificación publicados en cada diario según otros parámetros	

Imágenes

Imagen 1. Portada del diario <i>El País</i> (14-12-2014)	245
Imagen 2. Portada del diario <i>El País</i> (28-12-2017)	246
Imagen 3. Portada del diario <i>El País</i> (22-07-2018)	247
Imagen 4. Detalle del titular publicado en la portada del diario <i>El País</i> (14-12-2014).....	248
Imagen 5. Detalle del titular publicado en la portada del diario <i>El País</i> (28-12-2017) ..	251
Imagen 6. Detalle del titular publicado en la portada del diario <i>El País</i> (22-07-2014) ...	252
Imagen 7. Escrito de rectificación y pieza informativa publicados en el diario <i>Abc</i> (22-2-2015).....	255
Imagen 8. Escrito de rectificación publicado en el diario <i>El Mundo</i> (20-5-1994)	257
Imagen 9. Escrito de rectificación publicado en el diario <i>El País</i> (26-5-2001) ...	258

Resumen

Hasta el momento la aproximación al Derecho de rectificación en España se ha reducido esencialmente a su análisis desde una perspectiva jurídica, haciendo hincapié en cómo debe ser entendida esta figura en función, tanto de su regulación legal como de lo enunciado por la jurisprudencia constitucional. En el ámbito de la Comunicación, sin embargo, este enfoque resulta poco práctico, puesto que impide conocer las verdaderas implicaciones y la efectividad del Derecho cuando es ejercicio por el ciudadano a través de los medios de comunicación. Esta Tesis Doctoral tiene por objeto investigar la satisfacción real del Derecho de rectificación en la prensa española desde que entrara en vigor la Ley Orgánica que lo regula, en 1984, hasta 2017, tomando como referencia tanto sus limitaciones jurídicas como el papel de la deontología periodística.

En cuanto a la metodología de investigación, se han empleado técnicas cuantitativas y cualitativas para analizar la cantidad y las características de los escritos de rectificación publicados en los diarios nacionales de mayor tirada (n=1.448), así como cuestionarios opinativos de calidad a distintos grupos de profesionales (n=47) con el propósito de encontrar las razones que expliquen la escasa repercusión de este derecho. Los resultados confirman las hipótesis de partida: la publicación de los escritos de rectificación es escasa y no cumple con los mínimos exigibles; los responsables de los periódicos no abogan por reforzar su protección dentro de los manuales de conducta y son reticentes a la hora de difundir las rectificaciones, mientras que el público desconoce los pormenores de un derecho que le asiste y se mantiene en ese acomplejado segundo plano que es la sombra mediática.

En conclusión, el Derecho de rectificación es una figura marginal, con escasa presencia en los medios y que no goza de la efectividad necesaria. Algo en lo que tienen mucho que ver una regulación jurídica anticuada, la indefinición de los códigos de autorregulación o las rutinas periodísticas (premura, falta de contraste, espectacularidad e intereses políticos y económicos); pero también, en último

término, la arrogancia del periodista, que identifica la rectificación del aludido con una suerte de reprimenda hacia su trabajo.

Abstract

Until now, the theoretical approach to the right of reply in Spain has been reduced basically to the study of its legal perspective, putting the emphasis on how this figure must be understood taking into consideration both the legal regulation and the Constitutional jurisprudence. Nevertheless, in the field of mass communication this standpoint becomes barely practical since it doesn't give the opportunity to understand the real consequences and efficacy of this right when the citizen exercises it through the media. The aim of this doctoral thesis is to investigate the efficacy of the right of reply in the Spanish press from 1984 —when the law that regulates this right came into force— until 2017, taking its legal limitations and professional ethics as references.

In relation to the methodology, we have used quantitative and qualitative methods to analyse the number and features of the replies that have been published in the most important Spanish newspapers (n=1.448). We have also utilised quality opinion surveys (n=47) among different groups of professionals in order to find the reasons that justify the low impact of this right. The results obtained confirm our starting point hypothesis: the number of the replies that are published is limited and the newspapers don't match the minimum requirements, directors don't stand up for strengthening the protections of this right in the style books and act reluctantly when it comes to publishing the replies, and the public isn't aware of the significance of the right and remain in a secondary position, in the communication process' shadow.

As a result, the right of reply is a marginal figure, scarcely present in the media and ineffective. This is due to the fact that there is an obsolete legal regulation, an absence of clarity in the self-regulation manuals and an impact of the media routines (urgency, lack of verification, sensationalism, political and economic interests); but also, it is due to the journalist's arrogance, which leads him to compare a reply with a reprimand.

Tabla de abreviaturas y acrónimos

Art.	Artículo
ATM	Audiencia Territorial de Madrid
CE	Constitución Española
CP	Código Penal
Ed.	Edición
FAPE	Federación de Asociaciones de Periodistas de España
FCC	<i>Federal Communications Commission</i>
FIP	Federación Internacional de Periodistas
FJ	Fundamento jurídico
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LGDCU	Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
LO	Ley Orgánica
LODR	Ley Orgánica del Derecho de Rectificación
OJD	Oficina de Justificación de la Difusión
RAE	Real Academia Española
RTVE	Radio Televisión Española
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
SAT	Sentencia de la Audiencia Territorial
SSTC	Sentencias del Tribunal Constitucional
SSTS	Sentencias del Tribunal Supremo
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
TC	Tribunal Constitucional
TFM	Trabajo Fin de Máster
TS	Tribunal Supremo
ONU	Organización de las Naciones Unidas

1. Introducción

1.1. Justificación del tema

Apunta con tino Desantes (1974: 29) que “la relación entre información y democracia es tan evidente como la razón inversa existente entre totalitarismo e información”. Es en ese complejo contexto, el que conforman democracia e información, donde el presente trabajo pretende abordar el derecho de rectificación, como un mecanismo que fortalece ambos aspectos indisolublemente ligados: la información, en tanto que condición imprescindible para la existencia de cualquier sistema democrático, con la democracia, en tanto que participación de la comunidad, como *leitmotiv* que debe guiar la labor informativa. La retroalimentación y mutua dependencia es obvia y el papel del derecho de rectificación, en este sentido, no es baladí.

Bajo el título ***Por una información responsable: deontología y práctica del derecho de rectificación en la prensa española***, la investigación que se plantea versa sobre la eficacia práctica de la figura del derecho de rectificación en la prensa española desde 1984 (fecha en la que la última Ley Orgánica sobre el Derecho de rectificación entra en vigor) hasta 2017.

Una figura, la del derecho de rectificación, que, bien entendida y puesta en práctica, debería cumplir con la finalidad que el legislador vislumbró a la hora de materializar las condiciones de su ejercicio en la Ley Orgánica que lo regula (LO 2/1984). Esto es, actuar como el derecho que asiste a toda persona natural o jurídica a rectificar una información de hechos que le aludan y que él mismo considere inexactos y cuya publicación pueda causarle perjuicio. Concretamente, el art. 1 de la citada LO establece que “toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio. Podrán ejercitar el derecho de rectificación el perjudicado aludido o su representante y, si hubiese fallecido aquél, sus herederos o los representantes de éstos”. Pero nada más lejos de la realidad. La rutina diaria en las redacciones —con la premura en ocasiones como peor aliada—, los intereses espurios y, sobre todo, el escaso compromiso deontológico por parte de medios y de periodistas, impiden la satisfacción real del derecho de rectificación.

Y es que la plena eficacia de este derecho no se agota en la remisión, por parte del perjudicado aludido, del escrito de rectificación al director del medio que ha publicado la información controvertida, ni tampoco con la publicación por parte de este último de dicho escrito. Es necesario que la publicación se realice de

manera íntegra, sin comentarios ni apostillas; pero, además, y aquí se plantea el problema, con relevancia semejante a la información original. Si bien es cierto que la LO 2/1984 no establece qué deba entenderse por relevancia semejante, la jurisprudencia y la doctrina han señalado determinados parámetros en este sentido, como el tamaño de la tipografía empleada, el número de página y la sección donde se publica la rectificación, el acompañamiento de recursos gráficos o fotografías, etc.

El puro análisis jurídico de la figura del derecho de rectificación, como ya pude abordar en mi TFM titulado *El derecho de rectificación: Regulación jurídica y eficacia práctica*, se nos antoja, sin embargo, insuficiente en el ámbito del periodismo, donde el campo de visión ha de ampliarse para dotar de la aplicabilidad y practicidad al estudio de esta figura.

La investigación propuesta pretende superar, por tanto, el simple análisis jurídico de la figura del derecho de rectificación, para adentrarse también en el espinoso terreno de la práctica real de este derecho, así como en el de la deontología profesional. Para alcanzar un óptimo ejercicio de rectificación y, por ende, una eficacia real del mismo es imprescindible el reconocimiento de que el periodismo es, ante todo, una profesión ligada a la responsabilidad y a la ética. Y ahí precisamente radica la importancia de acercarnos, en esta investigación, al significado e implicaciones de la deontología periodística.

Concepto parejo al de aplicabilidad y practicidad en una investigación es el de originalidad. Haciendo un breve repaso por la literatura que sobre el derecho de rectificación existe en el campo del periodismo y de la comunicación, enseguida comprobamos que el mayor número de trabajos abordan esta figura de manera *cuasi* anecdótica, dejando que sea la doctrina jurídica la que prácticamente focalice toda la atención al tema, encuadrando ésta el estudio del derecho de rectificación en el marco del derecho constitucional de la información y, así, de sus límites, fundamentación, naturaleza jurídica y condiciones del ejercicio.

Es, por tanto, a nuestro juicio, imprescindible un acercamiento serio y exhaustivo a la eficacia real de la figura del derecho de rectificación en la prensa, con el objeto de complementar el puro análisis jurídico de la misma y abrir la óptica de análisis a otros aspectos asimismo trascendentales, tales como su eficacia práctica y su reflejo en los manuales deontológicos de la profesión periodística.

En relación con este último punto, cabe añadir que otro aspecto destacable de la investigación es su aplicación práctica al trabajo diario de las redacciones. Actuando los periodistas como sujeto pasivo del derecho de rectificación y siendo, por ende, los responsables de la inserción del escrito de rectificación necesitan de unas instrucciones claras (más allá de lo enunciado por los preceptos jurídicos) a seguir en estos casos, que les permitan garantizar los mínimos éticos exigibles.

De otro lado, el tema escogido es de destacadísima importancia debido a que hablamos, en definitiva, del derecho a la información en su doble vertiente

activa y pasiva: de un lado, el derecho del periodista a comunicar información veraz y, de otro, el derecho ciudadano a recibirla. Pero, además, del necesario pluralismo y la cardinal veracidad, garantías de una opinión pública libre sin la que ningún Estado puede reconocerse a sí mismo como verdaderamente democrático. En definitiva, el tema de nuestra investigación nos obliga a recorrer las partes que componen el entramado del derecho a la información (léase requisito de veracidad, derechos de la personalidad como límites, el llamado derecho de acceso de los ciudadanos a los medios de comunicación, etc.) a través del estudio concreto del derecho de rectificación, entendido éste último como único instrumento que posibilita que el ciudadano pueda rectificar de manera directa aquellos hechos difundidos por un medio de comunicación que le aluden y que considera falsos o inexactos.

En concreto, nuestro interés se centra en observar si existe una satisfacción real de este derecho en la prensa española y si se trata de una figura común o marginal. Al mismo tiempo, resulta imprescindible constatar la necesidad de que existan unos parámetros deontológicos al respecto. Y es que no podemos olvidar que el profesional de la información cuenta con un papel imprescindible —y de enorme responsabilidad— en el Estado democrático, como garante último de la existencia de una opinión pública libre.

1.1.1. Originalidad

Tal y como hemos adelantado en el apartado anterior, la presente tesis doctoral es única por diversos aspectos.

En primer lugar, porque combina el análisis jurídico del derecho de rectificación con el de su aplicabilidad y efectividad. Esto se traduce en una doble perspectiva de análisis, algo que nunca se había empleado en el estudio de esta figura en España. Recordemos que, de manera generalizada, la aproximación al derecho de rectificación se ha abordado siempre desde la perspectiva teórica y, en la mayoría de los casos, desde la exclusiva óptica jurídica.

De otro lado, por primera vez se realiza un estudio cuantitativo y cualitativo que permite medir la cantidad de escritos de rectificación que se han publicado en los diarios españoles de mayor difusión desde que entrara en vigor la actual ley que regula esta materia (LO 2/1984). Pero no solo eso. En la presente investigación, se obtienen resultados que demuestran si los diarios cumplen o no con las condiciones legales exigibles en la difusión de las rectificaciones (principio de relevancia semejante, sección en la que se publica, no introducción de comentarios y/o apostillas) y se cuantifican otra serie de parámetros clave a la hora de conseguir una radiografía exacta de la eficacia de las rectificaciones (título, tratamiento, extensión, etc.). Del mismo modo, se muestra la evolución en el número de

rectificaciones publicadas a lo largo del tiempo y se realiza un análisis comparativo entre todos los diarios.

Por primera vez también se estudia cuál es la percepción que de este derecho se tiene entre distintos grupos de profesionales de la información (responsables de los diarios, *ombudsmen* o defensores del lector y asociaciones profesionales), además de entre aquellas asociaciones que protegen los intereses de los consumidores y usuarios. De esta manera se da visibilidad a su opinión e impresiones, lo que sirve para conocer de primera mano cuál es su conocimiento sobre esta figura; contextualizar y explicar el verdadero alcance del derecho de rectificación; y, por último, para contrastar las divergencias entre lo que los medios expresan y lo que realmente materializan.

Ambos análisis están íntimamente ligados a la deontología profesional, que es otro de los aspectos fundamentales que se estudian en el presente trabajo. En él se investiga también hasta qué punto y con qué relevancia el derecho de rectificación queda recogido en los principales códigos de conducta y manuales de estilo de la profesión.

Otro de los aspectos que convierten en única esta Tesis Doctoral es el análisis de varios casos paradigmáticos en la publicación de rectificaciones, que vuelven a poner de manifiesto las carencias y dudosas prácticas de los diarios.

En definitiva, la originalidad de este trabajo radica en una nueva aproximación al derecho de rectificación que pretende no quedarse en la superficie teórica y sí ahondar en las causas de la escasa efectividad de esta figura, centrándose en la *praxis* y el papel de la deontología periodística en ese sentido.

1.1.2. Relevancia

El presente trabajo abre las puertas a nuevas investigaciones sobre el derecho de rectificación, que desde ahora pueden tomar como referencia esta perspectiva de estudio amplia y exhaustiva para ahondar en otros aspectos de este derecho y/o analizar su trascendencia en otros medios de comunicación. Éste, el de su aplicación práctica, es quizá el punto más importante a significar en cuanto a la relevancia de la presente Tesis Doctoral, además de que ofrece la posibilidad de contar por primera vez con resultados medibles sobre los escritos de rectificación difundidos en prensa en las últimas tres décadas. Unos resultados que se convierten en referencia en el estudio de esta figura y que permiten contextualizar y razonar el porqué de su situación marginal.

La originalidad académica de la presente investigación es, por tanto, indiscutible. Como también lo es su utilidad profesional y social, ya que puede servir como referencia a periodistas, *ombudsmen* o responsables de asociaciones de prensa, además de a aquellos lectores interesados en indagar más acerca de este derecho y ejercitarlo.

Por último, como antes ya señalamos, este estudio cubre un hueco del conocimiento y es posible extender sus resultados a principios más amplios, lo que faculta a otros investigadores a utilizarlo como referencia para apoyar o refutar una teoría o desarrollar otras nuevas.

1.1.3. Transferencia del conocimiento

Consideramos que los resultados de esta investigación pueden ser de gran utilidad en distintos ámbitos. El primero de estos campos serían las facultades de Periodismo y Comunicación, donde se estudia el derecho de rectificación tanto en la asignatura de *Deontología periodística* como en la de *Derecho de la Información*. Al mismo tiempo, sería muy interesante que se dieran a conocer las conclusiones del presente trabajo en el seno de los medios de comunicación, de forma que puedan servir a modo de pautas de actuación o, al menos, que se facilite un mayor conocimiento sobre la materia dentro de las redacciones. La forma de lograrlo podría ser mixta: en forma de charlas o conferencias dirigidas a periodistas y directores de medios de comunicación, a través de publicaciones especializadas digitales o en papel que lleguen a las redacciones (editadas, por ejemplo, por una organización de referencia, como la FAPE), a través de una referencia en el libro de estilo de cada medio de comunicación o la *intranet* dirigida a los empleados.

En el caso de las asociaciones de prensa, cuya clara vocación es la de servicio a los periodistas y comunicadores, sería muy interesante que pudieran difundir los resultados de esta Tesis Doctoral, a través de sus publicaciones, páginas web corporativas o mediante conferencias.

La presente investigación es, además, un interesante referente para las personas que se encargan de redactar los manuales de estilo en los medios de comunicación, los *ombudsmen* y los propios lectores oyentes/espectadores. En este último caso, las publicaciones o sitios web de las organizaciones de consumidores y usuarios serían un lugar idóneo para dar a conocer los resultados de esta Tesis, ya que este tipo de asociaciones suelen servir de bisagra entre el público y los medios —principalmente aquellas, como la *Asociación de Usuarios de la Comunicación* (AUC), que se dedican en exclusiva a este ámbito—.

1.1.4. Interés personal

Mi interés personal por el derecho de rectificación empezó durante los años en los que cursaba la doble licenciatura en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid. Recuerdo cómo en la asignatura de *Ética periodística* estudiamos la fraudulenta *rectificación* televisada y leída por Alfredo Urdaci (por aquel entonces director de informativos de TVE y presentador de la segunda edición del Telediario de la cadena pública) con relación a una noticia

sobre la huelga general de junio de 2006. La sentencia de la Audiencia Nacional falló a favor del sindicato Comisiones Obreras, considerando que el tratamiento informativo que de la huelga general que hizo RTVE y TVE S.A. vulneró los derechos de fundamentales de huelga y libertad sindical de los trabajadores, y obligó al Ente Público a emitir durante un día entero una información completa del fallo en todos sus informativos.

En aquella intervención de Urdaci, que ha quedado para la posteridad, pudimos escuchar el famoso “C-C-O-O” para referirse al sindicato Comisiones Obreras, además de una alusión inexacta a esa huelga (que no era una huelga sin más, como parece dar a entender Urdaci, sino una huelga general) y el recordatorio de que la sentencia de la Audiencia Nacional no era en ese momento firme y que RTVE y TVE, S.A. ya la habían recurrido ante el Tribunal Supremo.

Ese caso despertó en mí mucha curiosidad por dos motivos: el primero, porque no es nada habitual ver cómo un medio de comunicación rectifica (mucho menos en el caso de la televisión); y, el segundo, porque era evidente que dicha rectificación no cumplía, en mi opinión, con la mínima ética exigible. A partir de ahí empecé a fijarme mucho más en casos de rectificación, sobre todo en la prensa (que es, en principio, donde tienen mayor presencia) y, una vez que empecé a cursar el Máster en *Derechos Fundamentales y Libertades Informativas* de la UNED, tenía claro que mi trabajo final versaría sobre esta figura.

De hecho, la presente Tesis Doctoral sirve como continuación a esa primera aproximación teórica, con un análisis considerablemente más exhaustivo del contexto real de esta figura y, sobre todo, incluyendo una segunda perspectiva de análisis que complementa a la visión jurídica: la de la ética y la deontología periodísticas.

1.2. Objeto, objetivos e hipótesis

1.2.1. Objeto de estudio

El objeto de estudio del presente trabajo es la satisfacción real del derecho de rectificación en la prensa española desde 1984 hasta 2017. El motivo de establecer esta fecha de partida en la investigación se debe a que, como veremos más adelante, ese año es cuando entra en vigor la actual Ley Orgánica que regula este derecho, la LO 2/1984, de 26 de marzo. Era, por tanto, muy significativo poder abarcar todo ese periodo a la hora de extraer conclusiones certeras sobre la realidad del derecho de rectificación actual. Para ello, se plantean una serie de cuestiones guía en la investigación:

- A. Derecho de rectificación como derecho fundamental de todo ciudadano que no obstruye, sino que refuerza, el derecho a la información.

B. La responsabilidad del periodista en el cumplimiento de la legislación y de los códigos éticos que rigen la profesión. Importancia de la deontología profesional en el ejercicio del Periodismo.

C. Información veraz como garantía de una opinión pública libre frente a la premura, la lógica económica y el afán de poder de los medios.

1.2.2. Objetivos de la investigación

Cabe distinguir en el estudio entre unos objetivos generales y otros propósitos específicos:

A. Objetivos generales

- 1) El principal propósito es **analizar la situación actual del derecho de rectificación en la prensa diaria española**, observando si se trata de una figura común o, muy al contrario, marginal; y, al mismo tiempo, **si su puesta en práctica es la adecuada** para satisfacer el derecho a la información.
- 2) De otro lado, **estudiaremos si los manuales de conducta profesional contribuyen al conocimiento general de esta figura** jurídica entre los profesionales de los medios y a su consiguiente aplicación o, en su caso, ponen barreras a su entendimiento.

B. Objetivos específicos

- 1) **Detectar** la presencia o ausencia del derecho de rectificación en los diarios seleccionados, además de en los principales manuales de autorregulación periodística, así como analizar la importancia que estos últimos le conceden en el ejercicio de la profesión.
- 2) **Descubrir** si los profesionales de la información conocen las verdaderas implicaciones de este derecho fundamental y las pautas que deben cumplirse para su práctica efectiva.
- 3) **Averiguar** si las rutinas periodísticas actuales (ritmo vertiginoso en la fabricación de noticias, espectacularidad, lógica económica, escaso contraste de la información, etc.) son hasta cierto punto incompatibles con

la realización efectiva del derecho de todo ciudadano a rectificar una información que considera lesiva.

- 4) **Estudiar** algunos casos reales que puedan demostrar el difícil acceso del ciudadano a los medios de comunicación, así como las deficiencias que suelen presentar las rectificaciones publicadas (los escritos de rectificación se publican, por lo general, tarde y mal, sin concedérseles el mismo peso e importancia que a la información controvertida). Demostrar, en este último caso, si se puede hablar de un derecho que carece de visibilidad y efectividad.

1.2.3. Hipótesis de trabajo

- A. El derecho de rectificación no es más que una figura marginal en la actual prensa española, debido a su escasa presencia y su falta de efectividad real (**H1**).
- B. Su puesta en práctica dista de ser la adecuada, ya que por norma general no se publican los escritos cumpliendo con el criterio de relevancia que ha de exigirse: la gran mayoría aparecen en las *Cartas al director*. Dicha sección, cajón de sastre donde se da voz a los lectores no es, sin embargo, el espacio adecuado para publicar los escritos de rectificación, ya que éstos deben aparecer en la misma página y/o sección donde se publicó la información controvertida y con en una extensión y tamaño de letra similares a los de la noticia o reportaje originales (**H2**).
- C. De todo lo anterior se destila no sólo la inoperancia real de este derecho sino, también, el escaso conocimiento que la ciudadanía posee acerca de su uso, de su eficacia e, incluso, de su mera existencia; lo que en último término explica en parte la escasez del número de escritos de rectificación (**H3**).
- D. Los códigos de conducta profesional y diferentes convenios europeos recogen, en su mayoría, el derecho de rectificación en pos del cumplimiento de la ética profesional. Sin embargo, no suelen especificar los criterios para su adecuada inserción en los periódicos. En última instancia, esto implica cierta inseguridad y desconocimiento por parte de los profesionales a la hora de enfrentarse a la publicación de estos escritos (**H4**).

- E.** Los profesionales de la comunicación y los responsables de los medios no conocen en profundidad esta figura. Se muestran por lo general reticentes a publicar los escritos en el espacio adecuado y con la relevancia exigible (**H5**).
- F.** La publicación de escritos de rectificación sigue asociándose desde la prensa con una suerte de reprimenda o castigo a causa de un mal proceder. Se entiende que se trata de una forma de contradecir su verdad y, al mismo tiempo, de poner en evidencia sus errores, aunque no lo manifiesten de manera abierta. De este modo, es posible encontrar rectificaciones acompañadas de comentarios y/o apostillas por parte del medio y, como antes se ha señalado, es muy habitual localizarlos en las secciones más “marginales” de los periódicos (**H6**).
- G.** No es lo mismo que el derecho de rectificación lo ejerza un ciudadano anónimo o con escasa popularidad a que se trate de un político o personaje famoso: en este último supuesto, por lo general la rectificación contará con mayor espacio, número de columnas y una mejor ‘localización’ dentro del periódico (**H7**).

1.3. Contexto espaciotemporal del estudio

¿Por qué un estudio diacrónico de 1984 a 2017? Aunque, en un primer momento, pudiera pensarse que se trata de un abanico temporal muy amplio y difícilmente abaricable, lo cierto es que la media de los escritos publicados en estas tres décadas es de algo menos de 300 por diario. La fecha escogida para fijar el inicio del estudio no es tampoco fruto del azar. Precisamente en 1984 el derecho de rectificación en España pasa a estar regulado mediante Ley Orgánica, la ya mencionada LO 2/1984, que rompe a su vez con la legislación anterior en la regulación de esta materia marcando el inicio de la etapa actual.

Por lo tanto, con el propósito de contar con un universo amplio de rectificaciones a analizar y, asimismo, poder llegar a conclusiones lo más ajustadas posibles a la realidad presente creemos adecuada selección de este periodo de análisis.

¿Por qué un estudio centrado en prensa? El hecho de que el derecho de rectificación se configurara en sus inicios como una figura únicamente válida para la prensa es uno de los motivos de mayor peso. A ello se unen las dificultades de extrapolar la actual legislación a los nuevos medios de comunicación e, incluso, a la radio y a la televisión, mientras que “[...] el DR de la LO 2/84 puede considerarse idóneo para la prensa” (Gutiérrez, 2003: 228).

En efecto, a la hora de analizar el volumen exacto de rectificaciones publicadas resulta más accesible y realista trabajar con diarios en papel que cuenten con versión digital y su correspondiente hemeroteca. Para ello, nos basamos en los datos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) de enero a diciembre de 2016, que muestran que los diarios con mayor promedio de tirada son, por este orden, *El País* (248.664), *El Mundo* (159.768), *La Vanguardia* (136.508), *Abc* (132.794), *La Razón* (107.197) y *El Periódico* (105.479). En lo relativo a las ediciones digitales de los diarios, destacan por promedio de difusión en la lista de la OJD *El Mundo* (22.928), *Ara* (20.182) y *Abc* (7.749). Atendiendo a estos datos, seleccionamos los diarios *El País*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *Abc*.

1.4. Estructura de la Tesis Doctoral

El presente trabajo se organiza en cinco capítulos y cuenta con una introducción y dos apartados finales donde se exponen las conclusiones y las futuras líneas de investigación.

En la **Introducción** se justifica el tema escogido y, al mismo tiempo, se formulan las preguntas de investigación, el objeto de estudio, los objetivos y las hipótesis de trabajo. Del mismo modo, se especifica el contexto espaciotemporal y los límites de la investigación.

El segundo capítulo es el referente al **Marco Teórico**, donde se ofrece un repaso por el origen histórico y jurídico del derecho de rectificación en España y por el estado de la cuestión tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, detallando los aspectos que generan más controversia: principalmente, si se trata de un verdadero derecho o de un límite a la libertad de informar, teniendo en cuenta la interpretación que el Tribunal Constitucional formula de este derecho en su sentencia más conocida en este sentido, la STC 168/1986. También se confecciona una radiografía completa de esta figura, atendiendo a su fundamentación, naturaleza jurídica, contenido, objeto, titulares y obligados, cómo se ejerce la acción de rectificación y de qué se trata la previa retractación. Del mismo modo, se facilita un breve repaso por el origen y situación actual de este derecho en los países europeos y en la esfera internacional. El capítulo concluye con una interpretación y una valoración personales de lo que, a nuestro juicio, significa el derecho de rectificación en la actualidad, de sus virtudes y deficiencias, y de cómo debe ser interpretado en el siglo XXI, así como una sucinta comparativa de la trascendencia de esta figura jurídica en España con respecto al resto de países en el entorno europeo e internacional.

El segundo capítulo recoge la **metodología** con la que se va a trabajar en la investigación, en este caso la combinación de los análisis cuantitativo y cualitativo. Para ello, según se recoge en el apartado del marco metodológico, nos centramos en el **análisis de contenido**, cuyo propósito es obtener resultados medibles y

objetivos acerca de la realidad estudiada. En concreto, hablamos del análisis de texto de todas las rectificaciones publicadas en los diarios seleccionados (*El País*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *Abc*) desde 1984 hasta 2017 y también de la técnica del **cuestionario de calidad**, que en el presente trabajo se dirige a cuatro grupos diferenciados: directores o cargos de responsabilidad de los diarios de mayor difusión en España, *ombudsmen* o *defensores de la audiencia*, presidentes (o representantes) de todas las asociaciones de prensa y directores (o representantes) de las principales asociaciones de consumidores y usuarios. Los resultados obtenidos a partir de ambos análisis se traducen en cifras concretas y en porcentajes (resultados cuantitativos) y, al mismo tiempo, ponen en evidencia ciertos aspectos concretos y/o singulares (resultados cualitativos). La combinación de ambas técnicas enriquece la investigación, que supera el puro estudio simplista de la situación del derecho de rectificación, tomando en cuenta el mayor número posible de aristas de la realidad en la que se sitúa. El tercer pilar del análisis es el **estudio de casos**. En este punto se analizan varios ejemplos significativos que ponen de manifiesto los aspectos más recurrentes en la publicación de los escritos de rectificación y, hasta cierto punto, vienen a confirmar gran parte de los resultados obtenidos tanto en el análisis de las rectificaciones publicadas en las últimas tres décadas como en los cuestionarios de opinión antes señalados. El desarrollo del marco metodológico se complementa con un apartado acerca de la validez y confiabilidad de las técnicas de análisis empleadas, junto con la descripción de los objetivos y la puesta en práctica del estudio.

La segunda parte de este capítulo recoge el marco del trabajo de campo de la investigación. Aquí se describe cómo se ha diseñado cada una de las **etapas del análisis**: cómo se ha trabajado en la búsqueda, selección de la muestra y la elaboración de las tablas de recogidas de datos (en el caso de los escritos de rectificación publicados); en la selección de la muestra, la elaboración de los cuestionarios, la fase de contacto y recogida de resultados (encuestas de opinión); y la selección y elaboración de las tablas de recogida de datos (estudio de casos).

En el tercer capítulo entramos de lleno en la materialización del análisis en cada uno de sus tres pilares. En los tres casos se presentan los resultados obtenidos en forma de distintos gráficos, junto con su explicación detallada y las conclusiones obtenidas en cada apartado, además de una interpretación final que sirve como antesala del apartado dedicado a las conclusiones generales de la investigación.

Como complemento a lo anterior aparece el cuarto capítulo, dedicado al estudio del contexto real en el que se encuentran inmersos los medios de comunicación. Un acercamiento fundamental para **contextualizar la investigación**, que ayuda a explicar en gran medida los resultados obtenidos en el anterior capítulo y que señala a **la deontología y la autorregulación** como elementos clave en la mejora de la efectividad del derecho de rectificación.

Precisamente en el primer apartado del capítulo se realiza una aproximación teórica a los conceptos de deontología y rectificación, para en un segundo apartado analizar la figura de la rectificación en los códigos de conducta profesional. En el siguiente punto se analiza la premura como desencadenante de numerosos errores periodísticos y el porqué de la negligencia con la que demasiadas veces se actúa en las redacciones con el objetivo de determinar cuáles son los motivos verdaderos que impiden a los responsables de los diarios rectificar. En el penúltimo apartado se muestran varios ejemplos del insignificante papel que suelen tener los escritos de rectificación publicados y, en el último punto, analizamos lo que esto demuestra y comporta a la vez: el difícil acceso del ciudadano a los medios.

Finalmente, en los puntos quinto, sexto y séptimo se desarrollan las **conclusiones** y se detallan las **futuras líneas de investigación** que se abren a partir de que este trabajo vea la luz.

1.5. Límites de la investigación

A lo largo de esta indagación hemos encontrado distintos condicionantes. El primero de ellos se relaciona con el propio objeto de estudio. Éste se ha limitado a la prensa, ya que desde el principio se constató la gran dificultad de abarcar un análisis del derecho de rectificación en todos los medios de comunicación. Entre otros motivos, por la dificultad de acceso a las rectificaciones en el resto de los medios tradicionales, la radio y la televisión (complicaciones físicas y temporales en el acceso y visualización de los archivos sonoros y audiovisuales de las principales emisoras y cadenas).

Otra de las limitaciones de esta tesis doctoral tiene que ver con los grupos que se toman como referencia a la hora de realizar los cuestionarios. En un principio, la idea era incluir a los periodistas que trabajan en las redacciones de los periódicos de mayor difusión (profesionales en activo que no ostentan cargos de responsabilidad y/o en la dirección de esas empresas) y, de alguna manera, también a los lectores, con el propósito de tener en cuenta también sus opiniones y comprobar su conocimiento acerca del derecho de rectificación. En ambos casos nos encontramos con dos enormes dificultades: de un lado, las propias limitaciones temporales del presente trabajo y, de otro, el tomar como referencia una muestra realmente representativa para que los resultados tuvieran validez y fiabilidad.

Estas limitaciones constituyen, en sí mismas, una forma de acotar una investigación que, en cualquier caso, es ambiciosa y recorre todos los niveles deseables en el análisis: el descriptivo, el explicativo e, incluso, hasta cierto punto, el predictivo (como se puede ver en el apartado sobre *Futuras líneas de investigación*).

2. Marco teórico

Nos adentramos en este punto en la tarea de esbozar las distintas líneas de investigación escogidas para abordar el tema, principalmente en España. Pero también se hará referencia al estado de la cuestión —tanto en el campo jurídico como en el de la autorregulación periodística— en el resto de la Unión Europea y otros países de importante peso, como los Estados Unidos.

En el caso español la mayor parte de referencias bibliográficas pertenecen al ámbito de los estudios jurídicos, “problema” que, como ya avanzamos, sortearemos a lo largo de la investigación. Lo solventaremos con el estudio de casos, aplicando la teoría a la práctica periodística, es decir, cotejando si los requisitos jurídicos se cumplen en la inserción de escritos de rectificación y estableciendo, finalmente, unos requisitos éticos exigibles en el mismo sentido. Empecemos repasando los antecedentes históricos de la figura de rectificación en nuestro país.

2.1. El derecho de rectificación en España

2.1.1. Origen histórico-jurídico del derecho de rectificación en España

En este punto, se sigue la línea del capítulo *Antecedentes del derecho de rectificación* (Moreno, 2011: 10-18), si bien se amplían y modifican ciertos apartados.

El origen del derecho de rectificación tal y como lo entendemos se encuentra en el nacimiento del constitucionalismo. Por primera vez se habla de esta figura jurídica en Francia, a partir de la *Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano* de 1789, por la que se reconocen tanto la libertad de prensa como la prohibición de censura por parte del Estado. Según Farré (2008), en ese país predominaba un apasionamiento político que se tradujo en un aumento del número de difamaciones hacia personas e instituciones por parte de los periódicos y, precisamente, para protegerse contra dichas intromisiones nace el derecho de *respuesta*. Derecho que, no obstante, no fue reconocido hasta 1822 con la Ley de Prensa francesa.

Con anterioridad a esa fecha, el derecho de rectificación era concebido en Francia como una forma de dar espacio en los periódicos a las notas oficiales del Gobierno de turno (Sobrao, 1978). Poco después, esta figura de protección de la consideración social de la persona empezó a aparecer en otros países, aunque el modelo francés no se mantuvo en todos los casos. En este sentido se pueden

distinguir hasta cuatro grupos: ordenamientos jurídicos que distinguen entre el derecho de rectificación (a favor de las autoridades) y el de respuesta (pensado para los particulares), aquellos que únicamente recogen uno de estos términos (el derecho puede ser ejercitado por autoridades y particulares), los que solo admiten el derecho de respuesta o réplica y no aluden a la posibilidad de ser empleado por autoridades y funcionarios y, por último, legislaciones que no reconocen este derecho ni para autoridades ni para particulares (Sobrao, 1978).

En el caso español no será hasta 1837, año en el que se proclama el nuevo texto constitucional, cuando este derecho se incorpore al ordenamiento jurídico. En concreto, lo hace bajo el nombre de *derecho de contestación* en el Decreto de las Cortes de 17 de octubre de 1837, que regula el uso de la libertad de imprenta. En su art. 9 se establece que la persona que se considere ofendida por cualquier información publicada en un periódico tiene derecho a que ese periódico publique su contestación. Una contestación, eso sí, que debe limitarse a negar, desmentir o explicar los hechos y que, en el caso de que no exceda el doble de extensión del artículo que contesta o 30 líneas (si el artículo ocupa menos de 15), será además gratuita.

Más tarde regularán este derecho los Reales Decretos de 10 de abril de 1844, de 6 de julio de 1845 (que reforma al anterior), de 2 de abril de 1852¹ y el de 2 de enero de 1853. A los anteriores se unen las Leyes de Imprenta de 13 de julio de 1853, de 22 de junio y de 29 de junio de 1864, de 7 de enero de 1879 y de 26 de julio de 1883. Y también el Real Decreto de 7 de marzo de 1867, que finalmente incorpora en exclusiva la expresión *rectificaciones* en lugar del concepto *contestación*, empleado desde el año 1837.

De hecho, para encontrar lo más parecido al derecho de rectificación actual hay que remontarse al último tercio del siglo XIX, con esas Leyes de Imprenta de 1879 y de 1883. Ambas regulan este derecho incluyendo además la obligación del responsable del periódico de insertar, de forma voluntaria, cualquier aclaración o rectificación; además de otorgar la posibilidad al afectado de acudir a la Justicia en el caso de que la rectificación no sea publicada.

En concreto, el art. 11 de la ley de 7 de enero de 1879 recoge la posibilidad de rectificar informaciones a los sujetos afectados, obligando a los periódicos a difundir dicha rectificación en cualquiera de los tres números siguientes a la recepción del escrito (Sobrao, 1978). Además, según esta ley, la rectificación es gratuita siempre que no exceda el límite del doble del artículo; debe publicarse en portada o, al menos, en una sección y columna iguales a las que se publicó el original y la inserción debe ser íntegra, sin intercalaciones (o, lo que es lo mismo, sin comentarios o apostillas).

¹ Este Real Decreto reinstaura la censura previa, pero mantiene el derecho de contestación, incorporando por primera vez la expresión o el concepto de “rectificando”. Esto último, a juicio de Gutiérrez (2003: 36), “aumenta la extensión de la contestación”.

A partir de aquí se produce un salto hacia la que algunos autores consideran la segunda etapa en la configuración legal del derecho de rectificación (Cucarella, 2008): la etapa franquista. Un periodo marcado por la fuerte intervención del Régimen en todo lo relativo a las libertades de prensa y que, a su vez, se divide en dos etapas diferentes: se pasa de un primer en el que la intervención administrativa no sujeta al control jurisdiccional a un segundo período en el que sí se incluye dicho control por parte de los jueces.

En el contexto de la Guerra Civil, la Junta Militar franquista aprueba la **Ley de Prensa de 22 de abril de 1938, más conocida como la Ley Serrano Súñer** que, en opinión de Farré (2008: 25), “reconoce un sucedáneo de derecho de rectificación”. Y es que su objetivo no es otro que acabar con la prensa republicana y convertir a los periódicos en una institución al servicio del Movimiento, un simple instrumento para transmitir los valores franquistas y para el adoctrinamiento político. Dicha ley contaba con un claro carácter intervencionista que se evidencia desde el momento en el que afirma que es la autoridad del Gobierno la que decide cuáles son los contenidos sobre los que cabe rectificación. El párrafo segundo del art. 18 se expresa en estos términos: “Sin perjuicio de la sanción penal que proceda, las autoridades, las personas naturales y los representantes de personas jurídicas, públicas o privadas por actuaciones periodísticas, ofensivas, insidiosas o simplemente contrarias a la verdad, podrán recurrir gubernativamente ante la Jefatura del Servicio Nacional de Prensa para que decida sobre la rectificación procedente y proponga en su caso al Ministro la sanción que estime oportuna”. Para Sobrao (1978), esta ley atiende más a la eficacia en el ejercicio del derecho que a la regulación del mismo. Es interesante, sin embargo, que este ‘derecho de rectificación’ que puede dirigirse tanto frente a informaciones como frente a opiniones y/o comentarios publicados en los periódicos.

Rebollo (2009) también coincide en que la vocación de la ley de 1938 es solo la propaganda política². Algo que queda claro con el trasvase de competencia en la materia desde la jurisdicción ordinaria a la Administración (el servicio Nacional de Prensa). Así, la virtualidad de la *Ley Súñer* no era “la defensa del ciudadano, sino la asfixia de la libertad de expresión en un momento en que [...] la Administración designaba y cesaba discrecionalmente al personal directivo de los periódicos” (Lizarraga, 2005: 32).

Posteriormente, la *Ley Súñer* será desarrollada mediante el Decreto de 13 de marzo de 1953, complementado a su vez por la Orden Ministerial de 25 de mayo de ese mismo año. En su art. 1 el Decreto regula un derecho de rectificación en prensa, que también incluirá la protección frente a hechos y las opiniones: “Toda

² La Ley de Prensa de 1938 instauró mecanismos muy rígidos que se mantuvieron vigentes hasta la entrada en vigor de la Ley de Prensa de 1966, tales como la censura previa, el nombramiento del director de los periódicos por parte del Ministerio del Interior, la sanción por el “desvío de las normas dictadas” y el Registro Oficial de Periodistas.

persona jurídica o natural en el pleno uso de sus derechos, que se considere injustamente perjudicada en su honra, en su fama o en sus legítimos intereses por cualquier texto o dibujo inserto en una publicación periódica, o a quien se hubiera atribuido hechos falsos o desfigurados o que, siendo verdaderos, por igualdad de nombres o circunstancias puedan inducir a confusión, tendrá derecho a replicar, complementar o aclarar dicha información, siempre que dicha publicación periódica no lo haya hecho por sí de una manera espontánea y satisfactoria”.

En cualquier caso, se trata de pura apariencia de protección de los derechos del individuo. En la vida real quien resolvía en última instancia el conflicto en el ámbito del derecho de rectificación era la Administración y la función de policía que desempeñaba el régimen sobre la prensa escapaba, como hemos señalado, del control judicial (en virtud del art. 40.b de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En efecto, el Decreto de 1953 implica el trasvase de competencias de la jurisdicción ordinaria a la Administración, por lo que se excluye de la competencia de la primera “[...] el recurso sobre actos dictados por la Administración en aplicación de las leyes y disposiciones referentes a la prensa” (Gutiérrez, 2003: 39-40), con el claro objetivo de controlar la materia y desjudicializarla. Así, las decisiones de la Administración en el ejercicio de su asumida función de policía quedan excluidas por ley de cualquier control judicial (Farré, 2008).

También en la mencionada ley se incluye por primera vez en nuestro país el concepto de *réplica* como sinónimo de *rectificación*, por lo que todavía no se puede hablar de dos derechos diferentes por distinción de sujeto activo. Su art. 1 enuncia: “Toda persona jurídica o natural [...] tendrá derecho a replicar, complementar o aclarar...”. Y su art. 4 comienza así: “Caducará el derecho de réplica...”.

En la Exposición de Motivos de la ley de 1953, se justifica la vía administrativa en la protección del derecho de rectificación basándose “en la mayor rapidez y en el hecho de que así podía evitarse que quedara en entredicho la fama de las personas” (Cucarella, 2008: 60) durante muchos días. Algo muy alejado de la realidad, como ya hemos señalado, y que vuelve a ponerse de manifiesto en el artículo 2, que preveía que el director de la agencia o medio al que se pedía la rectificación pudiera solicitar al Ministerio de Información y Turismo que apreciase si la réplica era procedente o innecesaria, al haber sido ya rectificada por otros sujetos con interés legítimo. Además de eso, el art. 4.2 recoge la posibilidad de que el mismo Ministerio amplíe los plazos iniciales para el ejercicio del derecho en el caso de que varias personas lo ejercieran de manera simultánea o sucesiva con relación al mismo texto. En su art. 5, la ley contempla además la posibilidad de que el interesado presente el escrito de rectificación a las Delegaciones Provinciales y Locales del Ministerio de Información y Turismo.

La Orden de 25 de mayo de 1953 vuelve a excluir a la autoridad judicial del control de las acciones relativas a este derecho, ya que determina que son las

Delegaciones Provinciales y Locales del Ministerio de Información y Turismo los órganos facultados para tomar decisiones respecto de la publicación de rectificaciones en la prensa (art. 10).

Meses después, el Decreto de 11 de septiembre de 1953 pretendió aplicarse al ámbito de la radiodifusión, aunque al final resultó inoperante por la falta de mecanismos precisos para su desarrollo que no llegaron a arbitrase³. Así, sus carencias tuvieron que ser suplidas con la legislación relativa a la prensa. En cualquier caso, el derecho reconocido en ese Decreto de 1953 se parece más al derecho de réplica, puesto que está pensado para particulares y, de hecho, “resalta el carácter de defensa del honor personal y familiar” (Sobrao, 1978: 11).

La entrada en vigor de la **Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta** (la *Ley Fraga*⁴) supone un nuevo giro en la concepción del derecho que venimos estudiando y deja sin efecto de manera explícita varias disposiciones: la Ley de Imprenta de 26 de julio de 1883, la Ley de Prensa de 22 de abril de 1938 el Decreto de 13 de marzo de 1953 y la Orden de 25 de mayo de 1953 y el art. 40.b de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956.

La mayoría de los autores considera que la *Ley Fraga* significó un intento aperturista en el régimen franquista, marcado por “un férreo control sobre medios, profesionales y mensajes informativos” (Ruiz, 2003: 507). Un intento que fue, en todo caso, tímido: aunque es posible el control jurisdiccional, éste siempre será *ex post facto*, es decir, que tendrá un carácter revisor de la actuación administrativa previa. Lo que significa, en otras palabras, que el intervencionismo de la Administración en ningún caso llega a desaparecer, cuando realmente “la apreciación de lo que es susceptible de réplica debe estar atribuida a unos órganos mixtos de profesionales y ciudadanos que tengan bien garantizada su independencia” (Desantes, 1974: 90) o, en su caso, a la jurisdicción ordinaria (Rivero, 1968).

³ El Decreto de 11 de septiembre de 1953 introduce por primera vez en nuestro país un derecho de rectificación en el ámbito de la radiodifusión (pública y privada y televisión). En su art. 1 establece que: “Toda persona, en el pleno uso de sus derechos, que se considere injustamente perjudicada por cualquier alusión difundida en una emisora de radio, o que por igualdad de nombres o circunstancias pueda inducir a confusión en su perjuicio, tendrá derecho a rectificar dicha información, siempre que la emisora no lo haya hecho por sí de una manera espontánea y satisfactoria”. A esta ley le sigue el Real Decreto 2664/1977, de 6 de octubre, que reproduce casi literalmente la regulación de los derechos de réplica y rectificación en la Ley 14/1966; y también la Orden de 3 de noviembre de 1977, por la que se desarrolla el Real Decreto y que establece un nuevo régimen jurídico del derecho de rectificación. Por su parte, la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión reconoce un derecho de rectificación en el marco de la radio y la televisión de titularidad pública (Farré, 2008: 289-290; Gutiérrez, 2003: 40-44).

⁴ Manuel Fraga Iribarne dirigió el Ministerio de Información y Turismo entre 1962 y 1969 y fue el promotor de la Ley 14/1966, de Prensa e Imprenta. Esta norma permitió un reducto algo mayor de libertad de prensa, pero estuvo marcada por las restricciones y la autocensura. Bajo su sombra se produjo el secuestro del periódico *Abc* (por un artículo de José María Ansón publicado el 21-7-1966) y del diario *Madrid*, dos años más tarde.

La ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, diferencia por primera vez en el ordenamiento jurídico español entre el derecho de réplica (art. 58) y el derecho de rectificación (art. 62), quedando ambos regulados en el Capítulo IX *De los derechos de réplica y rectificación*. En definitiva, se introduce la distinción clásica del Derecho francés⁵.

El elemento clave de la diferenciación entre réplica y rectificación es el sujeto que ejercita el derecho. En efecto, el derecho de rectificación se mantiene como una facultad de la Administración o las autoridades y el derecho de réplica es el que asiste los particulares. El art. 58 en sus dos apartados determina las bases del derecho de réplica: “Toda persona, natural o jurídica, que se considere injustamente perjudicada por cualquier información escrita o gráfica que la mencione o aluda, inserta en una publicación periódica, podrá hacer uso del derecho de réplica en los plazos y en la forma que reglamentariamente se determinen” y “podrán también ejercitar este derecho los representantes legales del perjudicado, así como sus herederos si hubiese fallecido”. En este último punto podemos observar que el derecho no prescribe con el fallecimiento de su titular, sino que puede ser ejercido por sus representantes legales o herederos. Esto también ocurre en nuestro actual ordenamiento jurídico.

El derecho de rectificación de las autoridades públicas queda recogido, como mencionábamos, en el art. 62: “Los Directores de las publicaciones periódicas están obligados a insertar gratuitamente en el número siguiente a su recepción, y en las condiciones del art. 60, cuantas notas o comunicados les remitan la Administración o Autoridades, a través de la Dirección General de Prensa o de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Información y Turismo, rectificando o aclarando información publicada en aquélla sobre actos propios de su competencia o función”.

La regulación del derecho de réplica se completa con los arts. 59, 60⁶ y 61 de la Ley 14/1966 de Prensa e Imprenta, que aluden al deber de inserción, a la forma de inserción y a la inserción obligatoria, respectivamente. En resumen, la distinción entre derecho de réplica y de rectificación se debe a la titularidad de este, si bien es cierto que el contenido de los derechos es básicamente el mismo: ambos

⁵ Para conocer más sobre la distinción que realiza el Derecho francés entre derecho de respuesta y derecho de rectificación, véase Farré (2008).

⁶ Las condiciones del derecho de rectificación son las mismas para el derecho de réplica y están establecidas en el art. 60: “El escrito de réplica deberá en todo caso circunscribirse al objeto de la aclaración o rectificación y su inserción habrá de realizarse en la misma plana y columna y con los mismos caracteres tipográficos con que se publicó la información, y será gratuita cuando no exceda del doble del número de líneas de texto o espacio gráfico al que se replica. La publicación de que se trate no podrá incluir en el mismo número comentarios o apostillas a la réplica”. Véase Rebollo (2009: 257).

pueden ejercerse frente a informaciones sobre hechos y también frente a opiniones o juicios de valor.

Dos decretos desarrollaron la **Ley de Prensa e Imprenta de 1966**: el Decreto 745/1966 (que regulaba en doce artículos el derecho de rectificación concebido para las autoridades y órganos de la Administración del Estado) y el Decreto 746/1966 que desarrollaba en 25 artículos los plazos, requisitos y forma en que podía ejercitarse el derecho de réplica de los particulares. En los dos textos se emplean indistintamente los conceptos aclaración-réplica-rectificación. A modo de ejemplo: el art. 2 del Decreto 745/1966 enuncia que “las notas o comunicados de rectificación deberán circunscribirse concretamente al objeto de la aclaración o rectificación” y el art. 4 del Decreto 746/1966 recoge que “el escrito de réplica deberá, en todo caso, circunscribirse al objeto de la aclaración o rectificación”.

Aunque anteriormente se ha señalado que el contenido de ambos derechos (rectificación y réplica) cuenta con enormes semejanzas, autores como Sobrao (1978) ponen de manifiesto algunos rasgos característicos distintos. Señalamos los que, a nuestro juicio, son los dos más destacados: a) el escrito de rectificación debe publicarse en el número siguiente a su recepción por parte del periódico, mientras que en el caso de la réplica puede consumarse en uno de los tres números siguientes; b) el incumplimiento de la inserción de la rectificación por parte del director de la publicación puede ser considerado falta grave y, en el caso de la réplica, la misma infracción adquiere la categoría de leve.

Con respecto a las garantías establecidas ante ese incumplimiento del deber del medio de publicar el escrito de réplica o rectificación, el art. 61 disponía que “contra la negativa del Director de la publicación podrá el interesado acudir en queja al Ministerio de Información y Turismo, el cual, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda, y oído el Director del Periódico, podrá ordenar la inserción solicitada u otra equivalente. Contra la resolución del Ministro cabrá recurso contencioso-administrativo”⁷. De esta manera, una vez agotada la vía administrativa, había posibilidad de recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En ese periodo también adquiere protagonismo la legislación penal, concretamente el Código Penal de 1944, ya que en su art. 566 tipifica la negativa por parte del máximo responsable del medio de comunicación a publicar gratuitamente el escrito de réplica o rectificación como una falta castigada con pena de multa. Actualmente no existe ningún tipo de sanción penal en el caso de que el medio se niegue a publicar el escrito.

La herencia del modelo francés con esa distinción entre derecho de réplica y de rectificación se va a mantener vigente hasta que entre en vigor la actual LO 2/1984, que deroga expresamente la regulación previa. Aunque, en principio, esa

⁷ Queda, de esta forma derogado el apartado b del art. 40 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, en la que hasta entonces no se admitía el recurso en el ámbito de prensa e imprenta.

anulación queda sobreentendida desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y con la posterior LO 4/1980.

A continuación, repasamos los aspectos más destacados de estas dos regulaciones (LO 4/1980 y LO 2/1984) no sin antes analizar con más detalle los conceptos de rectificación y réplica.

2.1.1.1. Los conceptos de *rectificación* y *réplica*

A lo largo de la historia de la regulación jurídica de este derecho se produce, como hemos visto y en más de una ocasión, una confusión entre ambos términos. Una equiparación de conceptos, empleados en la mayoría de las ocasiones como sinónimos, que se extiende también a manuales jurídicos, monografías e, incluso, códigos deontológicos y libros de estilo. Es por ese motivo que consideramos necesario aclarar las diferencias que existen entre ambas expresiones⁸.

Para la mayoría de los autores la distinción se reduce precisamente a esos dos conceptos, los de rectificación y réplica, haciendo alusión a lo ya repetido aquí: la diferencia sustancial entre ambos es su titularidad (el derecho de rectificación asiste a la Administración y el derecho de réplica a cualquier persona natural o jurídica).

Sin embargo, voces como las de Rebollo (2009) ponen de manifiesto que también es importante atender a la fundamentación de ambos derechos para entender esas diferencias: por un lado, la protección del Estado y, por el otro, la fama o buen nombre de los particulares⁹. Como lo es, asimismo, percatarse de que históricamente el derecho de rectificación que asiste a la Administración cuenta con un valor claramente superior al de réplica. Recordemos que la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 obliga a que la publicación de la rectificación sea inmediata, no es precisa la existencia de un perjuicio, y las penas para la publicación que incumple el deber de insertarla son más severas.

En lo que respecta a las diferencias semánticas, réplica sería la respuesta a opiniones, críticas, argumentos o juicios de valor; mientras que la palabra rectificación quedaría restringida al mundo de los hechos y es sinónima de corrección (Farré, 2008). El Diccionario de la Real Academia define el concepto 'replicar' como "argüir contra la respuesta o argumento", mientras que 'rectificar' significa "reducir algo a la exactitud que debe tener". Por tanto, puede deducirse

⁸ Para ver de forma más extensa las diferencias entre términos, véase Benito (2006).

⁹ Rebollo (2009) toma como referencia varias sentencias del Tribunal Supremo para concluir que la fundamentación del derecho de réplica es la veracidad de la información (STS de 22 de junio de 1973), la protección de los intereses legítimos de las personas (STS de 5 de junio de 1972) y en la salvaguarda del crédito o fama de estas ante informaciones que pueden perjudicarlas (STS de 13 de noviembre de 1972). Mientras que el derecho de rectificación encuentra su fundamentación en la protección del Estado, de sus órganos y autoridades, siendo su fin la consecución del bien común.

que **nuestro ordenamiento jurídico actual adopta el modelo restringido (también llamado el modelo alemán) al decantarse por el derecho de rectificación, que opera en exclusiva ante la publicación de hechos y no sobre la de opiniones o juicios de valor.**

De esta manera, el derecho de rectificación tal y como hoy lo entendemos tiene su antecedente más directo en el mismo derecho de réplica, “si bien no se ajusta en plenitud al fundamento de este derecho en la actualidad y en nuestro ordenamiento jurídico” (Rebollo, 2009: 258-259). El derecho de rectificación aparece antes en la regulación jurídica, algo que viene a explicarse por la atribución que el propio Estado se dota de potestades en materia de comunicación, con el propósito de controlar toda la información que se publica.

Gutiérrez Goñi (2003) define de manera, en nuestra opinión muy acertada, la situación cuando afirma que el derecho de rectificación históricamente no siempre se ha denominado de esta manera, que la regulación ha sido heterogénea y que la efectividad del ejercicio del derecho también ha sido diversa. Aunque “cabe señalar un común denominador de toda esa regulación histórica: el reconocimiento de una facultad de respuesta a noticias alusivas publicadas en un medio de comunicación” (Gutiérrez, 2003: 47), que —y estamos de acuerdo con el autor— encuentra de forma clara su precedente en el derecho de contestación del Decreto de 17 de octubre de 1837.

El verdadero problema en la confusión terminológica surge con el nacimiento de la Carta Magna de 1978, ya que en ningún momento reconoce de manera expresa este derecho. Una confusión que se mantiene con la entrada en vigor del Estatuto de RTVE, aprobado por la Ley 4/1980. Por el contrario, otros autores entienden que la confusión se introduce con la Ley de Prensa 14/1966, ligada a los efectos del desdoblamiento del derecho y a la alteración denominativa (Gutiérrez, 2003).

2.1.1.2. La Ley 4/1980, de 10 de enero, reguladora del Estatuto de la Radio y la Televisión Española

Con la entrada en vigor de la Ley 4/1980, nuestro ordenamiento se decanta definitivamente por el derecho de rectificación, abandonando la distinción entre este derecho y el de réplica, y volviendo a la tradición legislativa anterior a 1966, para la que solo existía un derecho.

Esta ley de 1980 regula así un único derecho de rectificación, aunque solamente para la Radiodifusión y la Televisión de titularidad pública, puesto que la Ley 14/1966 sigue vigente para las publicaciones escritas y no será derogada hasta 1984, con la entrada en vigor de la actual Ley Orgánica 2/1984. En resumen, la Ley 4/1980 cubrió el vacío legislativo que existía desde que comenzó a desarrollarse la televisión en España (González Ballesteros, 1981).

En el primer apartado del art. 25 de la ley, leemos: “Quien sufriera lesión directa y expresa en sus legítimos intereses morales, en virtud de datos o hechos concretos contrarios a la verdad y difundidos a través de una información radiofónica o televisiva, podrá solicitar por escrito en el plazo de siete días desde la difusión de la información que sea transmitida la correspondiente rectificación”. El origen inmediato de la formulación y posterior promulgación de la ley se encuentra en el mandato constitucional recogido en el art. 20 CE. Lo demuestra la exposición de motivos de esta al destacar “la necesidad de establecer unas reglas claras y precisas para el funcionamiento democrático de la radio y la televisión se deriva del propio texto constitucional y del pluralismo político que necesariamente deben reflejar en su actuación estos medios de comunicación social del Estado [...]” (González, 1981: 209).

Los problemas que aparecen con la promulgación de la Ley 4/1980¹⁰ son evidentes. El primero es la distinta regulación en función la titularidad privada o pública del medio de comunicación. Es decir, la actividad de las emisoras de radio o televisión privadas quedan sujetas al Real Decreto 2664 de 6 de octubre de 1977 y a la Orden Ministerial que lo desarrolla, de 3 de noviembre del mismo año; lo que significa, en última instancia una regulación prácticamente idéntica a la ofrecida por la Ley 14/1966; mientras que a la radio y la televisión estatal se les aplica desde ese momento el art. 25 antes citado.

A efectos prácticos, la consecuencia es que en el ámbito de la radio y la televisión privada se mantiene la distinción entre derecho de rectificación y derecho de réplica y en lo relativo a la radiodifusión estatal únicamente opera el derecho de rectificación. Todo esto, a su vez, deriva en una problemática más compleja: “[...] la incongruencia de que un mismo sujeto que se ve perjudicado por una misma información, emitida por medios distintos, debe emprender procedimientos judiciales diferentes ante uno y otro medio” (Rebollo, 2009: 263). Un tercer elemento problemático, que vuelve a reforzar la confusión, es la absoluta omisión de la legislación anterior por parte del Estatuto de RTVE.

No concluye aquí la problemática, porque encontramos un cuarto elemento conflictivo de la Ley 4/1980, en cuyo art. 25.3 se establece que “la denegación por parte del Director del medio de que se trate podrá ser recurrida en el plazo de cinco días a través del Director General de RTVE ante el Consejo de Administración de RTVE, que resolverá sin que haya lugar a recurso administrativo alguno”. Estando ya en vigor la Constitución de 1978, este precepto debe entenderse inconstitucional al contradecir lo previsto en la misma.

¹⁰ Rebollo (2009) destaca estas limitaciones e inconvenientes que introduce esa legislación. Para una información más amplia acerca de las diferencias entre las distintas reglamentaciones para las emisoras de radio y televisión privadas (Real Decreto 2664 de 6 de octubre de 1977 y Orden Ministerial de 3 de noviembre de 1977) y públicas (art. 25 de la Ley 4/1980), véase González (1981).

La regulación del ejercicio de un derecho fundamental solo puede materializarse a través de una Ley Orgánica. Por tanto, la Ley 4/1980 debería haber sido una ley de ese rango que, además, tuviera como contenido solo el desarrollo general de los principios declarados en su exposición de Motivos y, en una ley ordinaria posterior, deberían haber quedado regulados los aspectos más concretos del Estatuto.

El derecho recogido en el Estatuto de RTVE no se ajusta a ninguna de las denominaciones contempladas en la legislación precedente y de lo que se trata, en realidad, es de “un derecho de réplica con especialidades” (Gutiérrez, 2003: 51) si atendemos al contexto de la regulación del momento. Dicho de otra manera, el reconocimiento del derecho de rectificación contemplado en la Ley 4/1980 —que otros autores consideran más exacto llamar derecho de contestación (González Ballesteros, 1981)— introduce una confusión terminológica que afecta a todos —particulares, Administración y Tribunales de Justicia— y que complica tanto el ejercicio del derecho como la actuación de los jueces.

No obstante, el Estatuto también introduce aspectos positivos. El más importante es que, a partir de ahora, introduce una nueva fundamentación del derecho, en concreto, la libertad de expresión y el derecho a la información en su doble vertiente activa y pasiva (art. 20.1 a y b CE). Desde ese momento el derecho de rectificación cuenta con una dimensión objetiva o institucional, “como complemento de la garantía de la libre formación de la opinión pública y del derecho de todos a recibir información veraz y plural” (Farré, 2008: 298).

Al mismo tiempo, y por fortuna, la problemática que incorpora la Ley 4/1980 se va a alargar por pocos años. La LO 2/1984 derogará el art. 25 y establecerá finalmente el régimen único con el que contamos hoy: una ley para todos los medios de comunicación, independientemente de su titularidad pública o privada o del soporte que empleen para la difusión (ondas terrestres, redes de cable o satélite).

Hoy en día básicamente todas las leyes de creación de Entes Públicos de Radio Televisión autonómicos remiten al desarrollo del derecho de rectificación de la LO 2/1984, a excepción de dos: la Ley 2/1982, de creación del Ente Público Radiotelevisión Vasca; y la Ley 10/1983, por la que se crea el Ente Público Corporación Catalana de Radio y Televisión. Esto es debido a que dichas leyes se aprueban con anterioridad a la entrada en vigor de la de 1984 y, por tanto, se inspiran en la legislación anterior: la Ley 4/1980 y los arts. 58 a 62 de la Ley de Prensa e Imprenta 14/1966. Sin embargo, hay que recordar que los preceptos que desarrollan el derecho de rectificación en las leyes catalana y vasca deben entenderse hoy en día derogados, simplemente porque entran en contradicción con lo que establece la LO 2/1984 (Farré, 2008). Cucarella (2008) añade además que la regulación autonómica se excedió de su ámbito competencial, puesto que reguló a través de una ley autonómica una materia que solo es susceptible de desarrollarse mediante una Ley Orgánica.

Como antesala del siguiente apartado, que desarrolla en profundidad el derecho de rectificación en la LO 2/1984, adelantamos que la legislación vigente deroga de manera expresa los arts. 58 a 62 de la Ley 14/1966, los Decretos 745 y 746 de 1966, el art. 25 de la Ley 4/1980 y también el apartado primero del art. 566 del Código Penal, que castigaba la negativa a rectificar con una multa de entre 1.500 y 30.000 pesetas. En este último caso, hablamos de un precepto que desaparece del vigente Código Penal que, sin embargo, sí recoge en su art. 214 una “retracción” del acusado de calumnia o injuria, con posibilidad de que el juez ordene su publicación a solicitud del ofendido (Gutiérrez, 2003: 46).

Tabla 1. Evolución histórica del derecho de rectificación en la legislación española

	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA
Leyes y denominación del derecho	<p><u>Derecho de contestación</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Decreto de las Cortes de 17 de octubre de 1837 – Real Decreto de 10 de abril de 1844 – Real Decreto de 6 de julio de 1845 – Real Decreto de 2 de abril de 1852 – Real Decreto de 2 de enero de 1853 – Ley de Imprenta de 13 de julio de 1853 – Ley de Imprenta de 22 y 29 de junio de 1864 – Ley de Imprenta de 7 de enero de 1879 – Ley de Imprenta de 26 de julio de 1883 <p><u>Derecho de rectificación</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Real Decreto de 7 de marzo de 1867 – Ley de Imprenta de 7 de enero de 1879 – Ley de Imprenta de 26 de julio de 1883 	<p><u>Derecho de rectificación</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Ley de Prensa de 22 de abril de 1938 (<i>Ley Serrano Súñer</i>) – Decreto de 13 de marzo de 1953 – Decreto de 11 de septiembre de 1953 – Código Penal de 1944 (art. 566): tipifica la negativa de publicación por parte del periódico con pena de multa. <p><u>Derechos de rectificación y réplica</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta (<i>Ley Fraga</i>). Los Decretos 745/1966 y 746/1966 desarrollan los derechos de réplica y rectificación. – Real Decreto 2664/1977, de 6 de octubre: regulación de los derechos de réplica y rectificación en emisoras de radiodifusión. 	<p><u>Derecho de rectificación</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Ley 4/1980, de 10 de enero (Estatuto RTVE) – Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo

	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA
Implicaciones	<ul style="list-style-type: none"> – En general, el derecho de contestación (con posterioridad llamado de rectificación) otorga a la persona que se considere ofendida por la información publicada en un periódico la facultad de exigir que en ese mismo periódico se inserte su contestación o rectificación, limitada a negar, desmentir o explicar los hechos que fundamenten la ofensa. El actual derecho de rectificación tiene su antecedente más directo en este derecho de contestación desarrollado por el Decreto de las Cortes de 17 de octubre de 1837. – Posibilidad de rectificación de hechos. 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Ley Súñer</i>: busca suprimir la prensa republicana y convertir a los periódicos en instrumentos de adoctrinamiento político en poder del bando franquista. – Fuerte intervencionismo de la Administración, cuyo ejercicio en materia de prensa queda por ley excluido del control judicial hasta la entrada en vigor de la Ley 14/1966 (<i>Ley Fraga</i>), tímidamente aperturista y que reconoce la posibilidad de un cierto control jurisdiccional. – Distinción entre derecho de réplica (particulares) y de rectificación (Estado), adoptando la distinción clásica del Derecho francés. – Posibilidad de rectificación de hechos y opiniones. – Derechos de réplica y rectificación como instrumentos de control en manos de la Administración y no como una facultad en favor de la ciudadanía. 	<ul style="list-style-type: none"> – La Ley 4/1980 solo opera en el ámbito de la radio y la televisión. La Ley 14/1966 (<i>Ley Fraga</i>) seguirá vigente hasta la entrada en vigor de la actual LO 2/1984. – Confusión terminológica con la entrada en vigor de la Constitución de 1978, que continúa con la Ley 4/1980. – La LO 2/1984 deroga expresamente la regulación anterior y, por tanto, la distinción entre réplica y rectificación. – Posibilidad de rectificación de hechos.

	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA
Ámbito de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> – Prensa 	<ul style="list-style-type: none"> – Prensa – Radio y televisión (el Decreto de 11 de septiembre de 1953 introduce por primera vez un derecho de rectificación en el ámbito de la radiodifusión pública y privada y la televisión) 	<ul style="list-style-type: none"> – Prensa – Radio y televisión

Fuente: Elaboración propia

2.1.2. El derecho de rectificación en España: LO 2/1984, doctrina y jurisprudencia

2.1.2.1. Delimitación y exposición de la problemática

Con la LO 2/1984 o LODR queda regulado un nuevo derecho que reemplaza a los antiguos derechos de réplica y rectificación, “para dejar sometidos en régimen de igualdad tanto a los ciudadanos como a las personas jurídicas” (Lizarraga, 2005: 34). Una legislación que se encuadra “en el ámbito del derecho fundamental a comunicar información, pues implica el reconocimiento de que cualquier persona pueda participar en los procesos de comunicación social haciendo llegar a la opinión pública su versión de la noticia previamente publicada o difundida” (Cucarella, 2008: 27).

A partir de ahora, la regulación del derecho será unitaria para todos los medios de comunicación, con independencia de su titularidad (privada o pública), los medios técnicos empleados para la difusión (cable, satélite, ondas hertzianas) o su ámbito de actuación (estatal, autonómico o local). Se configura, por tanto, un

nuevo modelo español que se diferencia del que impera en el resto de los países de nuestro entorno: como volveremos a ver más adelante, la mayoría de los países de la Unión Europea cuenta con regímenes jurídicos que son distintos para los medios escritos y los medios audiovisuales. Esta *unicidad* constituye sin duda uno de los aspectos más positivos de la nueva regulación, principalmente porque se sortea el problema de que un mismo individuo que se vea afectado por informaciones de varios medios de comunicación sobre los mismos hechos tenga que emprender procedimientos distintos.

La LODR encuentra su origen en un proyecto de Ley del Gobierno, depositado en el Congreso de los Diputados en el mes de junio de 1983. Fruto de una larga elaboración en el Parlamento, prácticamente no planteó discrepancias excepto en lo relativo al contenido del derecho. Su motivación sería muy bien expuesta por el que fuera Ministro de Justicia, Fernando Ledesma (PSOE), que argumentó que el proyecto de ley partía “de la valoración más absoluta de lo que la libertad de expresión significa en todo el sistema democrático”, porque hasta el momento echaban en falta “la existencia de una acción legal, rápida, urgente y eficaz que rectificase ese hecho inveraz y que restableciese la auténtica realidad para, a partir de ella, hacer todos los juicios de valor que se quiera” (Ledesma, 1984). El ministro reconoce que este instrumento legal es muy necesario y que funciona no sólo como garantía de derechos individuales, sino también como una garantía institucional del derecho de los ciudadanos a formar libremente su opinión sobre la base de informaciones verdaderas¹¹. Para parte de la doctrina, desde este momento se vislumbra un instrumento legal de protección “frente a la utilización abusiva o desviada del derecho fundamental a las libertades de expresión e información” (Gutiérrez, 2003: 55), que salva el riesgo de que se produzca un desequilibrio por la situación de ventaja indiscutible y superioridad de los medios de comunicación (Onecha, 1985); en definitiva, que coloca a particulares y medios de comunicación en una posición igualitaria (Carrillo, 1986; Cucarella, 2008).

Una cuestión básica que el ministro Ledesma introduce en el debate y que forma parte de la concepción intrínseca del derecho de rectificación en la LODR es su indudable vinculación con el art. 20.1 d) CE y, por tanto, con el derecho a comunicar información veraz que la Carta Magna propugna (Carrillo, 1986; Soria, 1989; Esquembre, 1997; Benito, 2001 y 2006; Abad, 2003). Algunos autores, como Urías (2003), consideran que más que la veracidad de la información, lo que el actual derecho de rectificación protege es realmente el pluralismo. Volveremos más adelante a este debate dentro de la doctrina, sobre el que aportaremos más argumentos y detalles, así como una valoración personal.

¹¹ Dictamen de la Comisión de Constitución en relación con el Proyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación (Ledesma, L.: Diario de Sesiones del Senado, Sesión Parlamentaria número 47, 1984, 14 de febrero, pp. 2358-2360).

Podemos afirmar que el proyecto de ley de la LORD se basa en tres pilares. **De un lado, el objeto de la rectificación se limita a los hechos inexactos, sin incluir las opiniones.** Un punto que, como veremos más adelante, generará una gran controversia dentro de la doctrina, con autores que defienden que efectivamente no cabe rectificación sobre las opiniones y/o juicios de valor (De Vega, 1998; Nogueira, 2001; Suárez-Castillo, 2007; Cucarella, 2008), aquellos cuya opinión es diametralmente opuesta (Esquembre, 1997; Lizarraga, 2005) o un último grupo que pone de manifiesto la enorme dificultad que supone con frecuencia distinguir entre hechos y opiniones dentro de una información (Soria, 1989; Asensi, 1997; Farré, 2008). **El segundo eje lo constituye el punto de partida que, en este caso, es la igualdad de todos los ciudadanos.** Y, en tercer lugar, **se apuesta por una plena judicialización de la Ley.**

Ledesma asegura además que las características del proyecto de ley se hacen coincidir con la reciente doctrina del Tribunal Constitucional del momento respecto de esta materia, es decir, la STC 35/1983. En concreto, esta sentencia del Alto Tribunal hace hincapié en el carácter puramente instrumental del derecho de rectificación, entendiendo que su finalidad se agota en la propia rectificación. Del mismo modo, el derecho de rectificación solo puede plantearse con respecto a hechos (también se incluyen los juicios de valor atribuidos a terceros) y no frente a opiniones, y se ve atemperado con el derecho a comunicar y recibir información veraz. También añade el TC que, para que no se frustre la finalidad de la rectificación, debe asegurarse una rápida rectificación. En otras palabras, el objetivo de este derecho es “reestablecer la verdad lógica de la información de forma inmediata, sumaria, sencilla y compatible con otros procedimientos jurídicos de cualquier naturaleza” (García Castillejo, 2008: 165). Una condición que la mayoría de la doctrina es imprescindible, puesto que “la mayor eficacia de la rectificación reside en que el periodo de tiempo transcurrido entre la divulgación de la información originaria y la rectificación de la misma sea lo más breve posible” (Esquembre, 1998: 434).

A todo ello se añade que dicho proyecto de ley se inspira en la resolución número 26 de 1974 del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Un texto que incluye el ejercicio del derecho extrajudicialmente (es decir, sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria) e, igualmente, la posibilidad de acceder a la Jurisdicción en protección del derecho en caso de que no haya podido ejercitarse el derecho de manera extrajudicial.

Para Gutiérrez (2003) se trata de un derecho contra informaciones de hechos inexactos, que además funciona como garantía de los derechos individuales y como garantía institucional de una opinión pública libre a través del control de la veracidad de las informaciones. Un derecho que, como hemos visto y señala el autor, es además ejercitable en dos fases: la extrajudicial y, si ésta falla o es incorrecta, la

jurisdiccional, sin que exista la posibilidad de acceder a esta protección si antes no se ha ejercitado la fase extrajudicial.

En lo que tiene que ver con el proceso, **el ejercicio del derecho de rectificación es compatible con otras acciones civiles o penales**, un aspecto que algunos autores consideran la principal novedad de esta ley y que se traduce en una “configuración del fundamento del ejercicio de este derecho como medio exclusivamente preventivo del perjuicio” Benito (2006: 40). No se trata, pues, de exigir responsabilidades por posibles perjuicios causados en el honor o en otros bienes constitucionalmente protegidos, sino simplemente de impedir que el daño llegue a producirse. En ese punto coinciden la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional: el TC habla de “legítima finalidad preventiva” de este derecho y el TS lo define como una facultad otorgada al individuo para prevenir o evitar el perjuicio que una determinada información puede irrogar en su honor o en cualquier otro derecho o interés legítimo (STS 8817/1989 FJ 3 y STC 168/1986, FJ 4). En efecto, el legislador ha establecido otros mecanismos (legales, civiles o penales) para sancionar las prácticas lesivas del honor, que son expresamente compatibles con el ejercicio del derecho de rectificación.

De otro lado, al erigirse este **derecho como garantía institucional de una opinión pública libre**, entendemos que debe poder comprobarse la veracidad de la información y también del escrito que la rectifica y coincidimos en que “ni la LO 2/84 puede amparar el derecho subjetivo de publicar una información que no sea veraz, ni el medio de comunicación, al amparo de la CE, puede informar de manera no cierta” (De Vega, 1998: 96). Más adelante observaremos, en cambio, que no lo entienden así ni la actual jurisprudencia ni parte de la doctrina.

El objeto de este nuevo derecho de rectificación, uno de los pilares que antes señalábamos, fue el punto que más debate generó en sede parlamentaria. Finalmente, el derecho queda circunscrito con exclusividad al ámbito de los hechos, algo con lo que no estamos de acuerdo. A nuestro entender, en su función de prevención del perjuicio, el derecho de rectificación debe tener la facultad de corregir aquellas informaciones en las que los hechos van acompañados de cierta opinión o valoración, puesto que normalmente la principal lesión en los derechos de personalidad del individuo se produce no únicamente por una exposición aséptica de unos hechos que pueden ser falsos o inexactos, sino también por una determinada forma de presentarlos, proporcionando un aspecto al relato que menosprecia de forma clara el honor y la reputación del aludido.

Pero, además, con la aprobación de la LODR, la primera destinada en exclusiva a regular esta figura, entra en cuestión otro de los aspectos más discutidos aún hoy en día: si el derecho de rectificación puede entenderse como un derecho fundamental o como un simple derecho accesorio de otros derechos fundamentales. Un aspecto sobre el que también volveremos y que sobre el que no existe unanimidad dentro de la doctrina. Para autores como Gutiérrez (2003), no se

trata de un derecho fundamental, a pesar de que la LO 2/1984 “lo incluye en el sistema tutelar de los derechos fundamentales, desarrolla su ejercicio mediante Ley Orgánica y expresa en sus motivaciones algunos otros importantes rasgos definitorios del derecho” (Gutiérrez, 2003: 69).

La LODR cuenta con una estructura sencilla, compuesta de 8 artículos: el art. 1 delimita el derecho, los arts. 2 y 3 regulan su ejercicio extrajudicial y los arts. 4 a 8 prevén su tutela judicial. La Administración queda, por primera vez y a partir de este momento, totalmente al margen y la Jurisdicción será la autoridad competente para resolver cualquier controversia en torno al ejercicio de este derecho.

2.1.2.2. Fundamentación

El derecho de rectificación que regula la LO 2/1984 encuentra su fundamento básico en el art. 20 CE, concretamente en los derechos a expresar y difundir libremente el pensamiento a través de cualquier medio de reproducción o a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Dichas libertades de información y expresión conforman uno de los requisitos esenciales de la democracia y su reconocimiento aporta por fin pleno sentido al concepto de comunicación. El ciudadano ya no es un mero receptor, sino también “emisor y sujeto principal de la información” y la información, lejos de colocarse como mero límite al ejercicio del poder político, precisa ahora de acción positiva por parte del Estado que haga efectivo el cumplimiento de los valores objetivos que incumben a la sociedad y que están en ella implícitos (Rebollo, 2009: 266).

El contexto en el que debe analizarse el derecho de rectificación es, por tanto, la libertad de información del art. 20.1.d CE (Gutiérrez, 2003). De hecho, cualquier tratamiento de la cuestión pasa por el previo reconocimiento del derecho a la libertad de información pues “el análisis del derecho de rectificación en un Estado de Derecho supone, como premisa inicial, el reconocimiento incuestionable de que los responsables de una publicación o de una emisión radiofónica o televisiva son soberanos en la determinación de su contenido [...] ello excluye, de un lado, que se les pueda negar el derecho a difundir determinadas informaciones y, de otro, que se les pueda [...] imponer la obligación de publicar textos que la Dirección del medio no haya escogido” (Carrillo, 1986: 48). El nacimiento del derecho de rectificación surge a consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión por un tercero (Esquembre, 1998).

Para Lizarraga (2005), la rectificación actúa como un instrumento de garantía de la prevención de daños y también de la veracidad informativa. Según la autora, este derecho tiene también un destacado papel en lo que respecta a la intención de los medios de comunicación y los periodistas de presentar información veraz: la

diligencia del periodista debería llevarle a aceptar la publicación del escrito, demostrando una actitud falta de malicia.

Además de la libertad de informar, en la fundamentación del derecho se encuentra la protección eficaz del honor y la reputación de la persona aludida. Siendo la defensa de su dignidad condición indispensable para poder ejercitar el derecho.

2.1.2.3. Naturaleza jurídica

La mayor parte de la doctrina coincide en la actualidad en atribuir al derecho de rectificación una doble naturaleza¹². Por una parte, se trata de un derecho subjetivo garantiza la defensa del patrimonio moral del individuo frente a los excesos de los medios de comunicación. Por otra, hablamos de “un complemento de la garantía de la libre formación de la opinión pública” (Farré, 2008: 291), tal y como establece la STC 168/1986, de 22 de diciembre, en la que nos detendremos un poco más adelante. Esa doble naturaleza del derecho demostraría que los lectores, espectadores y oyentes son los verdaderos titulares y depositarios del derecho fundamental a la información porque éstos simplemente delegan tácitamente en los periodistas la labor de verificar los hechos y difundirlos (Casasús, 2003).

Por lo tanto, son tres los tipos de bienes o intereses que entran en juego a través del derecho de rectificación: el derecho fundamental al honor, la libertad de información del medio de comunicación y el derecho de todo individuo a recibir información veraz y plural. En este sentido, este derecho es la “facultad que tiene toda persona natural o jurídica de ejercer el derecho a comunicar información — en virtud de la facultad de difusión que le otorga el derecho a la información— para restablecer la verdad lógica en la información de forma inmediata, sumaria y sencilla y compatible con otros procedimientos jurídicos de cualquier naturaleza” (Benito, 2006: 42).

En cuanto a su naturaleza penal, autores como González Ballesteros (1981) o Jiménez Asenjo (1954, citado en Sobrao, 1978) equiparan el derecho de rectificación a un derecho de legítima defensa. Un concepto que, sin embargo, no ha calado en el resto de la doctrina española, que por lo general no analiza esta figura en términos de justicia retributiva.

¹² Según Eliades (2011), el derecho de rectificación representa la reparación de los perjuicios morales sufridos en la honra, la reputación o los sentimientos de la persona afectada por una información falsa, inexacta o difamatoria. A este hecho se une la potencia multiplicadora del agravio y la difusión pública por parte de un medio de comunicación. La base de este derecho es por tanto la legítima defensa de la dignidad personal, en lo referente tanto a la propia estima como a la estimación social. Pero la rectificación no sólo representa un derecho inalienable de la persona ofendida, sino también una dimensión de la responsabilidad social de los medios de comunicación de brindar a la sociedad un mayor grado de acercamiento de la verdad.

2.1.2.4. Derecho subjetivo y perspectiva institucional

Para entender que el derecho de rectificación se configura como un derecho subjetivo, hay que volver al enunciado de art. 1 de la LODR, que lo delimita: “Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio. Podrán ejercitar el derecho de rectificación el perjudicado aludido o su representante y, si hubiese fallecido aquél, sus herederos o los representantes de éstos”. De esta manera, se puede asegurar que el derecho faculta al individuo perjudicado para ofrecer de manera rápida y gratuita su versión de los hechos, es decir, su escrito de rectificación en el mismo medio en el que se difundió la información que le alude, de modo que pueda proteger su honor, su integridad moral, su buen nombre o reputación.

De otro lado, la naturaleza del derecho subjetivo de rectificación no es patrimonial, ya que el objeto o el bien jurídico sobre el que recae es de carácter moral o inmaterial; en otras palabras, ni el honor ni la reputación de la persona son susceptibles de valoración ni explotación económica.

No obstante, el derecho de rectificación es considerado mayoritariamente no como un derecho autónomo, sino como un derecho-garantía que tiene por finalidad ofrecer un plus de protección a otros derechos fundamentales.

En este sentido, el TC destaca su carácter puramente instrumental, puesto que su funcionalidad se agota en la rectificación de la información (STC 35/1983, FJ 4) y asegura que se trata en exclusiva de un medio del que dispone la persona aludida para prevenir o evitar el perjuicio que una información pueda irrogarle en su honor o cualquier otro derecho o interés legítimo (STC 168/1986, FJ 4). Es decir, que se trata de una protección adicional de los derechos recogidos en el art. 18 CE, cuya defensa se canaliza a través de otros procedimientos civiles o penales.

Concretamente es el derecho al honor (art. 18.1 CE) sobre el que el derecho de rectificación actúa como mecanismo de defensa. Un concepto jurídico, el del honor, que la jurisprudencia constitucional considera indeterminado “cuya precisión depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento, de ahí que los órganos judiciales dispongan de un cierto margen de apreciación a la hora de concretar en cada caso qué deba tenerse por lesivo del derecho fundamental que lo protege”, pero que se atreve a definir: “ampara la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que lo hagan desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio o que sean tenidas en el concepto público por afrentosas” (SSTC 107/1988, 185/1989, 171/1990, 172/1990, 223/1992, 170/1994, 139/1995, 3/1997; STC 180/1990, FJ 4). Por todo ello, los rumores, las simples invenciones o insinuaciones carentes de fundamento, las expresiones formalmente injuriosas e innecesarias

para transmitir el mensaje informativo y tampoco los insultos o las insidias quedan amparados por la libertad de información (por todas, STC 105/1990).

Para algunos autores, el derecho al honor incluye no solo el derecho a la defensa de la honra, sino también el de cada individuo a su identidad personal, a su reputación o imagen social y a una veraz presentación de su personalidad (Farré, 2008). También se trata del derecho a ser correctamente identificado, a que las ideas de cada uno sean expuestas de modo fiel, a que nuestras afirmaciones no sean manipuladas y a que no le sean al individuo imputadas acciones en las que no participó ni tampoco propósitos que no tiene. Es decir, “el derecho al honor se configura como la pretensión de respeto que corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad” (Rebollo, 2008: 149-150).

Siguiendo esta teoría, cabe afirmar que el derecho de rectificación garantiza la protección de la persona frente a dos tipos de lesiones o intromisiones: las que se producen en su autoestima u honor subjetivo y aquellas que menoscaban su fama o buena reputación en el ámbito externo. Por lo tanto, el derecho de rectificación protege al individuo de las lesiones que éste pueda sufrir en su dignidad moral o su autoestima por una información que le aluda de forma directa o indirecta y que considere falsa o inexacta; y también frente a las lesiones que dicha información pueda generar en su imagen social. Es decir, la protección del derecho se extiende a la imagen, reputación social, fama o identidad personal del individuo.

El principal objetivo de la rectificación es prevenir o reparar el daño causado, evitando su consumación o atenuando la ofensa. Algo que, como ya hemos señalado, constituye una garantía adicional y complementaria de otros instrumentos de protección frente a los abusos de los medios, como las acciones civiles y las penales¹³. Puede sostenerse que el derecho de rectificación se configura, junto con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, como un tipo de protección constitucional del honor, que intenta compensar el desequilibrio de poder entre ciudadanos y los medios de comunicación. Debido a esto precisamente, en nuestra opinión, el texto de la rectificación debe publicarse

¹³ La protección civil del honor se lleva a cabo a través de los procedimientos detallados en la LO 1/1982. Por su parte, la protección penal del honor se lleva a cabo mediante la tipificación de la injuria: expresión proferida o acción ejecutiva en descrédito o menosprecio de otra persona (art. 208 CP) y la calumnia: falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio (art. 205 CP) (véase Rebollo, 2008). Por su parte, el ex Ministro de Justicia Ledesma señalaría “[...] este es un proceso que no funciona autónomamente, desconectado de los demás. Es compatible con las otras acciones que nuestro ordenamiento jurídico reconoce en defensa fundamentalmente del honor. Es compatible, por consiguiente, con las acciones que reconoce la Ley Orgánica número 1 de 1982 sobre protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y del derecho sobre la propia imagen. Es también perfectamente compatible con las indemnizaciones o las reclamaciones por daños y perjuicios, a través del procedimiento declarativo que proceda por razón de la cuantía y, finalmente, también es compatible con las acciones penales en los supuestos de delitos de calumnias e injurias” (véase Ledesma, 1984).

siguiendo los parámetros marcados por la ley para poder realmente prevenir o atenuar el daño moral.

Pero no solo pretende prevenir ese perjuicio personal, sino que también trabaja en pos del “interés común que lleva implícita la veracidad de la información” (Rebollo, 2008: 271). Aquí entra en juego su relación con el derecho a la información en su vertiente pasiva (Benito, 2006), la que aquí hemos dado en llamar perspectiva institucional del derecho de rectificación y que busca esclarecer la verdad de lo publicado. El hecho de que el perjudicado pueda publicar de manera gratuita su versión de los hechos en el medio de comunicación que difundió la información lesiva contribuye muy positivamente a la formación de la opinión pública libre, a la que la Constitución considera fundamento de nuestro sistema democrático¹⁴, indisolublemente ligada al pluralismo político, valor fundamental y requisito de funcionamiento del Estado democrático en virtud del art. 1.1 CE. En este sentido, el TC señala que la formación de la opinión pública libre es sólo posible a través de la garantía de libertad de la comunicación pública pues, sin esta última, “quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas huecas las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de libertad democrática [...]” (STC 12/1982, FJ 3).

Con todo, puede afirmarse que hay dos características que le son propias al derecho de rectificación y que son comunes a todos los derechos fundamentales: es un derecho público subjetivo, respecto del cual los poderes públicos tienen una obligación positiva y deben trabajar por su libre ejercicio y pleno cumplimiento; y también es un derecho que adquiere una perspectiva institucional u objetiva, una dimensión social que trasciende lo puramente individual y subjetivo, significando el ejercicio de este derecho un beneficio para la colectividad (Farré, 2008). Puesto que “no sólo el perjudicado por una información tiene el derecho de rectificarla, toda la sociedad tiene derecho al conocimiento de la verdad” (Rebollo, 2009: 269).

En opinión de Carrillo (1986: 50-51) “estamos ante un derecho público subjetivo y, más concretamente, ante un derecho de la personalidad que de alguna manera establece la igualdad de posición entre los particulares y los medios de comunicación” y los poderes públicos están obligados a garantizarlo. Y es que “el individuo no puede quedar olvidado ante la función social que la Constitución atribuye a los medios de comunicación y esta función social no ha de servir a un determinado poder u opción política autoritarios, sino que debe estar orientada al

¹⁴ La doctrina coincide en que la opinión pública es un elemento esencial de la democracia, hasta tal punto que “no hay opinión pública sin democracia ni democracia sin opinión pública” (Callejo, 2009: 115-117). La opinión pública ha de entenderse como voluntad general, idea que conecta de forma directa con los conceptos de soberanía y democracia, y de ahí su papel ambivalente en la configuración de la democracia y del propio Estado de Derecho. Para Monzón (2006: 274), “la opinión pública nos remite a esa parte de los ciudadanos informados, conscientes y activos que quieren intervenir en la cosa pública” y “su lugar natural se encuentra en la democracia, pues éste es el sistema que hace posible el respeto al individuo y al pueblo, a la conciencia individual y a la conciencia pública”.

pluralismo informativo y a la veracidad” (Lizarraga, 2005: 65). Así, las perspectivas subjetiva e institucional se yuxtaponen en lugar de autoexcluirse.

2.1.2.5. ¿Derecho fundamental? ¿Límite a la libertad de comunicación?

Hasta el momento se ha expuesto una perspectiva del derecho de rectificación que lo equipara a un derecho-garantía de protección del patrimonio moral del individuo, así como del derecho de la colectividad a recibir información veraz. En este punto, hemos de plantear si nos encontramos ante un derecho fundamental o, por contra, ante un derecho ordinario de naturaleza puramente procesal.

Farré (2008) repasa el estado de la cuestión de manera clara y concisa, indicando cuáles son los argumentos expresados a favor y en contra de cada una de estas posturas. De un lado, hay autores como Rivero Ysern (1968) y Carillo (1986) que entienden que el derecho de rectificación es un límite del derecho a la información y por ello goza de idéntico sistema de garantías que cualquier otro derecho fundamental, además de estar regulado por Ley Orgánica (algo que sólo puede obrarse con derechos fundamentales). Otra parte de la doctrina, sin embargo, piensa que sólo es una garantía procesal de los derechos del art. 18 CE y que nunca tuvo que ser regulado por Ley Orgánica (Chinchilla, 1987; Gutiérrez, 2003). Como venimos señalando, en la doctrina española es mayoritaria la postura de que el derecho de rectificación es más un derecho-garantía que un auténtico derecho fundamental.

El tema es complejo y sin duda ofrece múltiples interpretaciones. Lo que sí es objetivo es que es la falta de definición de la propia LO 2/1984 la que provoca el debate, además del silencio del TC a este respecto¹⁵. Es por ello por lo que no queda del todo claro que el derecho de rectificación sea un derecho fundamental expreso, debido a que su aparición siempre suele producirse en el marco en el que distintos derechos —arts. 18.1 y 20.1 d CE— entran en conflicto (Gutiérrez, 2003) y, además, no es susceptible de protección (como sí lo son los derechos fundamentales) mediante recurso de amparo ante el TC. De alguna manera, la LODR desarrolla el derecho fundamental a recibir información veraz a través del derecho de rectificación, que en ningún caso puede entenderse como límite externo al art. 20.1 d CE.

¹⁵ El Alto Tribunal tampoco se ha pronunciado sobre si ese derecho-garantía forma parte del contenido esencial del derecho al honor, es decir, si es o no indispensable para su protección jurídica real y efectiva; a lo que se une que el Tribunal Supremo no considera que el derecho de rectificación sea un derecho fundamental: “[...] el legislador únicamente ha querido hacer una precisión o especificación relativa al derecho de rectificación, no por tratarse de un derecho fundamental, sino en atención a su carácter instrumental de la protección de éstos, en la medida en que su contenido se orienta a obtener la tutela de derechos fundamentales que se han visto lesionados por una actuación externa al proceso” (ATS de 22 de enero de 2002, RJ 2).

En nuestra opinión, en principio no deben entenderse antagónicos los conceptos de derecho fundamental y de derecho-garantía o derecho instrumental; o, al menos, no debe focalizarse aquí el debate. Más allá de eso, el derecho de rectificación debe ser concebido como un derecho procedimental para la garantía de un segundo derecho (derecho al honor), que es constitucionalmente exigible frente al Estado y frente a los particulares.

Con respecto si el derecho de rectificación opera realmente como límite a la libertad de informar, Farré (2008) lo descarta, aunque reconoce que cumple de forma exquisita con el principio de proporcionalidad exigible a las medidas que operan como límites de los derechos fundamentales por varios motivos: es un instrumento adecuado al fin propuesto (la protección del derecho al honor), es un mecanismo de protección indispensable en el actual panorama mediático; y, además, una medida proporcionada, ya que los beneficios derivados de la misma son superiores a los perjuicios que puede ocasionar sobre otros bienes o intereses legítimos. “El derecho de rectificación permite una conciliación o equilibrio razonable entre posiciones divergentes, y con él se asegura la efectividad de los derechos fundamentales implicados” (Farré, 2008: 313). Una línea de razonamiento que, según recuerda el autor, defiende de manera similar la jurisprudencia constitucional de países como Alemania o Italia.

2.1.2.6. Contenido y objeto

Delimitar el contenido del derecho de rectificación no entraña grandes dificultades. Sabemos ya que se trata de la facultad concedida a cualquier particular para emitir su versión de los hechos cuando se considere perjudicado por una información difundida a través de un medio de comunicación. “Es el derecho a disentir de unos hechos que consideramos erróneos o que nos perjudican” (Rebollo, 2009: 270), “la posibilidad de que goza cualquier persona aludida en una información difundida por un medio de comunicación social de contradecir la misma por considerarla errónea o inexacta y susceptible de causarle perjuicio” (Esquembre, 1997: 528).

En cuanto a su ejercicio, el derecho de rectificación sólo es ejercitable en el caso de que exista una presunta colisión o conflicto entre los intereses del medio de comunicación y los del particular. Por extensión, para que este derecho pueda operar deben cumplirse tres requisitos:

- **Un medio de comunicación debe difundir una información de hechos.**
- **La persona aludida entiende que dicha información es inexacta.**
- **La divulgación de dichos hechos debe poder causarle algún perjuicio.**

Fuera del ámbito de difusión de los medios de comunicación social no es posible exigir la publicación de un escrito de rectificación¹⁶. De otro lado, para que la información sea rectificable es indiferente que esté contenida en un artículo, editorial o reportaje, que vaya o no firmada, que haya sido o no distribuida por una agencia de información, que esté incluida en la sección *Cartas al director* o que aparezca en espacios pagados o gratuitos. Del mismo modo, puede exigirse, a su vez, la rectificación de un escrito de rectificación de un tercero. En este punto, hay que recordar que las cláusulas periodísticas del tipo “según fuentes bien informadas” no eximirán por sí solas al medio de publicar el escrito de rectificación que el afectado le remita. En nuestro caso, como veremos más adelante, hemos excluido del análisis de contenido (capítulos 3 y 4 del presente trabajo) las rectificaciones a cartas dirigidas al Director, puesto que para el propósito de este trabajo nos interesa estudiar de qué forma se publican las rectificaciones a informaciones no solo difundidas —sino, sobre todo, elaboradas— por los medios de comunicación, entendiendo que los periódicos no suelen tener problema en publicar rectificaciones que atañen a terceros que son también lectores, sino en difundir aquellas que ponen en entredicho su diligencia profesional.

Uno de los temas más espinosos acerca del derecho de rectificación, es que éste únicamente es ejercitable frente a informaciones de hechos, pero nunca frente a las opiniones. El propio TC lo pone de manifiesto: “por su naturaleza y finalidad, el derecho de rectificación [...] normalmente sólo puede ejercerse con referencia a datos de hecho (incluso juicios de valor atribuidos a terceras personas), pero no frente a opiniones cuya responsabilidad asume quien las difunde” (STC 35/1983, FJ 4). Esta limitación de la rectificación al ámbito de los hechos ofrece un mayor margen de libertad de expresión del medio de comunicación, situación que no se produce dentro de otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, como puede ser el portugués o el francés.

Para entender por qué la rectificación se reduce al marco de la libertad de información del medio es preciso recordar la distinción que nuestro ordenamiento traza en torno a las libertades de información y expresión. La CE ha optado por separar ambos derechos, al entender que cada uno cuenta con un contenido propio e identificable¹⁷. La libertad de expresión recoge la facultad de expresar

¹⁶ En el supuesto de que una persona se sienta aludida por una información que ha sido difundida al margen de cualquier medio de comunicación social podrá plantear las acciones civiles o penales que correspondan en su caso, pero no estará facultada para ejercer el derecho de rectificación. Ejemplos de ello serían la información hecha pública en una rueda de prensa o un mitin o aquella que se comunica a través de un medio de comunicación interpersonal, como una conversación telefónica (Farré, 2008).

¹⁷ En la STC 105/1983 el Alto Tribunal determina que la libertad de información es un derecho autónomo, diferenciado en su contenido de la libertad de expresión. Las diferencias entre el derecho a la información y la libertad de expresión quedan recogidas ampliamente en Navas del Castillo (2009: 89-109).

pensamientos, ideas y opiniones, así como las creencias y juicios de valor y también la de difundirlos. Se trata de un derecho que está dotado de un *plus* de subjetividad y sobre el que no opera el requisito de veracidad ni la demostración de exactitud. Con la libertad de información sucede justo lo contrario, puesto que ésta se circunscribe a hechos sobre los que cabe exigir su veracidad. Un concepto, el de veracidad, que no debe ser confundido con el de verdad, ya que —en palabras del TC— la veracidad no equivale a la rigurosa correlación entre los datos que se difunden y la realidad, sino que alude a la diligente labor del profesional de la información (contraste de los datos) a la hora de desempeñar su quehacer.

Dicho de otro modo, la jurisprudencia del TC deja claro que la exigencia de veracidad no debe entenderse de manera absolutamente rígida en términos de verdad, pues “las informaciones erróneas son inevitables en un debate libre” y “[...] de imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía jurídica sería el silencio” (STC 6/1988). Así, “[...] la información rectamente obtenida y difundida es digna de protección, aunque su total exactitud sea controvertible o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo comunicado” (por todas, STC 240/1992). Las SSTC 240/1992 y 6/1988 ponen de manifiesto que lo que está exento de protección constitucional son los simples rumores carentes de toda constatación o las meras invenciones o insinuaciones.

Ambos derechos parten de un tronco común, pero poseen distintos objetos: hechos u opiniones. Para el legislador, únicamente lo fáctico será rectificable, independientemente de que forme parte de una información en la que predomine lo valorativo o lo informativo¹⁸. La información de hechos equivaldría a la difusión de aquello que sea susceptible de comprobación a través de la prueba de la veracidad, ya que los hechos son datos reales de objetividad evidente o empíricamente constatable. Para poder ser consideradas informaciones de hechos han de poder ser calificables como verdaderas o falsas por parte del público al que van dirigidas (Farré, 2008).

Podemos afirmar por ello que los límites impuestos al ejercicio de la libertad de expresión son mucho menos rigurosos que los impuestos a la libertad de informar. Las opiniones son siempre libres, siempre y cuando no se traduzcan en expresiones injuriosas o vejatorias; sin embargo, la difusión de informaciones que versen sobre hechos solo es legítima, solo cuenta con amparo constitucional, cuando los hechos que se transmiten son veraces. Sin embargo, dicha separación entre opinión e información no es siempre tan clara en la vida real. Un punto que

¹⁸ La doctrina del elemento predominante (en tantas ocasiones empleada para resolver el conflicto de si la información difundida forma parte de la libertad de expresión o de información) no resulta de aplicación en el derecho de rectificación, por lo que no es relevante que la información de hechos esté más o menos rodeada de opinión (Farré, 2008).

ha llegado a reconocer el Tribunal Constitucional: “[...] la limitación del derecho a la información al relato puro y aséptico de los hechos no resulta constitucionalmente aceptable ni compatible con el pluralismo, la tolerancia, la mentalidad amplia, sin los cuales no hay sociedad democrática, pues la divergencia subjetiva de opiniones forma parte de la estructura misma del aspecto institucional del derecho a la información” (STC 171/1990).

La tercera condición para que pueda ejercitarse el derecho es que la información de hechos difundida por un medio de comunicación aluda a una persona y que ésta la considere falsa o inexacta, además de entender que puede causarle un perjuicio. A tenor del art.1 de la LO 2/1984, dicha alusión puede ser directa o indirecta. Si bien lo realmente importante es que sea identificable por el público, de manera que también sería rectificable la información que, sin nombrar expresamente a la persona o grupo, contiene referencias concretas (sean o no nominativas) o abstractas (Farré, 2008). Dicha consideración de inexactitud o falsedad de la información de hechos es, para la jurisprudencia constitucional, un presupuesto de carácter meramente subjetivo: como sabemos, no se exige la prueba de inexactitud o falsedad a los hechos que se pretenden rectificar y el sujeto aludido no está obligado a probar la veracidad o falsedad de la información difundida por el medio, sino que la naturaleza del derecho de rectificación favorece que dicha consideración sea subjetiva. Es la propia persona aludida la que estima que los hechos divulgados que la aluden son inexactos o falsos y deben ser rectificados.

Según la jurisprudencia constitucional, la cuestión de la veracidad de los hechos de la información o del escrito que la rectifica no es objeto en ningún momento a lo largo del proceso de rectificación, ni en la fase extraprocesal o procesal. Es decir, en el procedimiento no se trata de averiguar si los hechos que expone cada una de las partes son o no verdaderos, sino de estimar objetivamente si el sujeto aludido debe exponer en público su versión de los hechos por la inexactitud de lo que sobre él o en relación con él se ha publicado.

A tenor de la STC 168/1986 (FJ 5), Rebollo asegura que el derecho de rectificación en ningún caso obstruye ni la libertad de los medios a la hora de informar ni tampoco “el derecho de la colectividad y de los individuos que la componen a recibir libremente información veraz”. **La inserción del escrito de rectificación no obliga al medio a declarar que la información que publicó es incierta o a modificar su contenido, tampoco le impide ratificarse en la información que suministró ni divulgar datos que la ratifiquen o avalen.** De otro lado, y también según la jurisprudencia constitucional, el ejercicio del derecho de rectificación tampoco socava el derecho de la colectividad a recibir información veraz, puesto que la versión distinta de los hechos no implica ni la ocultación, ni la deformación de la información inicialmente difundida, del mismo modo que al escrito de rectificación no le es exigible una exactitud en su contenido.

Conocer dos versiones sobre el mismo hecho, según el TC, no socava el derecho a la información ni en la vertiente activa ni en la pasiva. No obstante, es necesario plantearse si en la práctica sirve de algo que se den a conocer varias versiones sobre los mismos hechos sin que a ninguna se le exija el requisito de veracidad. A nuestro juicio, lo que viene a establecer el art. 20 CE es que para que el público puede estar debidamente informado y formarse una opinión sólida acerca de los asuntos que le interesan es condición indispensable que la información que le llegue sea veraz. En ese sentido, la STC 168/1986 “al desconectar el derecho de rectificación del núcleo de la verdad en la comunicación de hechos [...] ha dado paso, más bien, a un derecho de acceso por alusiones [...]. Esta interpretación [...] violenta la ley reguladora del derecho de rectificación, otorga indirectamente carta de naturaleza informativa a la desinformación, y al ensanchar sin proporciones los rasgos del derecho de rectificación le ha hecho perder su propia armonía (Soria, 1989: 40).

Destacan Rebollo (2009) y Farré (2008) que la resolución judicial que estima una demanda de rectificación no garantiza en absoluto que la versión de los hechos que presenta el demandante sea verdadera y tampoco puede producir efectos de cosa juzgada respecto de una posterior investigación procesal de los hechos. Lo que está en juego en el ejercicio del derecho de rectificación, según estos autores, no es la veracidad de unos hechos, sino la publicación de informaciones contrapuestas que no hayan sido acreditadas como exactas o desacreditadas como falsas con efectos de cosa juzgada. En cualquier caso, hay que llamar la atención sobre una posibilidad en la que, en base a la veracidad, no se permita ejercer el derecho de rectificación. Sucede cuando es clara y manifiesta la veracidad de los hechos difundidos por el medio de comunicación o cuando el juez tiene constancia de dicha veracidad.

Tampoco es trascendente a los efectos cuál sea el origen de la inexactitud de los hechos objeto de la información publicada por el medio, al mismo tiempo que no existe la posibilidad de rectificar informaciones que supongan una intromisión en la intimidad de la persona. Esta intromisión (legítima o ilegítima) sólo se produce cuando los hechos difundidos son ciertos, pues como determina la STC 197/1991 FJ 2: “[...] si se trata del derecho a la intimidad esa veracidad es presupuesto necesario para que la intromisión se produzca, dado que la realidad de ésta requiere que sean veraces los hechos de la vida privada que se divulgan”. Si un hecho o dato es considerado falso no puede constituir una intromisión en la intimidad del individuo, sino eventualmente en su honor.

Para concluir con las condiciones que la Ley impone al ejercicio de este derecho, debemos hablar de la posible causación de perjuicio, que es suficiente con que sea hipotético sin ser necesaria la constatación de un daño efectivo. En otras palabras, **para ejercitar el derecho de rectificación no es necesario acreditar una previa lesión del derecho al honor**. El posible perjuicio puede ser

no sólo económico o material, sino también —y especialmente— moral y su existencia solo puede ser valorada por el sujeto aludido en la información, que será quien determine si lo publicado le afecta negativamente o le produce algún daño y si, en última instancia, pretende difundir su escrito de rectificación en búsqueda de su satisfacción moral. Así las cosas, la posibilidad de control de esta circunstancia por el juez es muy reducida.

A nuestro juicio, siendo la rectificación ampliamente entendida como el mecanismo más eficaz para resarcir el posible daño de un medio de comunicación (por su rapidez y porque existe la posibilidad de difundirlo a través del mismo medio por el que se originó el daño) y con el objetivo satisfacer la necesidad de formar debidamente a la opinión pública, **es preciso que se introduzcan mecanismos judiciales que garanticen la veracidad de lo que se publica —sea información o rectificación— una vez que nos situamos en la acción civil de rectificación.**

2.1.2.7. Titulares y obligados

El titular del derecho de rectificación es toda persona física o jurídica que haya sido aludida por una información que considere inexacta y cuya divulgación pueda causarle un daño o perjuicio. Señala Benito (2006) que cabe el ejercicio de este derecho por parte de los extranjeros, a pesar de no aparecer citados expresamente en la LO 2/1984¹⁹, pero que en ningún caso se trata ni de una acción popular ni que alcance a terceros. El sujeto obligado es el medio de comunicación que ha difundido la información que se pretende rectificar²⁰. Otros autores extienden la titularidad del derecho no solo a los sujetos aludidos directa o indirectamente por una información, sino también a aquellos a los que se les omite dentro de la misma. Esto sucede, por ejemplo, en los casos en los que deben atribuirse los hechos a una persona y no se efectúa (Cucarella, 2008).

El art. 1.2 de la LO 2/1984 establece que el derecho puede ser ejercitado tanto por el perjudicado aludido como por su representante y, en caso de haber fallecido aquél, sus herederos o los representantes de éstos. El término representante debe incluir tanto a los representantes legales como a los representantes voluntarios y el término herederos es aquí sinónimo de causahabientes²¹. Aunque la ley parece no incluir en el ejercicio a los parientes o

¹⁹ El art. 27 del Código Civil concede los mismos derechos civiles a españoles y extranjeros y el art. 13 de la Constitución española determina que los extranjeros gozarán de las libertades públicas que reconoce la CE en los términos que establezcan los tratados y las leyes.

²⁰ Rebollo (2009) habla en términos de sujeto pasivo del derecho (director del medio de comunicación) y sujeto activo (toda persona natural o jurídica aludida en una información que considera falsa o inexacta y que puede causarle perjuicio).

²¹ Según la RAE, “persona que ha sucedido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras”, representantes de los directamente aludidos y perjudicados por la información, por lo que los titulares del derecho de rectificación serían éstos, no sólo como representantes sino como perjudicados.

familiares que no sean herederos, “podría haber familiares próximos que sin ser herederos tuvieran un razonable interés en rectificar una información considerada falsa sobre el pariente fallecido” (Farré, 2008: 317). Dicha interpretación, más amplia, encuentra aval en el art. 4 de la LO 1/1982, *de Protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen*, ya que en ella también se legitima al cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos (aunque no hayan sido designados herederos en el testamento) e incluso, en algunas ocasiones, al Ministerio Fiscal.

La LO 2/1984, no distingue entre la naturaleza pública o privada del sujeto activo, algo que sí ocurría anteriormente con la distinción entre derecho de réplica y derecho de rectificación. A partir de su entrada en vigor, por primera vez cualquier autoridad o funcionario estará legitimado para ejercitar su derecho en las mismas condiciones y con los mismos efectos que un particular.

Tanto las personas físicas como las jurídicas son titulares del derecho de rectificación. Del mismo modo que ocurrió en su día con el derecho al honor, determinar si el derecho de rectificación puede ser una facultad para las personas jurídicas podría ser una cuestión controvertida. No obstante, tanto el TS como el TC entienden que a través del derecho al honor se protege no solo la dignidad de la persona (el concepto subjetivo de dignidad) sino también el honor político o profesional. A las sociedades mercantiles se les atribuye esta dimensión objetiva del honor (consideración ajena, fama o reputación). El daño o lesión moral que se les ocasiona a través del menosprecio o la difamación en público puede llevar aparejado, además, un daño económico o patrimonial. Derivado de su derecho al honor, por tanto, las personas jurídicas también pueden ejercer uno de sus instrumentos de protección o defensa como es el derecho de rectificación.

Parte de la doctrina pone de manifiesto la existencia de otros sujetos que, aunque posiblemente estén legitimados para el ejercicio, pueden plantear problemas al no aludirlos el legislador la LO 2/1984 (Farré, 2008). Hablamos del caso del *nasciturus* (ser concebido, pero no nacido), de las uniones sin personalidad jurídica y de los grupos o colectivos que no actúan unidos. En cuanto al primero, entendemos que sería legítimo que fueran sus representantes legales los que ejercieran el derecho de rectificación en su lugar. En cualquier caso, es difícil imaginar que una información en la vida real cite al no nacido, pero no a sus representantes, directa o indirectamente. En esta situación, con seguridad la más probable, serán ellos quienes ejerciten el derecho.

Tampoco existiría inconveniente en extender la titularidad del derecho a las uniones sin personalidad jurídica o a los colectivos o grupos concretos que no actúan unidos. En el primer caso, los entes sin personalidad pero que actúan como si la tuvieran podrán ejercitar el derecho a través de los representantes de esas entidades. En el segundo supuesto creemos que aparecen mayores problemas,

aunque el TC les ha reconocido también la titularidad del derecho a la reputación social.

Volvamos ahora al sujeto obligado, que en esta relación jurídica es el medio de comunicación que ha divulgado una información de hechos objeto de la posterior rectificación. Aunque **la legitimación pasiva recae de forma concreta en la figura del director o responsable de ese medio de comunicación** (Cucarella, 2008), puesto que será a éste a quien el sujeto activo del derecho (el perjudicado) le exija la publicación de su versión de los hechos en el mismo medio. Por este motivo, es irrelevante a efectos jurídicos que el director de la empresa de comunicación sea o no el autor o firmante de la información: el autor de la información podrá ser sujeto pasivo de otras acciones penales o civiles que pudieran darse a raíz de la información difundida, pero nunca será el responsable de difundir el escrito de rectificación.

También hay que señalar que resulta indiferente que el medio que ha difundido la información sea de titularidad pública o privada, puesto que el art. 1 de la LODR no establece diferencias en este sentido y recurre a la cláusula general ‘cualquier medio de comunicación social’. Dentro de dicha definición se enmarcan los medios de comunicación de masas, aquellos que son unidireccionales y que en el sentido clásico se corresponden con la prensa, la radio y la televisión²².

Hoy en día no puede obviarse, sin embargo, la gran influencia de los *new media*, con las redes sociales como su máximo exponente. De hecho, Internet se considera ya el mayor y genuino medio de comunicación de masas y, por ello, los mensajes que se difunden a través de la red deben también respetar los límites constitucionales. La mayoría de los autores entiende que no hay ningún motivo para que el derecho de rectificación no pueda ejercitarse en Internet (Farré, 2008), aunque reconoce también los problemas que plantea el modo de ejercicio del derecho, la forma en la que se ha de publicar el escrito y la persona sobre la que recae la obligación de difundirlo. En cualquier caso, puede asegurarse que, con carácter general, los suministradores de servicios en línea y los suministradores de contenido serán los responsables de los mensajes y, por tanto, los que deberán responder civil o penalmente por ellos.

Si bien es cierto que aún quedan muchos detalles por perfilar en lo relativo al derecho de rectificación en Internet y que su regulación se presume compleja (por la enorme capacidad de difusión de la Red, mucho mayor que la de los medios tradicionales), ya hay países como Alemania que reconocen la posibilidad de rectificar informaciones en ese ámbito. Sin duda, este campo constituye hoy una de

²² Dentro de los medios de comunicación de masas, quedan excluidos a estos efectos el libro o el cine en la LO 2/1984; sin embargo, sí existe la posibilidad de rectificación en estos ámbitos al amparo del art. 9.2 de la LO 1/1982, de Protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (véase Farré, 2008: 324 y 326).

las líneas que con más necesidad han de investigarse en el ámbito del derecho que estudiamos.

2.1.2.8. Procedimiento de ejercicio

El ejercicio del derecho de rectificación puede desarrollarse en dos fases, la extrajudicial, que supone en esencia la remisión del escrito de rectificación por parte del afectado al medio de comunicación, donde expone su versión de los hechos; y la judicial, que resuelve en última instancia en el caso de que el medio se niegue a publicar el escrito.

En este apartado nos centramos en la primera, en esa actividad que es previa a la decisión judicial (que, recordemos, no es imprescindible para el ejercicio del derecho) pero que sí condiciona el acceso a la jurisdicción, su desarrollo y resultado (Cucarella, 2008).

El envío del escrito de rectificación debe producirse dentro de los siete días naturales siguientes a la difusión de la información que se desea rectificar. Así lo establece el art. 2 de la LO 2/1984: “dentro de los siete días naturales siguientes al de publicación o difusión de la información que se desea rectificar, de forma tal que permita tener constancia de su fecha y de su recepción”. Este plazo para la remisión del escrito se computa a partir de la publicación o difusión de la información que el aludido desea rectificar y no es admisible la prórroga (SAT de Barcelona, de 17 de mayo de 1986). Un plazo de tiempo que puede resultar muy breve en el caso de que el afectado por la información resida o se encuentre en un país extranjero, lo que en último término podría causar indefensión procesal (Carrillo, 1986; Farré, 2008).

Es imprescindible, por tanto, tener constancia de la fecha del escrito y de su recepción por parte del medio de comunicación para el cómputo de plazos posteriores (Rebollo, 2008). Cucarella (2008) llama la atención sobre la entrega por medio de mensajero²³. También son posibles la comunicación notarial, que cuenta con la ventaja de que permite dejar constancia de su fecha, de su recepción y también de su contenido; el envío por correo certificado²⁴; el uso del telégrafo o télex; el fax o burofax²⁵. Del mismo modo, existe la posibilidad de enviar el escrito de rectificación a través de correo electrónico, aunque pueda haber alguna duda a

²³ La SAP Valencia 517/1995 (Sección 6ª), 30 de noviembre, pone de manifiesto esta posibilidad (FJ 2º).

²⁴ El TC ha dejado claro que es posible la remisión del escrito de rectificación al medio de comunicación a través de correo certificado (Véase STC 264/1988 FJ 2).

²⁵ Aunque en algunas ocasiones se ha puesto de manifiesto la posibilidad de que, por medio del fax o burofax, el texto llegue defectuoso al destinatario o que sea difícil comprobar la identidad del emisor, la jurisprudencia ha concluido que no existe ningún obstáculo para admitirlo como medio de comunicación propio para el ejercicio del derecho (SAP Pontevedra, 7 de julio de 1994).

la hora de constatar la recepción de este, así como su contenido²⁶. La vía más segura sigue siendo posiblemente el conducto notarial, puesto que es la única que acredita de manera fehaciente no sólo las fechas de envío y recepción, sino también el contenido del escrito rectificador.

El segundo requisito del escrito es que se limite a los hechos de la información que se desea rectificar y que su extensión no exceda sustancialmente la de ésta, “salvo que sea absolutamente necesario” (art. 2.2 LO 2/1984). La Ley admite así la posibilidad de que el texto rectificador sea más extenso que la información inicial puesto que en muchas ocasiones solo de esta manera es posible garantizar la eficacia de la rectificación (Farré, 2008). Si el afectado envía al medio de comunicación un escrito de mayor extensión que la información original, será el director el que aprecie la absoluta necesidad de dicho exceso y, por ende, quien tenga la última palabra.

Este principio, el que exige que el escrito de rectificación cuente con una extensión semejante a la de la información, es la llamada **igualdad de armas, que procede de la doctrina alemana** y que es común en otros ordenamientos de nuestro entorno. Para esbozar la comparativa, lo que se contabiliza es la parte del texto informativo que da origen a la rectificación, no el texto completo.

Según algunos autores, en la práctica el interesado debe remitir dos textos al director de comunicación: una carta en la que se solicita la publicación o difusión del escrito de rectificación, “con la invocación expresa o implícita del correspondiente derecho” (Farré, 2008: 368) y un segundo texto que se corresponde con el escrito rectificador propiamente dicho. Aunque no es imprescindible que ambos vayan separados, sí que es necesario que puedan ser claramente diferenciados uno de otro. Ante la circunstancia de que la persona se vea afectada por dos informaciones diferentes, podrá optar por remitir varios escritos de rectificación independientes o, en su caso, una única rectificación conjunta si entre los hechos existe algún nexo.

Dentro de los requisitos (de carácter subjetivo, objeto, formal y temporal) para poder ejercitar el derecho, el más destacado es que la finalidad de la rectificación no debe ser otra que la de ofrecer una visión disidente de los hechos difundidos, sin que haya lugar a la rectificación de juicios, opiniones ni tampoco a la manifestación de descalificaciones o insultos. **El escrito tampoco puede aspirar a que el medio de comunicación adopte posturas morales**, como pedir disculpas o lamentar el error cometido, por ejemplo (Cucarella, 2008). En efecto, no impone al medio de comunicación “[...] desdecirse o negar la veracidad de la versión de los hechos inicialmente publicada” (STC 168/1986, FJ 3). Del mismo modo, no puede contener juicios de valor u opiniones ni puede utilizarse para dar pie a una polémica sobre calificativos, opiniones, juicios de valor o criterios morales.

²⁶ En cualquier caso, la SAP Asturias 264/2002 da validez a la rectificación enviada por el aludido en una página web a través de correo electrónico al webmáster de esta.

En último lugar, no debe incluir una transcripción de los hechos que se rectifican, pues es algo que “excede de la finalidad perseguida con este escrito” (Cucarella, 2008: 194), y que supondría una extensión innecesaria y abusiva, aunque sí debe incluir los datos que permitan identificar los hechos objeto de rectificación.

La rectificación deberá consistir, por tanto, en la negación total o parcial de los hechos, o en matizar, complementar, aclarar, puntualizar, explicar y precisar la información que se difundió y que alude al interesado. De este modo, “todo aquello que tienda a reducir a la conveniente exactitud y certeza unos hechos, todo lo que ayude a difundir una información veraz, puede incluirse en el contenido del escrito remitido al medio de comunicación social para su publicación” (Farré, 2008: 369).

De hecho, según el art. 3 LODR, la difusión del escrito será íntegra solo en el caso de que el interesado haya respetado estos límites con relación al contenido de la rectificación (art. 3 LO 2/1984). Como ha señalado la jurisprudencia (entre otras, la SAP de Navarra de 4 de diciembre de 1996), el exceso no puede ser amparado a través del derecho de rectificación, pues éste solo debe constreñirse a los hechos que se consideren inexactos.

A pesar de que lo enunciado en el art. 2 de la LO 2/1984 determina que el derecho se ejercita mediante el envío de un escrito con la versión de los hechos del afectado al director del medio, no debe entenderse que la rectificación pueda y deba formularse única y exclusivamente por escrito (ya sea en soporte papel o informático). La forma escrita está especialmente prevista para la prensa, pero resulta insuficiente frente a los medios audiovisuales (Lizarraga, 2005).

Por ello, es aconsejable que se admita la utilización de imágenes y sonido (a pesar del peligro de manipulación de las primeras) en el caso, por ejemplo, de la televisión para que el ejercicio sea mucho más eficaz que la simple lectura del texto por parte del medio de comunicación (recordemos el caso de Urdaci y su famoso “C-C-O-O”). **La imposibilidad de remitir material gráfico o audiovisual acompañando al escrito sitúa al reclamante en una clara posición de desigualdad.** Esto es algo en lo que también coinciden Esquembre (1997) y Cucarella (2008). Éste último, sin embargo, considera que en el caso de que la información lesiva sea difundida a través de un soporte audiovisual, la rectificación no debe reducirse también a esa forma audiovisual, sino que debe ir acompañada del correspondiente escrito para que el propósito del derecho se cumpla de manera satisfactoria.

En el mismo sentido originario del derecho de rectificación se encuentra el llamado principio de inmediatez. **El periodo de tiempo que transcurre entre la difusión de la información y su rectificación debe ser necesariamente muy breve**, puesto que “la rectificación únicamente tiene sentido si los plazos establecidos, tanto para el ejercicio del derecho como para la publicación del escrito, son tan breves que la información rectificada permanece todavía en la

mente del público” (Farré, 2008: 366). Al tratarse de un procedimiento al que el legislador ha otorgado un carácter preventivo, si se prolongara quedaría frustrado su fin (Rebollo, 2008).

En último lugar, la rectificación puede ser manuscrita o escrita a través de ordenador, pero la Ley no permite que sea dactilografiada. Si el texto plantea problemas de legibilidad, el medio de comunicación podrá pedir al reclamante que aclare las dudas que suscita su lectura y, aunque la LODR no menciona nada al respecto, se entiende que la lengua empleada en el escrito ha de ser la misma que se empleó en la difusión de la información (Farré, 2008).

Todo lo descrito muestra el sometimiento de la rectificación a una serie de límites materiales, cuya relevancia “se manifiesta en que su incumplimiento por parte del reclamante fundamenta la legítima negativa del medio de comunicación a divulgar la rectificación” (Farré, 2008: 372).

2.1.2.9. La obligación del medio de comunicación

El art. 3.1 LODR establece que, siempre que el escrito de rectificación cumpla los requisitos señalados en el punto anterior, “el director del medio de comunicación social deberá publicar o difundir íntegramente la rectificación [...]”. Hablamos, por ende, de una obligación que no está sujeta a la intervención de la autoridad administrativa o judicial, ni tampoco a una reclamación gubernativa previa en el caso de que la información se haya difundido en un medio de comunicación de titularidad pública (art. 7 LODR: “No será necesaria la reclamación gubernativa previa cuando la información que se desea rectificar se haya publicado o difundido en un medio de comunicación de titularidad pública”).

Por parte del director o responsable del medio de comunicación existe una obligación de actuar, una obligación que es de naturaleza condicional, puesto que es obligado difundir el escrito de rectificación cuando se dan los presupuestos para que existe el derecho y el afectado lo ejerce de conformidad con lo que exige el art. 2 LODR. Es decir, la solicitud de inserción de la rectificación debe cumplir con el plazo y la forma que marca la ley, ya que en caso contrario “el derecho caduca y la obligación desaparece” (Farré, 2008: 375).

Los plazos también son limitados para la difusión del escrito por parte del medio. En virtud del art. 3 LODR, deberá formalizarse “dentro de los tres días siguientes a su recepción” (apartado primero) o, en su caso, “en el número siguiente” (apartado segundo). En el caso de la radio y la televisión, existe el supuesto de que la periodicidad del programa donde se emitió la información controvertida no permita cumplir con ese plazo. Ante esa situación, la ley contempla la posibilidad de que el reclamante pueda exigir que, dentro del plazo, se publique su versión en otro programa o espacio de audiencia y relevancia semejantes (art. 3.3 LODR).

En lo que respecta a la forma, el escrito de rectificación se difundirá por escrito (si se trata de un medio de comunicación impreso) o mediante la lectura de éste (si se trata de radio o televisión).

La ley establece aún más requisitos para la publicación o difusión del texto rectificador. Entre ellos, la publicación íntegra del mismo, con una relevancia semejante y sin comentarios ni apostillas (art. 3.1 LODR); y, al mismo tiempo, de forma gratuita (art. 3.4 LODR). Esto significa que en ningún caso el director o responsable del medio puede difundir la rectificación de forma parcial ni tampoco modificarla. En definitiva, no puede variar una coma del escrito ni siquiera en el supuesto de que éste no respete el límite de extensión; puesto que, de ser así, deberá comunicar ese defecto al reclamante con el objetivo de que pueda subsanarlo. La difusión del escrito debe ser siempre gratuita, aunque existe la posibilidad de que se negocie un desembolso económico de acuerdo con las tarifas del medio en el caso de que se decida publicar un texto de mayor extensión que la que la ley establece. Para Cucarella (2008), sin embargo, no cabe la posibilidad de ningún cobro por parte del medio.

Además de lo anterior, la versión de los hechos del reclamante debe difundirse con una tipografía (en el caso de medios escritos) y una ubicación análogos a los de la información que se quiere rectificar. Éste es uno de los puntos más complejos del ejercicio del derecho, puesto que la llamada ‘relevancia semejante’ que exige la ley no ha de entenderse con la absoluta necesidad de que la rectificación se publique exactamente en la misma página o el mismo espacio. En definitiva, **la relevancia semejante que propugna la ley no es sinónimo de relevancia idéntica.** Algunos autores entienden que a la hora de determinar cuál sea dicha relevancia semejante se deben tener en cuenta ciertos criterios objetivos, como “el tamaño de letra, titulares, ubicación de la noticia rectificada y de la rectificación, etc.” (Cucarella, 2008: 219) o, lo que es lo mismo, los criterios de extensión, ubicación y caracteres tipográficos (Farré, 2008). Otros determinan que dicha relevancia semejante debe entenderse como “[...] publicación en la misma página, con los mismos caracteres tipográficos y en el mismo tipo de publicación (evitando darla en un número especial o en distinta edición)” (Abad, 2003: 413-414).

Como indicábamos anteriormente, la LODR determina que la divulgación del escrito nunca puede acompañarse de comentarios ni apostillas²⁷, puesto que quedaría desvirtuada la finalidad y, por extensión, la eficacia de la rectificación. Esto no se traduce en la imposibilidad de que el medio pueda insistir en la veracidad de su información o continúe informando sobre los mismos hechos. Lo que pretende garantizar la ley en este punto es que no exista confusión entre la rectificación y el comentario o la versión del medio de comunicación.

²⁷ El Diccionario de la RAE (22ª ed.) define comentario como “explicación de un texto para su mejor intelección” y apostilla como “acotación que comenta, interpreta o completa un texto”.

2.1.2.10. La acción de rectificación

Varios factores intervienen en la rapidez procesal del derecho de rectificación, a saber: la inmediatez en el daño que se produce, su reparación, el acceso rápido y sencillo al medio de comunicación (es decir, la difusión del escrito que rectifica la información) y la sumariedad del proceso mediante lo que se denomina un procedimiento judicial ágil (Benito, 2006).

La llamada acción de rectificación se coloca precisamente en ese último punto, el de la fase judicial, a la que puede llegar el afectado si su rectificación no se ha difundido de forma voluntaria por parte del medio de comunicación en el plazo establecido o cuando la dirección de este ha decidido no publicarla. Hablamos de un procedimiento urgente y sumario mediante el cual se exige al medio que difunda el escrito. Esa sumariedad del proceso es evidente por el simple hecho de que, durante el juicio verbal, solo se admiten pruebas pertinentes que puedan practicarse en el acto. Urgencia y sumariedad que “están al servicio del ejercicio justo del derecho de rectificación, es decir, de una rectificación urgente si esta rectificación se ajusta a Derecho” (Soria, 1989: 38).

Son tres los casos en los que el director del medio abre la vía a la acción de rectificación:

- No difunde el escrito de rectificación en el plazo establecido.
- La inserción o la divulgación de la versión de los hechos del afectado no se ajusta a los requisitos que demanda la norma.
- Hace saber al reclamante que se niega a difundir su escrito.

Así lo establece el art. 4 de la LO 2/1984: “Si, en los plazos señalados en el artículo anterior, no se hubiera publicado o divulgado la rectificación o se hubiese notificado expresamente por el director o responsable del medio de comunicación social que aquélla no será difundida, o se haya publicado o divulgado sin respetar lo dispuesto en el artículo anterior, podrá el perjudicado ejercitar la acción de rectificación dentro de los siete días hábiles siguientes ante el Juez de Primera Instancia de su domicilio o ante el del lugar donde radique la dirección del medio de comunicación”.

Por tanto, el director del medio puede negarse a publicar la rectificación, amparándose en que ésta no cumple con las condiciones que impone el art. 1 LODR, es decir, cuando el texto de la rectificación es de tipo valorativo, cuando no existe alusión directa ni indirecta a esa persona en la información original, cuando el escrito carece de verosimilitud o si estima que los hechos difundidos en ningún caso pueden causar perjuicio al aludido. La inserción del escrito de rectificación, pues, “[...] no es una obligación absoluta e incondicionada. El director, si no se

cumplen las condiciones de fondo y forma, no está obligado a publicar la rectificación. Es necesaria la pretensión subjetiva del replicante, pero no es suficiente. Es preciso que el medio considere también que se trata de una pretensión legítima y ajustada a Derecho. En el caso de que no se produzca esta armonización de voluntades, el reclamante está legitimado para abrir la fase procesal en demanda de tutele jurídica para su derecho de rectificación” (Soria, 1989: 37).

Ese supuesto, en el que el medio puede alegar que no considera que la información cause ningún daño al aludido, ha generado bastante controversia en la doctrina. Autores como Farré (2008) sostienen esa afirmación; **sin embargo, a nuestro juicio, no es el medio quien debe estar en posesión de decidir si la información difundida causa o no perjuicio a un tercero.**

Otras de las situaciones que el máximo responsable del medio puede poner de manifiesto para negarse a publicar la rectificación se producen cuando el escrito no cumple con las características formales y materiales, el contenido del texto no tiene relación directa con la información a rectificar, incluye expresiones injuriosas y/o vejatorias o el reclamante se ha excedido en el escrito de una manera injustificada.

En lo relativo a la negación del medio de publicar el escrito, se observan dos formas de llevarla a cabo. Por un lado, la negativa expresa, cuando el director manifiesta de forma clara que no va a publicarlo. De otro, la negación tácita, que se produce en el caso de que el director no se pronuncia de manera expresa sobre su intencionalidad en lo relativo a la difusión de la rectificación, pero deja pasar los plazos legales, incumpliendo su obligación. A efectos jurídicos, ambos tipos de negativa se traducen en un incumplimiento absoluto de la obligación legal.

Asimismo, existe el llamado incumplimiento defectuoso o parcial. Éste se produce cuando el medio sí difunde la rectificación pero no cumple con los requisitos que establece la ley: no publica el texto de manera íntegra, lo acompaña de comentarios y/o apostillas, no cumple con el criterio de relevancia semejante, difunde la rectificación fuera de los plazos exigidos por la ley o exige ciertas condiciones para la difusión que no están contempladas por ley (por ejemplo, que el reclamante pague a pesar de que su escrito no excede la extensión de la información a rectificar).

Las condiciones para el ejercicio de la acción de rectificación quedan recogidas en el art. 5 de la LO 2/1984: “La acción se ejercitará mediante escrito, sin necesidad de Abogado ni Procurador, acompañando la rectificación y la justificación de que se remitió en el plazo señalado; se presentará igualmente la información rectificada si se difundió por escrito; y, en otro caso, reproducción o descripción de la misma tan fiel como sea posible. El Juez, de oficio y sin audiencia del demandado, dictará auto no admitiendo a trámite la demanda si se considera incompetente o estima la rectificación manifiestamente improcedente. En otro caso

convocará al rectificante, al director del medio de comunicación o a sus representantes a juicio verbal, que se celebrará dentro de los siete días siguientes al de la petición. La convocatoria se hará telegráficamente, sin perjuicio de la urgente remisión, por cualquier otro medio, de la copia de la demanda a la parte demandada. Cuando el Juez de Primera Instancia hubiese declarado su incompetencia podrá el perjudicado acudir al órgano competente dentro de los siete días hábiles siguientes al de la fecha de notificación de la correspondiente resolución, en la cual se deberá expresar el órgano al que corresponda el conocimiento del asunto”.

Se observa en primer lugar que la competencia se atribuye a la legislación civil. En razón de la materia será el Juez de Primera Instancia del domicilio del afectado o, en el caso de que el demandante no lo tenga en territorio español, el del lugar donde se hubiera producido el hecho. En el caso de que el Juez de Primera Instancia se declare incompetente debe indicar al afectado a qué órgano corresponde llevar el asunto.

Es al titular del derecho de rectificación (el aludido) o, en su caso, sus herederos quienes cuentan con la legitimación activa para la acción de rectificación. Del otro lado, la legitimación pasiva debe ser atribuida al director del medio de comunicación que, como ya se señaló anteriormente, es el sujeto obligado del derecho y, en este caso, el titular del deber de difundir el escrito de rectificación. Hay que recordar en este punto, que la jurisprudencia también se ha pronunciado a favor de que las demandas puedan dirigirse contra el representante de la empresa editora, ya que entiende que entre ambas figuras “se da un principio de responsabilidad solidaria” (Lizarraga, 2005: 118).

En un principio, no será requisito imprescindible que el demandante cuente con abogado o procurador. Sin embargo, esta situación puede ocasionar un problema en ciertos casos (Lizarraga, 2005). Y es que, mientras que los medios de comunicación suelen contar con asesoramiento jurídico (aun en los casos en los que acuden al juicio verbal sin asistencia letrada), el ciudadano puede con frecuencia carecer de ese apoyo. Esta situación, sin duda, acentuaría la ya de partida desigual posición que existe entre el medio de comunicación y el individuo²⁸. De cualquier forma, existe la posibilidad de que el demandante se acoja al beneficio de un juicio gratuito, siempre que el juez estime que efectivamente existe una situación de desequilibrio entre las partes que pueda llegar a generar indefensión y que, por ende, la asistencia de un abogado es necesaria.

En los procedimientos de rectificación, las audiencias provinciales no estiman necesaria la asistencia del Ministerio Fiscal (Cáceres, 2006). Algo que también pone de manifiesto, entre otras, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 21

²⁸ La SAP A Coruña de 2 de octubre de 2001 considera derogada la normativa de la LO 2/1984 que se oponga a la actual LEC y no permite la comparecencia en juicio sino por medio de procurador legalmente habilitado.

de marzo de 2002, al advertir que el Ministerio Fiscal no es en absoluto parte legitimada pasivamente y *ex lege* en este procedimiento tan específico²⁹.

La fase judicial del derecho de rectificación empieza cuando la persona afectada ejerce la acción de rectificación en los siete días hábiles después de haber caducado el plazo del que disponía el medio de comunicación para divulgar la rectificación. En el escrito que se presenta, el afectado debe justificar haber cumplido el presupuesto previo del procedimiento extrajudicial (haber remitido al director del medio el escrito de rectificación en el plazo y la forma establecidos legalmente), e incluir el texto de la rectificación.

A partir de ahí, el juez podrá admitir a trámite o desestimar la demanda de rectificación. Este último supuesto se produce cuando el juez entiende que, o bien los hechos que se pretende rectificar son ciertos, o bien la información publicada por el medio no puede causar perjuicio al aludido. La jurisprudencia constitucional dirá al efecto que esto no significa que el juez entre a indagar de manera exhaustiva en la verdad, puesto que ni lo permite la sumariedad del proceso ni es una evidencia que pueda deducirse a tenor de lo dispuesto en el art 20.1.d CE (STC 168/1986, FJ 6); y que la ley prevé otros mecanismos para ello.

En nuestra opinión, **una vez que el medio se niega a publicar la rectificación y, para ello, no es capaz de apoyarse en argumentos sólidos, el juez sí debería indagar sobre la veracidad de ambas cosas —tanto de la información como del escrito de rectificación— antes de tomar una decisión. Y es que, en caso de desacuerdo entre ambos sujetos del derecho, es fundamental que el juzgador intervenga no solo protegiendo los intereses legítimos de las partes, sino también garantizando el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.**

A tenor del art. 6 LODR, si la demanda es admitida se celebrará el juicio verbal en el plazo de siete días, pudiendo el juez solicitar al demandado que remita o presente la información enjuiciada, su grabación o reproducción escrita, y admitiéndose únicamente aquellas pruebas que, siendo pertinentes, puedan practicarse en el acto³⁰.

²⁹ Sin embargo, en algunas resoluciones se especula sobre la posible intervención en el proceso del Ministerio Fiscal, basándose en que la acción de rectificación tiene un carácter instrumental respecto al art. 20 CE (SAP Guadalajara, 11-03-2002). Se suele solventar esta situación dando la posibilidad al Ministerio Fiscal de intervenir.

³⁰ Cuando se habla de pruebas pertinentes se alude a la necesidad de que la prueba sea relativa a hechos que guarden relación con el objeto del proceso. De otra parte, la exigencia de que las pruebas puedan practicarse en el acto responde a la condición de concentración de esta, que hace referencia al tiempo de la prueba. Gutiérrez (2003) define dos tipos de pruebas: la “prueba de notoriedad”, para que quien alega como notorio un hecho que no puede probar al menos pueda probar su notoriedad; y la “contraprueba”, que no es más que la prueba de falsedad de la notoriedad de un hecho que alega la otra parte. Las partes no tienen la obligación de probar, sino la carga de hacerlo (carga de la prueba); por lo que la parte que renuncia a presentar pruebas también abandona las ventajas que éstas pudieran reportarle en el proceso. Siempre corresponde probar el hecho a quien lo afirma y no a quien lo niega.

En cuanto a la sentencia, se dictará en el mismo o al siguiente día del juicio. En opinión de Cáceres (2006), estos dos hechos son los ejemplos más claros de la sumariedad del proceso.

El objeto del proceso (y, por tanto, el *petitum*) no es otro que la publicación o no del escrito de rectificación y será exclusivamente sobre ello sobre lo que el juez dirima. De tal forma que no se entrará a examinar la veracidad ni de la información controvertida ni de la rectificación. La causa *petendi* puede ser la inserción del escrito de rectificación o su nueva divulgación sin incorrecciones³¹ en el caso de que la rectificación se hubiera difundido con errores.

Las razones que pueden llevar al juez a denegar la divulgación del escrito rectificador coinciden en esencia con aquellas que motivan la inadmisión de la demanda de rectificación. Es decir, que se trate de hechos atribuidos a terceros, que no causen un perjuicio al demandante, que los hechos de la información original sean manifiestamente ciertos o que la rectificación falte de manera clara a la verdad.

En cualquier caso, una de las características del procedimiento es su perfecta compatibilidad con otro tipo de vías legales³². **El derecho de rectificación no acarrea la imposición de una pena al medio de comunicación**, por lo que el afectado puede emprender en el mismo momento otras acciones penales o civiles que sí entren a juzgar la veracidad de la información, además de una posible intromisión ilegítima en el honor. En ese sentido, la STC 52/1996 establece que este derecho “[...] es siempre compatible con el ejercicio de las acciones penales o civiles de otra naturaleza que pudieran asistir al perjudicado por los hechos difundidos” (FJ 8). Así, “el derecho subjetivo de intromisión ilegítima en el honor no queda agotado, extinguido, por su ejercicio extraprocésal a través del derecho de rectificación” (Cáceres, 2006: 74).

A lo anterior se añade que el ejercicio del derecho de rectificación no es un requisito previo para iniciar dichas acciones penales o civiles, sino que se trata de un proceso independiente.

Al margen de la vía penal y/o civil, el derecho de rectificación es concebido como un mecanismo autónomo de protección del honor. Por ello no es muy comprensible que, como alega la jurisprudencia, la reparación efectiva del honor necesite de otras vías —que, de otro lado y a todas luces, sí resultan más eficaces—. **El derecho de rectificación debería ser capaz, por sí mismo, de**

³¹ Para un análisis más exhaustivo sobre el *petitum* y la *causa petendi*, véase Lizarraga (2005) y Gutiérrez (2003).

³² Estas otras acciones pueden derivarse del ejercicio de la LO 1/1982 sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, de la tipificación de los delitos de injuria y calumnia en el Código Penal o pueden tener relación con las indemnizaciones o reclamaciones por daños y perjuicios a través del procedimiento declarativo que proceda.

enmendar el daño ocasionado. Mediante su ejercicio, además, debería poder garantizarse que el público recibe una información contrastada y veraz.

En ningún caso existe la posibilidad de un cierto ‘abuso’ en la protección del derecho al honor cuando el demandante abre otras vías a pesar de haberse insertado la rectificación y haberse acordado (entre afectado y medio) que el derecho quedaba agotado tras la difusión (STS 8817/1989). La jurisprudencia reitera que ambas acciones cuentan con contenido diferente y que son perfectamente compatibles. Sin embargo, el Tribunal Constitucional recuerda en sentencias como la STC 240/1992 que, aunque la difusión de la rectificación no inhabilita la debida protección del honor, sí la modula o la matiza. En efecto, el TC “concede carácter atenuante de posibles responsabilidades exigidas en defensa del derecho al honor al hecho de difundir la rectificación posterior de una información” (Cáceres, 2006: 76). Aunque la rectificación no reduce las responsabilidades por difamación, sí atenúa la indemnización por los daños morales causados. Indemnización que, para el Tribunal Supremo, debe ser simbólica, puesto que lo trascendente no es el pago sino la reparación del daño causado por el medio (STS 65/1993).

El pago de las costas del proceso corresponderá, según establece el art. 6 de la LO 2/1984, “a la parte cuyos procedimientos hubiesen sido totalmente rechazados”. Los efectos de cosa juzgada se reducen al fallo (la publicación de la rectificación), pero no a la fundamentación de la sentencia. En definitiva, la acción de rectificación no es simplemente declarativa, sobre si existe o no el derecho a rectificar, o constitutiva, sino que se trata de una acción de condena ‘a hacer’, a publicar el escrito de rectificación. Bien porque en su momento no se practicó o bien porque se obró de manera irregular (Gutiérrez, 2003).

Por último, hay que recordar que la LODR únicamente admite recurso de apelación frente al auto de inadmisión de la demanda en ambos efectos y frente a la sentencia (en un solo efecto, remitiendo en su art. 8 a la LEC).

2.1.2.11. La rectificación voluntaria y la retractación

Dos figuras afines al derecho de rectificación excluyen la posibilidad de su ejercicio. Se trata de las llamadas rectificación previa o voluntaria y retractación y ambas operan como razones para negar de forma legítima la divulgación del escrito de rectificación, siempre que cumplan los requisitos establecidos (Farré, 2008).

La primera de ellas alude a la rectificación que, de manera espontánea y voluntaria, difunde el medio de comunicación una vez advertido el error en su información. Hablamos de una decisión libre por parte del medio, con la que pretende subsanar la incorrección y que, en aquellos casos en los que se difunde antes de la remisión del escrito de rectificación por parte del aludido y se demuestre efectiva, eximirá al medio de la obligación de difundir la versión del afectado. Para

nuestra jurisprudencia, esta forma de proceder demuestra una clara ausencia de malicia y, por ende, la voluntad de reparar el posible perjuicio causado³³.

Lo anterior no obsta para que el aludido acuda a la acción de rectificación si considera que ese reconocimiento del error es insuficiente para reparar el daño causado, aunque debe tener en cuenta que la rectificación voluntaria del medio atenúa una posible responsabilidad civil que se demuestre con posterioridad.

La segunda figura, la de la retractación, se diferencia de la rectificación voluntaria en que la corrección de la información por parte del medio no es espontánea, sino que éste actúa forzado por el aludido. En este caso, la retractación es un mecanismo de atenuación de la responsabilidad penal. El art. 214 CP establece que, si el acusado de calumnia o injuria se retracta de sus imputaciones ante la autoridad judicial, la pena se convertirá en una inmediatamente inferior en grado y se podrá dejar de imponer la pena de inhabilitación que recoge el art. 213 CP. A solicitud del ofendido, la retractación podrá ser difundida en el mismo medio que lesionó su honor, en espacio idéntico o similar y dentro del plazo que establezca el juez.

En definitiva, el obligado reconocimiento del error por parte del medio “significa, además, un indicio de buena fe por parte de éste que puede ser tomado como relevante dentro de posteriores acciones legales en contra por parte del afectado” (Navas Alvear, 2005: 130).

2.2. El derecho de rectificación en el derecho comparado

El presente apartado pretende resumir cuál es el reconocimiento del derecho de rectificación en otros ordenamientos jurídicos. Para ello, nos fijaremos primero en las normas de derecho internacional y, ulteriormente, en los países de nuestro entorno: en esencia, los pertenecientes a la Unión Europea, además de Estados Unidos.

2.2.1. Derecho internacional

Aunque no reconozca expresamente el derecho de rectificación, podemos aventurar que el primer texto realmente trascendente en cuanto al reconocimiento general del derecho a la información es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que en su art. 19 reconoce de forma expresa el derecho de todos los individuos a la libertad de opinión y expresión y el derecho a recibir informaciones y opiniones libremente, sin que sea posible ninguna limitación de

³³ La STC 171/1990 afirma que, en el caso que ocupa, el diario *El País* rectificó seguidamente un error cometido en una de sus informaciones, rectificación que muestra “que el error fáctico no fue malicioso” (FJ8). Véase también STC 40/1992 (FJ 2).

fronteras. Un reconocimiento que no implica la distinción entre dos derechos, es decir, la Declaración establece un solo derecho que incluye tanto la libertad de informar como la de ser informado: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Tampoco incluirá de manera expresa el derecho de rectificación el posterior Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, sino que habrá que esperar unos años, hasta la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), de 22 de noviembre de 1969, para que esto suceda. El art. 14 de la Convención reconoce el derecho en los siguientes términos:

1. “Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
2. En ningún caso la rectificación o respuesta eximirán de otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”.

No debemos pasar por alto, sin embargo, una norma mucho más concreta sobre el derecho de rectificación en el ámbito internacional: la Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación. La ONU dio luz verde al texto en su Asamblea General del 16 de diciembre de 1952 que, sin embargo, tuvo que esperar prácticamente una década —hasta el 24 de agosto de 1962— para entrar en vigor (Esquembre, 1998).

El Preámbulo de la Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación propugna que su objeto es “hacer efectivo el derecho de sus pueblos a estar plena y fielmente informados [...] mejorar la mutua comprensión entre sus pueblos mediante la libre circulación de informaciones y opiniones [...] combatir toda propaganda encaminada a provocar o estimular cualquier amenaza para la paz [...] combatir la difusión de informaciones falsas o tergiversadas, que puedan ser perjudiciales para las relaciones amistosas entre los Estados”.

En su artículo tercero determina el procedimiento a seguir para ejercitar el derecho:

“1. Dentro del plazo más breve posible, y en todo caso dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de recibo de un comunicado transmitido con arreglo a las disposiciones del artículo II, todo Estado Contratante, sea cual fuere su opinión respecto de los hechos de que se trate deberá:

- a) Distribuir el comunicado a los corresponsales y agencias de información que ejerzan actividades en su territorio, por las vías habitualmente utilizadas para la transmisión de informaciones sobre asuntos internacionales destinadas a la publicación; y
- b) Transmitir el comunicado a la oficina principal de la agencia de información cuyo corresponsal sea responsable del envío del respectivo despacho, si tal oficina está situada en su territorio.

2. En caso de que un Estado Contratante no cumpla la obligación que le impone este artículo respecto de un comunicado de otro Estado Contratante, este último podrá aplicar el principio de reciprocidad y observar la misma actitud cuando el Estado que haya faltado a sus obligaciones le presente ulteriormente un comunicado”.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, el Estado que ejerza el derecho de rectificación podrá remitir el comunicado al Secretario General de Naciones Unidas:

“1. Si alguno de los Estados Contratantes al cual se haya transmitido un comunicado con arreglo al artículo II no cumple, dentro del plazo prescrito, las obligaciones impuestas en el artículo III, el Estado Contratante que ejerza el derecho de rectificación podrá remitir tal comunicado, acompañado del texto íntegro del despacho publicado o difundido, al Secretario General de las Naciones Unidas; y, al mismo tiempo, notificará su gestión al Estado objeto de la reclamación, el cual podrá, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la notificación, presentar al Secretario General sus observaciones, que sólo podrán referirse a la alegación de no haber cumplido las obligaciones que le impone el artículo III.

2. En todo caso, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recibo del comunicado, el Secretario General deberá dar, por los medios de difusión de que disponga, adecuada publicidad al

comunicado, acompañado del despacho y de las observaciones eventualmente presentadas por el Estado objeto de la reclamación”.

Varios autores ponen de manifiesto la importancia de contar con esta norma internacional relativa al derecho de rectificación, “principalmente porque se establece como línea maestra a seguir por todos los ordenamientos nacionales”, pero además porque “sirve también de elemento unificador de criterios y de procedimientos, sobre todo en el derecho de rectificación tiene importancia porque se convierte en un patrón de sumariidad del procedimiento y de su carácter preventivo” (Rebollo, 2009: 476).

No obstante, hay otros aspectos ciertamente menos positivos. El más reseñable es que este derecho de rectificación se le reconoce solo a los Estados que han suscrito el acuerdo y no, como sería deseable, a todos los ciudadanos. De otro lado, el contenido de la norma es únicamente vinculante para esos Estados firmantes y, en último lugar, tampoco se contemplan sanciones en el caso de que se incumpla el proceso. En definitiva, la norma es destacada en cuanto a que por primera vez se habla de forma expresa de un derecho internacional de rectificación, si bien su relevancia fue prácticamente nula a efectos prácticos “al aprobarse con el voto en contra de la extinta Unión Soviética, de Estados Unidos y del Reino Unido, y haber sido solamente ratificado, en más de treinta años, por un escaso número de países” (Farré, 2008: 108-109). Para otros autores, la causa del fracaso del acuerdo se encuentra en su propio nacimiento, al considerar como unos sujetos titulares a los Estados, lo que “inexplicablemente supone una ruptura con el modelo universal de protección a la persona en su consideración individual diseñado por la Declaración Universal de Derechos Humanos” (Esquembre, 1998: 137).

Finalmente, solo 21 países voluntariamente se adscribieron a la norma internacional. A lo que se suma que el Convenio muy pronto se demostró ineficaz por, entre otros motivos, lo complicado del procedimiento de ejercicio y los extensos plazos necesarios para que pudiera hacerse efectivo.

Sus carencias e ineficacia fueron puestas de manifiesto en el Informe de la Comisión Internacional sobre problemas de la Comunicación de 1980 (más conocido como *Informe MacBride*), que pretendía convertirse en una radiografía de los problemas de la comunicación en la década de los 70. Su fracaso, también sonado, aunque no tan mayúsculo, se debió al principio de solidaridad en lo relativo a las tecnologías de la comunicación que se encontraba en su misma base, y que en ningún caso interesaba a grades potencias como Estados Unidos³⁴.

Gracias al *Informe MacBride* por primera vez se puso encima de la mesa la evidencia de que no existía en el orden internacional un derecho de rectificación

³⁴ En efecto, Estados Unidos, con Ronald Reagan como presidente, acabó desmarcándose totalmente de los principios enunciados en el Informe MacBride y anunció su salida de la UNESCO, que se haría efectiva en 1985.

eficaz. En su apartado tercero sobre la integridad profesional del periodista y las normas se localiza el punto 48:

“A fin de contrarrestar los efectos negativos del reportaje incorrecto o malicioso de las noticias internacionales, deberán considerarse nuevamente los derechos de réplica y de corrección. Aunque estos conceptos se reconocen en muchos países, su naturaleza y alcance varían tan ampliamente que no sería fácil ni realista proponer la adopción de regulaciones internacionales para su propósito. Las noticias falsas o distorsionadas pueden ser dañinas, pero la publicación voluntaria de correcciones o réplicas es preferible a la acción normativa internacional. En virtud de que varía considerablemente la forma en que se aplican en diversos países los derechos de réplica y corrección, se sugiere además que a) el ejercicio de los derechos internacionales de réplica y corrección se considere para su aplicación voluntaria en cada país, de acuerdo con sus prácticas periodísticas y su marco legal nacional; b) las Naciones Unidas, en consulta con todos los organismos implicados, exploren las condiciones bajo las cuales podrían perfeccionarse estos derechos de nivel internacional, tomando en cuenta la embrollada operación de la Convención del Derecho Internacional a la Corrección de 1952; c) las instituciones de medios informativos que tienen un alcance internacional definan en forma voluntaria sus normas internas para el ejercicio de estos derechos y las pongan a disposición del público” (MacBride, 1980: 230-231).

2.2.2. Consejo de Europa y Unión Europea

El derecho de rectificación tampoco se reconoce de manera expresa en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Lo que no obsta para que un destacado sector de la doctrina considere que —en conexión con el art. 8— del art. 10 del Convenio se deriva la obligación de que los Estados que forman parte del Consejo de Europa reconozcan en sus legislaciones el derecho de rectificación a todos los individuos.

En cualquier caso, parece que “hasta el momento no está claro que la Comisión haya considerado el derecho de réplica como una manifestación de la libertad de expresión³⁵ [...], sino que este derecho ha sido observado, más bien,

³⁵ El art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece el derecho de todos los individuos a la libertad de expresión y el derecho a la información, así como sus límites: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los

como una restricción que puede resultar necesaria, según los casos, para asegurar el respeto a los derechos de la personalidad de los individuos” (Farré, 2008:115-116).

El Consejo de Europa se mantuvo en sus esfuerzos por hacer efectivo el derecho de rectificación, un trabajo que se manifiesta en la Resolución (74) 26, de 2 de julio de 1974, adoptada por el Comité de Ministros. Su anexo establece que:

“1. Toda persona física o jurídica, así como cualquier otra entidad, con independencia de su nacionalidad o residencia, que sea designada en un diario, un escrito periódico, en una emisión de radio o de televisión, o por cualquier otro medio de comunicación de carácter periódico, y respecto de la cual hayan sido publicadas informaciones conteniendo hechos que ella considere inexactos, puede ejercer el derecho de respuesta con el fin de corregir los hechos que le aluden.

2. A petición de la persona aludida, el medio de comunicación de masas está obligado a publicar la respuesta que esta persona le haya hecho llegar.

3. En la ley nacional puede preverse, con carácter excepcional, que la publicación de la respuesta sea rehusada por el medio de comunicación en los siguientes casos:

I. Cuando la solicitud de publicación de la respuesta no se remita al medio de comunicación en un plazo de tiempo relativamente breve.

II. Cuando la extensión de la respuesta exceda de lo que se considera necesario para corregir la información que contiene los hechos pretendidamente inexactos.

III. Cuando la respuesta no se limite a la corrección de los hechos controvertidos.

Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañen deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”. Por su parte, en el art. 8 del mismo Convenio se reconoce el derecho a la personalidad en los siguientes términos: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida, vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás”.

- IV. Cuando constituya una infracción punible.
- V. Cuando sea contraria a los intereses jurídicamente protegidos de terceros.
- VI. Cuando el individuo aludido no acredite la existencia de un interés legítimo.

4. La publicación de la respuesta ha de efectuarse en un plazo de tiempo no excesivo y revestirá, en la medida de lo posible, la misma importancia que la información que contiene los hechos pretendidamente inexactos.

5. Con el fin de asegurar el ejercicio efectivo del derecho de respuesta, la ley nacional designará a la persona a la que, como representante de toda publicación, empresa de prensa, de radio o de televisión, o de cualquier otro medio, deberá ser dirigida la solicitud de publicación de la respuesta. Del mismo modo se determinará la persona responsable de la comunicación de la respuesta, persona que en ningún caso gozará de inmunidad.

6. Los principios citados se aplicarán a todos los medios de comunicación sin distinción. Ello no excluye posibles diferencias en la aplicación de estos principios a medios de comunicación particulares, tales como la radio y la televisión, cuando sea necesario y esté justificado por su diferente naturaleza.

7. Todo litigio que se suscite respecto de la aplicación de las reglas precedentes, será llevado ante el tribunal que pueda ordenar la publicación inmediata de la respuesta”.

Más tarde, en la Recomendación (84) 22, de 7 de diciembre de 1984, sobre la utilización de capacidades de satélite para la televisión y radiodifusión sonora del Comité de Ministros del Consejo Europeo leemos: “Se permitirá a toda persona física o jurídica, cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, ejercer el derecho de rectificación o tener acceso a recursos similares, en relación con los programas a los que se refiere esta Recomendación” (art. 4). Se introduce por tanto un cambio importante respecto a Resolución anterior, ampliándose la titularidad del derecho a los extranjeros y no residentes en el país.

También en el seno del Consejo Europeo de Estrasburgo, apenas cinco años más tarde, el 5 de mayo de 1989, se adopta el Convenio Europeo sobre Televisión Transfronteriza. Dicho texto recoge en su artículo octavo³⁶, “un derecho de réplica

³⁶ En el art. 8 del Convenio Europeo sobre Televisión Transfronteriza leemos: “1. Cada parte transmisora se asegurará de que toda persona física o jurídica, cualquiera que fuere su nacionalidad o su lugar de residencia, pueda ejercer el derecho de réplica o tener acceso a otro

u otro recurso jurídico o administrativo equivalente para cualquier persona física o jurídica, de cualquier nacionalidad, ante programas transmitidos por cable, emisor terrestre o de satélite, recibidos en cualquier Estado parte” (Lizarraga, 2005: 45).

Esta intención de regular y hacer efectivo el derecho de rectificación dentro del mapa de la televisión transfronteriza se encuentra, no obstante, con varios obstáculos de los que se hace eco la doctrina. Entre ellos: la dificultad en muchos casos de saber en qué país tuvo lugar la retransmisión por cable o vía satélite, conocer a qué persona u organismo ha de enviarse el escrito de rectificación y cuál es la jurisdicción a la que hay que acceder en el caso de conflicto, la poca nitidez sobre los plazos de ejercicio del derecho, el proceso de solicitud y la forma y contenido de la rectificación. Todo ello, sumado a las diferencias de cada ordenamiento jurídico, provocan que los canales de televisión transfronteriza encuentren muchas facilidades a la hora de rechazar la difusión de escritos de rectificación (Farré, 2008). El Convenio, además, “los supuestos que permitan, con carácter excepcional, justificar la negativa a la difusión de réplica”, los Estados solo están obligados a “introducir la figura del derecho de réplica en sus ordenamientos jurídicos en caso de no poseerla previamente, pero no impone exigencia mínima alguna” (Esquembre, 1998: 146).

También en el ámbito de la Unión Europea debemos referirnos a la Directiva 89/552/CE, la llamada Directiva de Televisión sin Fronteras, que posteriormente fue modificada por las Directivas 97/36/CE y 2007/65/CE del Parlamento y el Consejo Europeo. La Directiva de 2007 determina que “el derecho de réplica es un recurso jurídico apropiado para la radiodifusión televisiva y podría aplicarse también en el ámbito de los servicios en línea. La Recomendación relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica contiene ya unas directrices adecuadas para la aplicación de medidas en la legislación o las prácticas nacionales para garantizar el derecho de réplica o recursos equivalentes en relación con los medios de comunicación en línea”.

En lo referente al texto de 1989, su art. 23.1 reconoce (tras la reforma que introduce la Directiva de 1997) un derecho de rectificación cuyos titulares son todos los ciudadanos (nacionales y extranjeros), en términos muy similares a la Resolución número 74 del Consejo Europeo. El texto evidencia la finalidad de que todos los Estados Miembros reconozcan el derecho de rectificación frente a cualquier televisión de la Unión Europea, pero se contenta con que cada

recurso jurídico o administrativo equiparable con respecto a emisiones transmitidas o retransmitidas por organismos o con ayuda de medios técnicos que dependan de su jurisdicción en el sentido de lo dispuesto en el art. 5º. Cuidará en particular de que el plazo y las modalidades previstas para ejercer el derecho de réplica sean suficientes para permitir el ejercicio efectivo de este derecho. El ejercicio efectivo de este derecho o de otros recursos jurídicos o administrativos equiparables deberá estar asegurado tanto desde el punto de vista de los plazos como por lo que se refiere a las modalidades de aplicación. 2. A tal efecto, el nombre del radiodifusor responsable del servicio de programas será identificado a intervalos regulares por medio de todas las indicaciones adecuadas”.

ordenamiento jurídico vele por el cumplimiento del derecho sin imponer plazos o condicionantes que lo desvirtúen³⁷.

A pesar de la intencionalidad positiva, la Unión Europea no consigue mediante estas Directivas que el derecho de rectificación gane en eficacia. Una carencia que queda patente desde el principio, no solo por la ya difícil ejecución del derecho en el plano internacional, sino también por “los obstáculos que suscita el distinto régimen jurídico del derecho de rectificación en los diferentes países, particularmente por lo que respecta al contenido del derecho, la legitimación activa, la persona u organismo al que debe remitirse la rectificación, los plazos del ejercicio del derecho, la forma de la solicitud [...]” (Farré, 2008: 127-128).

En el mismo sentido, tampoco ayuda que estos textos se encuentren con importantes 'defectos' de partida, como son el propio objeto del derecho y la terminología empleada (Esquembre, 1998). En cuanto a esto último, cabe llamar la atención sobre el hecho de que los tres textos hablan en términos de 'derecho de réplica' y no de 'derecho de rectificación', lo que vuelve a introducir la confusión terminológica que ya adelantábamos en el caso español y que es anterior de la actual LO 2/1984. De forma tradicional, el concepto de réplica se ha asociado al derecho que asiste a la Administración, Organismos Públicos y/o Estados; mientras que el término rectificación se acuñó para proteger el derecho de los particulares o, en el caso de nuestra vigente legislación, como definición única del derecho que asiste a personas físicas y jurídicas.

La Directiva de 1989 no clarifica si el objeto del derecho son los hechos o también las opiniones y juicios de valor, cuestión que sí parece sortear el texto de 1997 al cambiar el término “alegación incorrecta” por el de “afirmación errónea” (Esquembre 1998) y que, se mantendría en el caso del acuerdo de 2007, puesto que en todo momento remite a la legislación vigente anterior, sin especificar nada más acerca del contenido del derecho.

Entre los últimos textos en el ámbito de la Unión Europea que referencian, de un modo u otro, el derecho de rectificación cabe destacar el Protocolo número 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, presentado el 2 de octubre de 2013 y que ha entrado en vigor en agosto de 2018. El texto introduce la posibilidad de que los tribunales nacionales de los países miembros puedan pedir opinión consultiva (no vinculante) al Alto Tribunal Europeo de Derechos Humanos antes de

³⁷ Art 23.1 de la Directiva: “Sin perjuicio de las demás disposiciones civiles, administrativas o penales adoptadas por los Estados miembros, cualquier persona física o jurídica, independientemente de su nacionalidad, cuyos legítimos derechos, en particular por lo que atañe a su honor y su reputación, hayan sido lesionados como consecuencia de una alegación incorrecta hecha en un programa televisivo deberá disponer de un derecho de réplica o de medidas equivalentes. Los Estados miembros velarán porque el ejercicio efectivo del derecho de réplica o de medidas equivalentes no se vea obstaculizado por la imposición de plazos o de condiciones irrazonables [...]”.

emitir una sentencia donde puede existir un conflicto entre los derechos protegidos por el Convenio Europeo. Por el momento, España no ha suscrito el acuerdo.

En el Título I, de los Derechos y Libertades, art. 10, recoge de manera genérica la libertad de expresión:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”.

En efecto, se trata de un artículo muy genérico que no alude expresamente al derecho de rectificación, si bien habla de “formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por Ley” que, entre otras cosas, garanticen “la protección de la reputación o los derechos ajenos”.

De manera más específica, la Resolución 2066 (2015) de la Asamblea del Parlamento Europeo recoge una serie de propuestas para mejorar la autorregulación en los medios en un escenario cambiante (*Media responsibility and ethics in a changing media environment*). El texto menciona la importancia de que los medios se adhieran a los principios de conducta adoptados por la Federación Internacional de Periodistas y los códigos éticos a nivel nacional, lo que se traduce en una expresión voluntaria de diligencia profesional para reconocer sus errores y responsabilizarse de ellos ante el público: “*Such codes are a voluntary expression of professional diligence by quality-conscious journalist and media outlets to correct their mistakes and to make themselves accountable to the public*” (punto segundo).

Del mismo modo, la Resolución aboga por la despenalización de la difamación y determina que, aunque algunas declaraciones por parte de los medios se demuestren inexactas, si no existe intención de daño y se observa diligencia profesional, no deben ser sancionables. Así lo expresa el texto original en el punto 6: “[...] *statements or allegations in the media, even if they prove to be inaccurate*

should not be punishable, provided that they were made without knowledge of their inaccuracy, without conscious intention to cause harm and that their truthfulness was checked with proper diligence Member States should move forward with decriminalising defamation”.

A la Resolución 2066 (2015) le sigue la Recomendación 2075 (2015), que reconoce la libertad de información como una de las prioridades del Consejo Europeo, por lo que recomienda al Comité de Ministros de los Estados Miembros que reconozcan, en caso de no haberlo hecho ya, el derecho de rectificación dentro de sus leyes nacionales y aseguren que ese derecho es reconocido legalmente por la Justicia: “[...] *call on Member States to introduce, where this has not yet been done before, a right of reply into their domestic laws and to ensure that such a right of reply granted by the media is legally recognised by the courts in case of judicial proceedings against those media for the same facts*” (punto 2.1). Además de en pos del derecho de rectificación, este texto recomienda a los estados trabajar y apoyar la autorregulación de los medios de comunicación a nivel doméstico y reforzar los programas dirigidos a que los medios alcancen los estándares éticos, entre otros (arts. 2.2 y 2.3).

La ley más reciente en la que podemos encontrar una referencia al derecho que venimos estudiando se encuentra en la Reforma del Reglamento (UE) 2016/679 aprobada el 23 de mayo de 2018, por la que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de datos).

Si bien el texto se centra precisamente en los datos de carácter personal, sin mencionar directa ni indirecta al derecho de rectificación de informaciones por parte de los aludidos por un medio de comunicación, es importante tenerla en cuenta porque, a partir de su aprobación, España presenta el proyecto de reforma de la ley sobre la Protección de Datos de Carácter Personal en octubre de 2018, cuyo art. 85 —ya mencionado anteriormente— amplía la protección del derecho de rectificación de la LO 2/1984 a Internet en los siguientes términos:

“Art. 85. Derecho de rectificación en Internet.

1. Todos tienen derecho a la libertad de expresión en Internet.
2. Los responsables de redes sociales y servicios equivalentes adoptarán protocolos adecuados para posibilitar el ejercicio del derecho de rectificación ante los usuarios que difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, atendiendo a los requisitos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora de la rectificación.

Cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación formulada contra ellos deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga

de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo. Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información original.

Art. 86. Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales.

Toda persona tiene derecho a solicitar motivadamente de los medios de comunicación digitales la inclusión de un aviso de actualización suficientemente visible junto a las noticias que le conciernan cuando la información contenida en la noticia original no refleje su situación actual como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar después de la publicación, causándole un perjuicio.

En particular, procederá la inclusión de dicho aviso cuando las informaciones originales se refieran a actuaciones policiales o judiciales que se hayan visto afectadas en beneficio del interesado como consecuencia de decisiones judiciales posteriores. En este caso, el aviso hará referencia a la decisión posterior”.

2.2.3. Los modelos europeo y anglosajón

En virtud de la regulación del derecho de rectificación, podemos hablar de dos modelos distintos en nuestro entorno: el europeo y el anglosajón (Rebollo, 2009).

a) *Droit de réponse* francés

El país galo es donde, por primera vez, aparece regulado el derecho de respuesta (*droit de réponse*). Será en 1822, con la entrada en vigor de la Ley de Prensa de ese año, cuando se recoja este concepto, que apenas ha variado del actual.

La actual regulación jurídica separa el ámbito de la prensa del de la radio y la televisión. El derecho de rectificación en los medios escritos se halla recogido en los arts. 12 y 13 de la Ley sobre la Libertad de Prensa (*Loi sur la liberté de la presse*), de 29 de julio de 1881. En este caso, el derecho pueden ejercerlo frente a la prensa los funcionarios y personas que detentan una parte de la autoridad pública y su contenido queda restringido a hechos de la información que estén vinculados a sus actividades en el ejercicio de sus funciones (Esquembre, 1998). De manera más amplia, para prensa, radio y la televisión, opera la Ley sobre la Comunicación Audiovisual (*Loi sur la Communication Audiovisuelle*), de 29 de julio de 1982 y modificada el 30 de septiembre de 1986; además del reglamento que la

desarrolla, el Decreto número 87-246, de 6 de abril de 1987. En este último nos centraremos a continuación.

En el caso de la prensa, el sujeto activo del derecho de respuesta es toda persona física o jurídica que ha sido aludida por una información sin necesidad de que los hechos y/o opiniones vertidos sean considerados ofensivos. Para el ejercicio del derecho en el ámbito audiovisual, sí que es necesario que las imputaciones a una persona puedan atentar contra su honor o su reputación (Esquembre, 1998). Una particularidad del ordenamiento francés sobre la que también llama la atención Rebollo (2008), junto con la existencia de la Comisión Nacional del Derecho de Respuesta, el órgano que se encarga de atender las reclamaciones y de hacer ejecutivas sus resoluciones en este campo.

En definitiva, en el ordenamiento jurídico francés el derecho que estudiamos ha sido concebido tradicionalmente “como un derecho general y absoluto cuya finalidad es la de proteger a los particulares frente a los ataques de la prensa”, lo que significa que está garantizado sin limitaciones, y también ha sido concebido, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, “como un medio de legítima defensa de la persona frente a los medios de comunicación”. Asimismo, se trata también “un derecho discrecional, es decir, consiste en una facultad cuyo ejercicio se deja a la libre decisión de su titular” (Farré, 2008: 135-136). En esta última afirmación, Farré se refiere sobre todo al ejercicio del derecho frente a informaciones aparecidas en prensa.

b) *Berichtigung* en Alemania

El ordenamiento alemán inaugura la protección del derecho de rectificación (*berichtigung*) mediante la Ley de Prensa del Estado de Baden de 1831. Al igual que la Constitución española, la alemana no reconoce de manera expresa el derecho de rectificación, que queda regulado a través de otras normas de rango legal.

En la actualidad existen tres regulaciones diferentes que se corresponden con las de prensa, radio y televisión. El ejercicio del derecho de rectificación en los medios impresos queda contemplado —con pequeñas diferencias— en las leyes de prensa de cada *Länder* (*Landerspressegesetz*). En el caso de los medios audiovisuales, el régimen jurídico del derecho de rectificación se encuentra disperso en las Leyes de Radiotelevisión (*Landesrundfunkgesetzen*) y en las Leyes de los Medios (*Landesmediengesetzen*). A las anteriores se unen los Convenios o Acuerdos Estatales de las Instituciones públicas de radio y televisión. Hablamos, en definitiva, de una regulación amplia y compleja, en la que se producen pequeñas divergencias de contenido, por ejemplo, en lo que respecta a los plazos de ejercicio del derecho.

Por lo que se refiere al objeto del derecho, únicamente son susceptibles de rectificación los hechos, sin poder extenderse el ejercicio en lo relativo a las opiniones y/o juicios de valor. El titular es cualquier persona física o jurídica que se vea afectada por afirmaciones de hechos, “independientemente de su actitud y de su carácter crítico o elogioso, difundidas por una publicación periódica o por un medio de comunicación audiovisual, siempre que ostente un legítimo o justificado interés en que se difunda su corrección, desmentido o aclaración” (Esquembre, 1998).

Uno de los aspectos más destacados del caso alemán es que se trata del único país de la Unión Europea que, por el momento —se prevé que España lo haga pronto—, reconoce el derecho de rectificación en el ámbito de los multimedia. En concreto, queda regulado en la Ley Federal de servicios de información y comunicación de 1997 y el Convenio o Acuerdo estatal sobre servicios de medios de comunicación suscrito por todos los Länder del país.

c) El *diritto di rettifica italiano*

En el caso de Italia, el reconocimiento del derecho de rectificación (*diritto di rettifica*) se remonta históricamente al año 1848 con el *Edicto Albertino*, que fue el primer texto que determinó la facultad de cualquier persona aludida por una información en prensa de rectificar dicha información (Farré, 2008).

Hoy en día, el derecho de rectificación en prensa queda regulado por la Ley de reforma de las empresas editoras de 1981 que, a su vez, modificó la Ley de Prensa de 1948. En el art. 8 de la ley de 1948 se establece que “el director o subdirector responsable tiene la obligación de hacer insertar en el diario, íntegra y gratuitamente, las respuestas, rectificaciones o declaraciones de las personas a las que se le hayan atribuido actos, pensamientos o afirmaciones que lesionen su dignidad, o sean consideradas por ellos como contrarios a la verdad, en tanto que el contenido de la respuesta, rectificación o declaración, no entrañe responsabilidades penales (traducción de González, 1981: 90).

Para poder ejercer el derecho de rectificación en el ámbito de la radio y la televisión hubo que esperar hasta 1975 (Ley número 103, de 14 de abril) y, posteriormente, a la Ley del sistema radiotelevisivo de 1990, que mantendría las diferencias entre el régimen jurídico del derecho de rectificación en los medios audiovisuales y el de la prensa (Farré, 2008). Básicamente, dichas disparidades se concentran en torno a los requisitos de ejercicio, más restringido en el caso de la radio y la televisión, puesto que únicamente podían rectificar aquellas personas que efectivamente sufrieran una lesión en su moral o de índole material por informaciones contrarias a la verdad (art. 7.2 de la Ley de 1975). En ambos casos, tanto en la prensa como en los medios audiovisuales, el objeto de rectificación

serán exclusivamente los hechos y no las opiniones o juicios de valor (Esquembre, 1998).

El derecho de rectificación italiano encuentra el fundamento de su existencia en el derecho a la personalidad y la dignidad de todo individuo (arts. 2 y 3 de la Constitución). Por tanto, no es entendido como un límite a la libertad de expresión o al derecho de la información, “sino que se trata de un derecho subjetivo privado para la tutela de la personalidad” (Farré, 2008: 181).

En 1995 se creó el llamado Consejo de la Prensa Italiano. Entre sus obligaciones está la de vigilar el cumplimiento de la Carta de los Deberes de los Periodistas (1993), en la que, por su parte, se recoge el deber de los medios de facilitar la posibilidad de réplica (Farré, 2008, citando a Villanueva, 1999).

d) *Direito de resposta y retificação en Portugal*

El ordenamiento jurídico portugués recoge expresamente en su Carta Magna los derechos de respuesta y de rectificación en su art. 37.4: “Se asegura a cualesquiera personas individuales o colectivas, en condiciones de igualdad y eficacia, el derecho de respuesta y de rectificación, así como el derecho a indemnización por daños y perjuicios” (traducción de Esquembre, 1998).

Esta dualidad en el reconocimiento del derecho vino introducida por la reforma constitucional de 1982. El derecho de respuesta se extiende a afirmaciones de hechos y también a opiniones y juicios de valor, y puede ejercitarse siempre y cuando el daño producido al aludido se traduzca en una ofensa o en la posibilidad de afectación de su reputación o buen nombre. Por su parte, el derecho de rectificación no exige *per se* que los hechos (y solo los hechos) atenten contra la honra del aludido. En ambos casos el sujeto activo del derecho es a persona física o jurídica y los derechos pueden ejercerse ante cualquier medio de comunicación social y ante cualquier texto o imagen difundida por éstos (Farré, 2008).

En resumen, “una información falsa o inexacta que no cause perjuicio alguno a la persona aludida queda al margen del ámbito del derecho de respuesta, pero es, sin embargo, susceptible de ser recogida a través del ejercicio del derecho de rectificación” (Farré, 2008: 199).

A pesar del reconocimiento expreso del derecho en la Constitución portuguesa, el desarrollo del derecho vendrá por parte de las leyes, que en este caso vuelven a distinguir entre prensa, radio y televisión. En el caso de la prensa el derecho de respuesta y rectificación quedará regulado en el art. 16 de la Ley de Imprenta de 1975 y, en el ámbito de la radio el ejercicio del derecho quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley de Radio de 1988. Lo mismo ocurre para la televisión, donde el derecho quedará regulado en la Ley de Televisión de 1990.

Tradicionalmente, el derecho de rectificación en Portugal ha sido reconocido como un instrumento de defensa frente a las injerencias producidas por los medios.

Antes que en España o Italia el país luso aprobó la Ley de 10 de noviembre de 1837, que ya introducía el derecho de rectificación. Una regulación que ya incluía esa distinción entre medios de la que venimos hablando, puesto que la Ley de 1837 se aplicaba solo al ámbito de la prensa, mientras que el ejercicio del derecho de rectificación en medios audiovisuales quedó contemplado inicialmente en 1979, con la Ley de Radiotelevisión.

En términos generales, la doctrina portuguesa reconoce una triple dimensión en el derecho de respuesta. De un lado, se trata de un derecho fundamental, manifestación de las libertades de información y expresión. De otro, se erige como garantía de otros derechos fundamentales, principalmente los derechos de personalidad y el derecho a la información en su vertiente pasiva. En último término, hablaríamos también de un límite a la libertad de prensa, entendida ésta como libertad de gestión de los medios. Podemos observar cómo la doctrina portuguesa coincide con la española en señalar esas dos primeras dimensiones del derecho, si bien es cierto, que el caso de nuestro país la teoría del derecho de rectificación entendido como límite ha tenido muy escasa acogida.

f) El derecho de rectificación en otros países europeos

En **Austria**, el derecho de rectificación (*Gegendarstellungsrecht*) queda recogido en la Ley de los Medios de Comunicación de 1981, por la cual se faculta a cualquier persona física o jurídica que haya sido aludida por una información a remitir un escrito de rectificación al mismo medio, con relevancia semejante, y que éste sea publicado. No obstante, si el contenido de la rectificación es falso o resulta, por cualquier otra razón, imposible de publicar, el medio de comunicación queda exonerado de la difusión del escrito de rectificación (Farré, 2008). En efecto, si la persona afectada reclama ante los Tribunales que al no haber sido publicado su escrito de rectificación se ha vulnerado su derecho, pero se demuestra que el contenido de la rectificación es falso, el medio de comunicación puede exigir una compensación de acuerdo con las tasas publicitarias.

En el ordenamiento jurídico **belga**, esta facultad recibe el nombre —al igual que en Francia— de derecho de respuesta (*droit de réponse*). La ley que lo regula es la de 1961, que se aplica tanto a medios impresos como audiovisuales y, en general, el modelo se acerca bastante al francés, aunque en este caso la ley no contempla la rectificación en el ámbito de la crítica científica, artística o literaria, excepto en aquellas situaciones en las que lo que se pretende es simplemente rectificar hechos o responder ante un posible ataque al honor, quedando excluida la posibilidad de que se rectifiquen opiniones y juicios de valor. Se trata, por tanto, de una regulación intermedia entre la rigidez del modelo alemán y “la amplitud del francés” (Farré, 2008: 234).

También siguiendo los pasos del ordenamiento pionero, el francés, se encuentra el de **Luxemburgo**, que contempla un derecho de respuesta (*droit de réponse*) con un contenido del mismo modo muy amplio, “ya que puede ser ejercido ante cualquier tipo de alusión, ya sea ésta de carácter ofensivo o, incluso, elogioso” (Farré, 2008: 241). En el caso de la prensa, es la Ley de 1869 es la que regula este derecho que, para radio y televisión, queda contemplado finalmente en 1991 con la Ley sobre los medios electrónicos (*Loi sur les médias électroniques*). Destaca del modelo luxemburgués que, en el caso de que la réplica sea audiovisual, la lectura no puede superar un minuto de duración o bien el tiempo que duró la información ahora objeto de rectificación. Si el medio incumple la obligación de hacer pública la rectificación y no alega una causa justificada, el ordenamiento contempla penas de multa.

Dinamarca también adopta ese régimen general del derecho de réplica (*Berigtigelsen*) para todos los medios de comunicación, sin concebir distinción entre los impresos y los audiovisuales. A diferencia de otros ordenamientos, el danés no garantiza la protección judicial del derecho de rectificación, esto es, no permite recurrir a Justicia en el caso de que la empresa incumpla su obligación de difundir la réplica. En los casos en los que se produzcan conflictos, será el Consejo de Prensa (al igual que en Reino Unido) el que tenga la última palabra para resolverlos. Otra de los aspectos más característicos del modelo danés es que es el único de todos los de la Unión Europea en el que un Código Deontológico cuenta con rango de ley (fue aprobado por el Parlamento en 1992). Se trata de un manual de conducta que determina el deber del periodista en rectificar de forma rápida y voluntaria aquellas informaciones de cuya falsedad o inexactitud tenga conocimiento a posteriori. Si esto no ocurre así, el medio debe ofrecer el derecho de réplica al aludido.

Parte de la doctrina entiende que el derecho de réplica así entendido se encuentra configurado “más como un deber de los medios de comunicación que como un derecho subjetivo de los afectados” (Farré, 2008: 442). Algo muy similar ocurre en el resto de los países escandinavos. En el caso **finlandés**, el derecho de réplica (*Vastine*) se reconoce en el Código de Pautas para la Correcta Práctica Periodística, adoptado en 1991 por la Unión de Periodistas. En cuanto al órgano que vela por el cumplimiento del derecho y del resto de principios éticos contemplados en el Código, es el Consejo de los Medios de Comunicación. Bien de forma voluntaria, bien a petición del aludido, el medio de comunicación tiene el deber de corregir toda aquella información que resulte inexacta. A ello se une la posibilidad de que el afectado pueda también rectificar opiniones y juicios de valor en el caso de que reciba una fuerte crítica periodística sobre su persona.

Del mismo modo que en Finlandia, en **Suecia** existe un Código deontológico general que reconoce el derecho de réplica tanto en medios impresos como en la radio y la televisión. Hablamos en este caso de un sistema que, en nuestra opinión,

se encuentra muy desarrollado y que se basa por completo en la autorregulación. En efecto, solo se somete al control del defensor del lector (*presssombudsmannen*), los Consejos de Prensa y el llamado Consejo de Radiotelevisión (Farré, 2008). El defensor del lector es a quien debe remitirse por escrito cualquier queja y él mismo se encarga de decidir si procede o no la rectificación —en los casos más complejos puede derivar el asunto al Consejo nacional de la Prensa—, además de mediar entre las partes. El órgano que se encarga de garantizar que las emisoras de radio y televisión corrijan las informaciones inexactas es el Consejo Nacional de Radiotelevisión (formado por representantes de partidos políticos, religiosos y sociales, así como por representantes de los medios). Tiene la capacidad de censurar a aquel emisor que cometa una falta y no respete el Código de Conducta, así como imponerle una multa.

Grecia reconoce un único derecho de réplica (*Epanorthosis*) a toda persona física o jurídica que vea dañados sus derechos de personalidad por la información difundida en un medio de comunicación impreso o audiovisual. Del desarrollo del derecho se encargan las Leyes de 1987 y de 1989. En el caso específico de la radio y la televisión, también son sujetos activos del derecho de réplica tanto los partidos políticos como los sindicatos de trabajadores.

La denominación de derecho de réplica (*right of reply*) también es la elegida en el caso **irlandés**. De la regulación del derecho en los medios audiovisuales se encarga la *Broadcasting Act* de 1990, mientras que la *Broadcasting Complaints Commission* (BCC) se erige como órgano al que se remiten las quejas de los afectados y que decide, en último término, si procede o no el ejercicio de la réplica, así como las condiciones. Si hablamos de medios impresos, resulta paradigmático que en este país no exista ninguna norma legal que regule este derecho y que únicamente el Código de Conducta aprobado en 1994 por la Unión Nacional de Periodistas establezca una serie de pautas al efecto. En concreto, el Código recoge el deber del periodista de rectificar en cuanto sea consciente de la falsedad o incorrección en cualesquiera de sus informaciones, de pedir disculpas con la relevancia adecuada y de permitir a los afectados la réplica en el caso de que el tema sea relevante. El editor es la figura encargada de determinar si la réplica debe difundirse y de qué manera (Farré, 2008).

El derecho de rectificación (*rectificatie*) es reconocido en el Código Civil de **Países Bajos** desde el año 1992. El reconocimiento no hace excepciones entre medios de comunicación social y, en su objeto, se limita a la rectificación de hechos de la información, cabiendo en última instancia recurso ante los tribunales de justicia. Al margen de la regulación jurídica, también existe la Declaración de Principios de Conducta de los Periodistas, aprobada en 1986. Se trata de un código deontológico que obliga a los medios a rectificar las informaciones inexactas o que puedan causar un perjuicio en el aludido y cuyo cumplimiento se encarga de vigilar el llamado Consejo Nacional de Prensa.

g) El *right of reply* de Reino Unido

Una situación muy distinta a la del resto de países europeos es la que tiene el derecho de réplica en Reino Unido. En efecto, en Europa las diferencias más palpables en lo que se refiere al derecho de rectificación proceden, en esencia, de las distintas denominaciones, plazos de ejercicio o, incluso, el objeto de la rectificación (hechos u opiniones). Mientras, en Reino Unido, podríamos afirmar que “no existe un derecho de rectificación en sentido estricto” (Rebollo, 2009: 480).

La razón de fondo no es otra que un concepto muy alejado del europeo, basado en una concepción suprema de la libertad de prensa y, en definitiva, en un ordenamiento jurídico con valores políticos y constitucionales también muy distintos. En Reino Unido, el derecho de réplica se fundamenta en el derecho de acceso a los medios de comunicación por parte del público y no en una supuesta finalidad preventiva y/o reparadora de los derechos de personalidad del individuo (Farré, 2008).

En definitiva, la limitación de las libertades de información y expresión únicamente puede fundamentarse en la defensa del pluralismo, por lo que en ningún caso el interés individual puede justificar una restricción de la libertad de los medios de comunicación.

Ninguna persona tiene el derecho de recurrir (ni al amparo del *Common Law* ni del *Statute Law*) a los tribunales para solicitar que sea publicado su escrito de rectificación. Por ley solo, y de forma restringida, se reconoce un derecho de réplica en los medios audiovisuales, puesto que, en el caso de la prensa, la posibilidad de replicar queda recogida exclusivamente en los códigos deontológicos, quedando configurada “más como un deber ético de los medios de comunicación que como un auténtico derecho subjetivo de las personas afectadas por sus informaciones” (Farré, 2008: 209). En cualquiera de los medios de comunicación, la solicitud para ejercer la réplica debe realizarse a las Comisiones de Quejas. En el ámbito normativo, la protección frente a los ataques de los medios de comunicación social se reduce en esencia a las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios que recoge la Ley de la difamación (*Defamation Law*).

Sí es cierto que cualquier persona que estime que ciertas informaciones u opiniones dañan su reputación o suponen una intromisión indebida en su intimidad puede plantear sus quejas a través de las Comisiones. Hablamos de organismos independientes que han sido creados al efecto y entre los que destacan: la Comisión de Quejas de la Prensa (*Press Complaints Commission*), la Comisión de los Estándares de la Radiotelevisión (*Broadcasting Standards Commission*), la BBC (*British Broadcasting Corporation*), la Comisión Independiente de la Televisión (*Independent Television Commission*) y la Autoridad de la Radio (*Radio Authority*).

En cualquier caso, y a diferencia de lo que sucede el resto de Europa, el afectado no suele tener la posibilidad de publicar su propia versión de los hechos, a menos que la presente en forma de Carta al Director. Ésta es, sin lugar a duda, la vía más común y empleada para dar hueco a la réplica. Una senda que, como ya hemos señalado y veremos más adelante, no es considerada ni la más correcta ni la más satisfactoria para garantizar la efectividad del derecho.

h) Estados Unidos: el *right of reply* como límite de la libertad de información

La particular forma en la que Reino Unido concibe la libertad de prensa se extrapola, e incluso refuerza aún más, cuando hablamos del caso estadounidense. Un país poco proclive a limitar la libertad de los medios y que reconoce solo de manera muy discreta el *right of reply*.

Únicamente las leyes de tres Estados —Nevada (1929), Mississippi (1942) y Florida (1973)— reconocen el derecho de réplica en el ámbito de la prensa. En el caso de Nevada, el contenido del derecho era muy semejante al del resto de países europeos. Sin embargo, tanto en Mississippi como en Florida el *right of reply* sólo era ejercitable por los candidatos políticos durante los períodos electorales (Farré, 2008).

Considerado desde ciertos sectores un instrumento necesario para equilibrar la balanza entre la prensa y el público, por parte de la industria periodística fueron duramente atacadas y denostadas, “al considerarlas un ataque frontal a la libertad de prensa” (Farré, 2008: 246). Una restricción en sus libertades que la prensa no estaba dispuesta a acatar, en resumen, el caldo de cultivo que provocó que en ningún otro Estado fuera reconocido el derecho de réplica.

Un año después de su entrada en vigor, el derecho de réplica de la Ley de Florida fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo (sentencia *Miami Herald Publishing v. Tornillo*). El argumento de fondo no fue otro que el de la posición preferente de la libertad de prensa en el ordenamiento jurídico, considerando que el *right of reply* llevaría a los editores a evitar publicar acerca de asuntos públicos controvertidos, lo que restaría claramente vigor al debate político; y entendiendo que este derecho podría convertirse en un instrumento del poder político con el propósito de domesticar a aquellos periódicos críticos con sus actuaciones.

Por otra parte, la Corte Suprema entendió que reconocer el derecho implicaba una intromisión injustificada en la autonomía editorial de cada medio, una forma de censura: obligar al medio a publicar la réplica de un tercero es incompatible con la libertad de prensa.

Nos adentramos ahora en la radio y la televisión, donde hay que señalar que el derecho de réplica tuvo un desarrollo muy distinto al de la prensa. De hecho, en los medios audiovisuales estadounidenses sí se reconocen instrumentos similares

al *right of reply*, de tal forma que en algunas ocasiones el afectado por una información puede exponer su versión de los hechos. La Comisión Federal de las Comunicaciones (*Federal Communications Commission*, FCC), que es la que se encarga de otorgar las licencias y controla los medios audiovisuales, creó en 1949 la *Fairness Doctrine*³⁸. Esta doctrina obligaba a las emisoras a dedicar un tiempo importante a asuntos controvertidos que fueran de relevancia pública, además de ofrecer espacio a distintos puntos de vista acerca de ellos.

Otra de las famosas reglas impuestas a la radio y la televisión por parte de la FCC fue la *personal attack rule*, que reconocía la oportunidad de replicar a todos los candidatos políticos e individuos atacados durante la exposición de cualquier tema controvertido de interés público. Una especie de derecho de réplica que fue declarado constitucional por el Tribunal Supremo en 1969³⁹, argumentando tres cosas: la escasez de frecuencias, el derecho de los ciudadanos a estar adecuadamente informados sobre los asuntos de relevancia pública y la necesidad de garantizar el libre acceso de los ciudadanos a los medios.

En lo que se refiere a la protección del derecho al honor, dos normas contemplan y regulan la llamada difamación (*Defamation Law* o *Libel Law*). Al mismo tiempo, bastantes Estados reconocen la posibilidad de que el medio lleve a cabo una retractación voluntaria con el propósito de enmendar el error y atenuar el daño causado y que suele conllevar una rebaja en la indemnización económica por daños y perjuicios. Una tercera vía de protección sería la antes mencionada *personal attack rule*, reconocida por el Código Federal de Regulaciones (*Code of Federal Regulations*) de 1991. Si bien es cierto que se trata de una posibilidad bastante limitada, reconoce la facultad a cualquier persona, afectada en su honor o reputación por un ataque difundido por medio de la radio o la televisión, a replicar de manera gratuita en un tiempo razonable (no necesariamente igual al que se dedicó a la información que se replica).

A esas limitaciones que de entrada ya tiene el derecho de réplica de Estados Unidos, hay que sumar la restricción en el ámbito de su ejercicio. Esto es, el *right of reply* solo es posible ante hechos de la información que no solo deben ser falsos, sino además suponer una lesión en los derechos de personalidad del aludido. Así las cosas, las posibilidades de réplica por parte del público son muy escasas, además de excluirse de los programas informativos serios y restringirse en exclusiva al ámbito de aquellos asuntos de verdadera relevancia pública (Farré, 2008). De hecho, en la actualidad, la fórmula de la retractación cuenta con un considerable mayor peso que el derecho de réplica.

³⁸ Doctrina de la imparcialidad o de la ecuanimidad, que fue declarada plenamente constitucional por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1969.

³⁹ En concreto, en la sentencia *Red Lion Broadcasting Co. v. Federal Communications Commission*.

Tabla 2. El derecho de rectificación en la legislación comparada

PAÍS	LEYES Y DENOMINACIÓN DEL DERECHO	IMPLICACIONES	ÁMBITO DE APLICACIÓN
España	Derecho de rectificación <ul style="list-style-type: none"> – Ley 4/1980, de 10 de enero (Estatuto RTVE) – Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo – Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (octubre 2018) 	<ul style="list-style-type: none"> – Reconocido por primera vez en el Decreto de las Cortes de 17 de octubre de 1837 – En su tradición histórica hubo distinción entre dos derechos (réplica y rectificación), con la consiguiente confusión terminológica – El art. 85 del proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos extiende la garantía del derecho de rectificación frente a informaciones difundidas a través de Internet 	<ul style="list-style-type: none"> – Prensa – Radio – Televisión – Propuesta para extenderlo a Internet
Francia	Derecho de rectificación <ul style="list-style-type: none"> – <i>Loi sur la liberté de la presse</i>, de 29 de julio de 1881 – <i>Loi sur la Communication Audiovisuelle</i>, de 29 de julio de 1982, modificada el 30 de septiembre de 1986 	<ul style="list-style-type: none"> – Reconocido por primera vez como derecho de respuesta (<i>droit de réponse</i>) en la Ley de Prensa de 1822 – Ejercitable frente a hechos y también frente a opiniones y juicios de valor – Existencia de la Comisión Nacional del Derecho de Respuesta, órgano encargado de atender las reclamaciones y hacer ejecutivas sus resoluciones en este campo 	<ul style="list-style-type: none"> – Prensa – Radio – Televisión
Alemania	Derecho de rectificación <ul style="list-style-type: none"> – Leyes de prensa de cada uno de los Länder (<i>Landerspressegesetz</i>) – Leyes de Radiotelevisión (<i>Landesrundfunkgesetzen</i>) y Leyes de los Medios (<i>Landesmediengesetzen</i>) – Ley Federal de servicios de información y comunicación de 1997 y Convenio estatal sobre servicios de medios de comunicación suscrito por todos los Länder 	<ul style="list-style-type: none"> – La Ley de Prensa del Estado de Baden de 1831 lo reconoce por primera vez – Regulación muy amplia y compleja, con pequeñas divergencias en contenido 	<ul style="list-style-type: none"> – Prensa – Radio – Televisión – Servicios multimedia

Italia	Derecho de rectificación <ul style="list-style-type: none"> – Ley de reforma de las empresas editoras de 1981 – Ley del sistema radiotelevisivo de 1990 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>El diritto di rettifica es reconocido por primera vez en el Edicto Albertino, de 26 de marzo de 1848</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – Prensa – Radio – Televisión
Portugal	Derecho de respuesta y rectificación <ul style="list-style-type: none"> – Ley de Imprenta de 1975 – Ley de Radio de 1988 – Ley de Televisión de 1990 	<ul style="list-style-type: none"> – Ley de 10 de noviembre de 1837 reconoce por primera vez el derecho de rectificación – Ejercitable frente a hechos y también frente a opiniones y juicios de valor – Emplea como sinónimos los conceptos de respuesta y rectificación – La Constitución portuguesa lo recoge expresamente como derecho fundamental en el art. 37.4 	<ul style="list-style-type: none"> – Prensa – Radio – Televisión
Reino Unido	Derecho de réplica <ul style="list-style-type: none"> – Códigos deontológicos – <i>Defamation Law: indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de ataques de los medios de comunicación</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – El <i>right of reply</i> no es un derecho de rectificación en sentido estricto, sino un derecho de acceso que queda configurado más como un deber ético de los medios que como un derecho subjetivo – Concepción suprema de la libertad de prensa propia del modelo anglosajón (R. Unido y EE. UU.) – Las quejas se plantean a las comisiones independientes (<i>Press Complaints Commission, Broadcasting Standards Commission, British Broadcasting Corporation, Independent Television Commission</i> y <i>Radio Authority</i>, entre otras) – La sección de Cartas al director es considerada la vía más correcta (y, en efecto, la única) para publicar las rectificaciones; que son, a su vez, redactadas por el propio medio, no por el individuo afectado 	<ul style="list-style-type: none"> – Prensa – Radio – Televisión

<p>Estados Unidos</p>	<p>Derecho de réplica</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sólo las leyes de tres Estados —Nevada (1929), Mississippi (1942) y Florida (1973)— reconocen el derecho de réplica en el ámbito de la prensa. Al mismo tiempo, en Mississippi y Florida el <i>right of reply</i> sólo era ejercitable por los candidatos políticos durante los períodos electorales – La Defamation Law regula la protección al honor – La <i>personal attack rule</i> regula el derecho de réplica en los medios audiovisuales, está reconocida normativamente en el <i>Code of Federal Regulations</i> de 1991 	<ul style="list-style-type: none"> – Concepción suprema de la libertad de prensa propia del modelo anglosajón (R. Unido y EE. UU.) – En la práctica, la <i>personal attack rule</i> se traduce en una posibilidad muy limitada – <i>Right of reply</i> únicamente ejercitable si los hechos son falsos y se produce una lesión del honor – La retractación voluntaria cuenta con un peso mucho mayor que el <i>right of reply</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – Prensa – Radio – Televisión
<p>Marco internacional</p>	<p>Derecho de rectificación</p> <ul style="list-style-type: none"> – La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), de 22 de noviembre de 1969, es la única declaración internacional de derechos humanos que reconoce de manera expresa el derecho de rectificación en su art. 14 – Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación, aprobada el 16 de diciembre de 1952 y que entró en vigor el 24 de agosto de 1962 	<ul style="list-style-type: none"> – Relevancia prácticamente nula de la Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación – El Informe de la Comisión Internacional sobre problemas de la Comunicación (Informe MacBride, publicado por la UNESCO en 1980), pone de manifiesto la ineficacia del derecho de rectificación regulado por la Convención 	<ul style="list-style-type: none"> – Prensa – Radio – Televisión

<p>Marco europeo</p>	<p>Derecho de réplica</p> <ul style="list-style-type: none"> – Resolución (74) 26, de 2 de julio de 1974 – Recomendación (84) 22, de 7 de diciembre de 1984, sobre la utilización de capacidades de satélite para la televisión y radiodifusión sonora – Convenio Europeo sobre Televisión Transfronteriza, adoptado el 5 de mayo de 1989 – Directiva 89/552/CE, la llamada Directiva de Televisión sin Fronteras, posteriormente modificada por las Directivas 97/36/CE y 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo – Resolución 2066 (2015) y Recomendación 2075 (2015) 	<ul style="list-style-type: none"> – Esfuerzos claros por regular el derecho de rectificación, pero dificultades a la hora de lograr un aumento de su efectividad – Obstáculos en el ámbito de la televisión transfronteriza que se unen a las diferencias entre los distintos regímenes jurídicos del derecho de rectificación en cada país – En los últimos años, los altos organismos europeos muestran interés en que mejoren los aspectos éticos del trabajo periodístico y recomiendan a los Estados trabajar en pos de la autorregulación 	<ul style="list-style-type: none"> – Prensa – Radio – Televisión
-----------------------------	---	---	---

Fuente: Elaboración propia

2.3. Doctrina y jurisprudencia

Para analizar cuál es la consideración del derecho de rectificación en la doctrina debemos tomar en consideración sus distintos elementos, a saber: su naturaleza penal; si se trata o no de un derecho fundamental; si actúa como límite de la información; si es un derecho que ampara simplemente una versión distinta a la de los hechos publicados o, por el contrario, ha de exigírsele veracidad al escrito de rectificación; si queda circunscrito al ámbito de los hechos o, al mismo tiempo, abarca opiniones; cómo debe materializarse el derecho (únicamente por escrito o también con apoyo gráfico en caso de ser necesario) y si es preciso trabajar en pos de la consecución de un derecho de rectificación internacional.

No obstante, antes de adentrarnos en este análisis, consideramos fundamental detenernos brevemente en el estudio de **la STC 168/1986, cuya interpretación del derecho de rectificación regulado en la LO 2/1984 impregna sin lugar a duda la visión de gran parte de la doctrina y contribuyó de manera decisiva al establecimiento del marco jurídico del ejercicio de este derecho**. Hablamos, así, de que el desarrollo que posteriormente se ha llevado a cabo sobre la fundamentación, la naturaleza y el alcance de este derecho no pueden entenderse sin el conocimiento de una sentencia a la que siempre se recurre y que sentó jurisprudencia.

2.3.1. La STC 168/1986, una interpretación restrictiva y errónea del derecho de rectificación

La jurisprudencia constitucional ofrece una interpretación restrictiva y, a nuestro juicio incorrecta, del derecho de rectificación regulado en la LO 2/1984. Varios son los puntos importantes en los que discrepamos de la sentencia y con su forma de entender este derecho del que, pretendemos probar, queda desnaturalizado y restringido, lejos de lo que una lectura inicial de la LO 2/1984 deja entrever acerca de él.

La STC 168/1986 de 22 de diciembre, pronunciada por la Sala Segunda del Alto Tribunal en el recurso de amparo número 1045/1985, interpuesto por Ediciones Tiempo, S.A., sienta jurisprudencia con relación a la LO 2/1984. Resumimos los hechos de esta:

a) A partir de la publicación de un artículo en la revista *Tiempo* sobre una entidad mercantil y en el que se hacía referencia al que fuera su presidente, el mismo remitió al director de la revista un escrito de rectificación.

b) El director se negó a publicar el escrito y el afectado inició la acción de rectificación. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Madrid desestimó la demanda, justificando que el escrito de rectificación no se limitaba a rectificar los hechos de la información controvertida, sino que añadía juicios de valor.

c) El demandante apeló la sentencia y la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid dictó sentencia revocatoria de aquella con fecha 14 de mayo de 1985. A través de ella se ordenó la publicación parcial del escrito de rectificación, concretamente la de aquellas partes que rectificaban de forma estricta los hechos de la información.

d) Contra dicha sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid, Ediciones Tiempo S.A. preparó un recurso de casación, que fue posteriormente denegado por el Auto de la Sala sentenciadora y confirmado en queja por el Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo.

e) A partir de aquí, Ediciones Tiempo, S.A. presenta una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional, al considerar que la sentencia de la Audiencia Territorial vulnera el derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información veraz (art. 20.1 d CE). La interpretación que hace la ATM es que el derecho de rectificación no se funda en la veracidad de o inexactitud de los hechos difundidos por una información, sino en la simple consideración subjetiva por parte del aludido de que esa información pueda causarle un perjuicio. En opinión de la revista Tiempo, dicha interpretación de la LODR, ignora el derecho de comunicar y recibir información veraz, al obligar a publicar al medio una rectificación a pesar de que no sea cierto lo que se dice y sí lo sea la información difundida en primer término, diligentemente obtenida y acreditada con pruebas. La revista Tiempo considera que lo que realmente protege el derecho de rectificación es el derecho del ciudadano “a recibir y difundir libremente informaciones veraces, frente a intromisiones que los medios de información puedan realizar en hechos y circunstancias que les afecten y que, al no ser ciertos, les perjudiquen”.

f) Por ello, Ediciones Tiempo, S.A. solicita al Tribunal Constitucional que declare nula la Sentencia de la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid y, con ello, que suspenda su ejecución.

g) La Sección Segunda del Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite la demanda de amparo formulada el 11 de diciembre de 1985.

La STC 168/1986 ofrece una interpretación del derecho de rectificación en base a los fundamentos jurídicos que sintetizamos a continuación:

a) En opinión del Tribunal, “resultan menoscabados los derechos reconocidos en el art. 20. 1 d) de la Constitución tanto si se impide comunicar o recibir una información veraz como si se difunde, se impone o se ampara la transmisión de noticias que no responden a la verdad, siempre que ello suponga cercenar el derecho de la colectividad a recibir, sin restricciones o deformaciones, aquéllas que sean veraces” (FJ 2). A ello añade que “[...] se habría producido la infracción que se denuncia en la presente queja de amparo si la Sentencia recurrida hubiera ordenado la publicación de una información o relato fáctico cuya falsedad o inexactitud le constara al órgano judicial o fuera manifiesta o, con mayor razón, si el Tribunal hubiera impuesto a los responsables del medio de comunicación afectado la obligación de desdecirse o negar la veracidad de la versión de los hechos inicialmente publicada, sin haber contrastado previamente su falta de veracidad o inexactitud, o bien, por último, si hubiese otorgado carta de autenticidad a la versión ofrecida por quien solicita la rectificación, sin haber procedido a una previa y adecuada investigación de la verdad” (FJ 3).

b) El TC desliga el derecho de rectificación a la indagación de la veracidad, afirmando que este derecho cuenta con una finalidad y eficacia distintas a las acciones penales y civiles que sí entran a valorar la verdad de los hechos difundidos con el objeto de “[...] obtener la debida reparación de los perjuicios causados por informaciones inexactas o falsas; acciones y procedimientos que los interesados pueden ejercitar en cualquier caso y de los que ha de resultar, también en beneficio de la colectividad, la determinación de los hechos como ciertos o inciertos, con los efectos de la cosa juzgada [...]” (FJ 4). En su interpretación de la LODR, el TC asegura que “el derecho de rectificación es sólo un medio de que dispone la persona aludida para prevenir o evitar el perjuicio que una determinada información pueda irrogarle en su honor o en cualesquiera otros derechos o intereses legítimos, cuando considere que los hechos lesivos mencionados en la misma no son exactos. Esta legítima finalidad preventiva que es independiente de la reparación del daño causado por la difusión de una información que se revele objetivamente inexacta quedaría frustrada en muchos casos por la demora en la rectificación pretendida. [...] La sumariedad del procedimiento verbal [...] exime sin duda al Juzgador de una indagación completa tanto de la veracidad de los hechos difundidos o publicados como de la que concierne a los contenidos en la rectificación, de lo que se deduce que, en aplicación de dicha Ley, puede ciertamente imponerse la difusión de un escrito de réplica o rectificación que posteriormente pudiera revelarse no ajustado a la verdad. Por ello, la resolución judicial que estima una demanda de rectificación no garantiza en absoluto la autenticidad de la versión de los hechos presentada por el demandante, ni puede tampoco producir, como es obvio, efectos de cosa juzgada

respecto de una ulterior investigación procesal de los hechos efectivamente ciertos” (FJ 4).

Por todo lo anterior, el Alto Tribunal concluye que “no hay duda de que la rectificación, judicialmente impuesta, en los términos que establece la Ley Orgánica 2/1984, de una información que el rectificante considera inexacta y lesiva de sus intereses, no menoscaba el derecho fundamental proclamado por el art. 20. 1 d) de la Constitución, ni siquiera en el caso de que la información que haya sido objeto de rectificación pudiera revelarse como cierta y ajustada a la realidad de los hechos” (FJ 5).

c) Además, según la sentencia, el hecho de que el aludido disienta de los hechos difundidos no impide al medio de comunicación seguir difundiendo información veraz, ni le obliga a declarar que su información es errónea o a modificar el contenido. Por tanto, la inserción obligatoria de la réplica no puede entenderse “como una sanción jurídica derivada de la inexactitud de lo publicado” (FJ 5). “El ejercicio del derecho de rectificación tampoco limita el derecho de la colectividad y de los individuos que la componen a recibir libremente información veraz, pues no comporta una ocultación o deformación de la que, ofrecida con anterioridad, lo sea o pueda serlo. Aún más, [...] la inserción de la rectificación interesada en la publicación o medio de difusión no implica la exactitud de su contenido [...]”.

d) El TC incluye además una interpretación controvertida, que reduce el ejercicio del derecho a la difusión de una versión de los hechos distinta a la del medio de comunicación: “[...] la divulgación de dos versiones diferentes de unos mismos hechos, cuya respectiva exactitud no ha sido declarada por ningún pronunciamiento firme de los órganos judiciales competentes, no restringe tampoco el derecho a recibir la información que sea veraz [...] el derecho de rectificación, así entendido, además de su primordial virtualidad de defensa de los derechos o intereses del rectificante, supone, como apunta el Ministerio Fiscal, un complemento a la garantía de la opinión pública libre que establece también el citado precepto constitucional, ya que el acceso a una versión disidente de los hechos publicados favorece, más que perjudica, el interés colectivo en la búsqueda y recepción de la verdad que aquel derecho fundamental protege” (FJ 5).

e) Siguiendo lo dicho en la sentencia de la ATM, asegura el TC que “la inserción de la réplica sólo procede en la medida en que se pretenden rectificar hechos y no opiniones y cuando los hechos publicados afectan perjudicialmente a los intereses del demandante aludido por la información”. Y concluye recordando de nuevo que los jueces no están obligados a entrar a investigar exhaustivamente la verdad, debido a que se trata de un proceso sumario que no lo permite, y porque

tampoco es algo que pueda deducirse del art. 20.1 d CE: “La Ley confiere incluso a los Jueces y Tribunales la facultad de rechazar *a limine* la pretensión deducida, inadmitiendo toda demanda de rectificación manifiestamente improcedente (art. 5, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 2/1984), lo que permite al órgano jurisdiccional no admitir a trámite o desestimar la rectificación de una información que, en el momento en que aquélla se solicita, aparece cierta de toda evidencia, o bien no imponer a la parte demandada la difusión de una versión que, también de manera palmaria o patente, carece de toda verosimilitud o no puede en modo alguno causar perjuicio al demandante. Que los órganos judiciales competentes puedan y deban realizar este tipo de control al enjuiciar la demanda de rectificación y a la vista, en su caso, del resultado de la prueba sumaria que se practique en el juicio no significa; sin embargo, que tengan la obligación de indagar exhaustivamente la verdad en el proceso verbal en el que se tutela el derecho de rectificación, ya que, aparte de que la sumariedad del procedimiento no lo permite, tampoco es una exigencia que se deduzca de lo dispuesto en el art. 20.1 d) de la Constitución, tal y como ha quedado razonado” (FJ 5).

Nuestra interpretación del derecho de rectificación recogido en la LO 2/1984 dista bastante de la concepción que expone el Tribunal Constitucional en esta sentencia que, recordamos, es la más destacada en relación con esta figura jurídica y que ha provocado que una parte importante de la doctrina exponga múltiples argumentos en contra.

Desde el inicio, tanto la sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid como la STC 168/1986 establecen una clara distinción entre hechos y opiniones y/o juicios de valor, al determinar que solo lo primero (el relato de los hechos de la información) es objeto del derecho y, por tanto, susceptible de ser rectificado por parte de la persona aludida. **A nuestro juicio, resulta difícil considerar que el propósito de la LODR sea proteger al afectado contra informaciones de hecho y, al mismo tiempo, dejarle desprotegido frente a aquellas expresiones en las que se entremezclan información y opinión y también frente a aquellas que exponen no solo datos sino también la subjetividad del informador. En la vida real es muy difícil la separación entre hechos y opiniones cuando hablamos de información periodística.** Complejidad que el propio Tribunal Constitucional reconoce en la posterior STC 6/1988, en la que se puede leer: “[...] es cierto que, en los casos reales que la vida ofrece, no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la estricta comunicación informativa, pues la extensión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa, la comunicación de hechos o noticias no se da nunca en un estado químicamente puro y comprende, casi siempre, algún elemento valorativo o, dicho de otro modo, una vocación a la formación de una opinión [...]” (FJ 5). Esa misma afirmación contrasta con la aparente solidez que sobre este punto el TC quiere demostrar en la STC 168/1986. No pocos autores coinciden en que el límite entre

lo que es una información de hechos y una apreciación subjetiva es muy difuso, debido a la dificultad de deslindar entre hechos asépticos y opiniones (Asensi, 1997; Esquembre, 1997) porque “[...] la información de hechos nunca se presenta, por así decirlo, como químicamente pura. Por motivos textuales o contextuales, en la información aparecen mezclados —en unas u otras dosis— los hechos, las ideas, los juicios u opiniones” (Soria, 1989: 32).

De otro lado, en esta sentencia el Alto Tribunal parece identificar el derecho de rectificación en un simple derecho de acceso por alusiones (Soria, 1989; Villaverde, 1994). En efecto, separa el ejercicio del derecho con la inexactitud de la información difundida, conectándolo a la mera apreciación subjetiva que tiene la persona aludida sobre ellos. **Y, más allá, equipara la veracidad que constitucionalmente (en virtud del art. 20.1 d CE) debe exigírsele a cualquier información difundida a través de un medio de comunicación social a la difusión de varias versiones distintas sobre unos mismos hechos, independientemente de que sean o no compatibles, sean o no probadas.** En concreto, asegura que la difusión de dos versiones contrapuestas sobre los mismos hechos favorece, más que perjudica, el derecho a recibir información veraz por parte de la ciudadanía.

Este punto es, sin duda, el que más controversia ha generado en la doctrina española, donde autores han expresado la incompatibilidad de esta teoría con el derecho a comunicar y recibir información veraz. En ese sentido, publicar una versión diferente de los hechos “solo favorece el interés colectivo si restaura o restablece la verdad de aquella información; pero es un claro perjuicio a la comunidad si esa versión —no siendo verdadera— se difunde: si no es verdadera, esa versión es, a su vez, pura y simple desinformación” (Soria, 1989: 36). Lizarra (2005: 36-37) defiende que el ejercicio del derecho debe alejarse de la “rectificación con apariencia de veracidad”.

En el caso de los autores que identifican el derecho de rectificación como una forma más del derecho a la información —aunque no esté recogido de manera expresa por la el texto constitucional—, opinan que la cuestión de la veracidad en ningún caso puede ser obviada: “Al igual que el pluralismo político, el pluralismo informativo es un valor superior en el ordenamiento jurídico que está investido de fuerza normativa; por su parte, la veracidad es uno de los elementos ideológicos de la información que los diversos actores sociales implicados (diarios, radiotelevisión, poderes públicos, lectores...) no pueden dejar de lado como si de un simple factor retórico se tratase” (Carillo, 1988: 188).

A nuestro entender, el argumento del TC es débil y llega, incluso, a contradecir al art. 20.1 d CE, que únicamente ofrece protección constitucional a la información veraz. En el propio FJ 2 de la STC 168/1986, establece que “[...] resultan menoscabados los derechos reconocidos en el art. 20. 1 d) de la Constitución tanto si se impide comunicar o recibir una información veraz como si

se difunde, se impone o se ampara la transmisión de noticias que no responden a la verdad, siempre que ello suponga cercenar el derecho de la colectividad a recibir, sin restricciones o deformaciones, aquéllas que sean veraces”.

El TC alega la sumariedad que caracteriza al procedimiento verbal para eximir al juez de la investigación de la veracidad de la información y del escrito de rectificación y añade, además que “[...] en aplicación de dicha Ley, puede ciertamente imponerse la difusión de un escrito de réplica o rectificación que posteriormente pudiera revelarse no ajustado a la verdad. Por ello, la resolución judicial que estima una demanda de rectificación no garantiza en absoluto la autenticidad de la versión de los hechos presentada por el demandante, ni puede tampoco producir, como es obvio, efectos de cosa juzgada respecto de una ulterior investigación procesal de los hechos efectivamente ciertos” (STC 168/1986, FJ 4).

El Alto Tribunal reconoce, pues, la posibilidad de que la rectificación que ordene publicar o la información controvertida puedan demostrarse más tarde inexactas, algo a nuestro juicio, que contradice el derecho fundamental recogido en el art. 20.1 d CE y el fundamento del propio derecho de rectificación. Combatir la desinformación es esencialmente la ratio de esta figura jurídica (Soria, 1989). Precisamente por esa exigencia de veracidad es por la que la ley restringe el ejercicio del derecho a los datos de la información, sin extender la garantía frente a las opiniones y juicios de valor. El derecho de rectificación no puede entenderse como la simple facultad de ofrecer una versión distinta a la ofrecida por el medio de comunicación, sino que el propósito real es el de corregir o rectificar la misma. La información que no es verdadera es inferior a nada y constituye una corruptela (Desantes, 1974).

Es manifiesto que esa difusión de informaciones contrapuestas, no acreditadas como exactas ni desacreditadas como falsas, lesiona el derecho a comunicar y recibir libremente información, puesto que la CE únicamente protege la información veraz. Veracidad no puede ser confundida con variedad de versiones sobre el mismo asunto.

Por todo ello, el hecho de que el juez no entre a valorar la veracidad de lo difundido es totalmente incoherente, puesto que el derecho de rectificación no debe ser remodelado en función del procedimiento que lo tutela, sino más bien al contrario: dicho procedimiento debe respetar la naturaleza y características de la figura jurídica a la que sirve (Soria, 1989: 38).

Otro de los aspectos sobre los que debemos llamar la atención es la interpretación que el TC presenta de la propia naturaleza del derecho de rectificación. Más allá de la polémica a la que antes nos referíamos sobre si se trata o no de un derecho fundamental, lo que es claro es que la STC 168/1986 llega a desnaturalizarlo y a otorgarle un peso claramente inferior dentro del ordenamiento. Según su interpretación, este derecho es únicamente un medio del que dispone el aludido para evitar un perjuicio en su honor u otros intereses legítimos (STC

168/1986, FJ 4). Nos preguntamos entonces, cómo es posible que este derecho, entendido por el TC como un instrumento para proteger otros derechos fundamentales, no tenga ningún efecto relevante en el ámbito civil y/o penal. Es más, si el derecho de rectificación es prácticamente irrelevante en este sentido, ¿cómo se justifica su existencia? ¿por qué se regula por Ley Orgánica como procede con los derechos fundamentales?

El derecho de rectificación se configura, efectivamente, como un proceso urgente y sumario para proteger los derechos de personalidad, pero también, al mismo tiempo, el derecho a la información en sus vertientes activa y pasiva. Por ello **la condición del procedimiento no debe eximir al juez de investigar la veracidad de la información que se difunde en un medio de comunicación (sea la del medio o la del escrito de rectificación) porque, en última instancia, el público tiene el derecho de recibir, siempre y en todo caso, información veraz.** El derecho de rectificación “hace efectivo que el ciudadano [...] sea sujeto universal del derecho de la comunicación, con la finalidad de restituir la verdad en la información [...] Estaríamos, pues, ante la institución precursora de la interactividad en la comunicación, siendo una garantía jurídica pluricentenaria” (Benito, 2007: 162). Veracidad que, recordemos, opera como límite interno del derecho de la información, de manera que una información mendaz se traduce en el no ejercicio legítimo del derecho a la información (Navarro, 1998).

La ineffectividad e inoperancia del derecho de rectificación ha sido criticada por buena parte de la doctrina, que considera que su actual configuración lo convierten en un derecho marginal e inútil cuya concepción es claramente anticuada (Asensi, 1997).

En el otro extremo, encontramos aquellos autores que defienden esta interpretación del TC. Algunos consideran que “la veracidad informativa [...] no es un bien jurídicamente protegido” y que “la colectividad está interesada en la concurrencia informativa, no en la veracidad, que, en la mayor parte de los casos, es un juicio que se establece desde una perspectiva parcial” (Vilas, 1988: 289-290). Y otros, que lo que se pretende con el reconocimiento del derecho de rectificación no es proteger la veracidad sino, simplemente, el pluralismo informativo (Urías, 2003).

2.3.2. Estado de la cuestión en la doctrina y valoración personal

Nos adentramos ahora en cuál es el estado de opinión en la doctrina acerca del derecho de rectificación dentro de ese análisis crítico que empezamos a esbozar en el epígrafe anterior. Del mismo modo, en este punto se desarrolla una teoría propia acerca de cuáles son los defectos de la actual configuración de esta figura legal y cómo debe ser entendida para dotarla de efectividad y garantizar el fin ulterior al que ésta sirve: la democracia.

2.3.2.1. Un derecho de rectificación en pos del Estado democrático

La información veraz como garante de la democracia constituye la máxima a la que se supedita el derecho de rectificación. Determinados autores consideran incluso que el derecho de rectificación es expresión de las libertades de información y opinión, en la medida en que este derecho es una de sus principales garantías (Suárez Crothers, 2000). En este sentido, es importante destacar las palabras de Desantes (1974), cuando afirma que informar es ayudar a la participación de los demás, que la información es ya un modo de participación y que el proceso informativo no es monológico, sino que se trata de un sistema de diálogo con exposición y réplica. En definitiva, y estamos de acuerdo, “información equivale a diálogo entre medios de información y sociedad, entre Estado y sociedad y entre los diversos individuos de la sociedad entre sí” (Desantes, 1974: 88-89).

Marc Carrillo, por su parte, resume que “la libre comunicación de pensamientos y opiniones no es un monopolio de los profesionales de la prensa, sino un derecho reconocido a todos los ciudadanos”, un derecho que se impregna de los valores establecidos en el primer art. constitucional y que “una sociedad democrática no puede reducir a mera retórica” (Carrillo, 1986: 66). Los destinatarios de las informaciones deben ser tan protegibles como la propia libertad de la que gozan los profesionales de la información.

A juicio de Soria (1989), cuando hablamos de hechos inexactos o falsos no cabe hablar de información sino de su contrario: la desinformación. Lógicamente, sólo aquellos mensajes que son veraces y, por tanto, han sido contrastados merecen el nombre de información.

Un cuarto autor con el que coincidimos es Gabriel Bouzat (1989), que reclama que la democracia no es otra cosa que el gobierno a través de la discusión y, por ende, de la expresión y debate de distintas ideas y opiniones. Apunta que “la libertad de expresión no debe limitarse a proteger al que expresa su opinión, sino que también debe garantizar que el que recibe la opinión tenga asegurada la posibilidad de contestar y criticar dicha opinión” (Bouzat, 1989: 90).

Con todo lo anterior se imbrica el concepto de la opinión pública libre, que ha sido vinculado con el concepto de comunicación pública y definido así: “La opinión pública es la plasmación de las ideas sobre un determinado tema dominantes en el conjunto social. La comunicación pública, en cambio, supone un paso previo. La idea de comunicación pública lo que busca es precisamente asegurar que los ciudadanos cuentan con datos suficientes para formarse una opinión” (Urías, 2003: 58).

En definitiva, en el presente trabajo adoptaremos lo que Villaverde (1994) define como modelo institucional-funcional que es el que pone el énfasis en la protección de la circulación de mensajes informativos que permitan la participación

del individuo en libertad dentro del Estado democrático. Esta dogmática es la que apoyan tanto este autor, como de forma mayoritaria la doctrina y la misma jurisprudencia del TC; y encuentra en el modelo de interpretación liberal su contrario. Y es que modelo liberal, lejos de reconocer al sujeto pasivo de la información su papel determinante en el proceso comunicativo, lo coloca en una faceta de múltiple dependencia de las libertades y deberes de informar que el ordenamiento recoge para los emisores de la información. Contrariamente a lo que puede extraerse de las STC 6/1981 y 12/1982 (anteriores a la regulación actual del derecho de rectificación), el derecho a ser informado no es un mero efecto reflejo del derecho a comunicar información ni tampoco se trata de un simple interés difuso. Más adelante volveremos a la teoría de Villaverde para suscribir algunos de sus principales argumentos acerca del derecho de la información en su vertiente pasiva.

Partimos de la premisa básica de que el derecho a recibir información no queda limitado a una mera dependencia de lo que es un deber de los medios de comunicación, sino que también comprende la libre participación y expresión de los ciudadanos receptores de noticias. Sólo de este modo puede garantizarse la libre discusión en la esfera pública y, por ende, el pluralismo y la formación de una opinión pública libre imprescindibles en una sociedad democrática.

2.3.2.2. Naturaleza penal de un derecho... ¿fundamental?

Si para autores como Jiménez Asenjo (1954, citado en Sobrao, 1978), Solal (1959, citado en Sobrao, 1974), González Ballesteros (1981) o Rivero (1969) el derecho de rectificación se fundamenta en la legítima defensa por parte del sujeto que resulta agraviado por la información publicada en un medio de comunicación, hablándose incluso en términos de justicia retributiva, para otra parte de la doctrina —principalmente Carrillo (1986), Cucarella (2008), Blin y Chavanne y Drago (1969, citado en González Ballesteros, 1981) y Gutiérrez Goñi (2003)— en nada debe compararse derecho de rectificación y legítima defensa. En el caso concreto de Cucarella (2008), éste considera que el derecho de rectificación no debe entenderse ni como un mecanismo de legítima defensa o una sanción impuesta al medio de comunicación o al periodista ni, por ende, como una limitación del derecho a comunicar información. El autor considera que cualesquiera de estas posturas doctrinales han sido ya superadas.

A nuestro juicio, sí existe la conexión entre el derecho de rectificación y cierta defensa ante el daño o perjuicio que las informaciones puedan ocasionar a sus protagonistas o implicados, siempre y cuando éstos entiendan que la misma es falsa o inexacta. **Si bien es cierto que aún en la actualidad este derecho no goza de las mismas garantías de protección que otros, ni tampoco adquiere**

el mismo rango punitivo ante su incumplimiento, sí fue concebido para ese fin: enmendar una tara informativa con el propósito doble de proteger al agraviado y, en última instancia, garantizar el pluralismo democrático.

La función preventiva del derecho que estudiamos ha sido razonada por distintos autores en base a la jurisprudencia del TC y la propia LO 2/1984. Una buena definición en este sentido es la que aporta Benito (2006: 40), que determina que de lo que se trata no es “[...] de exigir responsabilidades por los daños ocasionados en el honor o en otros bienes jurídicamente protegibles del presuntamente ofendido —para lo que el legislador ha establecido otros mecanismos legales que la LO 2/1984 hace expresamente compatibles con el derecho de la rectificación—, sino de impedir que éstos lleguen a producirse”. También es destacable la de Navas Alvear (2005: 128), que lo define como “[...] un derecho encaminado sobre todo a una reparación simbólica de la dignidad humana, expresada exteriormente en la personalidad. Ello, sin perjuicio de otras medidas reparatorias posteriores”.

Gutiérrez (2003), por su parte, sitúa el derecho de rectificación en el marco de los conflictos entre los derechos fundamentales recogidos en los arts. 18.1 y 20.1 CE. Si bien coincidimos con él en que es en este ámbito donde debe entenderse, nuestro análisis intenta superar el mero vínculo del derecho de rectificación con las prácticas reparatorias del honor, por ejemplo. La razón es simple: entendemos el derecho de rectificación como un derecho fundamental en sí mismo y, por ende, independiente de otros.

Por todo ello, no suscribimos la opinión de Gutiérrez (2003) cuando afirma que el derecho de rectificación cuenta con un papel modesto dentro del complejo campo de los conflictos entre los derechos de información y personalidad. Pues puede que, en la práctica, el derecho de rectificación apenas haya ganado visibilidad ni eficacia; sin embargo, no entendemos que se trate de un derecho subsidiario o de menor rango: debe ser entendido como la posibilidad de arrojar más luz si cabe sobre las informaciones publicadas, lo que a su vez contribuye al bien de cualquier sociedad que se tenga por democrática en conexión con el necesario pluralismo y veracidad.

Entendemos que el derecho de rectificación sí es un derecho fundamental, por varios motivos:

A. El propio contenido del mandato constitucional en el art. 20.1 d) CE.

En este punto volvemos a subrayar la importancia del receptor de la información y su trascendente papel en el proceso comunicativo.

Como señala Villaverde (1995), el núcleo esencial y renovador del mencionado derecho lo constituye el hecho de que el sujeto pasivo de la comunicación debe efectivamente ser protegido por el Estado en pos de no ser

manipulado ni engañado por el emisor de las informaciones. En definitiva, se trata de reforzar la libertad e igualdad en el proceso, de manera que pueda garantizarse una formación libre no manipulada de la opinión, tanto individual como colectiva. Así, el autor establece que es necesario que el acceso a la información esté asegurado a todos los ciudadanos y que la posibilidad de transmitirla no sea patrimonio en exclusiva de un grupo de privilegiados. Lo que está en juego es la propia esencia de la democracia. En la discusión libre todas las opiniones valen lo mismo, por tanto, no es sólo necesario —sino exigible— que el individuo esté protegido tanto cuando expresa su opinión como cuando pretende informarse para poder participar en el Estado democrático.

A pesar de su visión negativa sobre el logro efectivo del pluralismo político y de entender que el derecho de rectificación apenas tiene trascendencia, entre otros motivos, porque el sujeto pasivo de la información es, en realidad, totalmente dependiente de lo que los medios decidan suministrar como información, suscribimos las ideas expresadas por este autor.

Para Cucarella (2008: 42), el fundamento constitucional del derecho de rectificación se encuentra en el art. 20 CE. En su opinión, “[...] al proclamar el derecho fundamental a comunicar información veraz, la CE está reconociendo a todas las personas un derecho fundamental de acceso al proceso libre de comunicación social con el objeto de ser emisor de información”. Para este autor, el derecho de rectificación es un derecho de personalidad que coloca a particulares y medios de comunicación en una posición igualitaria, idea que también comparten Carrillo (1986), Chinchilla (1987) o Soria (1989).

B. La regulación del derecho de rectificación mediante Ley Orgánica

Lo que se traduce en que una norma del máximo rango protege este derecho. El propio art. 81.1 CE establece: “Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución”. A nuestro juicio, **si el legislador no hubiera entendido que el derecho de rectificación es un derecho fundamental no hubiera escogido una ley orgánica para su regulación.**

Reconociendo que el derecho de rectificación debe convivir en relación simbiótica con el derecho a la información en su doble vertiente, es cierto que, para parte de la doctrina y, sobre todo, para los medios de comunicación, dicha relación se interpreta más bien en términos de parasitismo: siendo el parásito más pequeño e inofensivo que el huésped. Esto es, gozando de una muy escasa protección y visibilidad.

El derecho de rectificación es, en parte, la materialización del derecho a la información, ya que, como afirma Pineda, es una forma de garantizar este último

derecho “especialmente para quienes no poseen medios de comunicación o espacios en ellos” (Pineda, 2009: 25).

C. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional

La STC 6/1981 (FJ 4) destaca que el derecho de información no es un privilegio reservado a los profesionales de la información, sino que es un derecho reconocible a cualquier ciudadano; si bien se plantea el problema de que tal derecho ha de ejercerse a través de los medios de comunicación institucionalizados.

D. Recurso de amparo

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el recurso de amparo constitucional para los derechos recogidos en los arts. 14-29 CE, más la objeción de conciencia del art. 30. De este modo, el solicitante de amparo debe aducir lesión de su derecho al honor por parte de una información y no una lesión del derecho de rectificación. Éste es uno de los argumentos, quizá el de mayor calado, que defienden los autores que no reconocen este derecho como fundamental. **A nuestro entender, sin embargo, el derecho de rectificación debe gozar de la misma protección constitucional que la de los derechos recogidos en los arts. 20.1 a) y d), ya que, como venimos afirmando a lo largo de estas páginas, se encuentra indudablemente ligado a ellos.**

En el caso de Costa Rica, por ejemplo, el derecho de rectificación — recogido en la Convención Americana de Derechos Humanos en su art. 14 y en el art. 29 de la Constitución Política—, es protegible mediante recurso de amparo constitucional, a tenor de lo establecido en los arts. 66, 67 y 69 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. En concreto, el art. 66 de la Ley de Jurisdicción Constitucional reza:

“El recurso de amparo garantiza el derecho de rectificación o respuesta que se deriva de los arts. 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece esta Ley.

En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido”

El fallo de la Sala Constitucional más conocido en este sentido, el de la sentencia N 975-90 del 22 de agosto de 1990, expresa:

“El art. 66 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, garantiza el derecho de rectificación o respuesta [...]. Esta norma, y las que le sirvieron de base o inspiración, tiene por finalidad principal, la efectiva protección de la honra y reputación de la persona, frente a publicaciones indebidas, por ser 'inexactas o agraviantes' transmitidas a través de los medios de comunicación colectiva. Nace este derecho por necesidad de proteger estos principios, y de lograr un mayor equilibrio entre el poder que tienen los medios de información colectiva en la formación de la opinión, y los mecanismos efectivos de defensa que tiene el particular para la protección de sus derechos fundamentales. No constituye este derecho, como algunos lo han pretendido, un límite a la libertad de prensa, sino por el contrario, nace como consecuencia de su mal uso o abuso, y es uno de los mecanismos legales de defensa que posee el ciudadano, —el más rápido y efectivo—, para restablecer su buen nombre y reputación, independientemente de las otras acciones civiles o penales, que también han sido creadas por el legislador en defensa de estos sagrados principios. Este derecho es considerado como sano y necesario debido a su carácter multidimensional, pues no sólo protege la honra y reputación del lesionado, es decir, el derecho a que se informe bien de él u objetivamente de él, sino que protege al público en su derecho a ser informado en forma completa y objetiva; por otra parte, ayuda al medio de comunicación a cumplir su deber con honestidad y profesionalidad, a la vez que fortalece el ejercicio de la democracia”.

En el fallo N 2773-96 de 7 de junio de 1996 y en el N 2617-96 de 31 de mayo de 1996 puede leerse:

“[...] La inexactitud es una significativa falta de correspondencia o de fidelidad con los hechos sobre los que la información versa: se da, por caso, si se omiten hechos importantes para la formación de un juicio equilibrado, o se incluyen otros que no son ciertos, o deliberadamente o involuntariamente se presentan de tal manera que se induce al lector a percibirlos de cierto modo con exclusión de otros razonablemente posibles, o en condiciones que pueden alterar la ponderación objetiva y correcta que de lo acontecido llegare a tener el público. Por lo que toca al agravio que el derechohabiente resiente, de lo que se trata es

de que la información divulgada, por su contenido, características y forma de manifestación, sea adecuada —razonablemente— para que aquel decline o desmerezca en el aprecio o la consideración que los demás le tienen. Esto puede acaecer tanto si la información se refiere a él en lo puramente personal, como si tiene por objeto el ejercicio de la actividad que él personalmente despliega como actividad profesional, es decir, si incide en la opinión que los demás pueden tener acerca de la manera en que hace su trabajo, o —lo que es igual— en su prestigio profesional. En fin: la Ley [...] prescribe además que el texto de la persona afectada sea publicado y destacado en condiciones equivalentes a las de la publicación que lo motiva. [...] Se comprende fácilmente que un notorio desequilibrio en las características y la forma de divulgar la información inicial y la rectificación o respuesta del interesado puede hacer casi tan inútil el ejercicio de este derecho como si nada se hubiese publicado”.

En las partes que aquí hemos resaltado, se aprecia la justificación de necesidad de este derecho fundamental, así como la altura constitucional que en Costa Rica se le otorga. Consideramos que en nada debería diferir con respecto a su protección constitucional en nuestro país.

Las razones que en este apartado han sido presentadas coinciden con las que expone la gran parte de la doctrina que ratifica esta teoría, véase Carrillo (1986), Desantes (1974) o Esquembre (1998), entre otros.

Por ello, y con todo, entendemos que el derecho de rectificación sí es un derecho fundamental que no debe entenderse en exclusiva como “un derecho instrumental de los derechos fundamentales cuya lesión pretende evitar, o de cualquier otro derecho o interés legítimo”. Y es que, “sin perjuicio de que pueda evitarse o mitigarse la lesión sobre un derecho, cuando se pretende la rectificación y el medio de comunicación no la atiende en los términos legalmente previstos, ya ha habido una lesión efectiva de un derecho fundamental como es el de comunicar información. Ese derecho es el que se tutela a través del proceso de rectificación” (Cucarella, 2008: 106).

Otra parte destacada de la doctrina, se muestra convencida de que el derecho de rectificación puede ser muchas cosas, pero nunca un derecho fundamental. Es el caso, por ejemplo, de Lizarraga (2005), que no duda en definir el derecho de rectificación como un límite a la libertad de información, alegando —entre otras razones— su carácter puramente instrumental en cuanto a que su finalidad se agota en la rectificación publicada por el medio. Coincidirá la autora con Farré (2008), al afirmar que la aplicación específica de la Ley Orgánica del derecho de rectificación es la de salvaguardar el derecho al honor. Y en el mismo sentido se pronuncia Torres-Díaz (2011: 380-381): “[...] cuando se alude al derecho de

rectificación no se hace referencia a un derecho fundamental, aunque sí a un derecho subjetivo que faculta a su titular para recabar la tutela judicial en los términos y con las especialidades que la propia ley regula”. Añade, además, que el derecho de rectificación se configura como una garantía específica de los derechos al honor, intimidad y propia imagen, junto con su protección civil y penal, frente a las posibles intromisiones ilegítimas. A nuestro entender, nunca debe entenderse el derecho de rectificación como un derecho instrumental a la protección del derecho al honor, más cuando la acción de protección del segundo cuenta con el adecuado cauce establecido en lo civil y penal.

De otro lado, también se defiende la teoría de que el derecho de rectificación no es otra cosa que un derecho de acceso cualificado a los medios (Lizarraga, 2005; Villaverde, 1995), no siendo el instrumento adecuado para combatir informaciones falsas. De tal modo, que la rectificación en ningún caso obtendría el fin de instaurar, al menos en parte, la veracidad de la información.

De manera más específica y haciendo referencia a la jurisprudencia del TC antes mencionada, Villaverde (1994 y 1995) asevera que el Alto Tribunal ha convertido el derecho de rectificación en un derecho de acceso cualificado y no en un instrumento de control sobre la veracidad de la información. No parece el autor entrar en pormenores ni mucho menos preguntarse si la opinión del TC está debidamente fundamentada. Demuestra el autor en este punto una falta de espíritu crítico que poco nos interesa, al mismo tiempo que lo que consideramos una contradicción manifiesta con respecto al resto de su teoría acerca de la necesaria participación del público en la esfera comunicativa en pos del estado democrático.

E. Cuestión de veracidad

El estudio pormenorizado de la doctrina y la jurisprudencia no deja lugar a dudas: la cuestión de la veracidad es la auténtica clave del derecho de rectificación; algo, de otra parte, lógico al encontrarse éste indiscutiblemente ligado al derecho de la información recogido en el art. 20.1 d CE.

¿Debe el escrito de rectificación atenerse a los límites de veracidad que determina la Carta Magna? Si nos atenemos a la STC y a distintos autores, la respuesta es un inmediato no. Los argumentos para convencer de ello son sencillos y, a nuestro juicio, de escaso peso argumental:

- De un lado, lo único que ampara el derecho de rectificación es ofrecer una versión distinta (pero no necesariamente auténtica) de la información publicada primero, ya que no es necesario que los hechos que perjudiquen y aludan al rectificante sean realmente inexactos. Es decir, que no se trata de restablecer la verdad frente a la falsedad, sino de ofrecer una versión diferente de los hechos, sin importar que lo que afirme

el rectificante sea una total mentira. En este punto, autores como Caballero (2007), de un lado, definen como innecesaria y accesorio la cuestión de veracidad; y, de otro, afirman, sin embargo, que no es procedente la inserción del escrito de rectificación cuando el contenido del mismo carece, de manera patente, de toda verosimilitud. ¿Verosimilitud, pero no veracidad?

- Por otra parte, esto es lo que establece la jurisprudencia constitucional en la STC 168/1986 cuando determina que no le es exigible la veracidad al escrito rectificador. La jurisprudencia constitucional se contenta aduciendo que la difusión de informaciones contrapuestas contribuye indiscutiblemente a descubrir la realidad de los hechos y, por ende, favorece la formación de la opinión pública libre. En el mismo sentido se expresan autores como García Soriano (1999), que considera que esta 'oferta' de versiones disidentes de los hechos es suficiente para hablar del derecho de rectificación como una garantía de la veracidad de la información. Rosas (2011), citando directamente a Zannoni y Biscaro (1993), afirma que la réplica enfrenta información con información, determinando así que la veracidad no es una cuestión sobre la que haya que resolver en este punto, sino por los correspondientes cauces civiles y penales. Sí que estamos de acuerdo con él, no obstante, en el planteamiento de que el derecho de rectificación actúa como contrapeso en la protección de las libertades comunicativas y ayuda al fortalecimiento de las democracias actuales. Aunque podríamos apostillar que ayudaría más si su figura adquiriera mayor interés y relevancia.

Sin embargo, con respecto al primer punto y lejos del análisis simplista y acrítico, consideramos que es claro que el derecho de rectificación no ampara la difusión de una información falsa o que falte a los criterios de veracidad establecidos para cualquier información. Sencillamente, no tendría sentido amparar la difusión de una mentira, cuando lo que precisamente se intenta prevenir es que la información publicada por el medio de comunicación alcance, hablando en términos coloquiales, la mayor veracidad posible, ayudándose en este sentido del contraste con otra fuente primordial en la información (el protagonista o implicado de la misma). La diligencia de veracidad —que no de verdad— es exigible a cualquier información para contar esta con protección constitucional. De otro lado estaría el problema de si se dilataría o no mucho en el tiempo el establecer dicha veracidad, perjudicando la sumariedad del proceso, pero esa es otra cuestión que podría resolverse, por ejemplo, dotando al medio de comunicación de la posibilidad de negarse a publicar dicha rectificación ante la prueba fehaciente (y posterior demostración) de que el escrito rectificador no es veraz. En definitiva, **ni todo vale**,

ni la rectificación tiene por objeto exclusivo ofrecer una versión diferente (ya sea falsa o verdadera) de los hechos.

Finalmente, con relación al segundo argumento, ya hemos dedicado un apartado al análisis crítico de la citada sentencia 168/1986, que consideramos se aleja de la exigencia constitucional de veracidad para las informaciones publicadas en cualquier medio de difusión social. El simple ofrecimiento de visiones contrapuestas, sin perjuicio de que éstas (o alguna de ellas) puedan no responder a la realidad, no es suficiente al hablar de información amparada por nuestra democracia. No olvidemos que la veracidad es el límite interno que opera sobre la información: es decir, **la información no veraz no alcanza tan siquiera la categoría de información.**

F. Límite a la libertad de información

Aunque, si bien como antes se señalaba, esta postura parece haber perdido peso en la doctrina relativa al derecho de rectificación, cabe señalar la existencia de autores que consideran que un rasgo definitorio del derecho que se estudia es su actuación como límite a la libertad de información de la que disfrutaban los medios de comunicación.

Tal y como lo entendemos, **lejos de ser un límite, el derecho de rectificación se configura como una garantía más de las libertades comunicativas en las que tanto medios como ciudadanos participan:** ayudando a arrojar más luz sobre una información considerada errónea y/o parcial y que causa un perjuicio en el individuo(s) protagonista(s) de la misma. La rectificación, por sí misma, ni obliga al medio a desdecirse de la información que dio en primer lugar —como tampoco impide que el medio siga publicando información sobre el mismo tema desde su enfoque particular—, ni en modo alguno supone censura.

G. Hechos u opiniones

Para concluir este apartado, huyendo del maniqueísmo fácil y sin ser demasiado pretenciosos, nos aventuramos a establecer una definición propia del derecho de rectificación: **el derecho de rectificación, regulado como derecho fundamental por la LO 2/1984 de 26 de marzo, pretende compensar la desventajosa situación del ciudadano con respecto a los medios en el proceso comunicativo, ofreciendo la posibilidad a este último de rectificar aquellas informaciones (o parte de las mismas) que crea inexactas y considere que pueden causarle perjuicio, de manera rápida, sencilla y ventajosa en cuanto que dicho escrito rectificador debe publicarse en el mismo medio donde se publicó la información controvertida y con unas**

características semejantes que hagan que la repercusión de la rectificación cuente con un impacto similar al de la noticia original. Si bien es innegable su ligazón con la protección constitucional de los derechos de personalidad, no se trata de un derecho instrumental ni de un límite a la libertad que ejercen periodistas y medios. Se trata de un derecho íntimamente ligado a las libertades comunicativas, en tanto que las desarrolla en sus dos vertientes: en la pasiva, ya que será el ciudadano el que haga llegar la información ya rectificadora; y en la activa, puesto que el resto de la audiencia recibirá una versión de los hechos que le será útil para formarse su propia y libre opinión. Por ende, no puede ni debe entenderse el derecho de rectificación sin el necesario horizonte de veracidad que constitucionalmente se impone a toda información.

3. Metodología

3.1. Marco metodológico

Siguiendo a Sierra (1992: 161-163), y como arranque inicial dentro de este capítulo, resumiremos los puntos claves de la llamada evaluación del método científico que llevaremos a cabo:

- **Determinación del problema de investigación:** comprobación de la significatividad teórica y científica del problema, correcta formulación del mismo y corroboración de que los objetivos de la investigación se encuentran correctamente definidos.
- **Hipótesis:** determinar si las hay y cuáles son, así como comprobar si se derivan del título de la investigación o de la exposición de la razón de ser y de los fines de la misma.
- **Variables:** precisar las variables generales de la investigación y comprobar si su relación es causal o no, además de analizar los indicadores empíricos que representan las variables generales y su adecuación y concordancia con las primeras.
- **Diseño de la investigación:** determinar el tipo de diseño empleado, su representación gráfica, su adecuación y las ventajas e inconvenientes que pudiera presentar.
- **Delimitación del campo de la investigación:** análisis de los límites espaciotemporales de la investigación, de la población investigada y, finalmente, la coincidencia entre el universo real que se quiere investigar y el universo de trabajo que en efecto se investiga.
- **Muestra:** se identificará en este punto la muestra empleada, su representatividad y adecuación respecto a la población de la que se ha obtenido y los posibles sesgos que se deriven de la elección de ésta. En este punto también se deberán imaginar las explicaciones pertinentes en el caso de detección de algún error sistemático en la elección de la muestra.

- **Instrumento de observación:** examinar que sea correcto tanto desde el punto de vista formal, como de contenido; determinar las garantías de validez y seguridad que aporta.
- **Técnica de observación:** examen de la técnica de recogida de datos empleada y de su adecuación al problema que se investiga. Se hará mención de posibles incidencias y de su solución.
- **Control de variables extrañas:** medidas para controlarlas o neutralizar su influencia en las variables dependientes.
- **Análisis:** evaluación de los análisis estadísticos llevados a cabo, de su correcta ejecución y su significatividad.
- **Variables extrañas** no controladas y explicaciones alternativas: en el caso de que existan, identificarlas y dar una explicación a los resultados obtenidos.
- **Evaluación de las conclusiones:** el análisis de los resultados obtenidos es la base de las conclusiones de la investigación, en tanto que éstas interpretan y exponen la significación y alcance teórico de los resultados. En este sentido, hay que examinar posibles errores de interpretación y si la generalización que suponen las conclusiones tiene suficiente justificación.

3.1.1. Análisis cuantitativo y cualitativo

Antes de adentrarnos en la concreción de la metodología de investigación que emplearemos con el propósito de analizar el peso que en realidad tiene el derecho de rectificación en la prensa diaria española, debemos señalar que **no disponemos en este campo de ningún estudio previo de estas características**. Es por ello que la presente investigación se erige como totalmente novedosa y, presumiblemente al ser este nuestro objetivo, como referente para estudios posteriores.

Antes de establecer la metodología a emplear, hemos determinado en una primera fase nuestro objeto de estudio y, en una segunda, las unidades formales que vendrán a determinar el tipo de metodología más idónea para con la investigación a desarrollar.

Para resolver la **primera cuestión**, la relativa a **detectar la presencia o ausencia del derecho de rectificación en el universo escogido** (prensa española), así como su adecuada puesta en práctica, emplearemos el llamado **análisis de contenido**, del que encontramos una ilustrativa definición de Gaitán y Piñuel (1998: 281): “Al conjunto de procedimientos interpretativos y de técnicas de refutación aplicadas a *productos comunicativos* (mensajes, textos o discursos) o a procesos singulares de comunicación que, previamente registrados, constituyen un documento, con el objeto de extraer y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior, se le llama *análisis de contenido*”.

Bardin (1996: 23) lo define como “un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones”, que no es un instrumento, sino un abanico de ellos.

Asimismo, consideramos importante recoger la de Andreu (2000: 2-4): “El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable y válida. En ese sentido es semejante en su problemática y metodología, salvo algunas características específicas, al de cualquier otra técnica de recolección de datos de investigación social, observación, experimento, encuestas o entrevistas. No obstante, lo característico del análisis de contenido y que le distingue de otras técnicas de investigación sociológica, es que se trata de una técnica que combina intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la observación y producción de los datos, y la interpretación o análisis de los datos”. Añadirá el autor: “Por tanto, pertenecen al campo del análisis de contenido todo el conjunto de técnicas tendentes a explicar y sistematizar el contenido de los mensajes comunicativos de textos, sonidos e imágenes y la expresión de ese contenido con ayuda de indicios cuantificables o no. Todo ello con el objetivo de efectuar deducciones lógicas justificadas concernientes a la fuente —el emisor y su contexto— o eventualmente a sus efectos. Para ello el analista tendrá a su disposición todo un juego de operaciones analíticas, más o menos adaptadas a la naturaleza del material y del problema que tratará de resolver, pudiendo utilizar una o varias que sean complementarias entre sí para enriquecer los resultados o pretender así una interpretación fundamentada científicamente”.

Siguiendo las teorías de diferentes expertos en metodología de la investigación social, podemos diferenciar, a grandes rasgos, entre dos técnicas mayores en el análisis de textos: el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. El primero supone una superación del llamado análisis de contenido clásico, siendo definido por Arroyo (2012: 133-134) como “una variante del análisis de contenido que es expresamente cuantitativa y que, empleando grandes cantidades de datos, se centra en la descripción del contenido manifiesto del material textual, tratando, en última instancia, de reducir el sesgo analítico del investigador”. El tamaño de la

muestra dependerá en todo caso de la población de textos que son objeto de estudio, reduciéndose el error típico de la estimación a mayor número de textos analizados. En el caso del análisis cualitativo, se tienen en cuenta los mensajes implícitos de la población de textos a estudiar. De tal manera, que lo que se busca no es sólo poder interpretar lo que en efecto se manifiesta, sino el contenido oculto, latente del mensaje.

Al mismo tiempo, y coincidiendo con Vallés (1999) cuando afirma que “los tres ingredientes metodológicos principales de la investigación social son la documentación, la observación y la conversación” (Vallés, 1999: 119), nuestro análisis va a recurrir a un sistema de triangulación, en el que, además del análisis anterior, se llevarán a cabo otro sistema cuantitativo de recogida de datos, como son las **encuestas**. En este caso, las utilizaremos para acercarnos a las **opiniones de los profesionales de los medios sobre el derecho de rectificación, su puesta en práctica y sus rutinas productivas** en general.

Con esta segunda técnica (otra más dentro del análisis de contenido) lo que se pretende es poder analizar el panorama con amplitud de miras, al mismo tiempo que de la forma más completa posible, reduciendo al máximo la posibilidad de que nuestra interpretación resulte parcial.

La encuesta se erige en la actualidad, según García Ferrando (2000: 167) como “la técnica de investigación social más utilizada en el campo de la sociología empírica y aplicada”. Se viene a definir como la “investigación social realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población” (García Ferrando, 2000: 167).

De otro lado, la encuesta es muy útil por ser “una de las escasas técnicas disponibles para el estudio de las actitudes, valores, creencias y motivos”; también “[...] pueden adaptarse para obtener información generalizable de casi cualquier grupo de población” y “[...] permiten recuperar información sobre hechos pasados de los entrevistados como, por ejemplo, su conducta en épocas anteriores, experiencias de niñez...” (García Ferrando, 2000: 73). A estas tres ventajas, según este investigador, se une una cuarta: su gran capacidad para estandarizar los datos, con la consiguiente facilidad para su análisis estadístico y la obtención de información. En definitiva, “la encuesta es la representante por excelencia de las técnicas de análisis social” (López, 1998: 33).

No hay que olvidar, sin embargo, que la encuesta consta también de un carácter manipulativo y propagandístico que ha provocado que se extienda en demasía en cualquier ámbito.

Tomando en cuenta la opinión de García Ferrando (2000), que considera que “el método más fiable y empleado de entrevista en las encuestas es la

entrevista estandarizada por medio de cuestionario”, nos decantaremos por esta opción. Gracias al cuestionario, podremos acceder a la información que las personas encuestadas nos brinden sobre hechos relativos a su comportamiento, opiniones, conocimiento y, asimismo, sobre sus actitudes, motivaciones y sentimientos respecto del tema investigado (Sierra, 1992).

Para razonar todo lo anterior recogemos las palabras de Gómez (1999), según el cual uno de los rasgos definitorios del análisis de contenido es que en ellos “es posible una deducción cualitativa o cuantitativa. En este sentido, los documentos pueden ser analizados con el objeto de cuantificar o en la perspectiva de un estudio cualitativo de elementos singulares, o los dos a la vez” (Gómez, 1999: 105). En este sentido, el autor habla de la pertinencia y complementariedad de ambas técnicas cualitativas y cuantitativas. Postura que, de otro lado, defiende la mayor parte de la doctrina. Precisamente es esta doble forma de análisis la que a nuestro entender dará las mayores respuestas posibles a los interrogantes planteados.

A partir de algunos de los teóricos más destacados en el campo de la metodología de la investigación, Gómez (1999) establece **cuatro etapas fundamentales en las técnicas de análisis de contenido**. Las esbozamos a continuación, adecuando los pasos dados:

1. El análisis previo o la lectura de documentos. En este punto de lo que se trata es de la lectura y relectura del material de análisis con el propósito de familiarizarse con el mismo y, de manera progresiva, ir avanzando hasta conseguir establecer las hipótesis, así como las teorías aplicables al estudio. Bardin (1996), define este paso como “lectura flotante” y, generalmente, en este primer punto se selecciona el material documental a analizar, se pueden establecer las hipótesis y objetivos, y también los de indicadores sobre los que se apoyará nuestra teoría final.

En nuestro caso, esta primera lectura y relectura del material viene desde antes incluso de decidirnos a trabajar en esta Tesis Doctoral. Ya en nuestro TFM, que versaba sobre el derecho de rectificación y sus principales características e implicaciones jurídicas, realizamos una interesante y fructífera aproximación al tema y, precisamente, de las conclusiones y futuras líneas de investigación sugeridas en aquél surgió el deseo de abordar un estudio más profundo que diera respuesta a las preguntas que se plantearon.

2. La preparación del material. El desglose de los documentos en unidades de significación que, a su vez, pasarán a ser clasificados en categorías y la agrupación en dichas categorías de las unidades de información extraídas de los documentos que se estudian son las tareas que llevar a cabo en este punto. Es

fundamental asimismo determinar la unidad de cuantificación si hubiere lugar, la de registro y la de enumeración. Esta etapa a su vez se subdivide en tres momentos:

- Constitución del corpus: se trata de la reunión de los materiales objeto de estudio.
- Transcripción del material: con el fin de obtener una herramienta de fácil análisis. Por ejemplo, en el caso de una entrevista, se trataría del momento de su transcripción en un procesador de textos.
- Elección del método de análisis: ya sea la técnica tradicional (desglosar el contenido y agruparlo en temas, categorías y subcategorías), un programa de texto (para llevar a cabo operaciones de collage, desglose y reunificación) o de análisis de contenido (programas novedosos que permiten un análisis útil gracias a un tratamiento de datos bastante rápido).

3. Selección de la unidad de análisis. Hablamos de la unidad de espacio y tiempo que se tomarán como referencia para el análisis de los elementos de investigación. Señala Gómez Mendoza (1999), siguiendo la teoría de Landry (1998), que puede tratarse del número de apariciones por página, por párrafo o por línea, por unidad de tiempo (ejemplo: un discurso, un documental, etc.). En lo relativo a la definición de las unidades de análisis, suele ser uno de los siguientes métodos los empleados para delimitarla: el método inductivo (a partir del curso del análisis), el deductivo (derivándolas de una teoría existente) o una fórmula mixta (donde parte de las categorías se deriva de una teoría y la otra es inducida). La determinación de las reglas de enumeración remite a la manera seleccionada para contar las palabras, frases, temas, etc. Con todo lo anterior se elabora una guía de codificación válida y fiable.

En cuanto a las categorías, los teóricos señalan que deben provenir de dos fuentes principales, de un lado el propio documento y, de otro, de un cierto conocimiento por parte del investigador del campo que se estudia. En este punto nos encontramos con uno de los dilemas del análisis de contenido: reproducir la realidad de la manera más detallada posible, valiéndose de un número amplio de categorías donde cada tema tendrá una frecuencia muy débil; o, por el contrario, decantarse por un número más limitado de categorías más “sólidas”, pero con las que se perderá información esencial.

4. Fase de análisis propiamente dicha. Hablamos de la última pata del análisis, en la que se trata el material —se codifica—, de tal manera que se llega a una representación del contenido estudiado. Gracias a dicha representación, podremos sacar conclusiones del material analizado como un todo.

En el caso concreto de la encuesta y siguiendo a García Ferrando (2000), podemos distinguir entre cuestionarios de preguntas abiertas, de preguntas

cerradas o combinados. Asimismo, es interesante en primer lugar introducir el tema o problema a investigar a la persona entrevistada para, en un segundo punto, plantearle las preguntas más complejas o de mayor carga emocional y, finalmente, intentar acabar con preguntas más “sencillas” con el objeto de dejar una buena sensación para ambas partes. La llamada “secuencia del embudo” (García Ferrando, 2000: 192), que consiste en preguntar desde lo más general a lo más específico, es otra interesante recomendación. Esta forma de trabajo impide que las primeras preguntas del cuestionario condicionen las respuestas a las preguntas siguientes, a la par que suele generar un interés al entrevistado por comunicar más y mejor. Otro punto destacado, es que las preguntas de mayor peso para nuestra investigación estén ampliamente separadas a lo largo del cuestionario.

En nuestro caso, plantearemos preguntas tanto abiertas como cerradas, con el propósito de poder analizar también el discurso más libre y espontáneo de los entrevistados y, de alguna manera, intentar superar la limitación principal del llamado sesgo conservador y su propia estructura formalizada y reductivista (Ortí, 2000). Puede definirse el sesgo conservador como la sobrevaloración “[...] de la adhesión de las masas a los valores dominantes del sistema establecido” (Ortí, 2000: 260). En lo que respecta a la estructura formalizada y reductivista, sobra decir que las preguntas cerradas en encuestas de opinión y actitudes favorecen que éstas últimas se sitúen “en la superficie ideológica de la opinión pública” (Ortí, 2000: 260).

“Como técnica de obtención de datos, la encuesta es la más empleada en las Ciencias Sociales. Este uso generalizado se debe a que gran parte de los datos que pueden confirmar o disconfirmar las hipótesis de la investigación social no son extraíbles de la experimentación o de la observación directa, bien porque no se encuentran al alcance del investigador o bien porque la presencia o percepción de éste pueda distorsionarlos” (Gaitán y Piñuel, 1998: 143). La encuesta se erige en un instrumento descriptivo, así como explicativo. En nuestro caso, **los cuestionarios ayudarán a ilustrar cuál es la percepción que diferentes grupos poblacionales tienen acerca de la eficacia práctica y visibilidad del derecho de rectificación, cuyo estudio se erige como *leitmotiv* de nuestra investigación.**

En el apartado sobre los cuestionarios, explicaremos con más detalle cómo se ha realizado la muestra y selección representativa de la cada población objetivo. Anticipamos en este punto, no obstante, que las encuestas personales en el presente trabajo se componen tanto de preguntas cerradas y preguntas abiertas de respuesta libre. A pesar de que el empleo exclusivo de preguntas cerradas es más recomendable, ya que permite crear un sistema de codificación *a priori* y el análisis de resultados es más rápido y sencillo; las preguntas abiertas ofrecen un valor añadido al que no hemos querido renunciar: el encuestado suministra información (en algunos casos, muy valiosa) de su conocimiento sobre el tema y el entrevistador

puede descubrir aspectos no previstos inicialmente en relación con la cuestión que se investiga (Gaitán y Piñuel, 1998). En este sentido, asegura García Ferrando (2000: 186) que “[...] la pregunta abierta suministra una oportunidad para que el entrevistador compruebe el grado de información o la ambigüedad de los entrevistados, mientras que la pregunta cerrada no lo permite”.

Además, hay que señalar que la entrevista por medio de cuestionario permite más fiabilidad, pero menos espontaneidad, punto débil que creemos importante suavizar con la inclusión de ciertas preguntas abiertas.

García Ferrando (2000) establece una tipología de encuestas, enmarcándose las nuestras en las categorías: entrevistas por medio de cuestionario estandarizado, por escrito e individuales.

Siguiendo las pautas del mismo autor y teniendo en cuenta la doble función de las preguntas en la encuesta —tratar de trasladar los objetivos de esta a los entrevistados con un lenguaje sencillo y ayudar al entrevistador a lograr que la persona encuestada logre un alto nivel de motivación y complete el cuestionario, se ha cuidado especialmente (García Ferrando, 2000: 181-185):

- El lenguaje: sencillo y comprensible; en un tono respetuoso y educado (tratamiento de usted).
- El marco de referencia: muchos de los grupos poblacionales objeto de nuestras encuestas tienen una relación directa con los medios de comunicación y, para aquellos cuya relación es indirecta (asociaciones de consumidores, por ejemplo), se han introducido algunas preguntas concretas para adaptarnos a su ámbito de referencia.
- La relevancia de las preguntas: ya al inicio del cuestionario se pretende crear un clima favorable entre entrevistador y entrevistado explicando a este último la importancia de su participación para lograr un objetivo valioso (participar en una investigación novedosa y trascendente acerca de la figura ético-jurídica del derecho de rectificación).
- El nivel de información: las preguntas de los cuestionarios se adaptan al nivel de información de la población objetivo, de manera que el entrevistado siempre sepa cómo contestar a las preguntas. Con ello, se evitan la confusión y la falta de motivación que ésta puede conllevar.
- Las preguntas deben contener una idea única y no ser condicionantes: es importante que cada pregunta se refiera a una sola idea, para evitar confusión y facilitar la respuesta del entrevistado. Asimismo, se evitan preguntas condicionantes que muestren *la verdad* del entrevistador, su ideología o que cuenten con sobrecarga emocional. En ellas, el entrevistado puede verse forzado a dar una respuesta afirmativa, ya que responder negativamente le supondría un notable esfuerzo a la par que contradecir al entrevistador.

En lo que respecta a la organización del cuestionario se han tomado en cuenta algunas de las pautas que introduce García Ferrando (2000):

- De lo sencillo a lo complejo: las primeras preguntas del cuestionario sirven para ir aproximándonos al tema central, de manera que las preguntas de mayor complejidad y/o exigencia vendrán más tarde y, en lo posible, la última parte del cuestionario debe dedicarse a preguntas de nuevo que puedan responderse de manera más relajada. Esta estructura es definida por algunos autores como la *secuencia del embudo*.
- Al final del cuestionario se localizan las preguntas referentes a la edad, nivel de estudios, centro de trabajo y experiencia profesional del sujeto.
- En general, se ha de organizar el cuestionario para que transcurra de manera clara y lógica, con transiciones suaves entre los distintos temas siempre que sea posible.

El plan de codificación es la última parte del desarrollo de la encuesta y será la que facilite la operación de contabilización de las respuestas para el posterior análisis. En este punto se establecen distintos grupos que permitan clasificar las respuestas obtenidas.

En el caso de las preguntas cerradas de nuestro cuestionario, las categorías establecidas serían: sí, no, no sabe/no contesta. Para las preguntas abiertas seguiremos el procedimiento de transcripción literal de todas las respuestas para poder con posterioridad analizar su contenido y establecer conceptos comunes que permitan también agruparlas y establecer un número manejable de categorías.

3.1.2. Validez y confiabilidad de las técnicas de análisis

Gómez (1999), citando a Landry (1998) establece que no existe ningún esquema o modelo de análisis válido en sí mismo, sino que dicho criterio viene dado por la coherencia interna y, por ende, exhaustividad, del propio modelo con relación a los elementos que lo componen. Latiesa (2000) se manifiesta en un sentido similar al determinar que ningún método de observación está libre de sesgos. Sin embargo, se muestra convencida y pone el énfasis en que la gran mayoría de errores pueden superarse gracias “al seguimiento exhaustivo en todos los momentos de la investigación” (Latiesa, 2000: 415).

La validez “[...] hace referencia a que el procedimiento utilizado mida lo que realmente pretende medir y la fiabilidad hace referencia a la propiedad del instrumento que produce los mismos resultados en diferentes pruebas” (Latiesa,

2000: 417). Para que lo entendamos con un sencillo ejemplo, la validez de un esquema que trata de captar la tristeza dependerá de si obtenemos de nuestra medida precisamente la tristeza y no otra cosa. Por su parte, la fiabilidad de un procedimiento de medida dependerá de que las medidas de un fenómeno den resultados similares. La constancia en la medición es, para algunos autores, el “principio más general e importante del desarrollo de la observación científica” (Latiesa, 2000: 417).

Si bien la fiabilidad es, en esencia, un asunto empírico, al ocuparse del grado de consistencia de los resultados obtenidos al repetir las medidas, la validez está más orientada teóricamente, ya que contesta a la pregunta: ¿válido para qué propósito? (Latiesa, 2000).

Cabe señalar antes de concluir este apartado, que los análisis de validez y fiabilidad están estrechamente vinculados con las técnicas cuantitativas, en concreto, con la encuesta. Esto mismo se explica porque en este ámbito siempre ha existido una constante preocupación por el control y evaluación de los errores. En los análisis cualitativos, por contra, se asume en primer término mayor subjetivismo y la máxima de que no existen modelos analíticos ni definidos ni comparables (Latiesa, 2000).

En el caso del análisis de contenido y haciendo referencia a distintos teóricos en el campo de la metodología de la investigación (Bardin, 1986; Landry, 1998; Mayer y Quellet, 1991), señala Gómez (1999) que hay que respetar cinco reglas para garantizar tanto validez como confiabilidad. Éstas son:

- **Exhaustividad:** asegurarse de que las categorías establecidas permiten clasificar el material recogido.
- **Representatividad:** se garantiza siempre y cuando el material se presta para efectuar el análisis sobre la muestra.
- **Homogeneidad:** los documentos elegidos deben ser homogéneos, esto es, escogidos en función de criterios precisos; hablamos en este punto de un mismo principio de clasificación a la hora de escoger el material.
- **Pertinencia:** los documentos escogidos deben corresponder al objetivo del análisis. Las categorías son pertinentes cuando posibilitan el estudio del material obtenido a través de las preguntas y del marco de análisis seleccionados.
- **Univocación:** cada categoría tiene un único y mismo sentido para todos los investigadores.

3.1.3. Objetivos y puesta en práctica

Así, tras analizar en profundidad, a partir de los objetivos de la investigación y la bibliografía consultada, cuál sería la metodología más pertinente en nuestro caso y con el fin de abordar la realidad del derecho de rectificación con todas sus aristas, hemos determinado:

1. Emplearemos **el análisis cuantitativo para dar respuesta a aquellos aspectos de la realidad que investigamos que pueden traducirse fácilmente en parámetros medibles objetivamente**. Por ejemplo: número de escritos de rectificación publicados en cada diario objeto de estudio, sección en la que se publican, extensión de los mismos, referencia o no a la LODR, etc. Igualmente, se llevan a cabo cuestionarios a profesionales y *Defensores* del lector, además de representantes de asociaciones de prensa y de organizaciones de usuarios y consumidores, que puedan clarificar el estado de la cuestión y cuyos resultados puedan traducirse asimismo en parámetros numéricos. Ejemplos de este caso serían las respuestas a preguntas como: ¿Conoce usted la figura del derecho de rectificación?, ¿cree oportuna su existencia?, ¿considera que es una figura conocida por los periodistas?, ¿considera que es una figura conocida por los periodistas?, ¿cree oportuno que los escritos de rectificación se publiquen en la sección de *Cartas al Director*?, ¿considera que la prensa diaria española publica las rectificaciones con la debida diligencia?, etc.

Gracias a dichas encuestas pretendemos superar una de las claras limitaciones del análisis de contenido cuantitativo, que no es otra que el estudio en exclusiva del contenido manifiesto del lenguaje dejando de lado el estudio del contenido latente del mensaje a analizar.

2. Nos serviremos de la observación directa para apoyar/refutar algunas de las conclusiones iniciales obtenidas en el paso anterior. El objetivo es obtener, además de datos manifiestamente medibles y extrapolables, respuesta a los porqués que se plantean en la investigación, que resulta primordialmente descriptiva. En todo ello es fundamental la capacidad para moldear el tipo de análisis empleado a nuestras necesidades, algo que resulta obvio debido a que ninguna metodología de investigación está estrictamente encorsetada.

3. Para finalizar, nuestra capacidad interpretativa de los resultados obtenidos, a la par que el componente teórico que los respalda, serán cruciales en el desarrollo de las conclusiones del presente trabajo.

3.2. Marco del trabajo de campo

3.2.1. Diseño de la investigación. Material y método

La investigación toma como punto de partida hasta tres partes diferenciadas, sobre las que inicialmente se trabaja por separado, aunque siempre focalizando su desarrollo e intencionalidad en el conjunto de la investigación. Esto es, que las distintas partes aportan, entre ellas y al conjunto final, información muy valiosa.

3.2.1.2. Rectificación en la prensa española (1984-2017). Selección de la muestra

En lo relativo a la selección y el tamaño de la muestra, se han escogido todos los escritos de rectificación publicados en los cuatro diarios españoles de mayor tirada en papel y/o mayor número de lectores en su versión digital; por este orden, *El País*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *Abc*. El periodo seleccionado abarca desde 1984 hasta 2017. Concretamente, se ha establecido como fecha de inicio el día en que la LO 2/1984, reguladora del derecho de rectificación se publicó en el Boletín Oficial del Estado: el 27 de marzo de 1984. La fecha final coincide con el fin de 2017 (31-12-2017). En este último caso, se ha tenido en cuenta que, para la fecha de presentación de este trabajo, era muy posible que el año 2018 no hubiera acabado, por lo que se decidió establecer 2017 como fecha límite.

Por lo que se refiere al instrumento, se han elaborado varias tablas de recogida de datos, con distintas variables: número de rectificaciones publicadas, sección en la que aparecen, título, acompañamiento o no de fotografía y/o recursos gráficos, etc., así como otros aspectos de contenido ligados a las demandas jurídicas para la práctica del derecho y a los códigos deontológicos.

Los pasos para llevar a cabo la recogida de material para su posterior análisis se detallan a continuación:

1. Antes de adentrarnos en la búsqueda y recopilación de material, se ha establecido el periodo exacto a analizar.
2. En segundo lugar, se ha realizado un trabajo de documentación para localizar las distintas fuentes donde se podía localizar el material objeto de análisis (*corpus*). En este sentido, finalmente se han empleado los recursos de las hemerotecas digitales que los mismos diarios (*El País*, *El Mundo*, *Abc* y *La Vanguardia*) ofrecen en su dominio digital, además de las hemerotecas de *Kiosko* y *Más* (para *El País*) y *Orbyt* (para *Abc*) y el portal online *MyNews* que pone a disposición la página web de la biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid. Asimismo, parte del

material se ha consultado en la sala de microfilmado de la Hemeroteca Municipal Conde Duque en Madrid. Del mismo modo, hemos tenido que acudir a la ayuda de los departamentos de documentación de *El País* y de *El Mundo*, que amablemente nos han atendido y nos han facilitado mediante correo electrónico peticiones precisas.

3. En la búsqueda de material en las hemerotecas digitales se han empleado hasta cinco palabras y/o conceptos clave: “rectificación”, “aclaración”, “puntualización”, “réplica” y “respuesta”. El operador *booleano* empleado fue un OR inclusivo, con el propósito de poder extraer la mayor cantidad de información posible. A partir de la introducción de estos datos, además del rango de fechas, han aparecido los resultados de búsqueda ordenados por coincidencia/relevancia. Entendemos que este orden (coincidencia/relevancia) es más importante que el relativo a la fecha a efectos de facilitar la localización del material, ya que las búsquedas desprenden una cantidad abrumadora de entradas, que ha habido que leer y seleccionar/descartar una por una. Con el objetivo de que el análisis sea lo más completo posible, se ha ordenado la búsqueda en todas las ediciones del diario (y no sólo la conocida como *1ª edición* o *edición nacional*), por lo que —como veremos más adelante en las tablas que muestran los resultados— hay bastantes escritos de rectificación publicados en las ediciones que los mismos diarios publican en otras regiones).
4. Tras la lectura detallada y la selección de todos los escritos de rectificación que forman el *corpus* en esta parte de la investigación, se ha guardado todo el material. A partir de este punto, se han establecido las categorías/variables con las que organizar las fichas de contenido para, posteriormente, llevar a cabo el análisis cuantitativo. Se ha considerado que, después de la tarea de lectura detallada y de selección/descarte, sería mucho más fácil detectar cuáles son los aspectos más destacados de los escritos de rectificación, así como del contexto en el que se enmarcan. De este modo, se han establecido dos fichas de contenido en paralelo que emplean estas categorías o variables:
 - **Primera ficha de contenido:** sección en la que aparecen (cartas al director u otras secciones), extensión que ocupan, si hay o no referencia explícita a la LO 2/84, si son reproducidos de manera íntegra por el periódico o no, cómo son titulados, si defienden el buen nombre de una persona física, jurídica o de ambas; y si el diario las presenta —o no— en el mismo formato que la información noticiosa.

Se añaden a estas categorías de base éstas otras: si la publicación de los escritos ha sido ordenada por el juez, si vierten cierta crítica o comentario (opinión) en contra el periódico, si los escritos de rectificación son suscritos por más de una persona, si han sido enviados a través de la representación de un abogado, si se dirigen contra un dato o datos publicados en el periódico pero cuya fuente de origen es un tercero (por ejemplo, una agencia de noticias); si en el mismo escrito se hace referencia a varias noticias que se desea rectificar, si una información genera más de un escrito de rectificación, si se incluyen tablas y/o gráficos, si se incluyen o se hace referencia a fotos o pies de foto, si se hace referencia a fe de errores, si no se hace referencia a qué es lo que se quiere rectificar, si se exige rectificar cómo se publicó una rectificación inicial del mismo autor, si se exige rectificar los errores en la publicación de un artículo o información cuyo autor es el firmante.

- **Segunda ficha de contenido:** en esta parte se han tomado como referencia algunos de los datos anteriores para destacar los resultados, aunque, en esta ocasión, por años. De esta manera se han cuantificado el número de rectificaciones por año, con el propósito de presentar los datos en una gráfica que muestre, a su vez, la evolución de los escritos de rectificación. Las variables empleadas en este caso han sido si existe o no referencia expresa a la LO 2/84, cómo son tituladas y, además, cuál es la terminología empleada en los escritos para pedir la rectificación (rectificación, puntualización, aclaración, precisiones, corrección de error, matización, réplica o desmentido).

5. El trabajo de búsqueda y análisis se ha extendido desde julio de 2017 hasta agosto de 2018.

6. Los problemas más destacados en esta fase de búsqueda, recopilación y análisis del material han sido principalmente:

- Las hemerotecas digitales de *El País* y *El Mundo* no cuentan con todo el material digitalizado. En el caso de *El País*, en su hemeroteca digital es posible consultar (con buscador booleano) desde 2006 hasta la actualidad. En la hemeroteca de *MyNews* se han localizado las entradas desde 1996 hasta 2006, inclusive. El material fechado entre 1984 y 1996 ha habido que solicitarlo al Departamento de documentación del periódico para su posterior contraste en la Hemeroteca Municipal de Madrid. En la

hemeroteca digital del diario *El Mundo* puede consultarse desde 2002 hasta la actualidad. El material desde 1996 hasta 2002 ha podido encontrarse gracias al buscador de *MyNews*; pero para la búsqueda entre 1989 y 1996 ha habido que recurrir a la ayuda del Departamento de documentación de ese diario, así como a la Hemeroteca Municipal de Madrid. En las hemerotecas de *Abc* y *La Vanguardia*, por contra, sí se han podido analizar todos los resultados directamente, sin necesidad de acudir a otras fuentes.

- El diario *El Mundo* empezó a publicarse el 23 de octubre de 1989, por lo que en este periódico hay un periodo superior a cinco años (enero de 1984-octubre de 1989) inexistente y, por tanto, no analizable.
- El número de entradas en cada una de las búsquedas ha sido muy alto. Por poner varios ejemplos, la búsqueda por palabra “rectificación” en la hemeroteca de *El País* (periodo de 2006 a 2017) arroja 3.115 resultados, en *La Vanguardia* (1984-2017) 3.927 y en *Abc* (1984-2017) los resultados han sido 13.054.
- Sin embargo, también ha ocurrido que, al buscar en distintos días, el número de entradas arrojadas ha sido distinto. Algo que se explica por la duplicidad de resultados, que ha sido también una constante a lo largo de esta parte de la investigación. El que sigue es un ejemplo muy gráfico de lo que se explica: la búsqueda en el operador *booleano* de *El Mundo* para el periodo 2002-2017 arroja 600 resultados visibles de un total de 1.406.
- Como podremos comprobar más adelante, en muchas ocasiones los diarios publican rectificaciones de manera “encubierta”. Esto es, sin identificar en el título que el escrito en concreto se trata de una rectificación, aclaración o puntualización. Es decir, que no titulan adecuadamente los escritos de rectificación. A ello se une que, en algunas ocasiones, el ciudadano que hace uso de ese derecho no emplea una terminología clara en el cuerpo del texto ni en el título de su escrito (en el caso de que lo ponga y que el diario lo respete a la hora de publicarlo). Todo ello ha complicado y retardado la detección de los escritos de rectificación, debido a que este tipo de entradas han obligado a una lectura mucho más pormenorizada.

3.2.1.3. Cuestionarios de opinión a directivos, ombudsman, asociaciones de prensa y asociaciones de consumidores

Como complemento al análisis cuantitativo de los escritos de rectificación, se ha considerado imprescindible trabajar con cuestionarios de opinión a profesionales. El propósito es que éstos arrojen luz acerca de cuál es la percepción que se tiene sobre el derecho de rectificación y si se trata de una figura que se pone en práctica, que es conocida y valorada; o, por el contrario, *cuasi* invisible y denostada. En definitiva, se busca demostrar principalmente si la legislación y los códigos de autorregulación y deontología profesional son suficientes para el conocimiento y puesta en práctica de este derecho o hay que plantear otras alternativas en pos de garantizar su efectividad.

Para llevar a cabo estos cuestionarios el primer paso fue plantearnos a qué tipo de grupos íbamos a dirigirlos. Finalmente se estableció que serían cuatro los grupos objetivo: defensores del lector, directores/subdirectores de diarios, asociaciones de prensa y asociaciones de consumidores y de usuarios.

Parece claro que, tanto la figura del defensor del lector u *ombudsman*, como la del máximo responsable editorial de los diarios deben ser referentes en este sentido, ya que se trata de los profesionales que más de cerca conviven con el derecho de rectificación dentro de los medios. En el caso de las asociaciones de prensa consideramos que también desempeñan una labor fundamental: tanto en la parte divulgativa como en la de denuncia con respecto a la protección de los derechos de los profesionales de la comunicación, el cumplimiento o la vigilancia de la deontología profesional y un largo etcétera.

En un primer momento se pensó incluir como tercer grupo a los lectores, pero encontramos varias dificultades: de un lado, la gran abstracción que implica el propio concepto de “lectores”, además de la imposibilidad de abarcar un número significativo de respuestas en el tiempo material con el que contábamos. Un tercer problema que se planteó y que está asociado al anterior es la gran dificultad que supone seleccionar la población y, por ende, conseguir que sea representativa y cuyos resultados de respuesta puedan extrapolarse fácilmente. A eso se añade, además, la complicación de no poder ni querer contar dentro de esa población con personas del entorno familiar, laboral o personal y, por extensión, de la dificultad que supone el acceso a los datos personales en virtud de la *Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal*.

Este obstáculo en el acceso más o menos directo a la opinión de los lectores hemos intentado solventarlo incluyendo un cuarto grupo de población en el cuestionario: las asociaciones de consumidores. Este tipo de organizaciones suponen, por lo general, un medio de canalización de las quejas de los usuarios con respecto a las empresas públicas o privadas. En la mayoría de los casos

ofrecen asesoramiento e, incluso, protección legal de sus derechos y su labor sirve ciertamente de bisagra entre ambas partes.

La *Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios* define a las figuras del consumidor y usuario como “las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial” (art. 1.3 LGDCU). Dentro de esta amplia definición, pues, tienen cabida los lectores, oyentes o telespectadores de cualesquiera medios de comunicación. Y éste es el punto donde precisamente nos interesaba adentrarnos aquí: ¿existen y son visibles las quejas de los lectores hacia los medios de comunicación —sobre todo en lo que respecta a la figura de la rectificación— dentro de este contexto? ¿es común que los lectores pidan asesoramiento legal sobre cómo pueden defender este derecho frente a los medios?

Consideramos entonces que, a partir de los resultados de este tercer cuestionario, podríamos obtener datos interesantes no sólo acerca del conocimiento y defensa de este derecho entre los usuarios de medios de comunicación, sino también acerca de la efectividad de esta vía —la de las asociaciones de consumidores— con relación a su efectiva protección.

Con todo y, debido a las dificultades asociadas al diseño de la muestra y su ejecución que detallaremos en el siguiente punto, nos hemos decantado por lo que podríamos denominar “**encuestas cualitativas de calidad**”, en la que preguntaremos directamente a los estamentos profesionales más representativos, los antes señalados: defensores del lector, directores/ subdirectores de diarios, asociaciones de prensa y asociaciones de consumidores y usuarios.

En cuanto a la elección de las preguntas en el cuestionario tipo se buscó principalmente su vinculación con los objetivos generales y específicos de la investigación. Además, se tuvo en cuenta el hilo conductor que representan en este caso las hipótesis de trabajo.

Recordamos que los objetivos generales de la investigación son: evaluar la situación general del derecho de rectificación en la prensa diaria española, comprobar si se trata de una figura común o marginal y si su puesta en práctica es la adecuada; analizar si los manuales de autorregulación contribuyen a la mejora del conocimiento general de esta figura entre los profesionales de los medios y a la puesta en práctica del derecho.

En cuanto a los objetivos específicos, se encuentran: detectar la presencia/ausencia de los escritos de rectificación en los diarios y los manuales de deontológicos y observar qué importancia se le da a esta figura en los últimos; descubrir si los profesionales de la información conocen las verdaderas implicaciones de este derecho, así como las pautas que deben cumplirse para su

práctica efectiva; detectar si las rutinas periodísticas actuales son incompatibles con la realización de este derecho y observar cualquier evidencia acerca de cómo es el acceso del ciudadano a los diarios.

Varias son las hipótesis de las que partimos en la investigación, entre ellas: la escasa presencia real del derecho de rectificación, publicación de los escritos sin tener en cuenta el criterio de relevancia semejante, desconocimiento de esta figura por parte de los lectores y, a veces, por parte de los profesionales, sobre todo por no usarlo; los códigos de autorregulación no detallan los criterios de su adecuada inserción en los periódicos; los periodistas y, sobre todo, los directores de los diarios se muestran reticentes en muchos casos a publicar rectificaciones; lo que se debe precisamente a que asocian rectificación con reprimenda; y, en ocasiones, los diarios yerran al incluir comentarios y/o apostillas acompañando al escrito.

En los siguientes puntos detallaremos cuál es el universo, población y muestra de cada uno de los cuestionarios realizados, así como las preguntas específicas planteadas. Lo que sí han tenido todos en común ha sido el procedimiento previo, que ha empezado con la elaboración de un listado de los cargos de responsabilidad, asociaciones u organizaciones que han formado cada una de las muestras, con el nombre y apellido de la persona en el caso de haberlo localizado y sus datos de contacto —principalmente el número de teléfono o, en su defecto, el correo electrónico—. Para obtener dicho contacto se ha accedido, una a una, a las páginas webs de los diarios en cuestión, las asociaciones de prensa y las asociaciones de consumidores. En algunos casos más difíciles, sobre todo presidentes/as de asociaciones de prensa y *ombudsmen*, el contacto se ha conseguido después de varias llamadas telefónicas y/o intercambio de correos electrónicos.

Una vez elaborada la lista de contactos y con las preguntas ya perfiladas, se tuvo que decidir cuál era la mejor manera de enviar los cuestionarios. Se resolvió que la manera más práctica y profesional de remitirlos sería a través de correo electrónico mediante un enlace web a la aplicación *Survio*, una web gratuita que permite diseñar cuestionarios profesionales y donde los encuestados pueden leer y contestar las preguntas de manera muy sencilla.

Antes de enviar los correos electrónicos, y para asegurarnos un índice de participación lo más alto posible, contactamos por teléfono con los encuestados. En dicha llamada, se les ha explicado en qué consiste el cuestionario, su exclusiva finalidad académica y la importancia de su participación en el mismo. A todos aquellos que accedieron verbalmente, la gran mayoría, se les pidió una dirección de correo para enviar el enlace web al cuestionario.

El proceso de contacto y envío de correos electrónicos se ha extendido desde finales de enero hasta principios de abril de 2018.

A. Responsables de medios (n=20)

El universo del cuestionario a los responsables de medios supone un número finito, pero difícilmente abarcable con arreglo al tiempo y los medios materiales de los que se disponen en la presente investigación. En efecto, el universo abarca a los directores o subdirectores de todos los medios de comunicación.

El primer paso, por tanto, ha sido determinar la población objeto de investigación. Para ello, hemos seleccionado de entre todos los medios a aquellos de los que nos interesa obtener información a efectos de nuestro análisis: los diarios españoles de información general. Recordemos que el presente trabajo se centra en el estudio del derecho de rectificación en la prensa diaria nacional.

Para determinar la muestra o subconjunto dentro de la población, se ha tomado en cuenta el objetivo de “calidad” en los cuestionarios y se ha optado por una muestra no probabilística o dirigida. En estos casos, la selección del subconjunto a estudiar es fruto de un proceso informal y algo arbitrario, pero que nos da la ventaja de poder acotar y escoger los casos más representativos de la población. Su desventaja, por contra, es que no permiten calcular el error estándar de la media o, lo que es lo mismo, cuál es la dispersión que tendría la media de la muestra de valores si siguiéramos tomando nuevas muestras.

De este modo, **se han seleccionado a los máximos responsables de los 20 diarios con mayor tirada** según los datos de la última oleada del *Estudio General de Medios* (en adelante, EGM) en el momento de la selección, que se corresponde con el periodo de febrero a noviembre de 2017:

- *El País*
- *El Mundo*
- *La Vanguardia*
- *La Voz de Galicia*
- *El Periódico*
- *Abc*
- *El Correo*
- *La Nueva España*
- *Heraldo de Aragón*
- *Faro de Vigo*
- *Levante*
- *La Razón*
- *El Diario Vasco*
- *Información Alicante*
- *Última Hora*
- *El Norte de Castilla*

- *La Verdad*
- *Diario de Navarra*
- *El Comercio*
- *Ideal de Andalucía*

En total, se ha obtenido un índice de respuesta del 45%, es decir, de 9 de los 20. Con todos ellos se intentó el contacto telefónico, en la mayor parte de casos con éxito, a pesar de haber tenido que intentarlo una media de entre 2 y 6 veces. Para el resto de los directores que no quisieron o pudieron ponerse al teléfono, el contacto se estableció con su asistente, a través del/ de la cual se hizo llegar el correo electrónico con el cuestionario y toda la información. En los casos más difíciles, donde el contacto telefónico ha resultado imposible, se ha intentado incluso vía redes sociales (*LinkedIn*, *Facebook* o *Twitter*). De todas las personas que contestaron el cuestionario, 7 (es decir, un 77,8%) son los directores del periódico en cuestión y 2 (un 22,2%) desempeñan otros cargos de responsabilidad muy vinculados a la toma de decisiones en cuanto a rectificación: un jefe de edición y un redactor-jefe de Opinión. El cuestionario matriz dirigido a este universo está compuesto de 22 preguntas, además de las relativas al nombre, edad, localidad de residencia, formación académica, empresa para la que trabaja, cargo, antigüedad, experiencia y valoración del cuestionario. Las preguntas matriz se detallan en el siguiente apartado, el relativo a la obtención de resultados.

B. *Ombudsman* (n=8)

En el caso de los defensores del lector, del espectador o de la audiencia, el universo es mucho más limitado. Después de investigar en profundidad qué medios cuentan con esta figura, se ha obtenido un número total de 11. De todos ellos con mucha probabilidad habría que eliminar 3, ya que se ha intentado sin éxito comprobar si siguen en activo y, a lo largo de la investigación, no se ha podido en ningún momento establecer contacto. Se trata de *M21 radio*, *Radio Buñol TV* y *Kit Radio*.

Por ende, el número de defensores que podrían contestar nuestro cuestionario (población objeto) se reduce a los que trabajan para los siguientes medios que, además, solamente en cuatro casos se corresponden con diarios de difusión nacional:

- *El País*
- *La Vanguardia*
- *La Voz de Galicia*
- *eldiario.es*
- *El Punt Avui*

- Canal Sur Radio y Tv
- Corporación Catalana de Medios Audiovisuales
- RTVE
- 13tv
- Torremolinos Tv

Finalmente, de esas 8 personas, han contestado 5 al cuestionario, con lo que el índice de respuesta alcanza el 62,5%. Con todos ellos se intentó el contacto telefónico en varias ocasiones y, en el caso de los que no quisieron/pudieron contestar, se les hizo llegar el correo electrónico con el cuestionario y la información de manera directa o a través de su asistente o de un compañero. Las veces que el contacto telefónico era imposible, se ha intentado incluso por otras vías, como, por ejemplo, a través de *LinkedIn*, *Facebook* o *Twitter* en los casos en que estas personas tenían una cuenta en cualesquiera de las mencionadas redes sociales. El cuestionario matriz dirigido a este grupo es exactamente el mismo que el que se preparó para los directores o subdirectores de los diarios, por lo que está compuesto de 22 preguntas (además de las relativas al nombre, edad, localidad de residencia, formación académica, empresa para la que trabaja, cargo, antigüedad, experiencia y valoración del cuestionario) que se detallan en el siguiente apartado.

C. Asociaciones de prensa (n=68)

En el caso de las asociaciones de prensa, el universo contempla todas aquellas organizaciones profesionales que trabajan en España. En este caso, y hasta donde entendemos, se corresponden exactamente con la población objeto de estudio. Hablamos de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), junto con sus 18 asociaciones vinculadas y sus 49 asociaciones federadas (dato que recoge la propia FAPE en su sitio web). Son, por tanto, un total de 68:

- Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)
- Asociación Española de Periodistas Deportivos (AEPDE)
- Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANISALUD)
- Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGPTV)
- Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE)
- Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV)
- Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIPE)
- Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP)
- Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET)
- Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA)

- Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España (APAE)
- Asociación de Periodistas de Belleza (APB)
- Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR)
- Unión de Periodistas (UP)
- Asociación de Mujeres Periodistas del Mediterráneo (MPM)
- Asociación Española de Comunicación Científica (AECC)
- Asociación de Periodistas Venezolanos en España (Venezuelan Press)
- Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE)
- Asociación de Periodistas de Investigación (API)
- Asociación de Periodistas de Albacete (APAB)
- Asociación de la Prensa de Alicante (APA)
- Asociación de la Prensa de Almería (APAL)
- Asociación de Periodistas de Aragón (APA)
- Asociación de la Prensa de Ávila (APA)
- Asociación de la Prensa de Badajoz (APB)
- Asociación de la Prensa de Burgos (APBU)
- Asociación de Periodistas de Cáceres (APC)
- Asociación de la Prensa de Cádiz (APC)
- Asociación de la Prensa de Campo de Gibraltar (APCG)
- Asociación de la Prensa de Cantabria (APC)
- Asociación de Periodistas de Castellón (APC)
- Asociación de la Prensa de Ceuta
- Asociación de Periodistas de Ciudad Real (APCR)
- Asociación de la Prensa de Córdoba (Asprencor)
- Asociación de la Prensa de Cuenca (APC)
- Asociación de la Prensa de Granada (APG)
- Asociación de la Prensa de Guadalajara (APG)
- Asociación de la Prensa de Huelva (APH)
- Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB)
- Asociación de la Prensa de Jaén (APJ)
- Asociación de la Prensa de Jerez de la Frontera (APJ)
- Asociación de la Prensa de La Coruña (APC)
- Asociación de la Prensa de La Rioja (APLR)
- Asociación de la Prensa de Lanzarote-Fuerteventura
- Asociación de la Prensa de Las Palmas (APLP)
- Asociación de Periodistas de León (APL)
- Asociación de la Prensa de Lugo (APL)
- Asociación de la Prensa de Madrid (APM)
- Asociación de la Prensa de Málaga (APM)
- Asociación de la Prensa de Melilla (APM)

- Asociación de la Prensa de Mérida (APM)
- Colegio de Periodistas de la Región de Murcia (CPRM)
- Asociación de Periodistas de Navarra (APN)
- Asociación de la Prensa de Oviedo (APO)
- Asociación Vasca de Periodistas-Euskal Kazetarien Elkarte (AVP-EKE)
- Asociación de la Prensa de Palencia
- Asociación Salmantina de Periodistas (ASPE)
- Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife (APT)
- Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela (APSC)
- Asociación de la Prensa de Segovia (APS)
- Asociación de la Prensa de Sevilla (APS)
- Asociación de Profesionales de la Información de Soria (APIS)
- Asociación de Periodistas de Talavera de la Reina (APTA)
- Asociación de Periodistas de Toledo (APTO)
- Unió de Periodistes Valencians (UPV)
- Asociación de la Prensa de Valladolid (APV)
- Asociación de la Prensa de Vigo (APV)
- Asociación de la Prensa de Zamora (APZ)

De este amplio número, **68 asociaciones, un total de 27 contestaron el cuestionario (casi un 40%)**. Como en los casos anteriores, se siguió el procedimiento habitual: contacto telefónico en el caso de ser posible, explicación del funcionamiento y fines del cuestionario y envío del correo electrónico a la dirección aportada por los interesados o, en su caso, sus asistentes. Sólo en el caso de haber sido imposible el contacto telefónico o incluso por otras vías (*LinkedIn, Facebook o Twitter*), se ha mandado el correo electrónico a una dirección vinculada con estas personas o las asociaciones que presiden y que se ha localizado gracias al sitio web oficial.

El problema más importante que hemos sufrido a lo largo del proceso de recogida de datos ha sido precisamente a la hora de acopiar los resultados de este cuestionario. El origen de todo estuvo en la Asociación de la Prensa de Cádiz, que entendió de manera errónea a quién debía ir dirigido este cuestionario y lo rebotó por email a sus afiliados, sin ser esa nuestra intención. El resultado fue de 10 respuestas extra que no podemos contabilizar en el cómputo final, más otras dos (de los representantes de las asociaciones de Lugo y de León) que tampoco pudieron tenerse en cuenta, ya que resultaron entremezcladas con esa decena, sin que fuera posible identificar a la persona que había contestado. En todo momento se ha sido consciente de este hándicap de la aplicación, por lo que, desde el inicio y de manera diaria, se han ido transcribiendo todas las respuestas en un documento *Excel*. En cualquier caso, esto no nos ha servido para salvar el problema con estas

doce respuestas. Por ello, se decidió invalidarlas a efectos de la presente investigación.

En todos los casos se ha intentado que la persona que conteste el cuestionario sea el principal representante de la asociación, esto es, su presidente/a o decano/a. En aquellas ocasiones en las que no ha sido posible acceder al máximo responsable de la misma, se ha hecho llegar el cuestionario al segundo cargo en cuanto a responsabilidad, el/la vicepresidente/a.

El cuestionario enviado a las asociaciones de prensa cuenta con las 22 preguntas del dirigido a los directores de periódicos y los defensores del lector, además de otras dos preguntas adicionales que se ha creído interesante incluir en este punto. Por lo tanto, el cuestionario final consta de 24 preguntas, además de las relativas al nombre, edad, localidad de residencia, formación académica, empresa para la que trabaja, cargo, antigüedad, experiencia y valoración del cuestionario.

D. Asociaciones de consumidores y usuarios (n=14)

El cuarto grupo objeto de investigación a través de sus respuestas a nuestro cuestionario son las asociaciones de consumidores y usuarios de España. Para elaborar la lista del universo, nos servimos de los datos del Ministerio de Sanidad y Consumo (a diciembre de 2017, lista que no había sufrido cambios a noviembre de 2018). De la lista elaborada por el Ministerio, tuvieron que eliminarse varios nombres. El primero es el de la *Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios* (CEACCU), cerrada en marzo de 2017, según informa la propia confederación a través de su perfil de *Twitter*. A este nombre, se unen el de la *Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros* (ADICAE), la *Asociación de Usuarios Financieros* (ASUFIN) y la *Asociación de Usuarios y Consumidores de Servicios Generales* (AUGE), porque todas ellas se centran en exclusiva en la protección del usuario financiero y de banca; y, por último, el del *Defensor del Estudiante* (EDE), ya que después de evaluar el trabajo que realiza se ha determinado que no es trascendente de cara al objetivo de esta parte de la investigación.

Por ello, en total, estas son las asociaciones de consumidores que forman la población objeto en este punto:

- Asociación General de Consumidores (ASGECO)
- Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI)
- Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOOP)
- Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Casa (UNAE)
- Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)

- Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
- Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
- Unión Nacional de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España (UNCCUE)
- FACUA, Consumidores en Acción
- Consumidores en Red (CER)
- Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena (JMM)
- Asociación de Consumidores Damnificados de España (ACDE)
- Asociación Nacional Ágora Ciudadana
- Unión de Consumidores de España

En total, hablamos de los representantes/ presidentes de 14 asociaciones, de los cuales 6 han accedido a responder el cuestionario (casi un 43%). El número de preguntas formuladas a este grupo son menos —solo 5— y más específicas: hay que recordar que los representantes de las asociaciones de consumidores no son periodistas ni tienen por qué tener formación específica en comunicación —aunque muy probablemente sí en Derecho—. En cualquier caso, hemos querido elaborar un cuestionario distinto y centrado en las cuestiones que podían sernos útiles de cara a analizar las respuestas de este grupo. A esas preguntas se unen —como en los casos anteriores— las relativas al nombre, edad, localidad de residencia, formación académica, empresa para la que trabaja, cargo, antigüedad, experiencia y valoración del cuestionario.

4. Resultados

4.1. Rectificación en la prensa española (1984-2017)

4.1.1. Obtención de resultados

4.1.1.1. Resultados individuales por diario

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis cuantitativo de los escritos de rectificación publicados en los diarios y periodo objeto de análisis: *El País*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *Abc* entre el 26 de marzo de 1984 (fecha en la que entra en vigor la LODR) y el 31 de diciembre de 2017.

Para mostrar los resultados se emplean una serie de gráficos que distinguimos por número y diario al que pertenecen. En total, en este apartado, se presentan hasta cuatro gráficos distintos para cada diario (**1**, **2**, **3** y **4**) con el propósito de mostrar los resultados de manera clara y concisa. Al mismo tiempo, se asigna un color a cada uno de los diarios, de manera que *El País* emplea los rojos, *El Mundo* los verdes, *La Vanguardia* los amarillos y *Abc* los azules. El propósito de asociar un color a cada diario no es otro que facilitar la lectura de los gráficos y su ubicación.

En el **gráfico 1** se recogen los resultados del análisis cuantitativo de los escritos de rectificación publicados en el diario en cuestión en el periodo objeto de estudio. Para el mismo, se emplean un total de ocho categorías de análisis:

- Sección, en la que se publica el escrito de rectificación.
- Extensión del escrito de rectificación, donde se establecen siete categorías: cinco de ellas tienen relación con la extensión en relación a la página donde se publican y al número columnas y dos de ellas con la extensión en número de párrafos —en este último caso se trata de rectificaciones a las que hemos podido acceder únicamente a través de la edición web, lo que imposibilita la visualización a modo de columnas como en la versión en papel y sólo permite la medición por párrafos—.
- Referencia o no en el cuerpo del texto a la Ley Orgánica 2/1984, que regula el derecho de rectificación.
- Publicación del escrito de manera literal o, por el contrario, con comentarios y apostillas por parte del diario.
- Título que recibe el escrito de rectificación por parte del diario.

- Pretensión de defensa del honor o buen nombre de una persona física, jurídica o de ambas en el escrito.
- Tratamiento del escrito igual o similar al de una noticia común (titular noticioso y presentación de la información como tal).
- Pequeño grupo de categorías extra que, tras el análisis, hemos considerado pertinente añadir debido a que son parámetros que se repiten de manera recurrente. Éstos últimos son: presencia de gráficos y/o tablas; presencia de fotografía; si se trata de un escrito firmado por más de una persona; si contiene comentarios críticos contra el periódico y/o el periodista que firma la información; si la publicación del escrito viene por orden judicial; si el escrito de rectificación lo envía/firma el abogado en representación de su(s) cliente(s); si el escrito pretende rectificar también o de manera accesoria una foto y/o pie de foto; si lo que se pretende rectificar es una información que el periódico ha publicado pero atribuye a otra fuente —agencia de noticias, un tercero, etc.—; si en el escrito se rectifican varias informaciones; si el escrito tiene su origen en la publicación errónea por parte del diario de un escrito, artículo o pieza informativa cualquiera que firma la persona que desea rectificar.

El **gráfico 2** recoge cómo se autodefinen los escritos de rectificación, esto es, qué terminología emplean para expresar su propósito final (rectificar, puntualizar, aclarar, precisar, poner en evidencia un error, ejercer un derecho que la ley otorga, matizar, replicar, corregir o negar). El objetivo en este punto es apreciar la distinta terminología utilizada —ya avanzamos que, en muchos de los casos, se aprecia un uso de distintos conceptos a modo de sinónimos absolutos— y poder compararla con la que utiliza el diario a la hora de dar título al escrito. Por ejemplo, en muchos casos el diario publica la rectificación bajo un título difuso o que en nada menciona los conceptos de rectificación, aclaración, puntualización, etc., mientras que el autor del escrito sí emplea dichos conceptos para expresar su propósito.

Por su parte, el **gráfico 3** muestra precisamente qué términos emplea el diario en cuestión para titular los escritos de rectificación. En este caso los conceptos empleados de manera más recurrente son: rectificación, puntualización, aclaración, precisiones, respuesta, réplica, nota, matización, contestación, comunicado, error, sin título (los escritos se publican directamente sin ningún título) y resto (el diario titula de manera abstracta, genérica, sin hacer alusión a que lo que viene a continuación es un escrito de rectificación).

El **gráfico 4** muestra el número de rectificaciones publicadas por año. El objetivo en este caso es poder observar aumentos o descensos considerables en ese número y así poder determinar la existencia de periodos con mayor o menor actividad para, en último término, buscar posibles factores que lo expliquen.

EL PAÍS

Gráfico 1. Resultados del análisis cuantitativo de escritos de rectificación

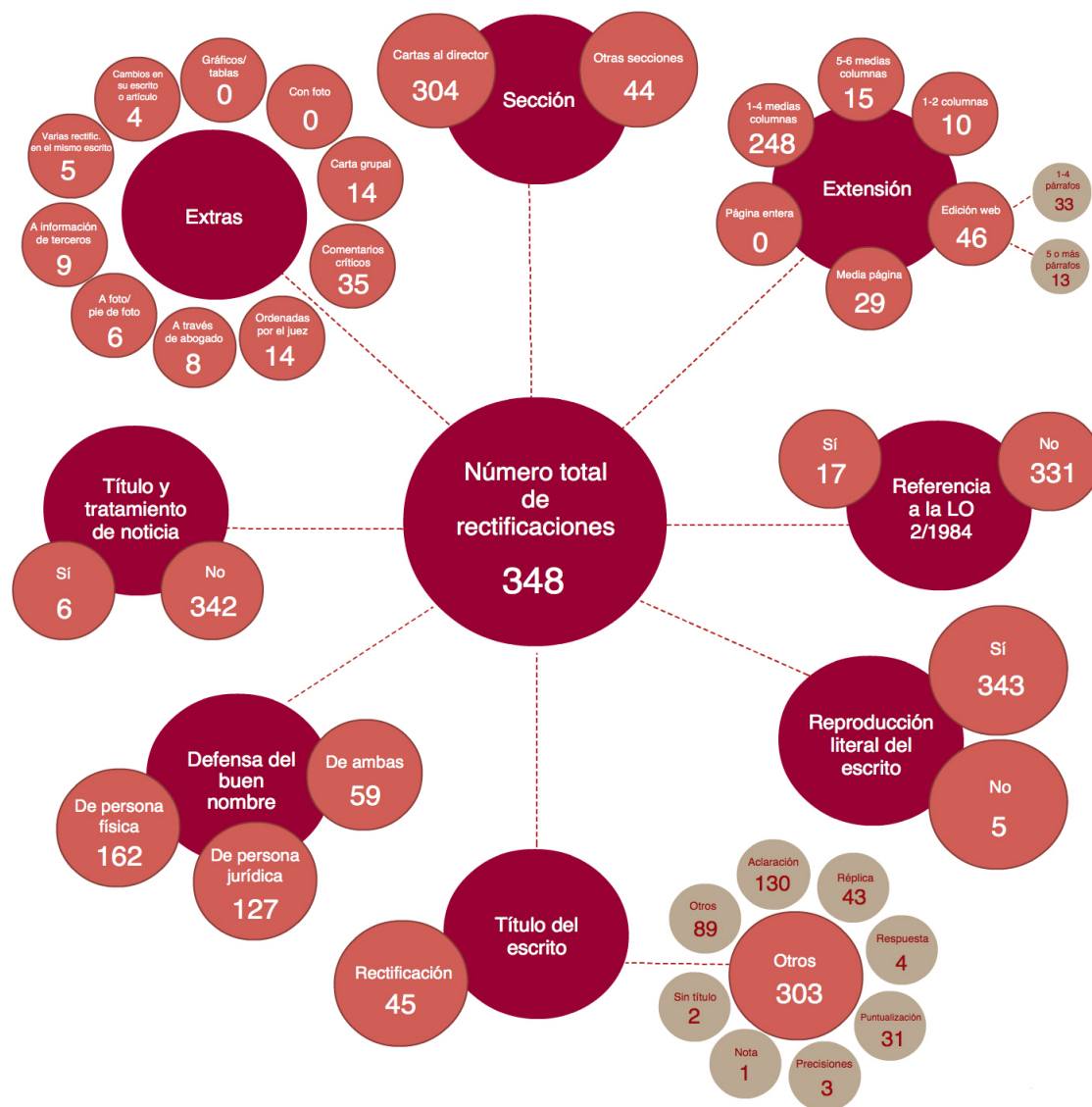


Gráfico 2. Número total de escritos de rectificación publicados en función de cómo se autodefinen

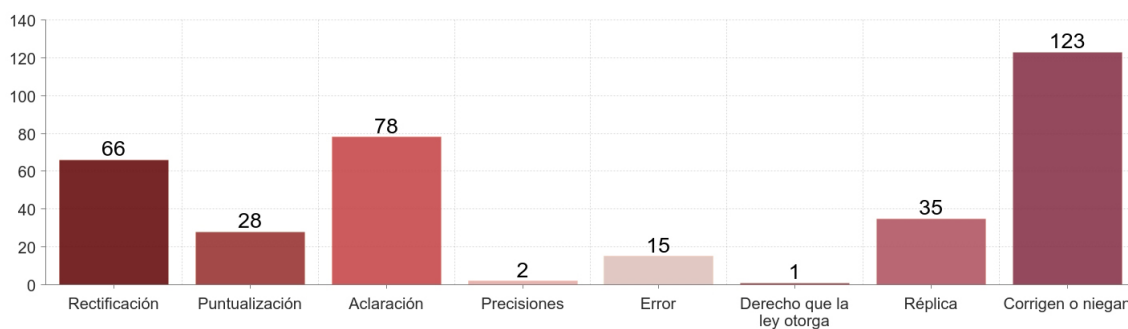


Gráfico 3. Número total de escritos de rectificación publicados en función de cómo los titula el diario

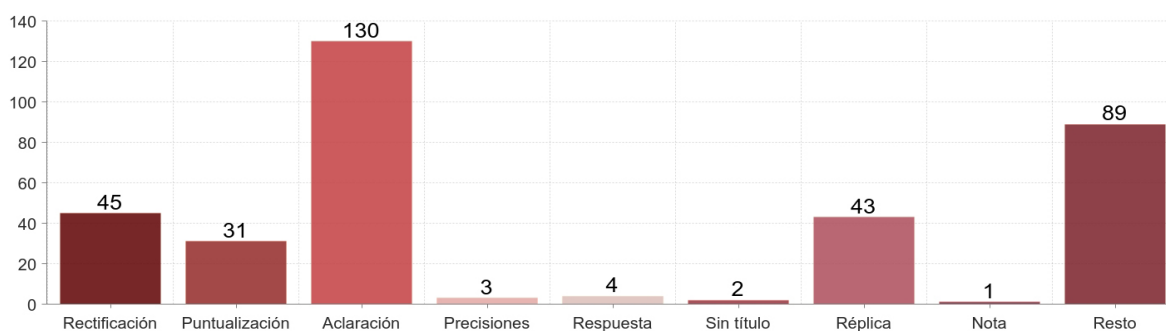
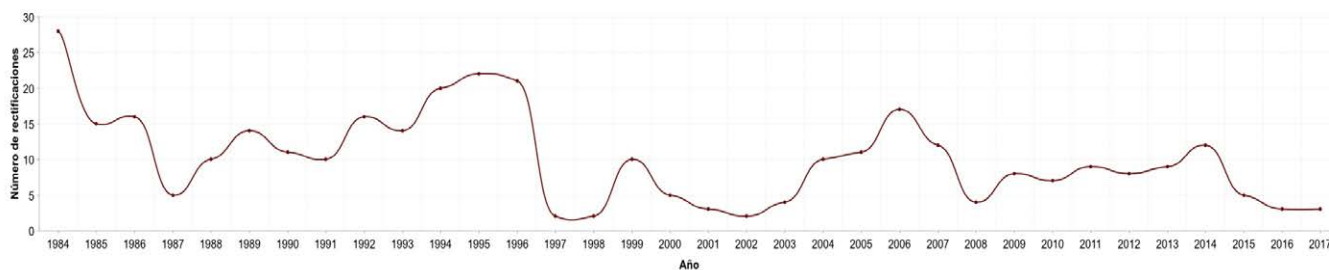


Gráfico 4. Número total de escritos de rectificación publicados por año



EL MUNDO

Gráfico 1. Resultados del análisis cuantitativo de escritos de rectificación

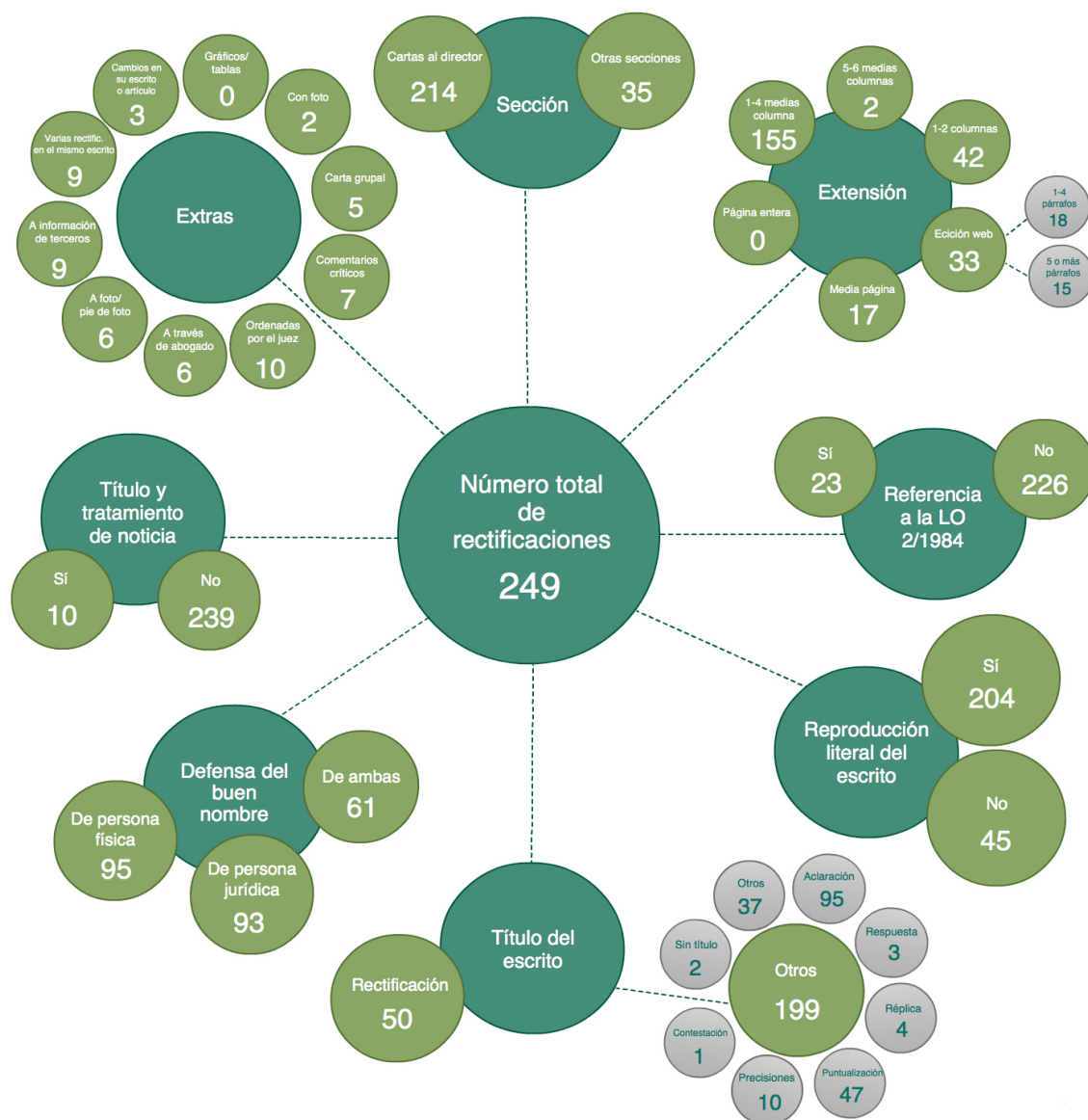


Gráfico 2. Número total de escritos de rectificación publicados en función de cómo se autodefinen

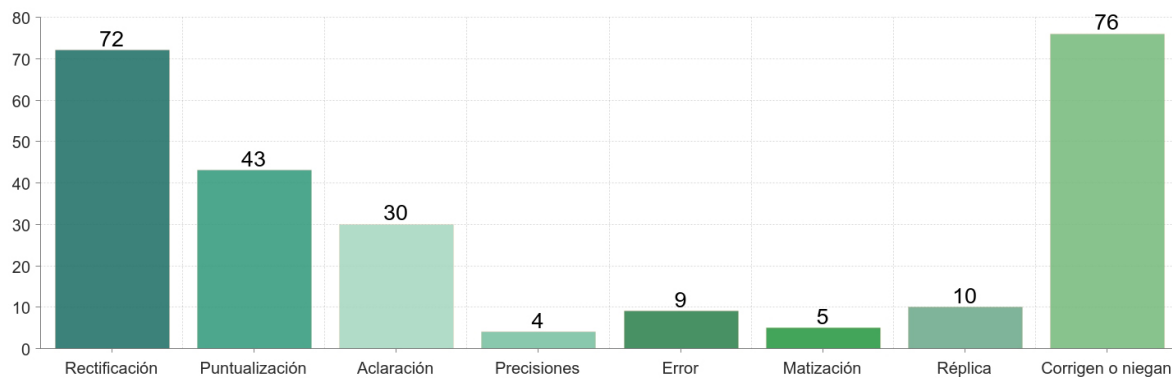


Gráfico 3. Número total de escritos de rectificación publicados en función de cómo los titula el diario

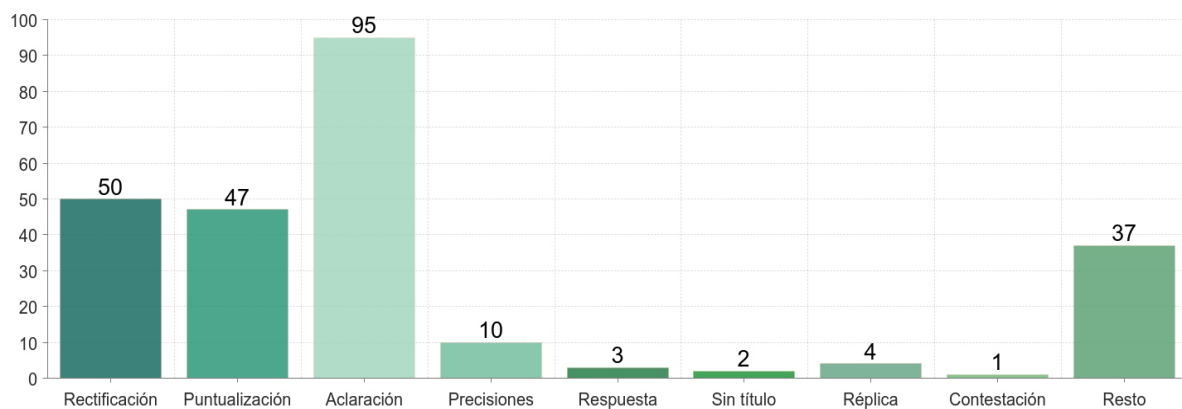
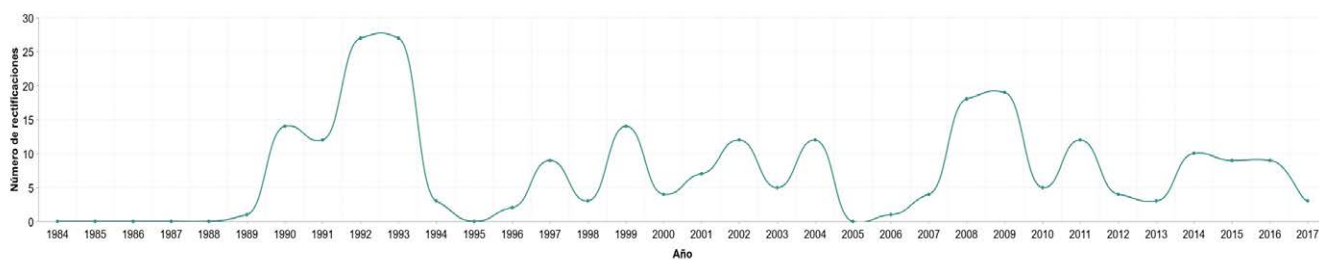


Gráfico 4. Número total de escritos de rectificación publicados por año



LA VANGUARDIA

Gráfico 1. Resultados del análisis cuantitativo de escritos de rectificación

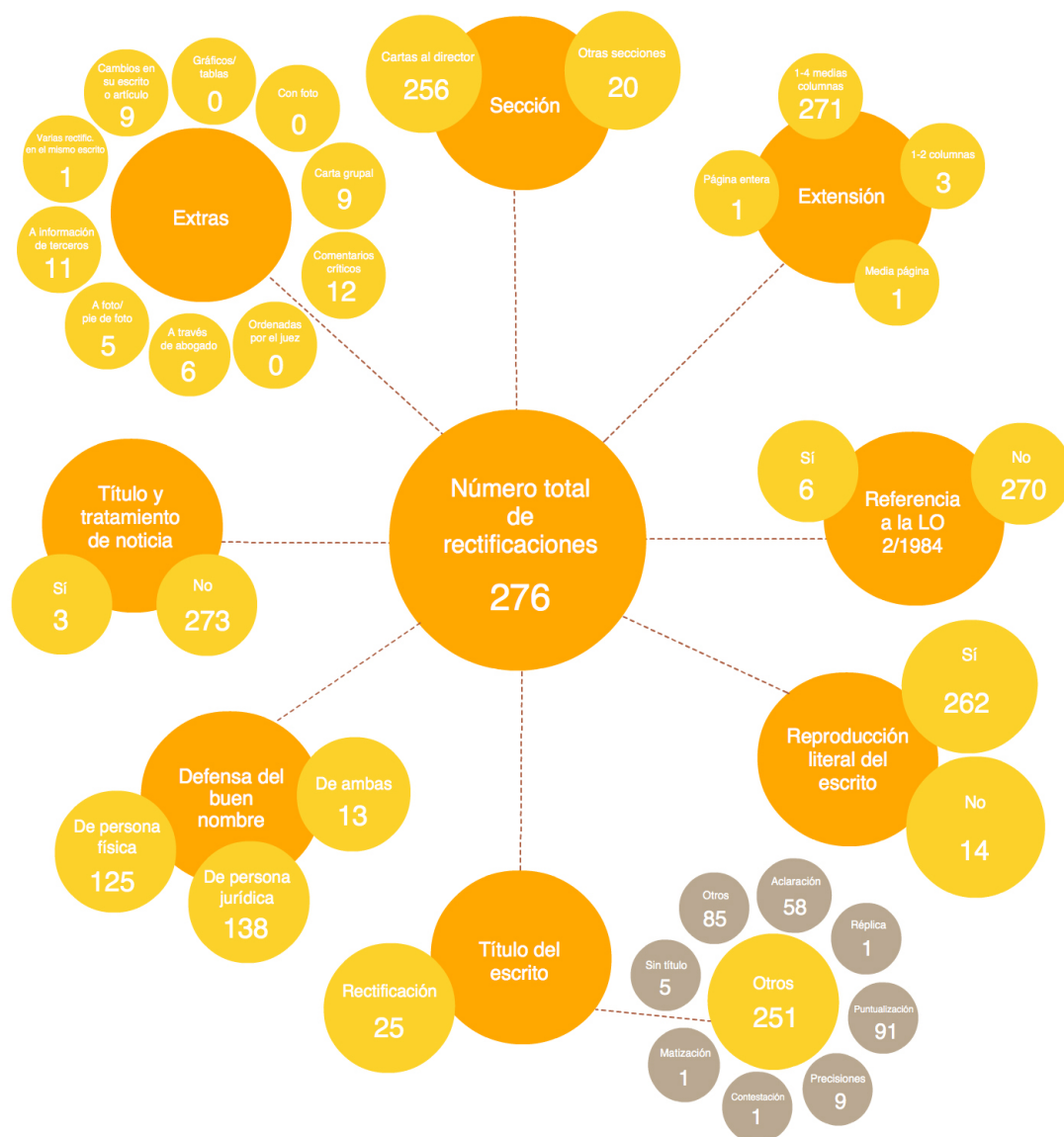


Gráfico 2. Número total de escritos de rectificación publicados en función de cómo se autodefinen

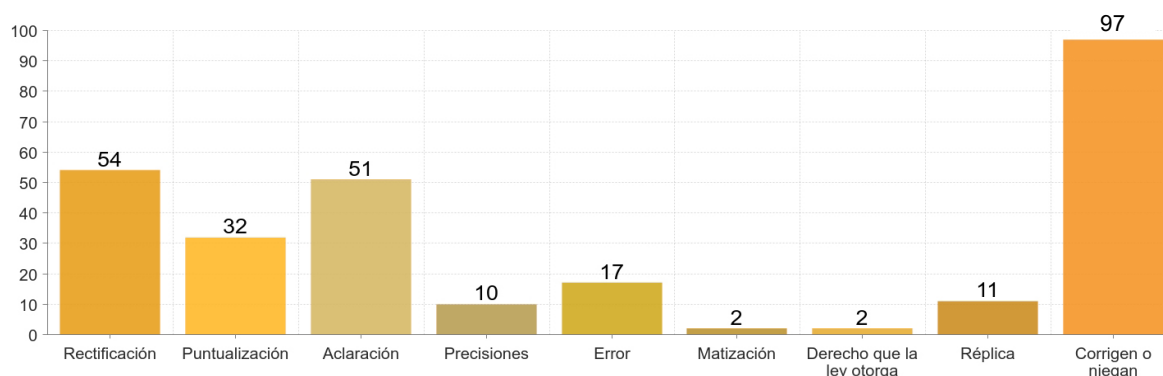


Gráfico 3. Número total de escritos de rectificación publicados en función de cómo los titula el diario

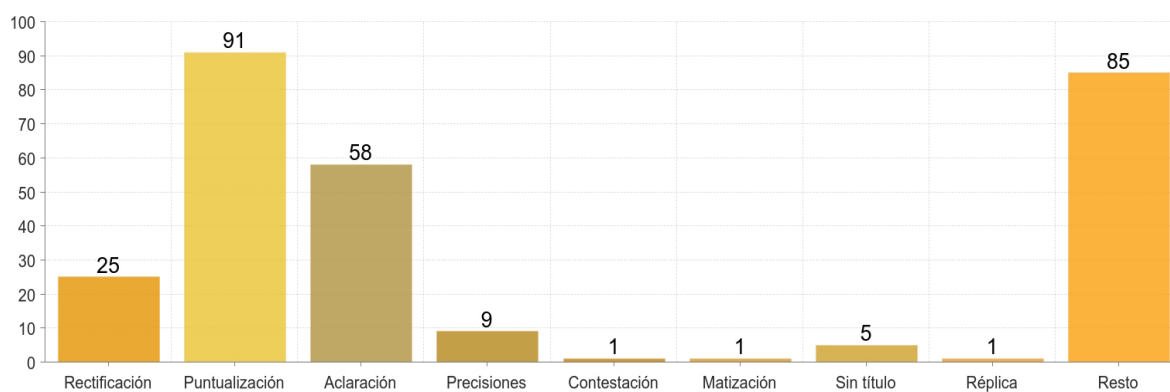
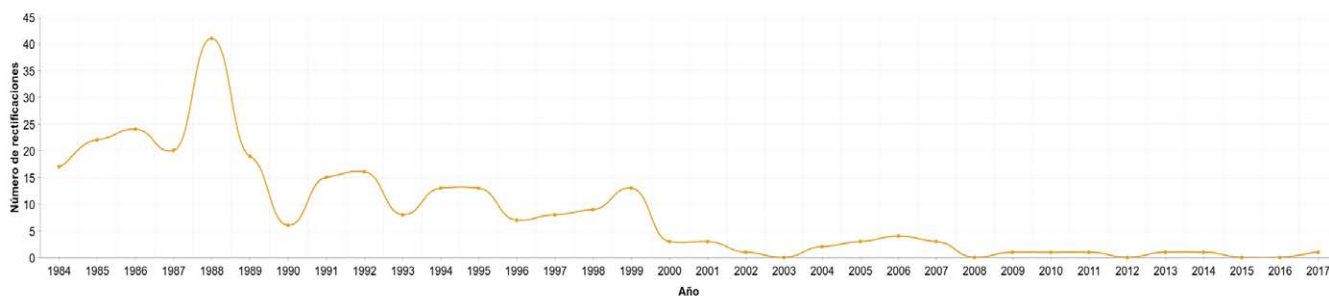


Gráfico 4. Número total de escritos de rectificación publicados por año



ABC

Gráfico 1. Resultados del análisis cuantitativo de escritos de rectificación

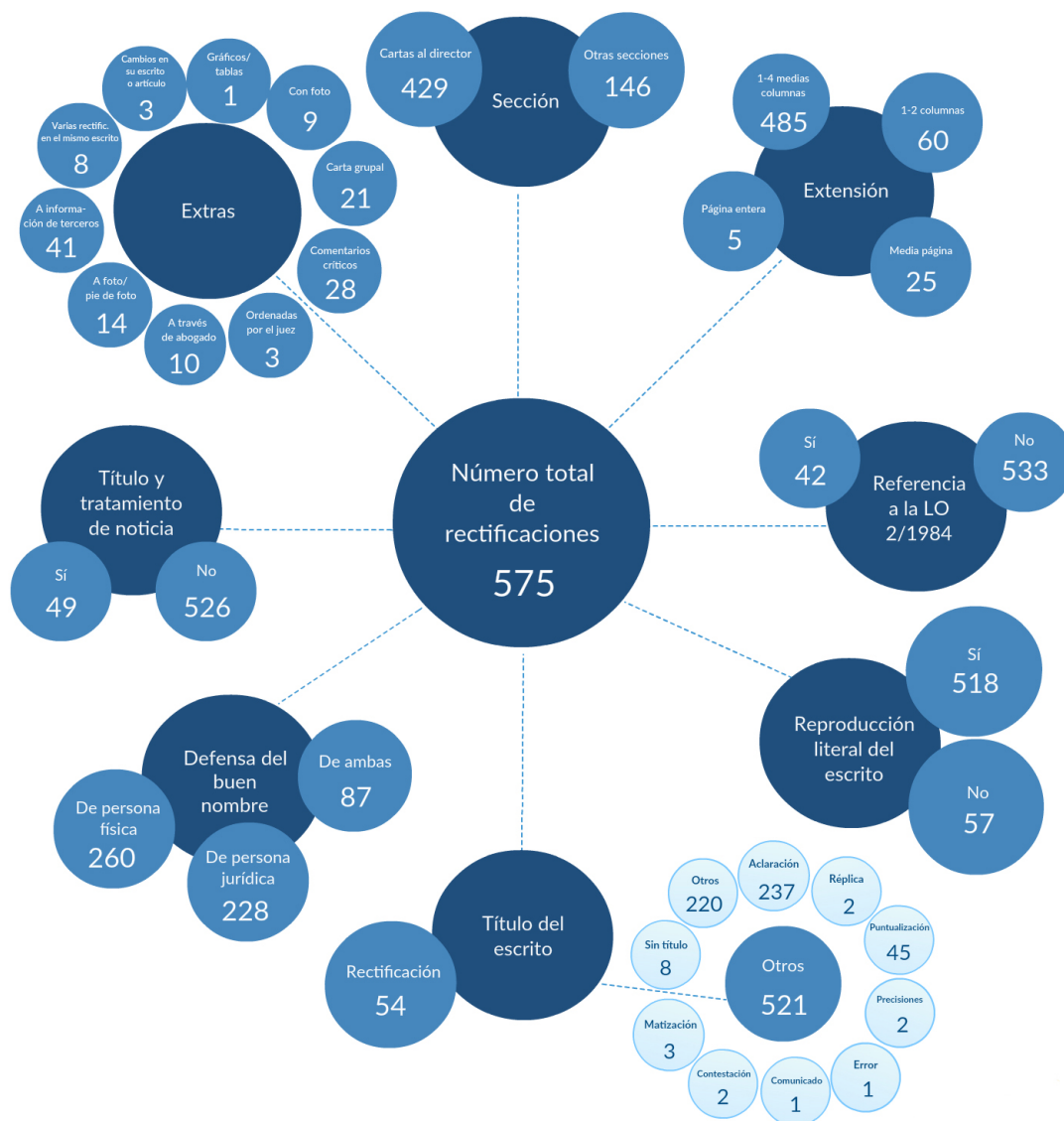


Gráfico 2. Número total de escritos de rectificación publicados en función de cómo se autodefinen

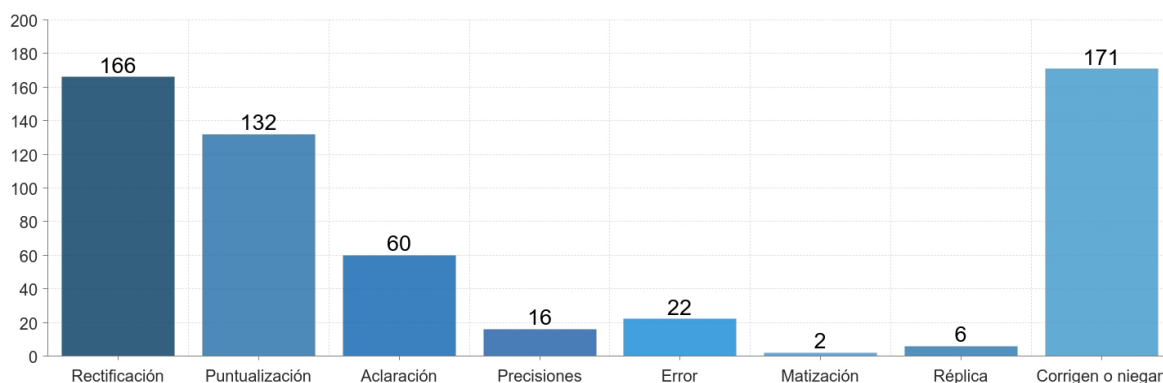


Gráfico 3. Número total de escritos de rectificación publicados en función de cómo los titula el diario

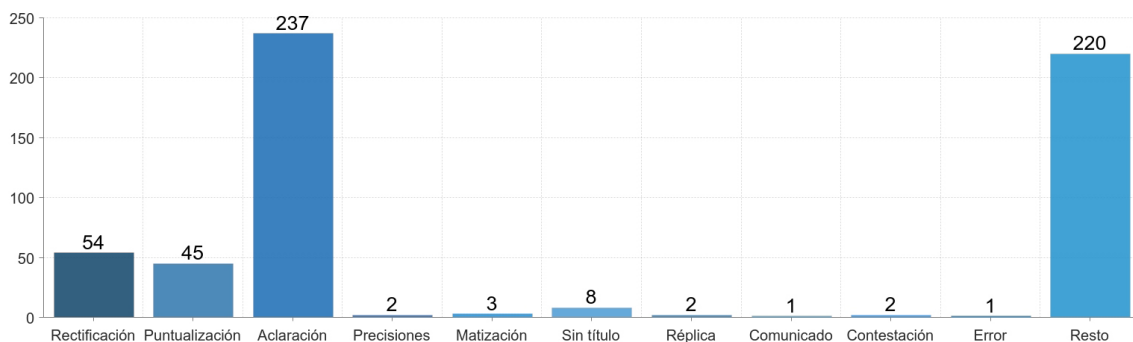
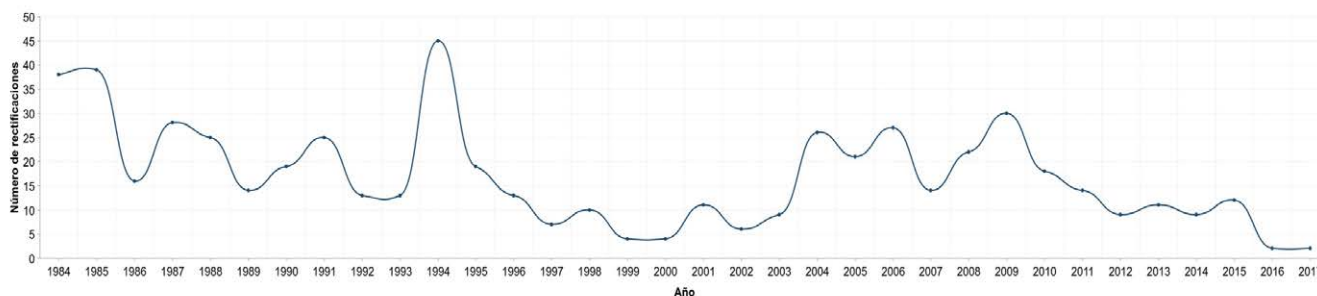


Gráfico 4. Número total de escritos de rectificación publicados por año



4.1.1.2. Resultados en conjunto, análisis comparativo

En este segundo epígrafe se muestran los resultados del análisis de manera conjunta, es decir, se recogen los resultados obtenidos de las distintas categorías analizadas en cada periódico para presentarlos de forma que ayuden a la comparación.

A continuación, se muestran hasta once gráficos (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16) que recogen las distintas categorías antes mencionadas y ya avanzadas en el primer epígrafe (4.1.2.1. *Resultados individuales por diario*). En la misma línea, cada diario continúa asociándose con su color o gama de colores: *El País* utiliza los rojos; *El Mundo*, los verdes; *La Vanguardia*, los amarillos; y *Abc*, los azules.

El **gráfico 5** se corresponde con un gráfico de líneas que muestra el número de rectificaciones que publica cada diario por años. Se trata de una combinación de todos los **gráficos número 4** del anterior apartado.

En el **gráfico 6** se muestra, a modo de sectores, el porcentaje que representa el número total de rectificaciones publicadas por cada diario en el periodo objeto de análisis.

La sección donde se publican los escritos de rectificación en cada diario ya sea *Cartas al director* u otras se muestran en el **gráfico 7**.

Por su parte, el **gráfico 8** es un complemento del anterior. En él se recogen el número de escritos de rectificación que publica cada diario en secciones distintas a *Cartas al director*. Para ello, se emplean once categorías distintas: *Nacional*, *Internacional*, *Local*, *Ediciones regionales*, *Sociedad-Educación* o *Sociedad-Educación-Sanidad* (en el caso de *Abc* porque este diario aún estas secciones de manera habitual), *Economía*, *Cultura*, *Deportes*, *Espectáculos*, *Defensor del Lector* y *Otros*. En esta última categoría se engloban secciones ciertamente menores o que son características de cada diario y no extrapolables al resto (por ejemplo, ciertos suplementos o la sección *Religión*).

En el **gráfico 9** se recogen el número total de escritos de rectificación publicados en cada diario según la extensión. En este sentido, se han establecido hasta siete categorías: cinco de ellas tienen relación con la extensión en relación con la página donde se publican y al número columnas (página entera, media página, 1-2 columnas completas, 1-4 medias columnas o columnas a mitad y 5-6 medias columnas o columnas a mitad) y dos de ellas con la extensión en número de párrafos (1-4 párrafos y 5-6 párrafos). En este último caso, como ya se ha explicado anteriormente, se trata de rectificaciones a las que hemos podido acceder únicamente a través de la edición web, un hecho que imposibilita la medición de la extensión en función del espacio que ocupa en la página y/o del número de columnas, y solo permite segmentarlo por párrafos.

Los resultados relativos a la referencia —u omisión— de la LO 2/1984 por parte de los escritos de rectificación publicados en cada diario, queda recogida en el **gráfico 10**.

El criterio de la literalidad en la reproducción de los escritos de rectificación es el que se emplea en el **gráfico 11**.

En el **gráfico 12** aparecen representados el número de rectificaciones publicadas en función de cómo los titula cada diario, mientras que el **gráfico 13** refleja cómo se autodefinen o qué terminología emplean los autores de los escritos de rectificación para denominarlos. El propósito en este punto es poder localizar similitudes y diferencias entre la forma en la que titulan —denominan— los diarios a los escritos de rectificación que publican y la manera en la que lo conciben los propios autores de los escritos.

El **gráfico 14** se centra en la categoría de defensa de la honorabilidad y muestra el número total de escritos de rectificación que protegen el buen hombre de una o varias personas físicas, personas jurídicas o de ambas.

En el **gráfico 15** se expresan los resultados en función del tratamiento noticioso de los escritos de rectificación (tanto en su titular como en la estructura y el cuerpo), esto es, que el diario los publica como si fueran una noticia en lugar

El último gráfico mostrado se corresponde con el **gráfico 16** y en él se recoge el número total de rectificaciones que atienden a varias categorías que hemos llamado “extras”, ya que son recurrentes, pero no se repiten en todos y cada uno de los escritos publicados. Dichas categorías son: presencia de gráficos y/o tablas, presencia de fotografía; si se trata de un escrito firmado por más de una persona; si contiene comentarios críticos contra el periódico y/o el periodista que firma la información; si la publicación del escrito viene por orden judicial; si el escrito de rectificación lo envía/firma el abogado en representación de su(s) cliente(s); si el escrito pretende rectificar también o de manera accesorio una foto y/o pie de foto; si lo que se pretende rectificar es una información que el periódico ha publicado pero atribuye a otra fuente —agencia de noticias, un tercero, etc.—; si en el escrito se rectifican varias informaciones; si el escrito tiene su origen en la publicación errónea por parte del diario de un escrito, artículo o pieza informativa cualquiera que firma la persona que desea rectificar.

Gráfico 5. Número total de escritos de rectificación publicados por año en cada diario

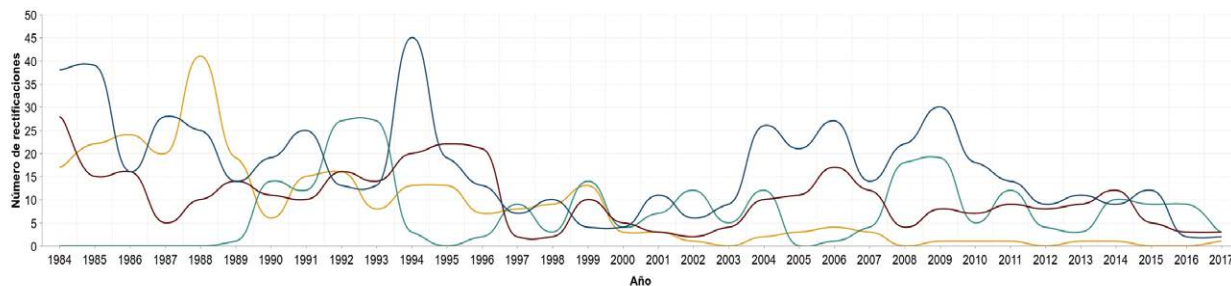


Gráfico 6. Porcentaje que representa el número total de escritos de rectificación publicados en cada diario

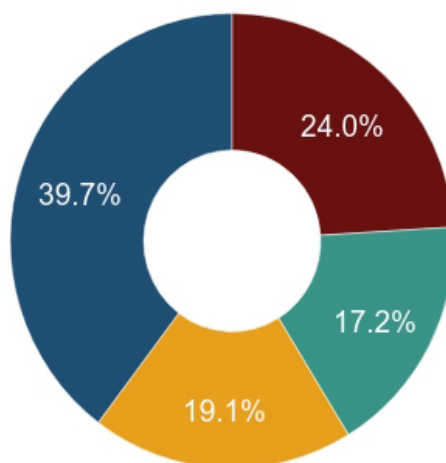


Gráfico 7. Número total de escritos de rectificación publicados en cada diario por secciones

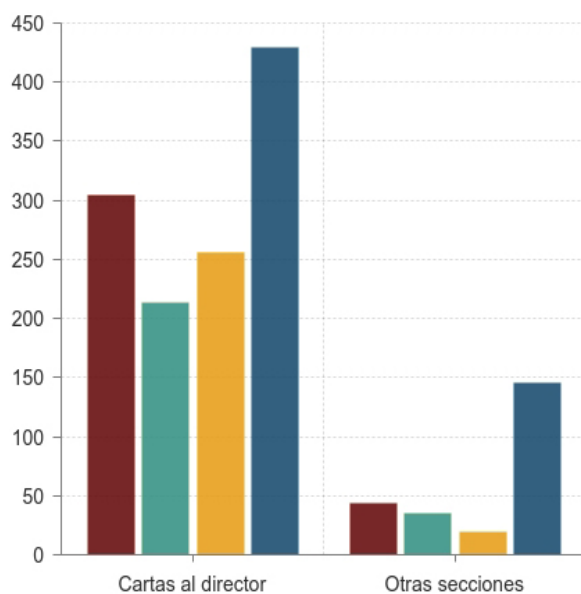


Gráfico 8. Número total de escritos de rectificación publicados en cada diario en secciones distintas a *Cartas al director*



Gráfico 9. Número total de escritos de rectificación publicados por cada diario según su extensión

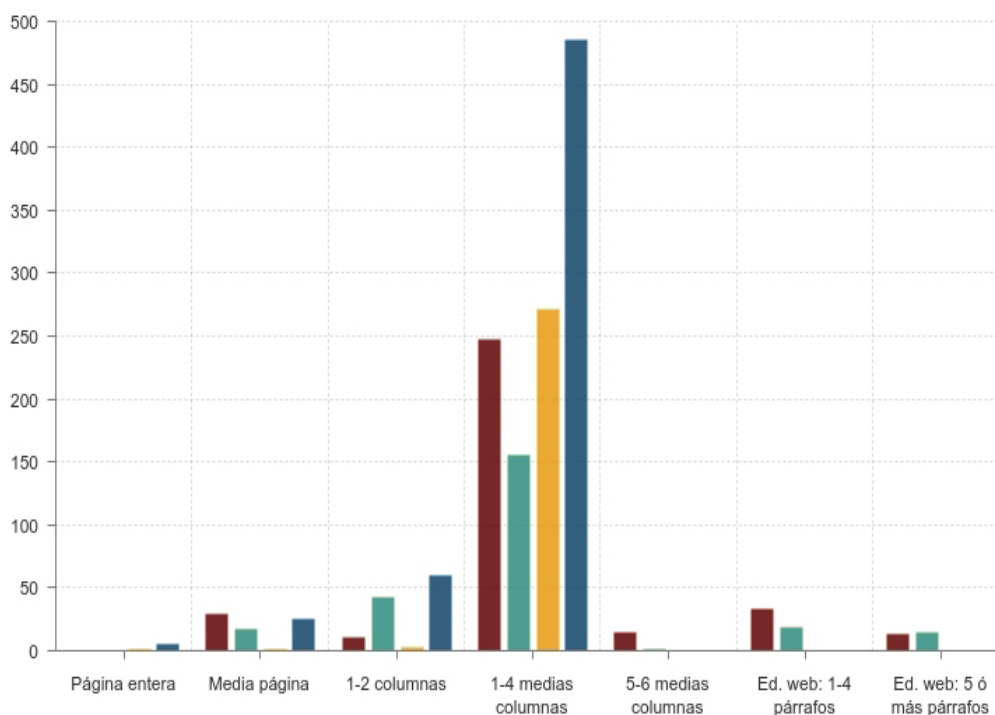


Gráfico 10. Número total de escritos de rectificación publicados por cada diario en función de su referencia a la LO 2/1984

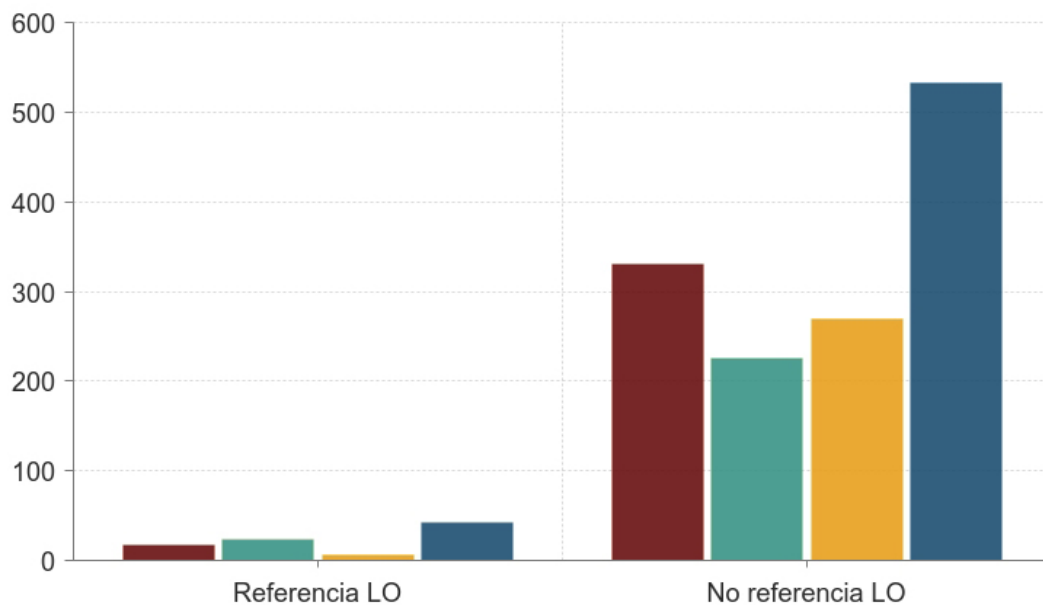


Gráfico 11. Número total de escritos de rectificación publicados en cada diario según la literalidad en su reproducción

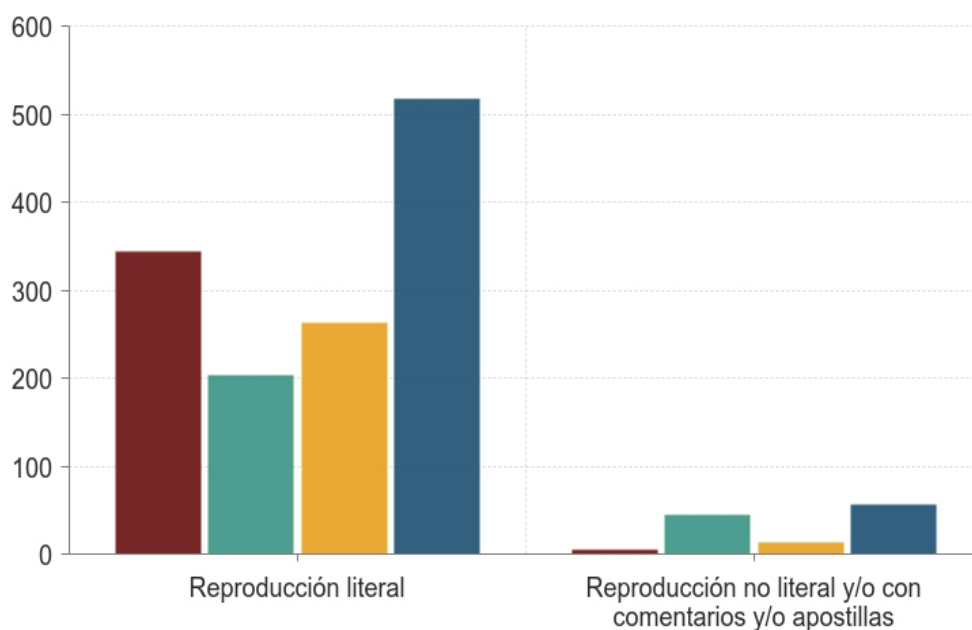


Gráfico 12. Número total de escritos de rectificación publicados en función de cómo los titula el diario

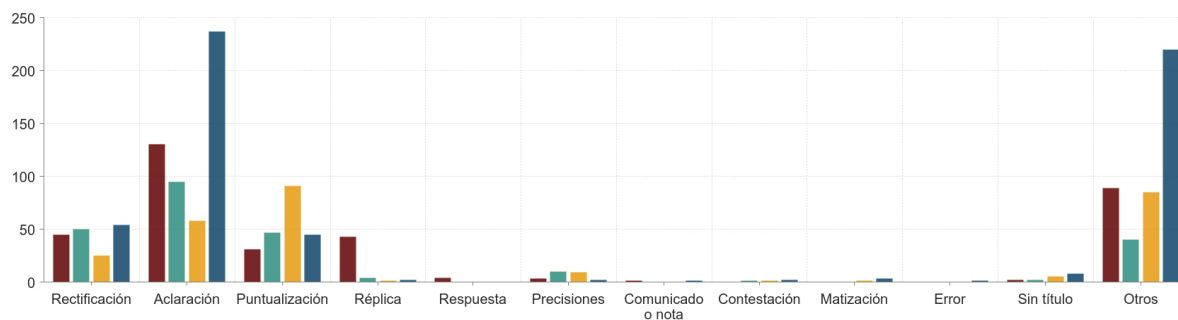


Gráfico 13. Número total de escritos de rectificación publicados en cada diario según cómo se autodefinen

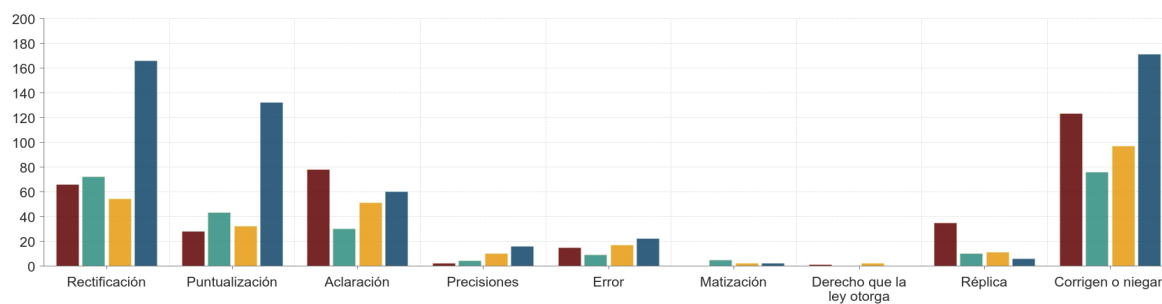


Gráfico 14. Número total de escritos de rectificación publicados en cada diario según la defensa de la honorabilidad o el buen nombre

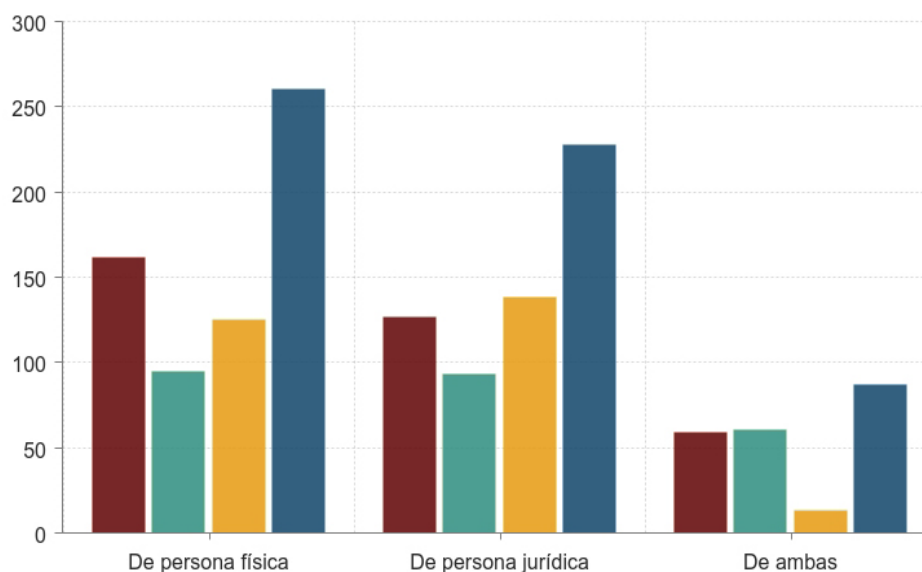


Gráfico 15. Número total de escritos de rectificación publicados en cada diario en función de su tratamiento noticioso

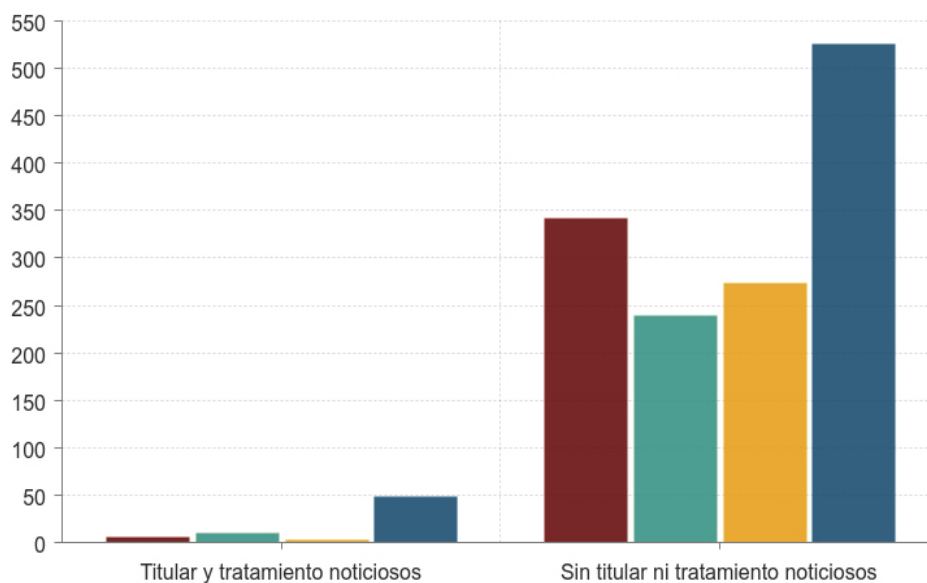
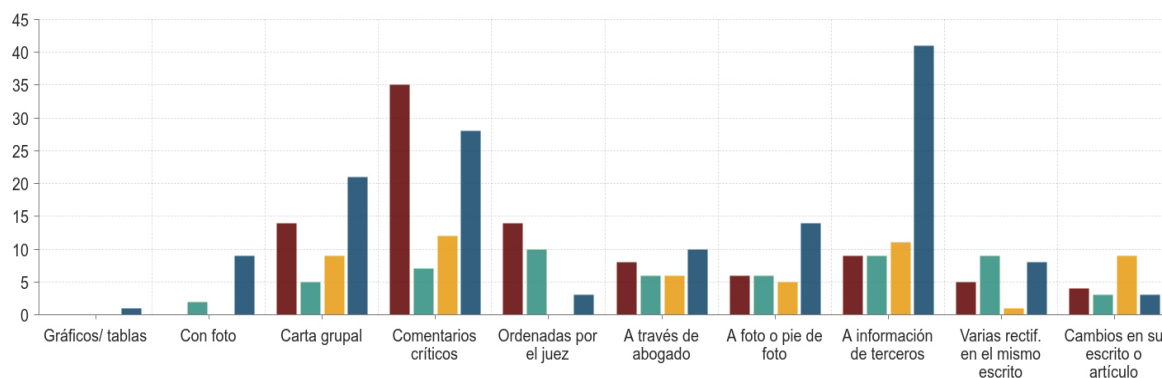


Gráfico 16. Número total de escritos de rectificación publicados en cada diario según otros parámetros



4.1.2. Análisis y discusión de resultados

4.1.2.1. *El País*

El diario *El País* publica un total de 348 escritos de rectificación en el periodo señalado (véase ***El País gráfico 1*** en este punto). En cuanto a la primera categoría, la sección donde se publican estos escritos, se aprecia una clarísima tendencia a que dicha publicación se difunda en la sección *Cartas al director* (87,35% de los

escritos), frente a otras secciones (12,64%). Dentro de este último grupo (véase ***El País* gráfico 8**), las áreas del diario donde encontramos mayor número de rectificaciones son las Ediciones regionales (10 escritos, un 2,87% del total), las secciones de *Nacional*, *Sociedad-Educación* y *Economía* (6 escritos, un 1,74 del total); y *Local* (5, un 1,43%). De manera muy puntual, encontramos escritos de rectificación en las secciones de *Defensor al Lector* y *Otros* (4, un 1,14%), *Internacional* (2, un 0,57%) y *Deportes* (1, un 0,28%).

En relación a la extensión de los escritos publicados, es la categoría 1-4 medias columnas (o columnas a mitad) la que incluye el mayor número con bastante diferencia: un 71,26% de las rectificaciones se publican con esta extensión, seguidas del 9,48% que suponen las rectificaciones con una extensión de 1-4 párrafos (consultadas en la edición web), las que ocupan media página de extensión (8,33%), las que se extienden en 5-6 medias columnas (4,31%), en 5 párrafos o más (3,73) y en 1-2 columnas completas (2,87%). En el caso de *El País* no hay rectificaciones cuya extensión sea de una página completa.

Asimismo, en lo relativo a la referencia explícita a la Ley Orgánica 2/1984 en el cuerpo del escrito de rectificación, la tendencia mayoritaria es su no mención (95,11%), frente a los casos en los que sí se referencia (4,88%). Algo muy similar a lo que ocurre en el caso de la reproducción literal del escrito, esto es, su publicación tal y como fue redactado por el autor y sin comentarios ni apostillas. El diario, por lo general, es fiel en la reproducción del texto original del escrito (98,56%), frente a sólo un 1,43% de los casos en el que no lo practica.

La mayoría de las rectificaciones publicadas en *El País* (87,06%) no responden al título de rectificación, que sólo supone un 12,93 % de los casos (véase ***El País* gráfico 3**). Los títulos más comunes son los de aclaración (37,35%), otros —títulos genéricos, que no hacen referencia expresa a que lo que viene a continuación es un escrito de rectificación— (25,57%), réplica (12,35%), puntualización (8,90%), respuesta (1,14%), precisiones (0,86%), sin título (0,57%) y nota (0,28%).

En función de cómo se autodenominan los escritos de rectificación publicados en *El País* (véase ***El País* gráfico 2**) es curioso que el número más alto se corresponda con el grupo de escritos que evidencian la pretensión de corregir un dato o negar uno o varios puntos de una información (35,34%), pero sin llegar a expresar términos más rotundos como rectificación (18,96% de los casos), aclaración (22,41%), réplica (10,05%) o, incluso, puntualización (8,04%). Por su parte, las categorías error (4,31%) precisiones (0,57%), o derecho que la ley otorga (0,28%) quedan relegadas a un segundo plano.

En cuanto a quién o a qué defienden los escritos, es decir, si persiguen una defensa del buen nombre de personas físicas o jurídicas (por lo general, empresas, organizaciones o colectivos); las cifras se encuentran más repartidas. *El País* publica un 46,55% de rectificaciones que defienden la honorabilidad de personas

físicas (ya sea la de la propia persona que escribe el escrito o la de un familiar — en muchos casos, ya fallecido—), un 36,49% de escritos que defienden el buen nombre de personas jurídicas y, finalmente, un 16,95% de rectificaciones que defienden ambos, el honor de una(s) persona(s) física(s) y de una(s) persona (s) jurídica(s).

La mayor parte de los escritos, además, no cuenta con tratamiento noticioso, es decir, no se presentan como noticias al uso (98,27%) frente al 1,72% de las rectificaciones que sí son publicadas como si fueran una pieza informativa normal.

Sí nos fijamos en los datos que desprende el análisis de las categorías extra que, como ya se ha adelantado, se creyó conveniente incorporar debido a que son características que se repiten en un número destacado de escritos y consideramos que aportan información de interés. En ocasiones varias de estas categorías se repiten en la misma rectificación, por lo que no presentaremos las cifras aquí en términos de porcentaje. La categoría que más se repite dentro del total de los escritos publicados es la que se corresponde con la existencia de comentarios críticos dirigidos al diario o al periodista que firma la información original (hasta en 35 casos). Le siguen las rectificaciones publicadas por orden judicial (14) y las que aparecen firmadas por más de una persona (14), las que pretenden rectificar información que se publica en el diario citando a un tercero como fuente (9), las que aparecen firmadas por el abogado de la persona física y/o jurídica que desea rectificar (8), las que pretenden rectificar —solo o además una noticia y/o afirmación— un pie de foto o denuncian que se haya publicado una foto que les causa perjuicio (6), los casos en los que se pretende rectificar varias informaciones distintas (5) y aquellos en los que se pretende rectificar/denunciar que se hayan producido cambios sin su consentimiento en un escrito o artículo firmado por el rectificante (4).

En la gráfica lineal que recoge el número de rectificaciones publicadas por *El País* en cada año dentro del periodo analizado (véase **El País gráfico 4**) se aprecian determinados picos con mayor actividad —mayor número de escritos publicados—. Entre ellos, el año 1984 es el de mayor número de rectificaciones publicadas (28/8,04%), seguido de 1995 (22/6,32%), 1996 (21/6,03%), 1994 (20/5,74%), 2006 (17/4,88%) y 1992 (16/4,59%).

Conclusiones

- La gran parte de los escritos de rectificación se publican en la sección *Cartas al director* (87,35%). El diario *El País* emplea esta sección de manera habitual para publicar los escritos de rectificación, ignorando la necesidad de que las rectificaciones sean publicadas con relevancia semejante a la información original, esto es, también en la misma sección.

- La extensión que habitualmente ocupan las rectificaciones es reducida (de 1 a 4 medias columnas), un formato que parece, además, que le encaja muy bien al diario para publicarlos en la sección opinativa de *Cartas al Director*. De este modo y con carácter general, los escritos son menos extensos que las informaciones que éstos pretenden rectificar.
- El diario *El País* respeta, en la gran mayoría de casos, la literalidad de los escritos que le llegan para su publicación y no suele introducir cambios, comentarios ni apostillas.
- El término preferido por este diario a la hora de titular los escritos es el de aclaración, seguido de otros títulos genéricos y lejos del término que debería emplearse, rectificación, que ocupa el tercer lugar. Sin embargo, la mayor parte de rectificaciones expresan su intención de corregir o negar datos y/o afirmaciones, les siguen los que mencionan expresamente que desean una aclaración y solo en tercer lugar se sitúan los que utilizan el término rectificación.
- Las rectificaciones publicadas en *El País* aluden a la defensa de la honorabilidad de personas físicas y jurídicas en porcentajes similares.
- Este diario respeta, con carácter general, que los escritos de rectificación no sean publicados de manera que parezcan ser simples piezas informativas y puedan confundir al lector.
- Las categorías denominadas “extras” que se repiten con mayor frecuencia son, por este orden: existencia de comentarios críticos dirigidos al diario o al periodista que firma la información original, rectificaciones publicadas por orden judicial y las que aparecen firmadas por más de una persona.
- En el análisis del número de escritos publicados por años, se aprecian varios picos de mayor “actividad”: 1984, 1992, el trienio 1994-1996 y 2006. Aunque es difícil conocer las razones profundas de estos picos de actividad, dando por hecho que los hubiera, sí es cierto que, tanto en el año 1993 como en el 2006, la dirección del diario *El País* cambia.

4.1.2.2. *El Mundo*

El diario *El mundo* publica un total de 249 escritos de rectificación en el periodo analizado (véase ***El Mundo gráfico 1***), de los que un 85,94% se publican en la sección de *Cartas al director* y únicamente un 14,05% en secciones distintas.

Dentro de este último grupo (véase **El Mundo gráfico 8**), la sección *Nacional* es la que se corresponde con un porcentaje más alto de rectificaciones publicadas (7,22%), seguida de Ediciones regionales (2%), Sociedad-Educación, Deportes y Economía (con un 1,20% cada una) e Internacional, Cultura y Otros (con un 0,40% respectivamente).

Por lo que se refiere a la extensión, la categoría que mayor número de escritos recoge es la de 1-4 medias columnas (62,24%), seguida de 1-2 columnas completas (16,86%), 1-4 párrafos (7,22%), media página (6,82%), 5 o más párrafos (6,02%) y, finalmente, de 5-6 medias columnas (0,80%).

Solo en un 9,23% del número total de rectificaciones existe una referencia explícita a la LO 2/1984 reguladora del derecho de rectificación, frente al 90,76% de los casos en los que esta referencia no existe.

Un desequilibrio menos acusado es el que presentan las cifras con relación a si el diario respeta la literalidad del escrito de rectificación (81,92%) o la vulnera, modificando de forma sustancial el escrito o añadiendo comentarios y/o apostillas (18,07%).

Por lo que se refiere a la manera en la que el diario titula los escritos de rectificación, la fórmula más empleada es la de aclaración (38,15%), seguida de rectificación (20,08%), puntualización (18,87%), otros títulos (16,06%), precisiones (4,01%), réplica (1,60%), respuesta (1,20%), sin título (0,80%) y, en último término con un porcentaje muy residual, contestación (0,40%). En lo relativo a cómo se autodenominan los escritos de rectificación a la hora de hacer explícito su propósito (véase **El Mundo gráfico 2**), la mayoría de ellos evidencian su intención de corregir o negar una información o parte de ella (30,52%), seguidos de cerca por aquellos que emplean el término rectificación (28,91%). En menor porcentaje se dan los casos en los que se desea puntualizar (17,26%), aclarar (12,04%), replicar (4,01%), poner de manifiesto un error del diario (3,61%), matizar (2%) y precisar (1,60%).

El porcentaje de los escritos que defienden el buen nombre de una persona física (38,15%) son muy similares a aquellos que buscan lo propio con respecto de una persona jurídica (37,34%). En menor proporción, las rectificaciones aluden a la honorabilidad de ambas (24,49%).

En la mayor parte de los casos, el diario *El Mundo* no utiliza el tratamiento común de una noticia (titular, presentación visual y estructura interna) a la hora de publicar un escrito de rectificación. Los datos lo evidencian: en el 95,98% de las ocasiones no lo hace, frente al 4,01% de los casos en los que sí.

En cuanto al análisis de las categorías extra la que se repite de manera más recurrente dentro del total de los escritos publicados es la que se corresponde con el número de escritos publicados por orden judicial (10), seguidas de aquellas que incluyen comentarios críticos dirigidos al diario o al periodista que firma la información original (7), las que pretenden rectificar una información cuya fuente es un tercero ajeno al diario en cuestión (9), las que incluyen varias rectificaciones (9),

aquellas que aparecen firmadas por el abogado del rectificante (6), aquellas que pretenden rectificar —solo o además una noticia y/o afirmación— un pie de foto o denuncian que se haya publicado una foto que les causa perjuicio (6), los casos en los que la rectificación aparece firmada por más de una persona (5), aquellos en los que se pretende rectificar/denunciar que se hayan producido cambios sin su consentimiento en un escrito o artículo firmado por el rectificante (3); y, por último, los escritos que incluyen una imagen o fotografía (2).

Por lo que respecta al número de rectificaciones publicadas por *El Mundo* por años (véase **El Mundo gráfico 4**) se aprecian dos picos más altos, que se corresponden con un mayor número de escritos publicados. Estos son el bienio 1992-1993 (10,84%, respectivamente) y el bienio 2008 (7,22%)-2009 (7,63%). En el caso de *El Mundo* hay que volver a recordar que el primer año de análisis se remonta necesariamente a 1989, fecha en la que empezó a publicarse. Dichos repuntes en el gráfico no se pueden asociar, ni siquiera por hipótesis, a cambios en la dirección del medio —como sí puede ocurrir con *El País*—, ya que este diario tuvo al mismo director (Pedro J. Ramírez) desde su fundación hasta 2014.

Conclusiones

- La mayor parte de los escritos de rectificación se publican en la sección *Cartas al director*. Volvemos a ver cómo un diario no respeta el principio de relevancia en la publicación de la mayor parte de las rectificaciones y, en lugar de darles visibilidad en las secciones que corresponde y donde se publicó la información controvertida en su día, las condenan al cajón de sastre que es la sección de *Cartas*.
- La extensión “genérica” de los escritos de rectificación suele ser el de 1-4 medias columnas o columnas a mitad, espacio ciertamente reducido si se compara con el de cualquier pieza informativa estándar en prensa escrita.
- El diario respeta, por norma general, el contenido de los escritos en su integridad y no suele introducir cambios, comentarios ni apostillas.
- El concepto más empleado para titular los escritos es el de aclaración, seguido del de rectificación, puntualización, otros títulos y precisiones. Sin embargo, la mayor parte de rectificaciones expresan su intención de corregir o negar datos y/o afirmaciones, seguidos de cerca por aquellos que emplean el término rectificación y, en menor medida y por este orden, de los casos en los que se emplean los términos puntualizar y aclarar.

- Los escritos defienden el buen nombre de personas físicas y jurídicas prácticamente por igual.
- *El Mundo* respeta, en la gran mayoría de casos, que los escritos de rectificación no se presenten como noticias u otro tipo de piezas informativas que puedan llevar a confundir o no poder diferenciar que lo que realmente se publica es una rectificación.
- Las categorías “extra” que se repiten de manera más frecuente son los escritos publicados por mandato del juez, los casos en los que la información que se rectifica procede de terceros, aquellos en los que se producen varias rectificaciones dentro de un mismo escrito y las que critican con mayor o menor dureza al diario o al periodista que firma la información controvertida.
- En el análisis del número de escritos publicados por años, se aprecian dos picos de mayor actividad: los bienios 1992-1993 y 2008-2009. Estos cuatro años representan un porcentaje superior al 36,50 del total de las rectificaciones.

4.1.2.3. *La Vanguardia*

El diario *La Vanguardia* publica un total de 276 rectificaciones (***La Vanguardia gráfico 1***) y, la gran mayoría de estas (92,75%) aparece en la sección *Cartas al director*. En otras secciones únicamente se publica un 7,24% del total de las rectificaciones (véase ***La Vanguardia gráfico 8***), siendo las áreas *Sociedad-Educación* (2,5%), *Defensor del Lector* (1,44%), *Ediciones regionales* (1,08%) y *Otros* (1,08%) las más recurrentes, frente a *Nacional*, *Economía y Cultura* (0,36% cada una) las más marginales.

Por lo que se refiere a la extensión de los escritos, sobresale y casi se puede identificar como “estándar” en *La Vanguardia* la de 1-4 medias columnas (98,18% de los casos). Solo en un 1,08% de las ocasiones las rectificaciones ocupan 1-2 columnas y de manera anecdótica, únicamente en el 0,36% de los casos respectivamente, los escritos ocupan media página o una página entera.

Del mismo modo, hay una diferencia destacable entre las veces en las que un escrito cita de modo expreso la LO 2/1984 (2,17%) frente a las ocasiones en las que lo omite (97,82%); y entre los casos en los que *La Vanguardia* publica las rectificaciones respetando su integridad, sin comentarios ni apostillas (94,92%), y las veces en las que esto no se produce (5,07%).

El concepto que más veces se repite en el título de los escritos de rectificación es el de puntualización (32,97%). Por detrás, se sitúan otros títulos

(30,79%), las aclaraciones (21,01%) y las rectificaciones (9,05%); y, algo más lejos, las precisiones (3,26%), los escritos sin titular (1,81%), las réplicas, matizaciones y contestaciones (todas ellas con un 0,36%). La mayoría de las rectificaciones, sin embargo, explicitan su propósito de corregir o negar datos y/o afirmaciones (35,14%), en menor proporción exigen una rectificación (19,56%), aclaración (18,47%) o puntualización (11,59%); y, con menos frecuencia, hablan de error (6,15%), réplica (3,98%), precisiones (3,62%), de que se ejerce un derecho que la ley otorga (0,72%) o de matización (0,72%). Véase **La Vanguardia gráfico 2**.

Al igual que sucedía en el caso de *El País* y de *El Mundo* no hay diferencias significativas entre el número de escritos de rectificación que defienden la honorabilidad de una persona física y el que buscan lo propio para con una persona jurídica. En el primer caso, el porcentaje asciende al 45,28% y en el segundo al 50%. En cuanto a las rectificaciones que defienden la honorabilidad de ambas figuras el porcentaje es de un 4,71%.

En cuanto a cómo se presentan los escritos de rectificación por parte de *La Vanguardia*, apenas se producen casos en los que aparecen publicados con titular y tratamiento noticioso: sólo un 1,08% frente al 98,91% de las ocasiones en las que no ocurre así.

La categoría “extra” que responde a comentarios críticos es la más recurrente en este análisis (12), seguida de la rectificación a información de terceros (11), la que explicita cambios intencionados por parte del diario a un escrito o artículo firmado por el rectificante (9) y la carta grupal (9). En menor proporción se repiten los casos en los que el escrito aparece firmado por el abogado del rectificante (6), en los que se rectifica o se pide explicaciones al diario sobre una foto y/o pie de foto (5) o en los que se desean rectificar varias informaciones dentro del mismo escrito (1).

En cuanto al número de rectificaciones publicadas por año (véase **La Vanguardia gráfico 4**), destaca 1988 como punto donde hay un porcentaje de escritos más alto (14,85%), seguido del trienio 1985-1987 (7,97%, 8,69% y 7,24%, respectivamente). Aunque es difícil encontrar una razón que explique el porqué de estos periodos de mayor actividad, sí que hay que señalar que en esos años *La Vanguardia* aún no había completado su reconversión tecnológica, que acabó en octubre de 1989. Y es precisamente en 1989 (6,88%) y 1990 (2,17%) cuando se registra la mayor caída en el número de rectificaciones publicadas.

Conclusiones

- En el caso de *La Vanguardia* se repite el patrón por el que, en la mayoría de las ocasiones —más de un 92%—, las rectificaciones se publican en *Cartas al director*.

- Y también aquel que demuestra que los escritos suelen ser cortos, en su inmensa mayoría de una extensión que no supera las 1-4 columnas a mitad o medias columnas.
- Apenas es reseñable la referencia a la LO del derecho de rectificación en los escritos, que cuenta con un porcentaje básicamente anecdótico (poco más del 2%).
- *La Vanguardia* no presenta, por lo general, cambios en los escritos de rectificación, ni tampoco es habitual que introduzca comentarios y/o apostillas.
- El título que más se repite dentro del total de los escritos de rectificación es el de puntualización, seguido de otros títulos, aclaración y, solo en cuarto lugar, rectificación. Por contra, los escritos se autodenominan con el término rectificación en el 19,56% de los casos, la segunda fórmula más empleada después de la categoría *Corregir o negar*. En tercer lugar, se encuentra en este caso el concepto de aclaración.
- La defensa del buen nombre de una persona física o jurídica dentro de las rectificaciones es prácticamente equiparable.
- Con carácter general, *La Vanguardia* publica los escritos de rectificación sin darles un tratamiento noticioso.
- Dentro de las categorías “extra” la más recurrente en este caso es la presencia de comentarios críticos para con el periódico y/o el periodista que firmó la información controvertida, seguida de las rectificaciones a afirmaciones/datos aportados por terceros, a la carta grupal y a las rectificaciones que ponen en evidencia cambios en un escrito o art. firmado por el rectificante y publicado con anterioridad.
- En el análisis de la publicación por años, sobresale el año 1988, que casi alcanza el 15% del total de todas las rectificaciones y, por detrás, el trienio 1985-1986-1987 que conjuntamente supone prácticamente el 24%.

4.1.2.4. *Abc*

Abc es el diario que más rectificaciones publica en el periodo analizado, con un total de 575 (***Abc* gráfico 1**). Los escritos publicados en *Cartas al director* suponen un 74,60% del total, mientras que los que aparecen en otras secciones

alcanzan el 25,39%. Dentro de este grupo, las secciones donde encontramos mayor número de escritos (véase **Abc gráfico 8**) son, por este orden: *Ediciones regionales* (7,65%), *Nacional* (7,13%), *Otros* (2,78%), *Economía* (1,73%), *Sociedad-Educación-Sanidad* (1,56%), *Cultura* (1,21%), *Espectáculos* (1,21%), *Deportes* (1,04%), *Local* (0,86%), *Internacional* (0,17%).

En lo relativo a la extensión de los escritos de rectificación, destaca la de 1-4 medias columnas, que supone un 84,34% del total de las rectificaciones, seguida de 1-2 columnas (10,43%), media página (4,34%) y página entera (0,86%).

Al igual que ocurre en los otros tres diarios analizados, en la mayoría de los escritos de rectificación no se cita la LO 2/1984: el 92,69% de los casos frente al 7,30% en los que sí existe esta referencia.

En la misma línea la reproducción de las rectificaciones suele ser literal (90,08%), siendo muy pocos los casos en los que la rectificación no se publica de manera fiel al original y/o se acompaña de comentarios y/o apostillas (9,91%).

El primer puesto de los títulos que más comúnmente emplea el diario para los escritos que publica es para el término aclaración (41,21%). Le siguen, por este orden, otros títulos (38,26%), rectificación (9,39%), puntualización (7,82%), sin título (1,39%), matización (0,52%), réplica, precisiones y contestación (0,34% cada una de las tres). En último lugar, con solo un 0,17%, respectivamente, se encuentran los conceptos de comunicado y error.

Por lo que se refiere a cómo se autodenominan o se definen a sí mismos esos escritos (véase **Abc gráfico 2**), en la mayoría de casos se desea corregir o negar algo (29,73%), seguido de la intención de rectificar (28,86%), puntualizar (22,95%), aclarar (10,43%), poner en evidencia que se trata de un error (3,82%), precisar (2,78%), replicar (1,04%) y matizar (0,34%).

Por algo menos de seis puntos, 45,21% frente a 39,65%, el porcentaje total de escritos de rectificación que defienden la honorabilidad de una o varias personas físicas supera aquel que se orienta a lo propio con una o varias personas jurídicas. En el caso de las rectificaciones que protegen el buen nombre de ambos, la cifra asciende al 15,13%.

En el caso del tratamiento de los escritos, el 91,47% de los mismos no se publica con un titular y estructura similar al de una noticia cualquiera, algo que únicamente ocurre en el 8,51% de las ocasiones.

Dentro del análisis de categorías “extra”, la que mayor número de veces se repite es la rectificación a información procedente de terceros (en 41 ocasiones), seguida de aquellas que introducen comentarios críticos (28), las que aparecen firmadas por más de una persona (21), las que pretenden rectificar la inclusión de una foto y/o la información que aparece en un pie de foto (14), aquellas que están firmadas por el abogado del rectificante (10), las que llevan algún tipo de fotografía o imagen (9), aquellas que incluyen varias rectificaciones en el mismo escrito (8), las que denuncian cambios en un escrito o artículo publicado con anterioridad y firmado

por el rectificante (3), aquellas que se publican por mandato judicial (3); y, por último, las que se acompañan de algún elemento gráfico o tabla (1).

En el análisis de la publicación de rectificaciones por años (véase **Abc gráfico 4**) se aprecian dos picos: el primero de ellos se corresponde con el año 1994 (7,82%) y el segundo con el bienio 1984-1985 (6,60% y 6,78%, respectivamente). Este segundo periodo se corresponde con los primeros años como director de Luis María Ansón, que toma el cargo en 1983 y deja paso al siguiente director en 1997.

4.1.2.5. Conclusiones

- Más de 7 de cada 10 escritos de rectificación publicados en *Abc* aparecen en la sección de *Cartas al director*.
- La extensión estándar de las rectificaciones es de entre 1 y 4 medias columnas.
- Los escritos de rectificación no suelen aludir a la Ley Orgánica que regula este derecho, la LO 2/84. En concreto, solo en algo más de un 7% de las ocasiones existe mención expresa a dicha norma.
- En algo menos de un 10% de las veces encontramos rectificaciones que el diario no reproduce literalmente y/o incluye comentarios y/o apostillas en la misma; algo que de manera mayoritaria no suele ocurrir.
- Para el diario *Abc*, la manera más común de titular la rectificación es empleando el término aclaración, seguido de los titulares genéricos y, en ocasiones, confusos; y, en tercer lugar, de la palabra rectificación. Este mismo término, rectificación, se convierte en el segundo concepto más empleado a la hora de expresar el propósito del escrito que, en primer lugar, suele ser el de corregir o negar según el propio rectificante.
- Apenas seis puntos separan al número de rectificaciones que pretenden defender el honor de una persona física (en torno al 45%) de aquellas que buscan lo propio con una persona jurídica (alrededor del 39%).
- De manera general, *Abc* no pretende confundir entre noticia y rectificación y suele publicar los escritos sin dotarles del titular o tratamiento noticiosos que sí imperan en el resto de las noticias del diario.

- Las categorías “extra” que se repiten de manera más recurrente son: la rectificación a informaciones de terceros ajenos al diario, la inclusión de comentarios críticos y la firma del escrito de rectificación por más de una persona.
- Con respecto al análisis de la publicación de escritos de rectificación por años, se aprecian dos picos de mayor actividad, 1994 y el bienio 1984-1985.

4.1.3. Conclusiones del análisis cuantitativo de los escritos de rectificación

En este punto tendremos en cuenta, no solo las conclusiones parciales extraídas a partir del análisis de cada uno de los diarios, sino también las que se desprenden del estudio de los datos que se presentan en los **gráficos 6-15**:

- El diario *Abc* es de los cuatro el que mayor número de rectificaciones publica** (575), lo que representa un 39,7% del total de todos los escritos objeto de análisis. Le sigue *El País*, con un total de 348 rectificaciones (24%), *La Vanguardia* con 276 (19,1%) y, por último, *El Mundo* con 249 (17,2%). En este punto es muy importante señalar que al análisis de *El Mundo* se le restan más de cuatro años debido, como ya se ha señalado antes, a que este periódico empezó a publicarse en octubre de 1989.
- La mayor parte de las rectificaciones se publican en *Cartas al Director*, en todos los casos superando el 70% del número total.** El dato confirma que esta breve sección, normalmente oculta entre las páginas de *Opinión* y cajón de sastre para los temas de los que los lectores quieran tratar, es la parte favorita de los diarios para publicar estos escritos, ciertamente espinosos para ellos. De este modo, ya desde el principio las rectificaciones pierden la posibilidad de contar con tanta visibilidad como la información original a la que se refieren, algo que, además, es contrario al principio o criterio de relevancia semejante que contempla la LO 2/1984.
- Por lo que se refiere al resto de secciones donde aparecen los escritos, las más comunes son**, por este orden, las que se han dado a llamar aquí ***Ediciones regionales, Nacional y Sociedad-Educación***.
- La extensión que se repite en mayor medida en el total de las rectificaciones analizadas es la de 1-4 medias columnas.** Se trata de una extensión breve, muy conveniente por otro lado para su publicación

en la sección de *Cartas al director*, y que **vuelve a demostrar que, con carácter general, no se atiende al criterio de relevancia semejante**. Éste determina que los escritos no sólo deben ubicarse en la misma sección en la que se publicó la información que da pie a la rectificación, sino que también deben contar con un peso similar —y aquí es donde la extensión entra en juego—. En considerable menor medida, encontramos escritos que superan 1 o 2 columnas completas y aquellos que llegan a cubrir media página. En el caso de la medición por párrafos, y como ya adelantamos, no es una medida extrapolable a todos los diarios (en este caso sólo ha habido necesidad de utilizarla para *El País* y *El Mundo*, ya que algunas rectificaciones solo era posible visualizarlas en sus respectivas ediciones web).

- E. Las cifras que se desprenden del análisis comparativo de los escritos según la referencia a la Ley Orgánica 2/1984 son también muy claros. **En todos los diarios se impone que 9 de cada 10 de las rectificaciones no mencionan en absoluto la legislación**. ¿Es por desconocimiento entre la población general? ¿no quieren sonar demasiado “reivindicativos” porque temen que, de mostrarse así, el diario no publicará su escrito? ¿simplemente se copian la estructura unos a otros porque no existen pautas claras de cuál es la mejor manera de escribir una rectificación? Sobre este punto se volverá más adelante y se intentará arrojar luz gracias a los resultados de las encuestas de opinión.
- F. Con carácter general, ***El País*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *Abc* respetan la literalidad de los escritos de rectificación, sin introducir cambios sustanciales que los desvirtúen ni tampoco comentarios y/o apostillas**. Sin embargo, hay que señalar que este dato es, en proporción, relativamente alto en *El Mundo*: más de un 18% frente al 10% de *Abc*, el segundo diario que más cambios de este tipo introduce. En el caso de *El Mundo*, esa vulneración de la literalidad del escrito viene dado por la introducción —en la gran mayoría de estos casos— de una nota de la Redacción después de la rectificación, lo que supone introducir un comentario y, en muchas ocasiones, su propia versión. Introducir comentarios y apostillas es otra de las “líneas rojas” que establece la LO 2/1984 y, aunque es común, razonable, así como legal y deontológicamente posible que el diario se reafirme en su versión de los hechos —recordemos que el derecho de rectificación en ningún caso supone un límite o impedimento al diario para seguir informando en base a sus convicciones y su trabajo periodístico—, dicha reafirmación no debe nunca ubicarse como comentario o nota dentro del escrito de rectificación.

G. En este punto resulta interesante poner en contraposición cuáles son los conceptos que mayoritariamente emplean los diarios para referirse a las rectificaciones y, básicamente, cuáles son los que utilizan con más frecuencia los rectificantes. Con respecto a lo primero, **el término más usado según se desprende del análisis conjunto de los diarios es el de aclaración**, seguido de otros títulos y puntualización, quedando el de *rectificación* en un cuarto puesto. Una primera interpretación posible del porqué se emplea esta palabra en mayor medida que el concepto *rectificación* tiene que ver con la propia connotación de la palabra: ¿es lo mismo rectificar que aclarar? ¿pueden emplearse como sinónimos absolutos, relativos o no lo son en absoluto? ¿muestran ambos conceptos la misma intensidad? La primera acepción de la palabra *aclarar* en el diccionario de la RAE se corresponde con “disipar o quitar lo que ofusca la claridad o transparencia de algo”; otra acepción, que puede ser incluso mejor aplicable en este caso, es la de “explicar algo, hacerlo fácil de comprender”. En cuanto a rectificar, la RAE define este término como “reducir algo a la exactitud que debe tener” o “contradecir a alguien en lo que ha dicho, por considerarlo erróneo”. En este primer acercamiento, consideramos que queda claro que ambas palabras no son sinónimas y responden a diferentes propósitos: no es lo mismo explicar algo o expresarlo de manera más clara que buscar la exactitud de algo o contradecir lo dicho. El significado de rectificar, por otra parte, es más rotundo y tiene mayor fuerza. Pero, además, la norma que regula el derecho que estudiamos, la LO 2/1984, en ningún caso habla de aclaración, sino de rectificación. Término que, en la legislación anterior sí era equiparable o, al menos, actuaba como sinónimo relativo del de réplica (véase el apartado 2.1.1, *Origen histórico-jurídico del derecho de rectificación en España*), pero en ningún caso al de aclaración.

Parece entonces evidente que **existe una intencionalidad a la hora de titular los escritos de rectificación de manera que resulten lo menos negativos posibles para la “reputación” del diario** o, al menos, así lo consideran ellos mismos. Una idea, por otro lado, que no se basa en ningún fundamento contrastado ni lógico. Volvemos en este punto a poner sobre la mesa la importancia que tiene para la confianza y la credibilidad de los lectores que el diario sepa reconocer los errores e intente enmendarlos con honestidad y transparencia.

Del lado del autor del escrito, el término *rectificación* tampoco ocupa el primer puesto, aunque sí el segundo. **En la mayor parte de los casos las rectificaciones hacen alusión a que quieren negar o corregir un dato o una afirmación.** Una posible explicación a esto sería pensar —de

nuevo— que se trata de **una fórmula menos “hostil” o “dura” para con el diario, ante el temor de que éste no publique el escrito si se siente “duramente” atacado**. En cualquier caso, sí que **la fórmula *rectificación* se emplea con más asiduidad entre los lectores** que se sienten agraviados por una información **que entre los responsables de los diarios**.

- H. En cuanto al número de rectificaciones que se centran en la defensa del honor de una persona física y aquellas que hacen lo propio con una persona jurídica apenas hay diferencias notables. Es decir, que los escritos defienden, por regla general, tanto el buen nombre de una persona física como el de la empresa, organización o colectivo que dirigen y/o a los que pertenecen.
- I. Es posible afirmar que en los diarios analizados no suele confundirse “adrede” una rectificación con una noticia común. **En la mayoría de los casos, los escritos de rectificación no se presentan con una estructura y titular propio de una noticia**. Sin embargo, lo anterior no demuestra por sí solo un proceder diligente por parte del medio, ya que no podemos olvidar que en su inmensa mayoría las rectificaciones se publican en una sección que no es la adecuada y con un titular que puede inducir a la confusión.
- J. En lo que respecta a las categorías “extra”, las que más se repiten son: la existencia de comentarios críticos hacia el diario o el periodista que firmó la información controvertida, la rectificación a datos o afirmaciones procedentes de terceros y la carta grupal o firmada por más de una persona (con carácter general nos referimos en este punto a una persona física, que es la que siempre suele firmar el escrito de rectificación, aunque en ocasiones lo haga en representación de una empresa, organización o colectivo).
- K. Por todo ello y aunando los resultados obtenidos a partir de los escritos publicados en el conjunto de los diarios, la rectificación tipo: **aparece publicada en la sección de *Cartas al director*, con una extensión de entre 1 y 4 columnas, no alude a la legislación que regula el derecho de rectificación, no suele acompañarse de comentarios ni notas por parte del medio, lleva por título la palabra *aclaración*, en el texto se plasma su propósito de corregir o negar y defender con ello su reputación o buen nombre; y, por último, ni presentaría un formato y**

titular propios de una noticia ni tampoco cumpliría con ninguna categoría de las señaladas como “extra”.

4.2. Cuestionarios de opinión a profesionales y usuarios

4.2.1. Obtención de resultados

En este punto, se detallan las preguntas de los cuestionarios dirigidos a cada uno de los grupos cuyas respuestas conforman nuestro objeto de análisis, así como los resultados obtenidos. Para ello, se han utilizado varios recursos gráficos e infográficos que se han realizado a través de la aplicación web *www.visme.co*.

En el caso del enunciado del cuestionario, hay que señalar que ha sido el mismo para los cuatro grupos:

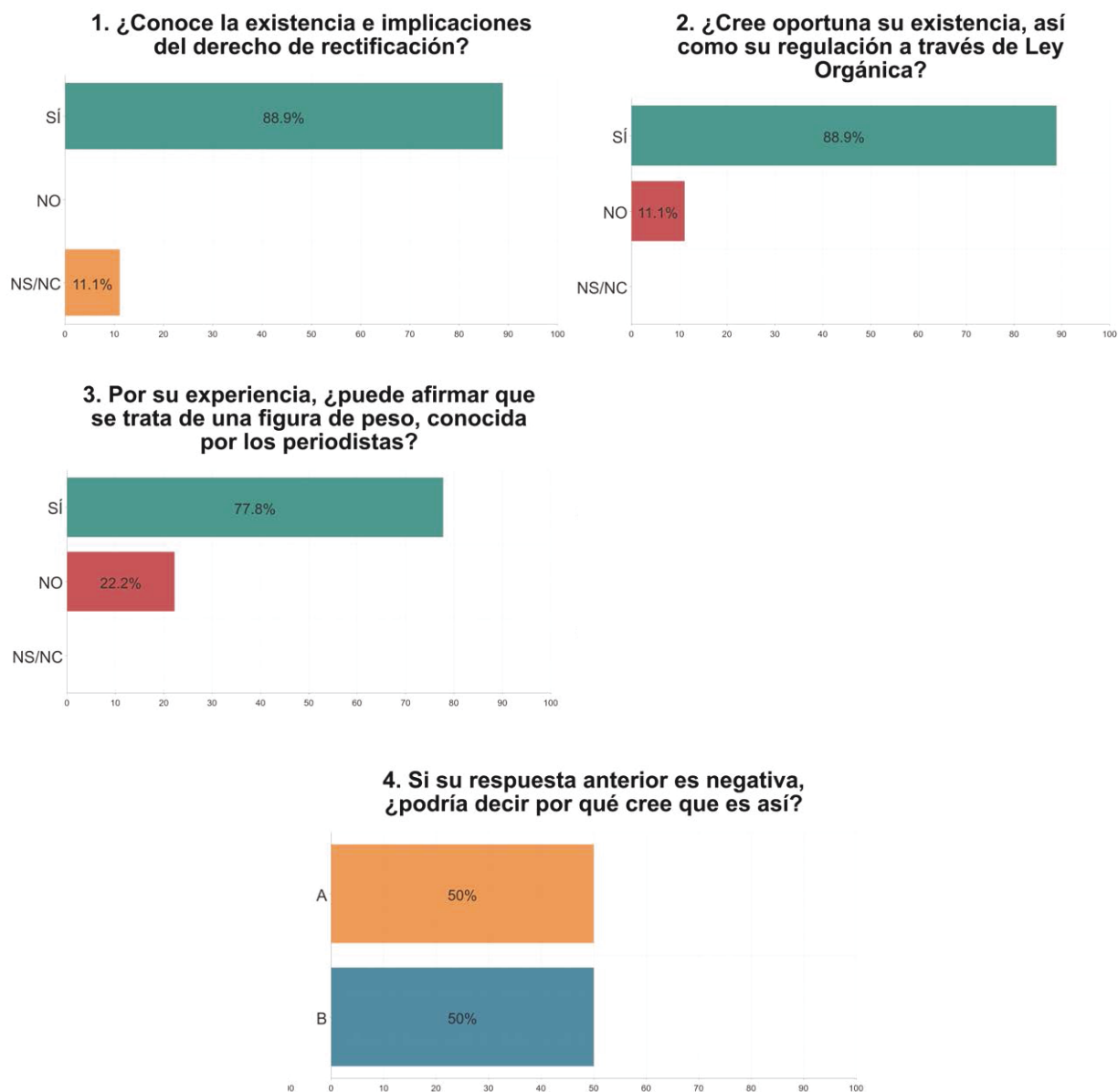
“Si le ha llegado este cuestionario es porque su aportación es relevante para que logre completar la investigación que desarrollo. **Por eso necesito su ayuda y le agradezco sinceramente que dedique 15 minutos de su valioso tiempo a complimentarlo.**

De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, todos los datos obtenidos de esta investigación se tratarán de forma confidencial y anónima, y con el único objeto científico enunciado.

Por favor, conteste a las siguientes preguntas con una de las opciones que se presentan. Sólo en el caso de que se le solicite una respuesta diferente, emplee sus propias palabras y con una extensión razonable”.

4.2.1.1. Responsables de diarios

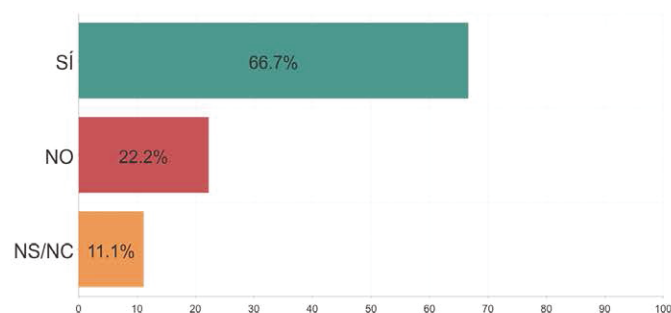
Todas las preguntas exigen respuesta obligatoria en el cuestionario, excepto las siguientes: 4, 6, 8, 10, 15, 17, 20, 22, las relativas a nombre y edad (23, 24) y a la valoración (31).



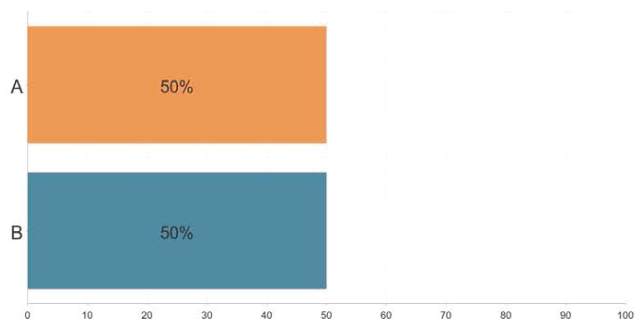
Respuestas. Pregunta 4

- A. La mayoría no sabe cuál es su alcance y qué ampara; generalmente son los directores de los medios quienes sí están al tanto de todos sus aspectos (son los destinatarios de las solicitudes).
- B. Falta de difusión.

5. Por su experiencia, ¿puede afirmar que se trata de una figura de peso, conocida por los lectores?



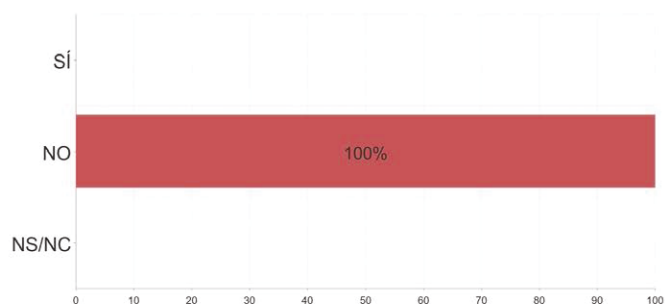
6. Si su respuesta anterior es negativa, ¿podría decir por qué cree que es así?



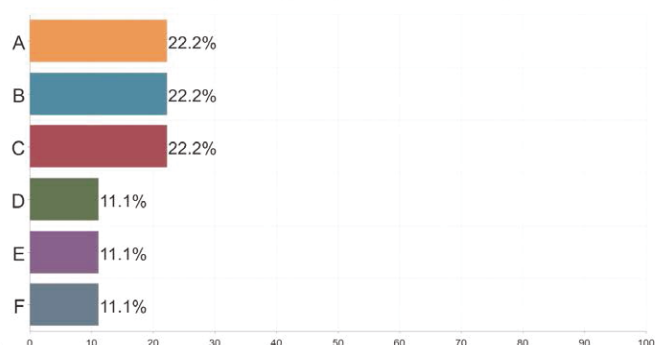
Respuestas. Pregunta 6

- A. Muchos lectores desconocen su existencia y en ocasiones se utiliza indebidamente.
- B. Falta de difusión.

7. ¿Cree que la publicación de rectificaciones supone un límite al derecho a informar?



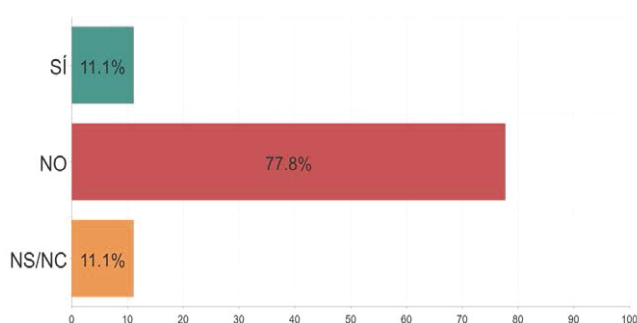
8. Justifique el porqué de su respuesta



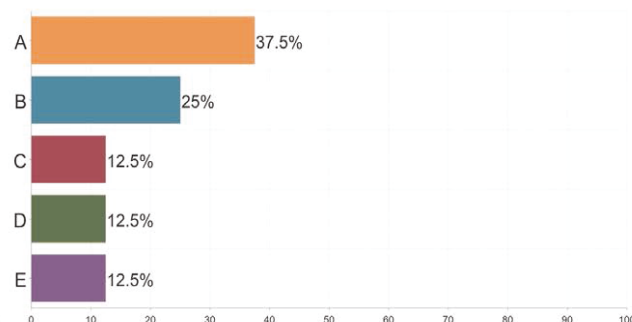
Respuestas. Pregunta 8

- A. Todos los derechos tienen límites en democracia y deben poder convivir.
- B. Es un derecho/garantía de la persona que ha sido aludida por un medio de discrepar y/o aportar su punto de vista.
- C. La información tiene por objeto ser veraz o alcanzar la mayor de las verosimilitudes.
- D. El derecho a la información es sagrado para un periodista y no debe condicionarlo nada.
- E. Solo es un límite si lo publicado es rigurosamente cierto.
- F. La profesión se enriquece y gana en credibilidad.

9. ¿Considera oportuno que los escritos de rectificación se publiquen en la sección de Cartas al Director?



10. Si su respuesta anterior es negativa, ¿dónde cree que deberían publicarse?



Respuestas. Pregunta 10

A. Depende de las circunstancias

A1. “Depende de las circunstancias. En ocasiones en *Cartas al Director*, pero en otras muchas pueden publicarse como informaciones, aunque con un estilo periodístico y no estrictamente en los mismos términos de la rectificación, si el autor lo permite”.

A2. “Creo que, si se debe a una discrepancia, a una opinión, sí pueden ir en *Cartas al Director*, pero si se trata de enmendar insuficiencia o error no son el lugar, deben ir en las secciones en las que fue publicado el original”.

A3. “Depende de cada caso y lo que se tenga que rectificar”.

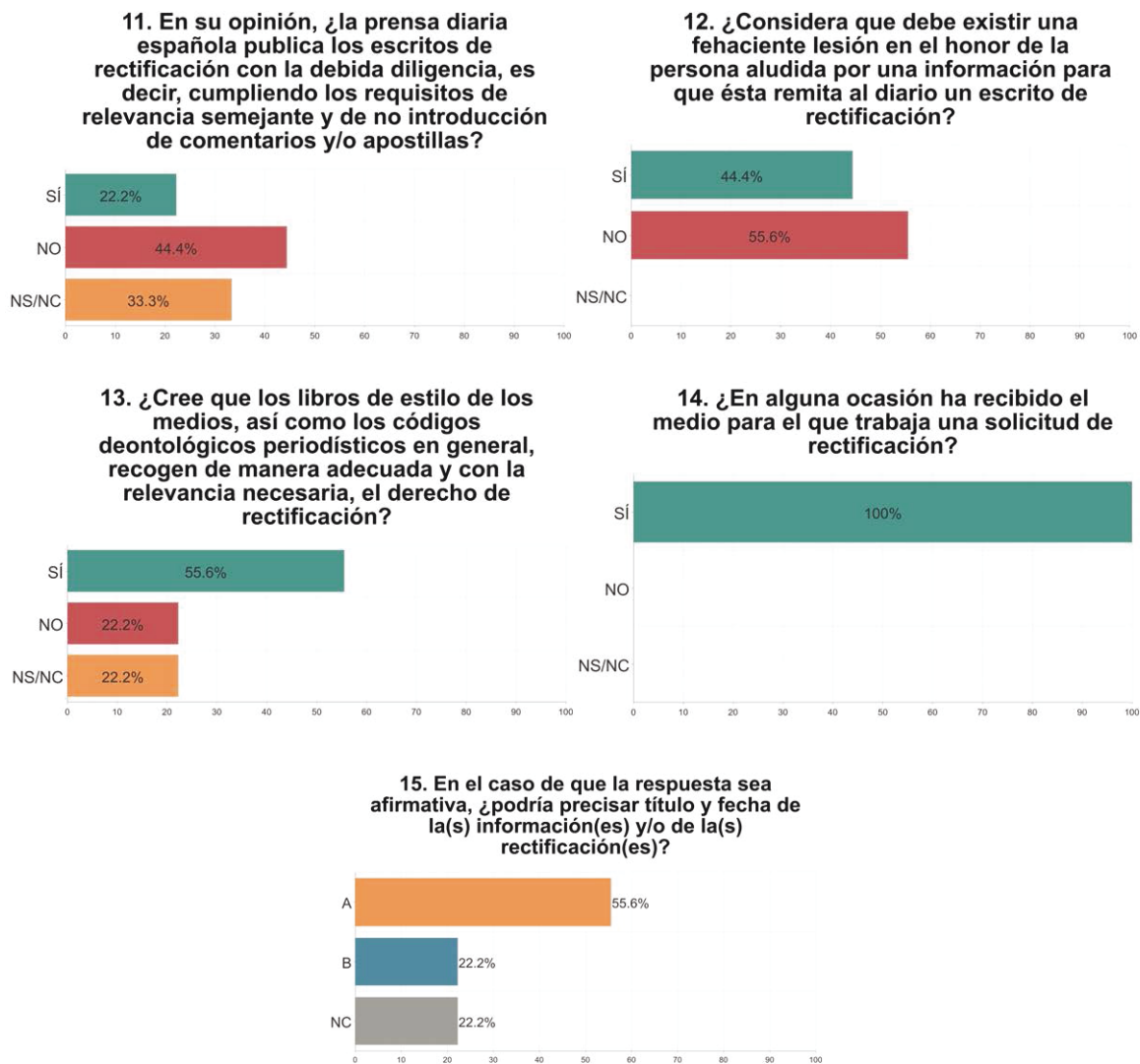
B. En la sección donde apareció la información objeto de rectificación.

C. Además de en las *Cartas al Director*, también en el mismo lugar donde apareció la información afectada.

D. En un lugar visible y las *Cartas al Director* lo son; aunque lo más correcto es publicarlas en el lugar que se solicite.

E. Si no lo establece la orden judicial, debe decidirlo el director del medio; en todo caso, en una posición tan visible como la información que originó la rectificación.

* Responde en este punto una persona que en la pregunta 9 contestó NS/NC



Respuestas. Pregunta 15

A. Muchas

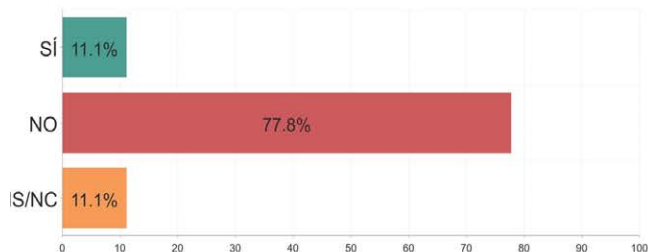
A1. “A lo largo de mi trayectoria como director de periódico he recibido muchas. Una media aproximada sería una cada tres meses. Eso [...] no significa que se haya rectificado información incierta. De hecho, nunca he publicado ningún texto de rectificación que implicara la existencia de una información inveraz”.

B. No puedo precisarlo.

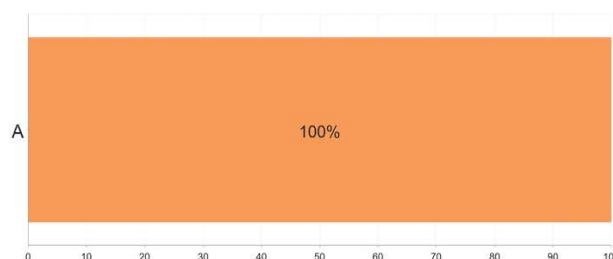
B1. “Imposible precisar. Nos llega una aproximadamente cada quince días”.

NC. No responden a la pregunta.

16. ¿Recuerda algún caso en el que el medio para el que trabaja no publicara espontáneamente un escrito de rectificación y se viera posteriormente obligado a hacerlo por orden del juez?



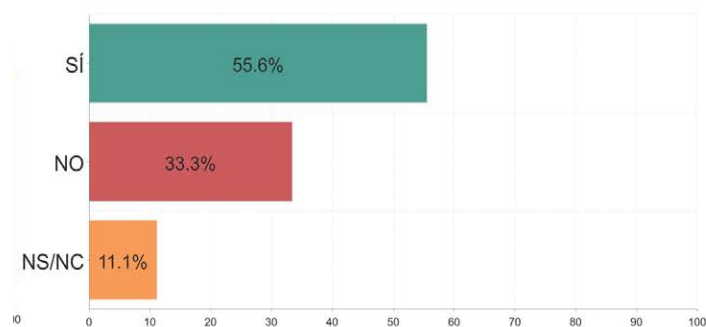
17. En el caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría precisar título y fecha de la(s) información(es) y/o de la(s) rectificación(es)?



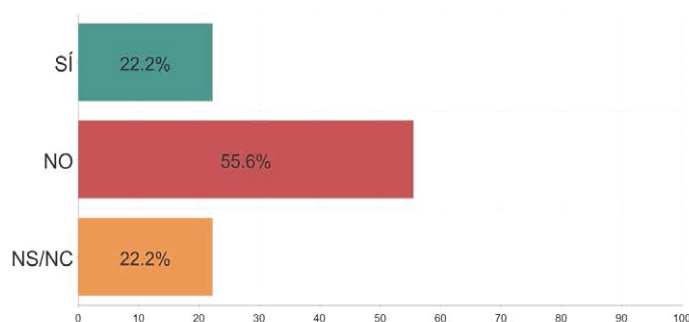
Respuestas. Pregunta 17

A. Son varios los casos

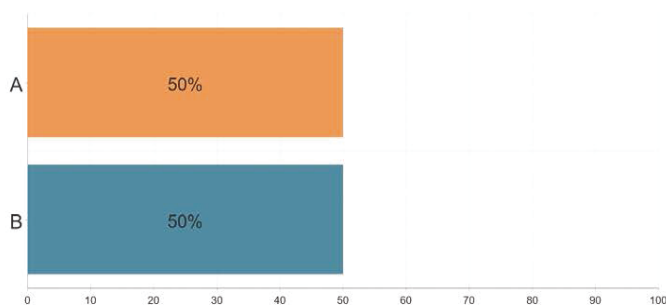
18. A su juicio, ¿goza el derecho de rectificación de la debida visibilidad y efectividad?



19. En su opinión y con carácter general, ¿son los diarios españoles reticentes a publicar escritos de rectificación?



20. En caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría decir por qué cree que es así?



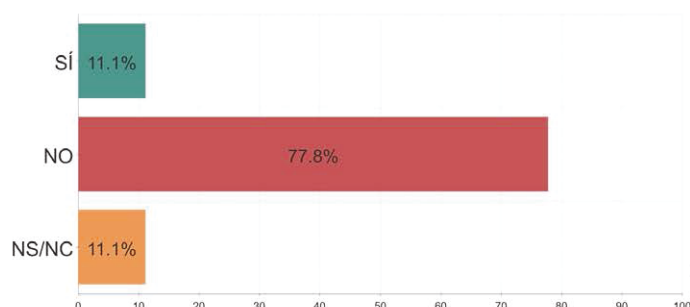
Respuestas. Pregunta 20

A. Falta generosidad en el reconocimiento del error.

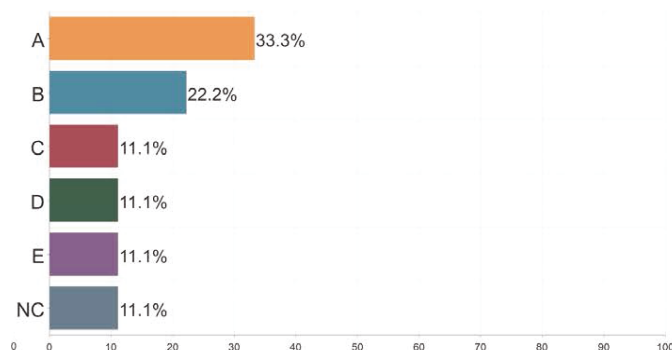
B. “La respuesta afirmativa se debe a la experiencia de nuestro grupo de comunicación, que se ha visto afectado por la negativa de algunos medios de comunicación españoles a cumplir con una orden judicial de rectificación sobre informaciones equivocadas en relación con nuestra gestión y contenidos”.

- * Responde en este punto una persona que en la pregunta 19 contestó NO: “Porque los escritos de rectificación a través de la justicia son de obligado cumplimiento”. No la incluyo porque contesta negativamente.

21. ¿Considera necesaria la existencia de la figura del Defensor del lector en materia de rectificación?



22. Justifique el porqué de su respuesta

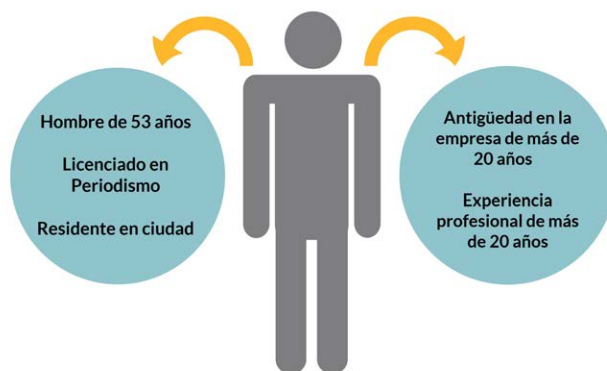
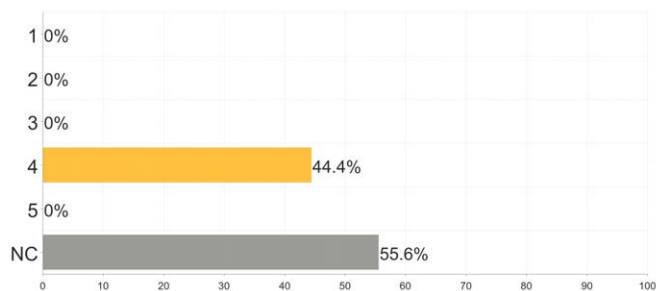


Respuestas. Pregunta 22

- A. Con el director del medio es suficiente.
- B. El propio medio es el primer defensor del lector, debe dar respuesta por las vías ordinarias.
- C. Es una figura conveniente (también para praxis profesional, deontología, etc.), pero la situación de los medios no permite este recurso.
- D. Es innecesaria si se conoce bien el alcance del derecho de rectificación y se tiene una buena asesoría jurídica.
- E. Ningún medio debería prescindir de esta figura porque su existencia supone que los derechos de los lectores/audiencia están garantizados.
- NC. No contesta a la pregunta.

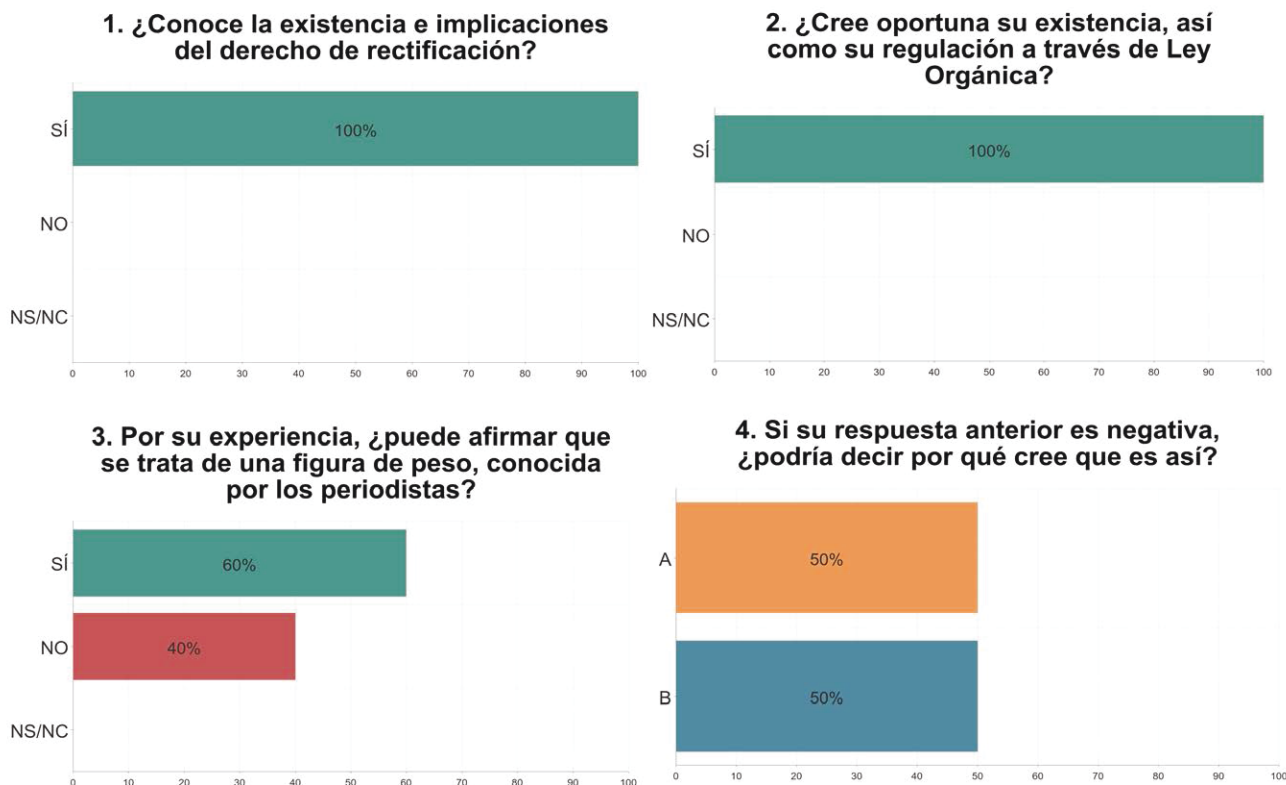
Valoración de la encuesta y perfil del encuestado

Gracias por haber completado este cuestionario. Si lo desea puede valorar aquí la encuesta (del 1 al 5)



4.2.1.2. Ombudsman

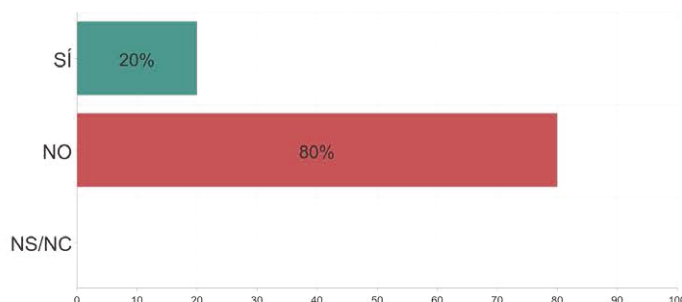
Todas las preguntas exigen respuesta obligatoria en el cuestionario, excepto las siguientes: 4, 6, 8, 10, 15, 17, 20, 22, las relativas a nombre y edad (23, 24) y a la valoración (31).



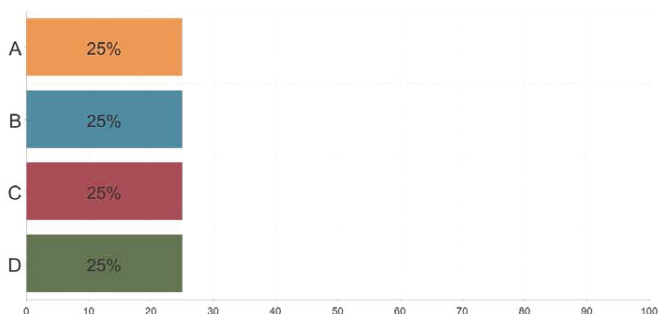
Respuestas. Pregunta 4

- A. No hay cultura en los medios de comunicación españoles y se considera negativo (evidencia el fallo del medio) en lugar de positivo (deseo de emergencia de verdad por parte del medio).
- B. Es conocido en teoría, pero poco usado en la práctica.

5. Por su experiencia, ¿puede afirmar que se trata de una figura de peso, conocida por los lectores?



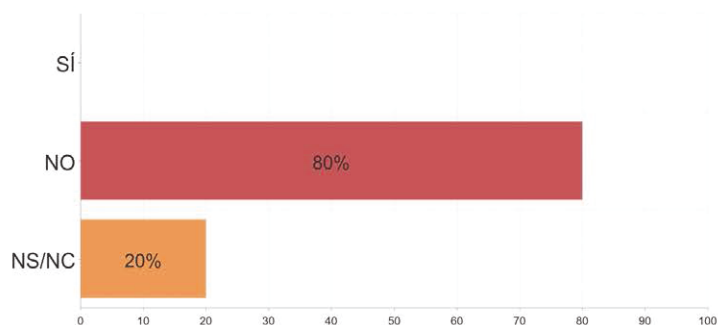
6. Si su respuesta anterior es negativa, ¿podría decir por qué cree que es así?



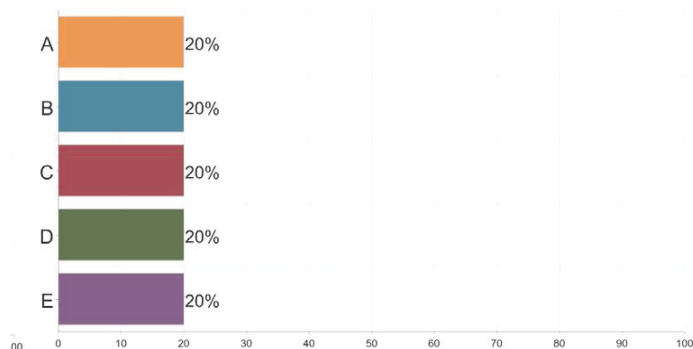
Respuestas. Pregunta 6

- A. No hay cultura, en realidad es solo el paso previo para la demanda judicial.
- B. No todo el mundo se acerca a esta figura, solo en aquellos casos en los que haya una implicación personal.
- C. Los lectores saben que existe, pero desconocen la ley, las situaciones en las que se aplica y cómo.
- D. Es una figura mucho más conocida por los periodistas que por los lectores, éstos suelen ponerse en contacto con los diarios para rectificar, pero no suelen hablar de “derecho de rectificación” con conocimiento de su existencia jurídica y las consecuencias que comporta.

7. ¿Cree que la publicación de rectificaciones supone un límite al derecho a informar?



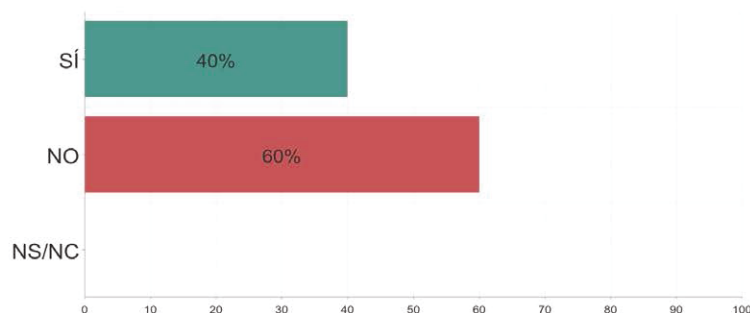
8. Justifique el porqué de su respuesta



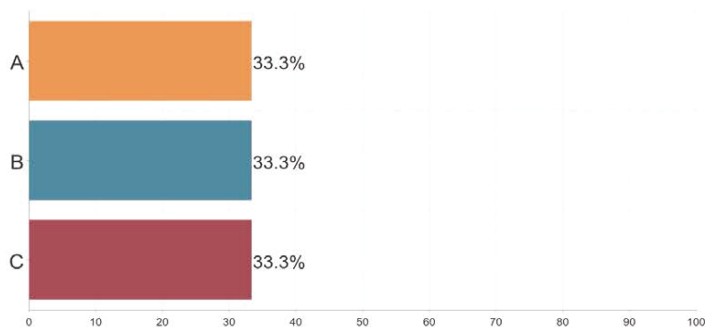
Respuestas. Pregunta 8

- A. El medio que reconoce el error ensalza el derecho a la información libre y contrastada.
- B. Como dice la ley, toda persona (natural o jurídica) tiene derecho a rectificar la información difundida.
- C. En nada limita el derecho a la información veraz.
- D. Si hay un error de mala praxis periodística debe subsanarse.
- E. Depende de los casos: la cuestión puede ser muy subjetiva, al final será el juez quien tome una decisión que respete ese derecho.

9. ¿Considera oportuno que los escritos de rectificación se publiquen en la sección de Cartas al Director?

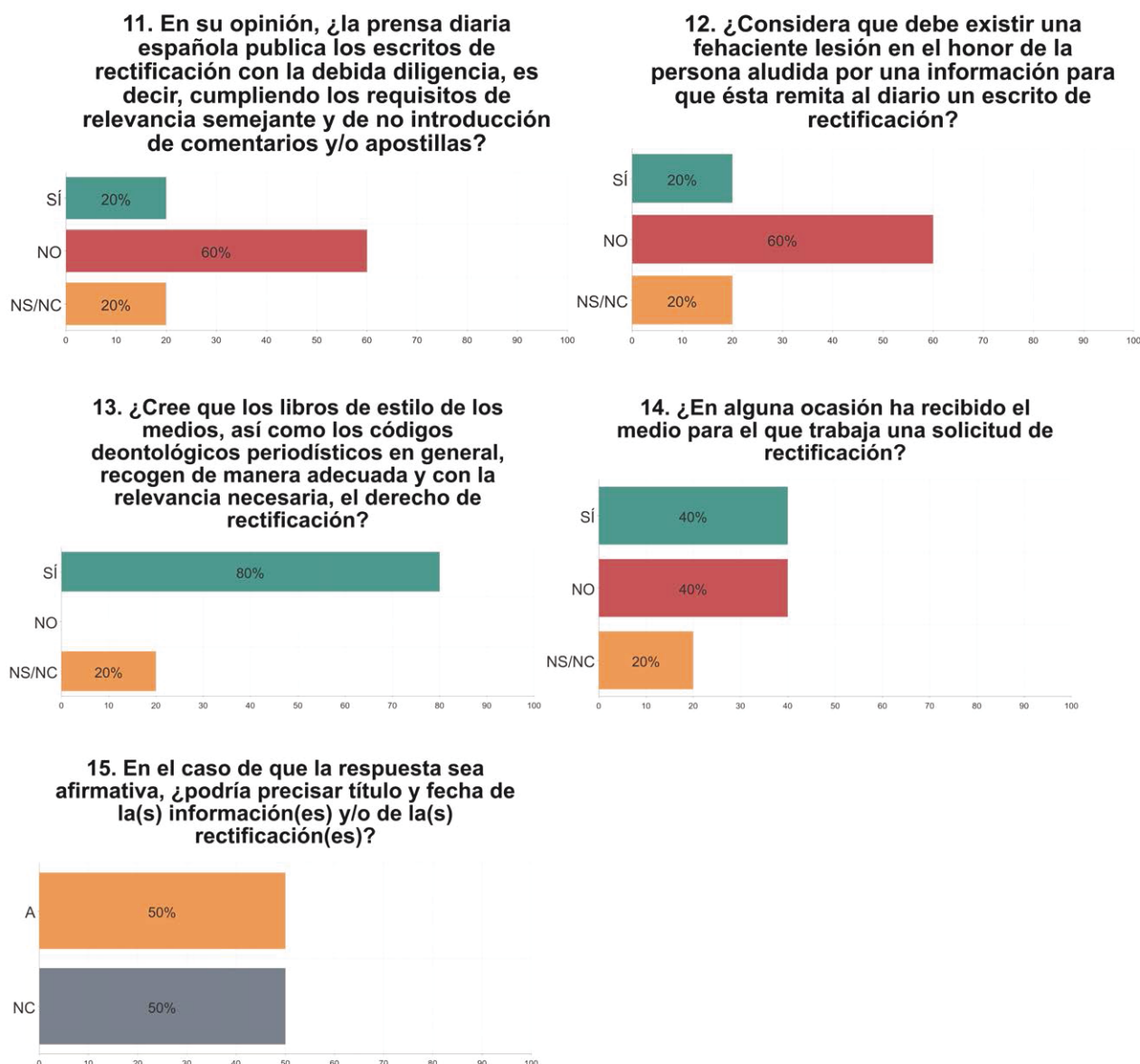


10. Si su respuesta anterior es negativa, ¿dónde cree que deberían publicarse?



Respuestas. Pregunta 10

- A. No es solo el qué sino el cómo: mismo tratamiento que la noticia a rectificar.
- B. Una cosa es corregir un error (que se hace con fe de errores o con una carta al director en la que se expone lo que se quiere rectificar) y otra es la obligación de publicar la rectificación cuando ha habido una denuncia ante los tribunales y éstos dan la razón al demandante: en ese caso la ley obliga a publicar en el mismo espacio y con la misma extensión.
- C. En la misma sección donde se publicó la información original.

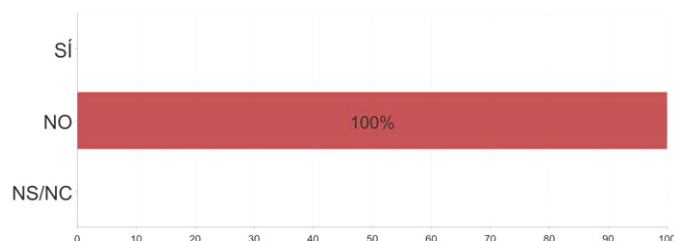


Respuestas. Pregunta 15

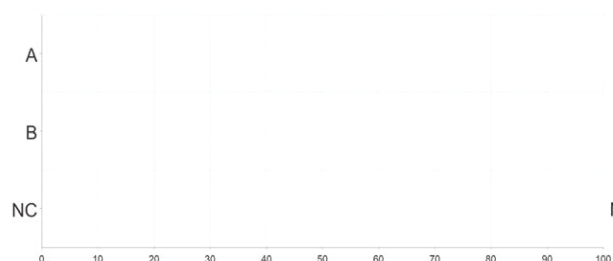
A. No recuerdo la fecha, pero se publicó una carta desmintiendo las afirmaciones de un columnista; el periódico ha publicado siempre las rectificaciones ordenadas por un juez.

NS/NC. No contesta a la pregunta.

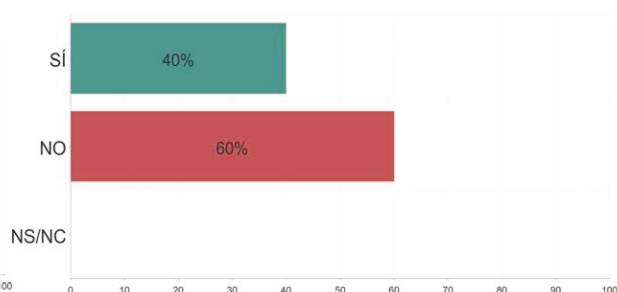
16. ¿Recuerda algún caso en el que el medio para el que trabaja no publicara espontáneamente un escrito de rectificación y se viera posteriormente obligado a hacerlo por orden del juez?



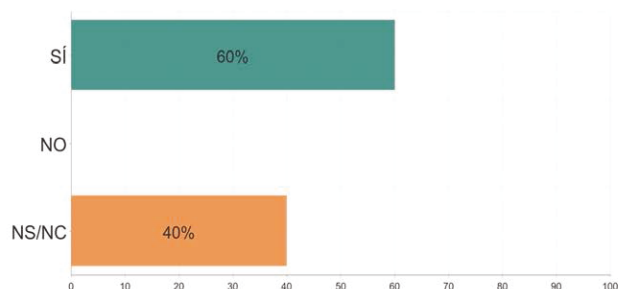
17. En el caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría precisar título y fecha de la(s) información(es) y/o de la(s) rectificación(es)?



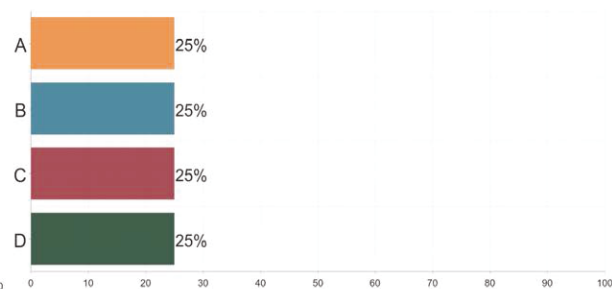
18. A su juicio, ¿goza el derecho de rectificación de la debida visibilidad y efectividad?



19. En su opinión y con carácter general, ¿son los diarios españoles reticentes a publicar escritos de rectificación?



20. En caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría decir por qué cree que es así?

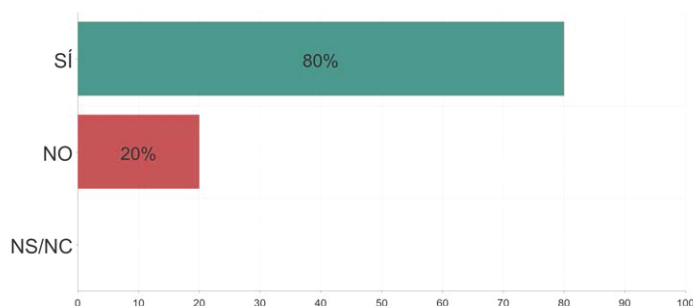


Respuestas. Pregunta 20

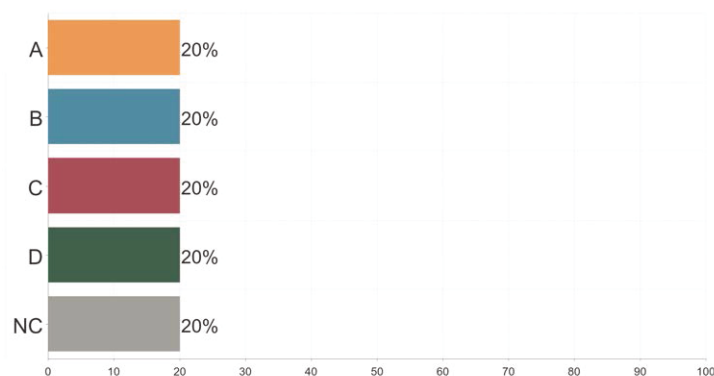
- A. No comprenden que el derecho a la información reside en los usuarios y no en ellos, reconocerlo significaría asumir errores.
- B. La cuestión choca, a veces, con el derecho a informar; los diarios tienen más facilidad para rectificar si el error es evidente y, cuando no lo ven claro, no rectifican a menos que haya una sentencia judicial.
- C. A nadie le gusta tener que rectificar.

D. En nuestro caso, la reticencia se ajusta a los casos en los que las informaciones son contrastadas y veraces, hay personas y grupos de interés que se amparan en una ley demasiado complaciente para ejercerlo con perseverancia.

21. ¿Considera necesaria la existencia de la figura del Defensor del lector en materia de rectificación?



22. Justifique el porqué de su respuesta

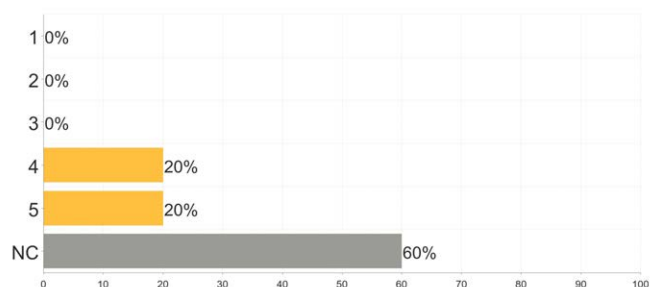


Respuestas. Pregunta 22

- A. Es una vía equilibrada y coherente, que ayuda en un proceso que puede ser largo.
- B. Facilita el contacto entre el medio de comunicación y la persona que quiere rectificar.
- C. En ausencia de esta figura, nadie en la redacción defiende los intereses del público.
- D. Esa función ya la ejerce el director del periódico.
- NC. No contesta a la pregunta.

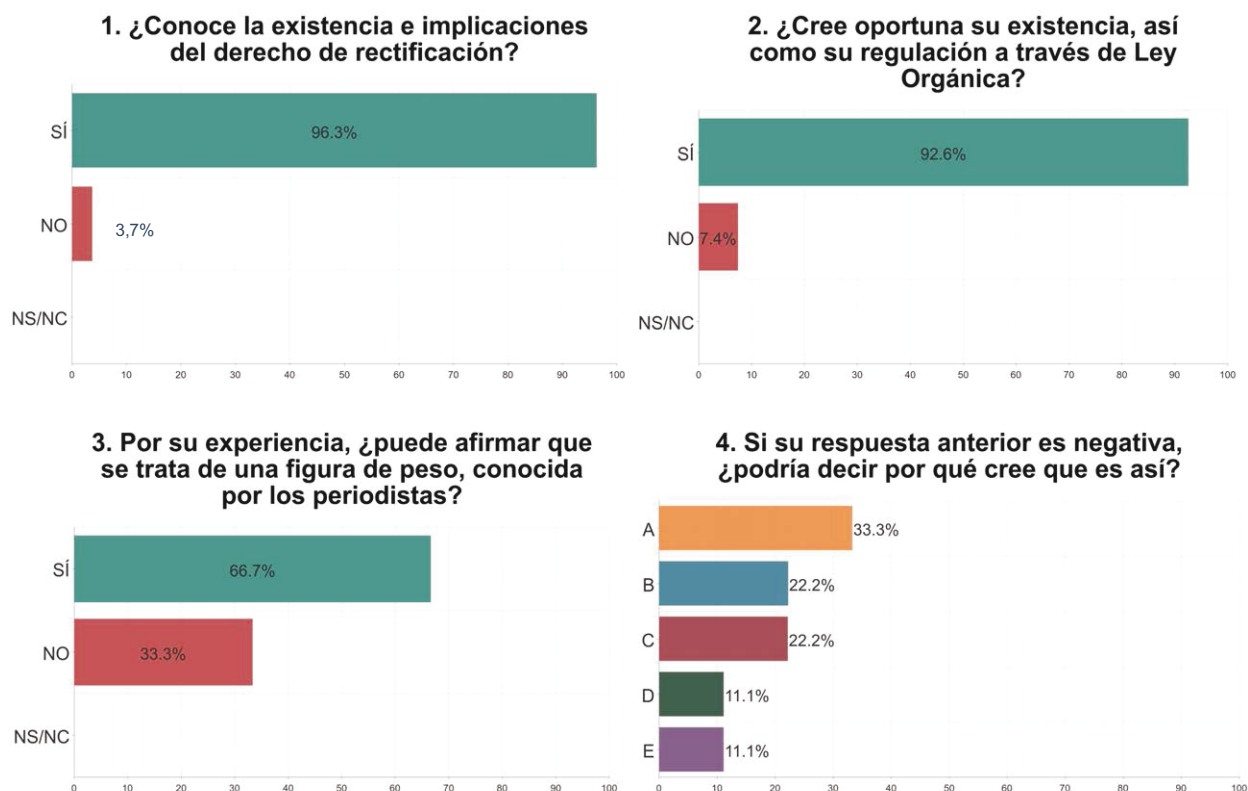
Valoración de la encuesta y perfil del encuestado

Gracias por haber completado este cuestionario. Si lo desea puede valorar aquí la encuesta (del 1 al 5)



4.2.1.3. Asociaciones de prensa

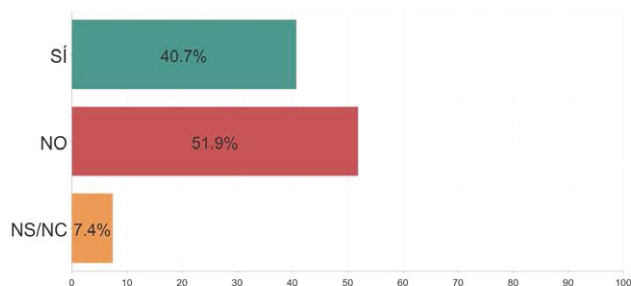
Todas las preguntas exigen respuesta obligatoria en el cuestionario, excepto las siguientes: 4, 6, 8, 10, 15, 17, 20, 22, 24, las relativas al nombre y edad (25, 26) y a la valoración (33).



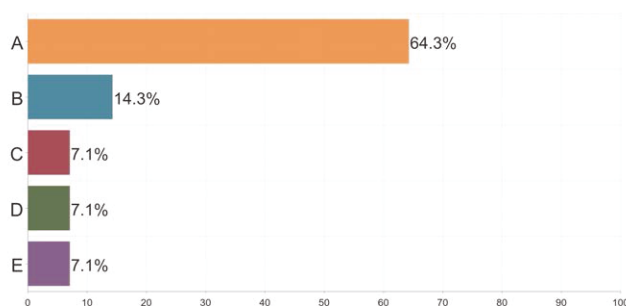
Respuestas. Pregunta 4

- A. Figura que apenas se utiliza.
- B. Falta conocimiento sobre deontología periodística.
- C. No hay visibilidad.
- D. Apenas es necesaria.
- E. Los medios creen que socava su prestigio.

5. Por su experiencia, ¿puede afirmar que se trata de una figura de peso, conocida por los lectores?



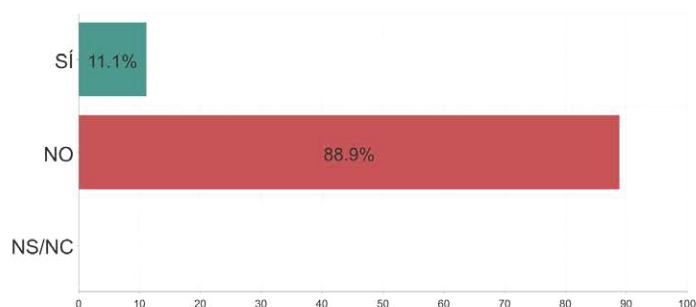
6. Si su respuesta anterior es negativa, ¿podría decirnos por qué cree que es así?



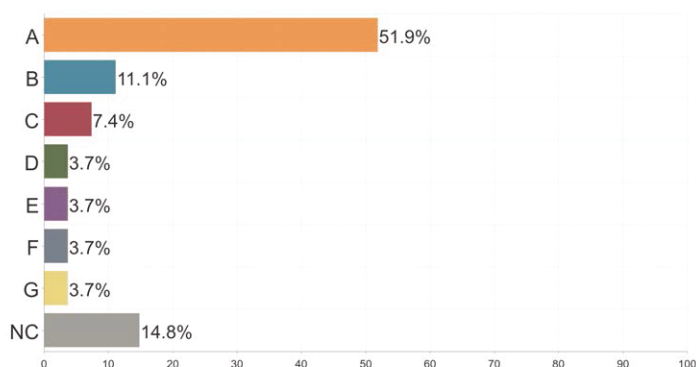
Respuestas. Pregunta 6

- A. Desconocimiento, falta de información.
- B. Se aplica de manera discutible.
- C. Pocos lectores recurren a ello.
- D. No hay suficiente jurisprudencia ni práctica.
- E. Las redes sociales desinforman de manera habitual, a lo que se une una percepción negativa de la Justicia por parte del lector (lentitud, poca capacidad y eficacia).

7. ¿Cree que la publicación de rectificaciones supone un límite al derecho a informar?



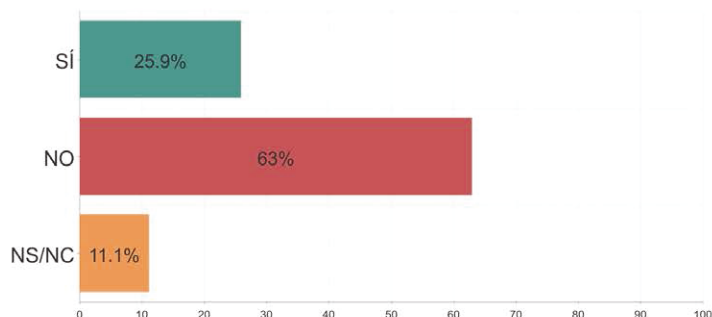
8. Justifique el porqué de su respuesta



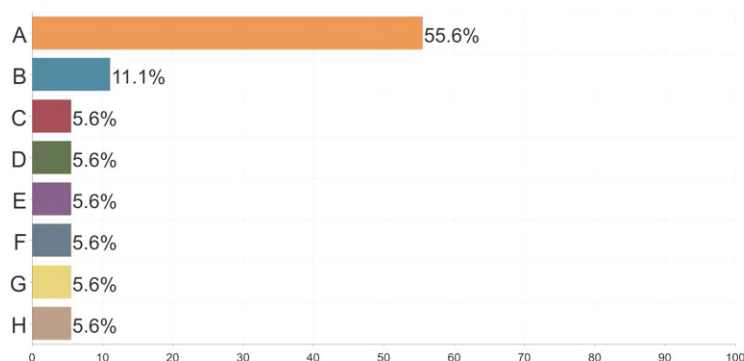
Respuestas. Pregunta 8

- A. Contribuye a la necesaria veracidad que exige el derecho a informar.
- B. Ayuda a mejorar la praxis profesional.
- C. El ejercicio de este derecho y la garantía para los ciudadanos deben ser compatibles.
- D. Sólo se deben rectificar informaciones manifiestamente erróneas, el límite al derecho a la información viene de la protección del derecho al honor y la propia imagen.
- E. Sería un límite sólo en el caso de que la información original fuera verdadera.
- F. Nada tiene que ver la información con el respeto a la intimidad y al honor.
- G. No todo vale. La libertad de expresión debe tener sus límites legales, éticos y profesionales.
- NC. No contestan a esta pregunta.

9. ¿Considera oportuno que los escritos de rectificación se publiquen en la sección de Cartas al Director?



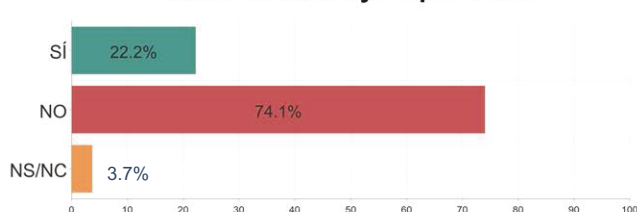
10. Si su respuesta anterior es negativa, ¿dónde cree que deberían publicarse?



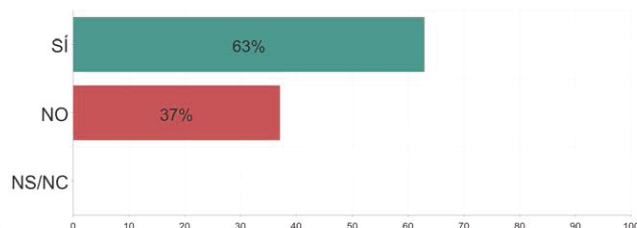
Respuestas. Pregunta 10

- A. Mismo lugar y extensión que la información que originó la rectificación.
- B. Depende de su importancia, pero siempre en un lugar visible.
- C. Deben publicarse forma destacada y notoria.
- D. Deben llegar a quién leyó la información de origen.
- E. No está mal que se publiquen en *Cartas al director*, pero sería más conveniente hacerlo en la misma sección donde se publicó la noticia falsa o errónea.
- F. No todas se publican en *Cartas al director*, algunos se publican en la sección correspondiente a su naturaleza informativa.
- G. Tal vez podría habilitarse un apartado específico.
- H. La única manera de que los medios sean creíbles es mostrando confianza y eso no lo da en exclusiva una carta, la sección de *Cartas al director* está en desuso en los medios digitales.

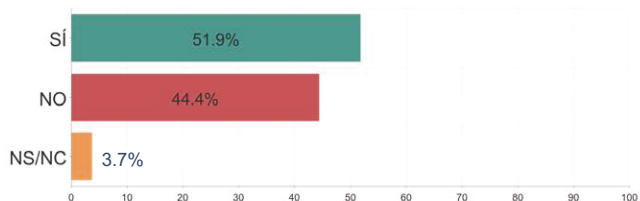
11. En su opinión, ¿la prensa diaria española publica los escritos de rectificación con la debida diligencia, es decir, cumpliendo los requisitos de relevancia semejante y de no introducción de comentarios y/o apostillas?



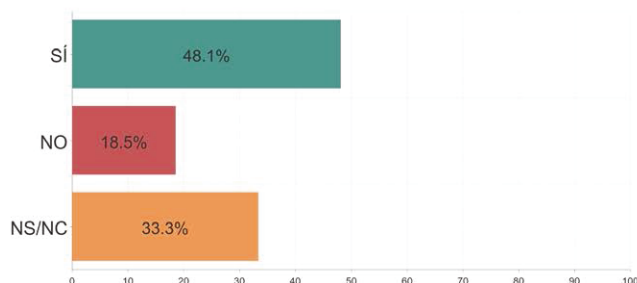
12. ¿Considera que debe existir una fehaciente lesión en el honor de la persona aludida por una información para que ésta remita al diario un escrito de rectificación?



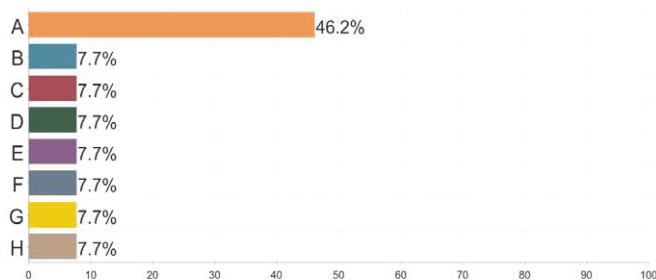
13. ¿Cree que los libros de estilo de los medios, así como los códigos deontológicos periodísticos en general, recogen de manera adecuada y con la relevancia necesaria, el derecho de rectificación?



14. ¿En alguna ocasión ha recibido el medio para el que trabaja una solicitud de rectificación?



15. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿podría precisar título y fecha de la(s) información(es) y/o de la(s) rectificación(es)?

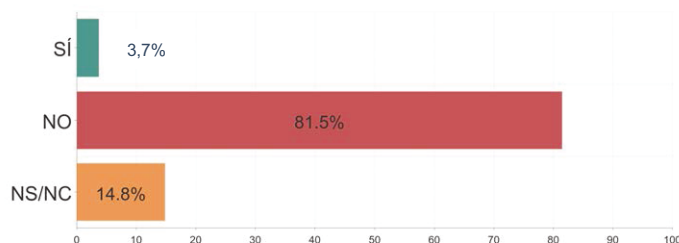


Respuestas. Pregunta 15

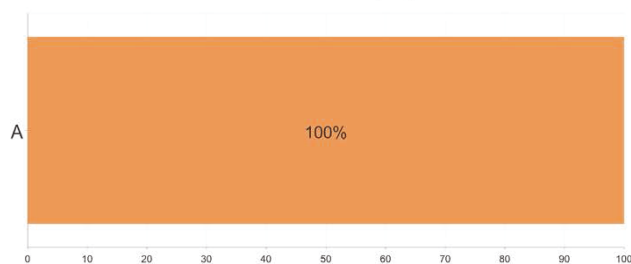
- A. No lo recuerdo, no puedo precisar.
- B. No puedo precisarlo, pero fueron tanto en prensa como en radio.
- C. En muy contadas ocasiones, porque la rectificación sólo tiene cabida si lo publicado es de extrema importancia y lesiona el honor y/o la imagen del afectado.
- D. Bastante irrelevantes: apellido mal escrito, fecha, lugar.

- E. Errores fehacientes o desacuerdo del afectado con el enfoque de la información.
- F. Sobre administración de loterías y resultado de competiciones deportivas (2017).
- G. Conflicto portuario en 2014, la rectificación se publicó en cuestión de horas, dando el mismo espacio que la información de origen y el afectado se dio por satisfecho.
- H. En campañas electorales municipales.

16. ¿Recuerda algún caso en el que el medio para el que trabaja no publicara espontáneamente un escrito de rectificación y se viera posteriormente obligado a hacerlo por orden del juez?



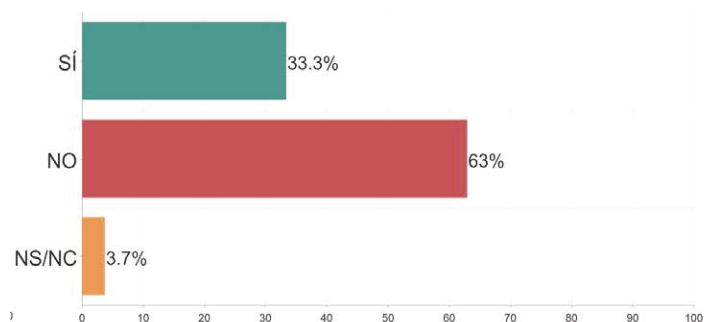
17. En el caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría precisar título y fecha de la(s) información(es) y/o de la(s) rectificación(es)?



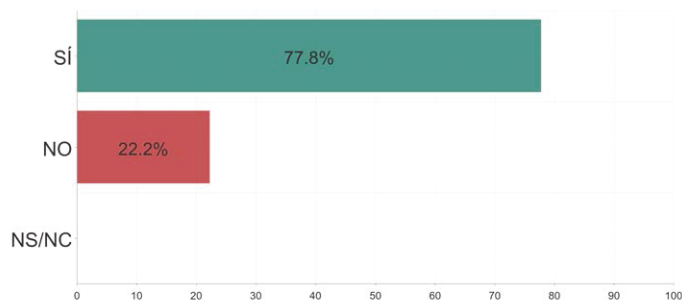
Respuesta. Pregunta 17

A. No lo recuerdo.

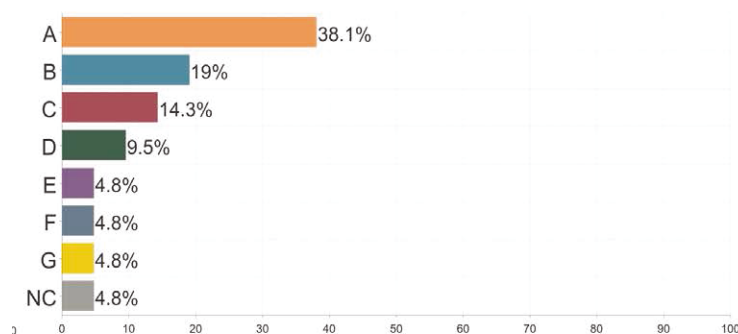
18. A su juicio, ¿goza el derecho de rectificación de la debida visibilidad y efectividad?



19. En su opinión y con carácter general, ¿son los diarios españoles reticentes a publicar escritos de rectificación?



20. En caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría decir por qué cree que es así?

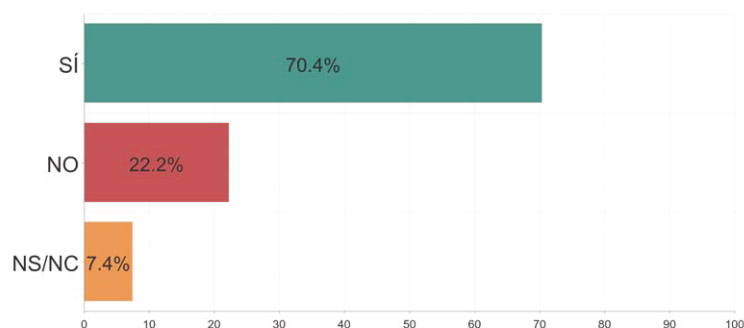


Respuestas. Pregunta 20

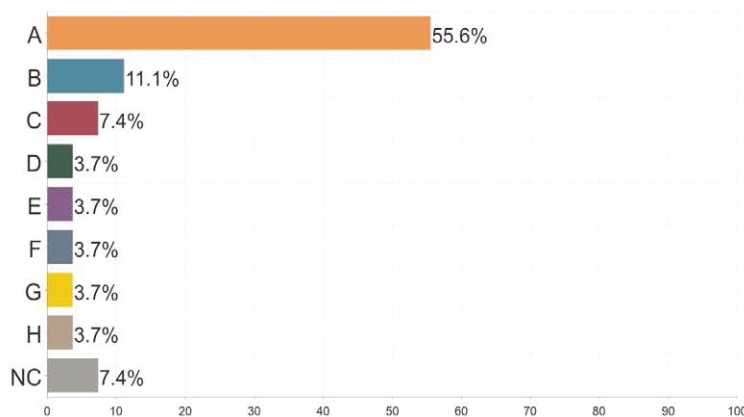
- A. Les cuesta reconocer los errores.
- B. Lo entienden como pérdida de credibilidad o demérito.
- C. En la mayoría de los casos, solo lo asumen si hay requerimiento judicial.

- D. Lo evidencia el hecho de que no den a las rectificaciones el mismo el espacio y tratamiento que a la información de origen.
- E. No son reticentes en cuanto a su publicación, pero sí en cuanto a la relevancia.
- F. He visto errores claros que no han sido rectificadas.
- G. Generalmente, acogándose al derecho de rectificación, se vierten otra serie de comentarios no relacionados, por lo que es mejor que un juez decida ante una denuncia contra el honor, por ejemplo.
- NC. No contestan a esta pregunta.

21. ¿Considera necesaria la existencia de la figura del Defensor del lector en materia de rectificación?



22. Justifique el porqué de su respuesta

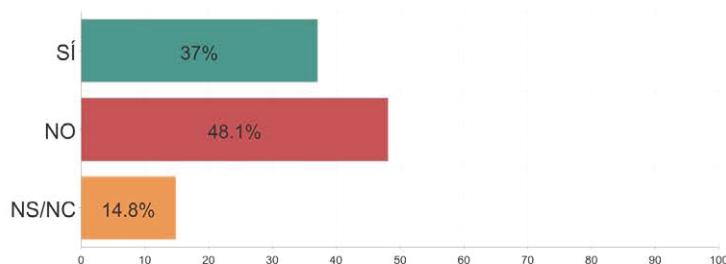


Respuestas. Pregunta 22

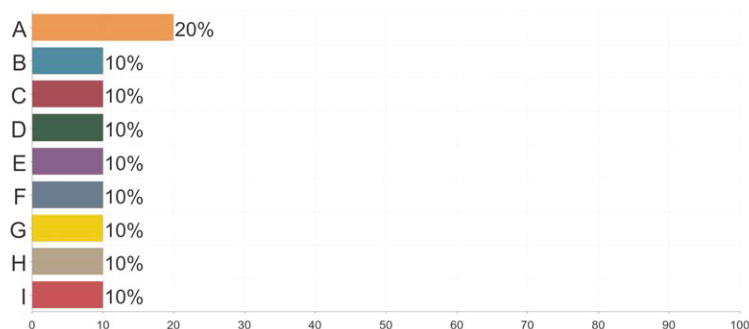
- A. Para ejercer el control sobre este tema, refuerza los derechos de los lectores.
- B. No se ha llegado a tal necesidad.
- C. Es una materia más de las que incumben al *Defensor del lector*, no debe haber una figura aparte en lo referente a rectificación.
- D. Va en ello la objetividad, credibilidad, seriedad y garantía del medio.

- E. La figura del *Defensor del lector* no goza de la independencia suficiente (se trata de periodistas que han formado parte de la plantilla durante años).
- F. Lo más importante es la autorregulación profesional, porque los medios son los principales interesados en defender el derecho a la información.
- G. Sería un apoyo adicional interesante, pero la elección de esa figura sería difícil.
- H. Una figura volcada en la rectificación presupone juzgar en negativo la honorabilidad y ética de los periodistas: anticiparse al hecho es cuestionar la actividad.
- NC. No contestan a esta pregunta.

23. ¿En alguna ocasión la asociación que preside ha recibido petición de ayuda o de asesoramiento por parte de un ciudadano o de un periodista en relación con el derecho de rectificación?



24. En el caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría precisar en qué consistía(n) el/los caso(s)?

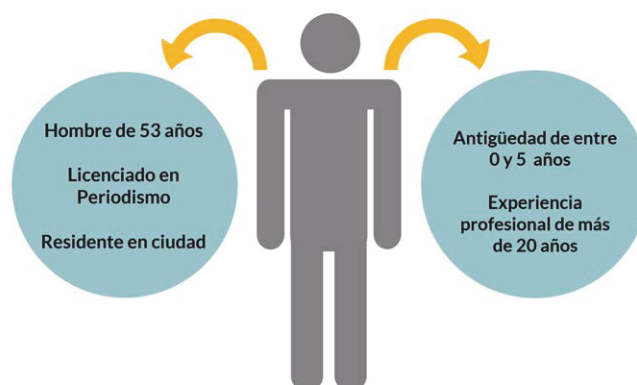
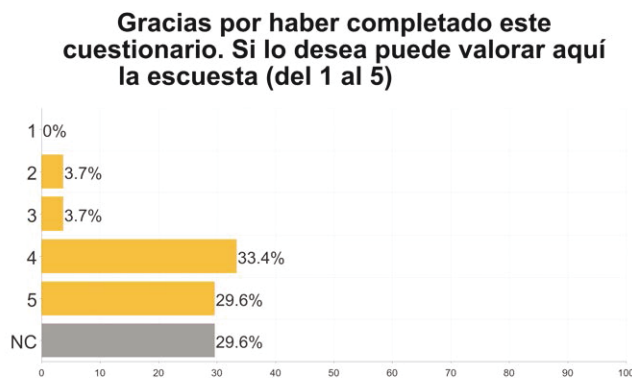


Respuestas. Pregunta 24

- A. Al ver que no pueden replicar y/o que el medio se niega a publicar sus rectificaciones.
- B. Personas que creen que tienen ese derecho.
- C. Informaciones falsas, ofensivas o interesadas de parte.
- D. Informaciones erróneas, aunque en muchos casos carecen de relevancia.

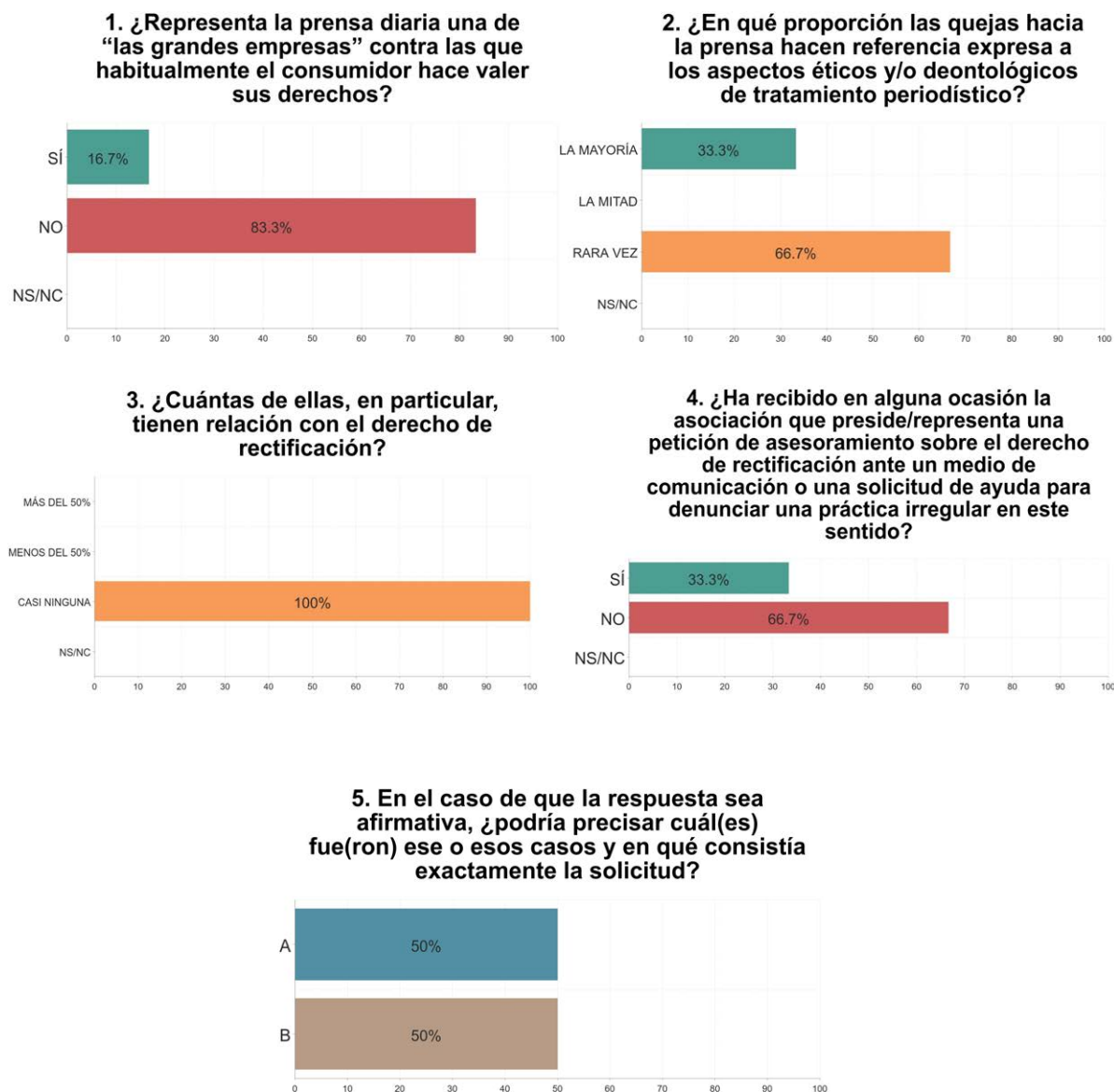
- E. Con referencia a columnas de opinión o informaciones relacionadas con salud y menores.
- F. El ayuntamiento de la ciudad puso en tela de juicio la opinión de una periodista que anteriormente había trabajado en el gabinete de prensa de un partido político; aludía a que, después de eso, no era imparcial.
- G. Ciudadano que pidió nuestro amparo al ver su nombre en un conflicto de oposiciones a funcionario; le asesoramos y pedimos que redactara la solicitud de rectificación, pero luego no lo hizo.
- H. La televisión local acusó al alcalde de estar “en evidente estado de embriaguez”.
- I. No lo recuerdo.

Valoración de la encuesta y perfil del encuestado



4.2.1.4. Asociaciones de consumidores y usuarios

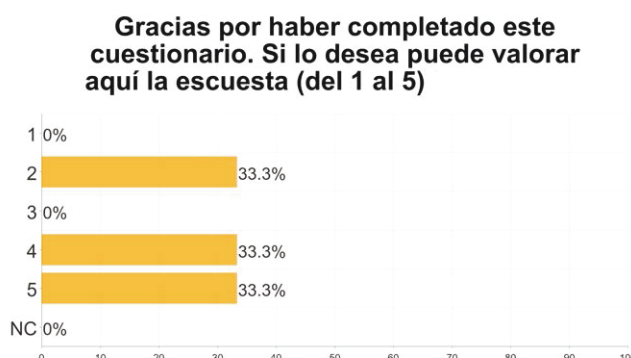
Todas las preguntas exigen respuesta obligatoria en el cuestionario, excepto las siguientes: la número 5, las relativas al nombre y edad (6, 7) y a la valoración (14).



Respuestas. Pregunta 5

- A. Personas que consideran que la información que les alude es errónea y que atenta contra su honor, intimidad o propia imagen (representante de organizaciones sociales, profesional, político o, incluso, algún famoso).
- B. Por un titular que inducía a error sobre la realidad del contenido de la información, por publicidad que inducía a engaño (algo no directamente achacable al medio) o por algún tema menor.

Valoración de la encuesta y perfil del encuestado



4.2.2. Análisis de resultados

A. Responsables de diarios

La mayoría de los responsables de los diarios que han respondido al cuestionario aseguran conocer la existencia e implicaciones del derecho de rectificación, en concreto casi un 89% (**pregunta 1**). Una cifra idéntica a la que cree que es oportuna tanto la existencia de esta figura, como su regulación jurídica a través de Ley Orgánica (**pregunta 2**).

En cuanto a si creen que es conocida por los periodistas, casi el 78% considera que sí, frente a un 22% que cree que no es popular entre los profesionales (**pregunta 3**). Las razones que alegan estos últimos para justificar su respuesta son que la mayoría de los periodistas desconoce su alcance ni qué ampara (son los directores los que suelen tratar con estos casos) y que existe una falta de difusión que frena ese conocimiento (**pregunta 4**).

A esa misma pregunta, pero con relación a los lectores (**pregunta 5**), si creen que el derecho de rectificación es una figura de peso y conocida dentro de ese grupo, la mayoría vuelve a contestar que afirmativamente (casi un 67%), frente a un 22% que responde de manera negativa y un 11% que no lo sabe o no contesta a la cuestión planteada. Dentro de ese 22% de los encuestados que cree que los lectores no conocen el derecho de rectificación, el 50% considera que un ejemplo de ello es que lo usan de modo indebido, mientras que la otra mitad alega falta de difusión (**pregunta 6**).

El total de los encuestados cree que el derecho de rectificación no supone un límite al derecho a informar (**pregunta 7**), por varias razones: los derechos están limitados en democracia y deben convivir (22%), se trata de un derecho-garantía que permite a la persona aludida en una información discrepar y ofrecer su punto de vista, la información debe ser veraz, el derecho a la información es sagrado para un periodista y nada debe condicionarlo, solo actuaría como límite en el caso de que lo publicado sea rigurosamente cierto, la profesión se enriquece y gana en credibilidad (**pregunta 8**). Los tres primeros argumentos son los que más se repiten (un 22% cada uno), mientras que los últimos tres alcanzan un 11%.

En lo referente al lugar de publicación de los escritos de rectificación, la mayoría (casi un 78%) no estima que las *Cartas al director* sea el mejor lugar para hacerlo, frente a un 11% que considera que sí y otro 11% que no sabe o no contesta (**pregunta 9**). De aquellos que responden que esa sección no es la más indicada para difundir las rectificaciones, un 37,5% asegura que depende de las circunstancias (pregunta 10). Y en ese punto llaman la atención dos respuestas: la que asegura que a veces pueden publicarse en la sección de *Cartas al director* y muchas otras como informaciones con estilo periodístico y no estrictamente en los

términos de la solicitud de rectificación (si el autor lo permite), y la que defiende que, en el caso de que se trate de discrepar de una opinión, sí pueden publicarse en *Cartas al director*, pero si se trata de corregir un error deben ir en las secciones en las que se publicó la información de origen. El resto de respuestas pueden resumirse en: debe publicarse en la misma sección que la información que motiva la rectificación (25%), además de en *Cartas al director* en el mismo lugar donde apareció la información afectada (12,5%); en un lugar visible (y las *Cartas al director* lo son) siendo lo más correcto publicarlas en el lugar que se solicite (12,5%); si no lo establece la orden judicial, debe decidirlo el director del medio —en cualquier caso en una posición tan visible como la que tuvo la noticia de origen— (12,5%).

Menos de la mitad de los encuestados (poco más de un 44%) cree que la prensa diaria española no publica los escritos de rectificación con la debida diligencia, es decir, respetando los requisitos de relevancia semejante y no introducción de comentarios y/o apostillas; frente al 22% que considera que sí cumple y un 33% que indica no saberlo o prefiere no contestar (**pregunta 11**). Más de la mitad (55,6%) opina que no es necesario que exista una lesión al honor constatable para que la persona aludida por un medio pueda rectificar la información, frente a un 44,4% que cree que sí debe existir esa fehaciente lesión a los derechos de personalidad del solicitante (**pregunta 12**).

En cuanto a los libros de estilo de los medios y los manuales deontológicos, la mayoría (un 55,6%) considera que recogen adecuadamente y con la relevancia necesaria el derecho de rectificación, frente a un 22% que piensa lo contrario y otro 22% que no sabe contestar a la pregunta o prefiere no hacerlo (**pregunta 13**).

Por otra parte, el 100% de los encuestados asegura que alguna vez el medio para el que trabaja ha recibido una solicitud de rectificación (**pregunta 14**); y más de la mitad señala que han sido muchas las ocasiones en las que esto ha sucedido (55,6%), mientras que un 22% reconoce no poder precisar la segunda parte de la pregunta —que planteaba precisar el título y/o fecha de las informaciones y/o los escritos que la rectifican— y otro 22% que no sabe o no contesta (**pregunta 15**). En este punto cabe destacar que dos de los encuestados se atreven a ofrecer una suerte de frecuencia en la recepción de solicitudes de rectificación en el medio en el que trabajan: uno de ellos afirma que la media será de una cada tres meses, mientras que el segundo establece una relación temporal aproximada de una cada quince días.

A la pregunta de si recuerda algún caso en el que el medio para el que trabaja no publicara un escrito de rectificación voluntariamente y luego se viera obligado a difundirlo por orden judicial (**pregunta 16**), el 11% reconoce que efectivamente eso ha ocurrido, mientras que casi el 78% afirma que no y el 11% restante no se pronuncia al respecto. Ese 11% que asegura haber observado dicha situación, no concreta título ni fecha y se limita a apuntar que fueron varios los casos (**pregunta 17**).

En cuanto a la visibilidad y efectividad del derecho de rectificación, más de la mitad de los encuestados (55,6%) lo considera un hecho, mientras que un 33,3% responde negativamente y un 11% no sabe o no desea contestar (**pregunta 18**). De nuevo la mayoría en el mismo porcentaje (55,6%) asegura que los diarios no son reticentes a publicar las rectificaciones, frente a un 22% que cree lo contrario y otro 22% que no sabe o no contesta (**pregunta 19**). Para aquellos que sí creen que a la prensa diaria le cuesta publicar estos escritos, las razones son varias (**pregunta 20**): existe una falta de generosidad en el reconocimiento del error o han vivido una situación similar con respecto a propio medio de comunicación (en concreto, asegura uno de los encuestados que el grupo de comunicación para el que trabaja se ha visto afectado por la negativa de varios medios a cumplir con una orden judicial que exigía publicar una rectificación sobre informaciones falsas que les afectaban). A esta misma pregunta ha contestado otro de los encuestados, aunque en este caso no puede darse por válida, ya que poder responder a esta cuestión exigía haberlo hecho de forma afirmativa en la anterior (*¿son los diarios reticentes a publicar los escritos de rectificación?*); y en su caso no fue así.

La gran mayoría (casi un 78%) cree que no es necesaria la presencia de la figura del *Defensor del lector* hablando en términos de derecho de rectificación (**pregunta 21**), porque: con el director del medio es suficiente (33,3%), el propio medio debe dar respuesta por las vías ordinarias (22%), es una figura conveniente pero que los medios no se pueden permitir (11%) o basta con conocer bien el alcance del derecho y contar con asesoría jurídica (11%). Sólo un 11% de los encuestados considera que la presencia del *Defensor del lector* en la redacción es necesaria: su existencia supone que se garantizan los derechos de los lectores, por lo que ningún medio debería prescindir de esta figura. Mientras que el 11% restante no sabe qué contestar a esta cuestión o no prefiere no responder (**pregunta 22**).

En cuanto a la **valoración** que recibe el cuestionario por parte de este grupo, más de la mitad se abstiene de puntuarlo (55,6%) y un 44,4% le da una puntuación de 4 sobre 5.

Otro aspecto que hemos creído interesante ha sido el de elaborar un **perfil tipo del encuestado**: hombre de 53 años, licenciado en Ciencias de la Información o Periodismo, residente en una ciudad, con una antigüedad en la empresa de más de 20 años y una experiencia profesional también superior a las dos décadas.

En concreto, el 88,88% de los encuestados son hombres, su media de edad es de 53,125 años (solo una de las personas no aporta el dato sobre su edad), todos ellos residen en una ciudad —ya sea capital de provincia o de comunidad autónoma— y son licenciados, el 77,77% cuenta con una antigüedad en la empresa en la que trabaja superior a los 20 años y el 100% supera las dos décadas en cuanto a experiencia profesional.

Conclusiones

- La gran mayoría de los directores/ responsables de los periódicos conocen el derecho de rectificación y sus implicaciones, además de considerar necesaria su regulación jurídica.
- Asimismo, 7 de cada 10 creen que los periodistas conocen esta figura y 6 de cada 10 aseveran lo mismo por lo que se refiere a los lectores.
- La práctica totalidad considera que el derecho de rectificación no supone un límite a la libertad de informar, aunque en una respuesta encontramos la afirmación de que sí se trataría de un límite en el caso de que la información que se quisiera rectificar fuese rigurosamente cierta (11%). En este punto, encontramos algunos detalles que denotan poca familiaridad con el tema, puesto que el término “cierta” no es equiparable al de “veraz” (o, lo que es lo mismo, diligente; y que es el aspecto que puede valorarse jurídicamente. Igualmente ocurre en otra de las respuestas en las que se apunta, textualmente, que “el objeto de la información pasa por alcanzar la mayor de las verosimilitudes”. Aquí se confunden también erróneamente los términos “veraz” y “verosímil”, siendo éstas las acepciones de las RAE para cada uno de los conceptos: *Verosímil* 1. que tiene apariencia de verdadero 2. creíble por no ofrecer carácter alguno de falsedad; *Veraz* 1. que dice, usa o profesa siempre la verdad. Si bien, como ya hemos señalado a lo largo del presente trabajo, el concepto jurídico de verdad es extremadamente complejo, por lo que en el caso del periodismo siempre se habla de “veracidad” de la información (como equivalente de un trabajo diligente y contrastado).
- La mayoría de las respuestas (7 de cada 10) afirman que no es oportuno publicar los escritos de rectificación en la sección *Cartas al director*, aunque a la hora de justificarlo se encuentran, a nuestro juicio, con una contradicción; a lo que se une que las respuestas denotan desconocimiento en la materia. De un lado, más de un tercio de los encuestados que han contestado negativamente a esa pregunta asegura que el donde se publiquen los escritos depende de las circunstancias (en muchos casos —o, al menos, en aquellos que tengan que ver con discrepar de una opinión— sí pueden difundirse en la sección de *Cartas al director*) e, incluso, encontramos una respuesta donde se justifica que las rectificaciones sean publicadas por el medio con forma de noticia y estilo periodístico, —eso sí, siempre con el beneplácito del interesado—. De otro, encontramos otros argumentos como que las rectificaciones deben publicarse en un lugar visible y que las *Cartas al director* lo son, o que el lugar debe decidirlo el

medio si la orden judicial no lo explicita (el medio no debe tener esa potestad y, además, se da por sentado que en todo caso debe existir ese mandato judicial).

- El 44,4% de los encuestados afirma que la prensa no publica las rectificaciones de forma diligente, es decir dando relevancia semejante al escrito y absteniéndose de acompañarlo de comentarios, frente al 22% que opina lo contrario. Parece, por tanto, que en esta cuestión los medios entonan el *mea culpa*. Situación que tampoco quieren achacar a la insuficiente difusión que el derecho de rectificación tiene entre los periodistas: más de la mitad cree que los libros de estilo y los códigos de deontología profesional recogen de manera suficiente esta figura jurídica.
- El 100% reconoce que el medio para el que trabaja ha recibido alguna vez una solicitud de rectificación y más de la mitad confiesa que dichas ocasiones han sido “muchas”, si bien no contestan a la segunda parte de la cuestión y no precisan ni el título ni la fecha de las mismas. La mayoría niega que el medio para el que trabaja no haya dado respuesta espontánea a una solicitud de rectificación que luego se haya visto obligado a publicar por mandato del juez y más de la mitad cree que el derecho de rectificación goza de la debida visibilidad y efectividad. Además, más del 55% niega que los medios sean reticentes a publicar las rectificaciones y, en ese mismo porcentaje, opinan que es innecesaria la figura del *Defensor del lector* al considerar que las figuras del director o el propio medio son suficientes para encargarse de esos temas o, en su caso, una buena asesoría jurídica.

B. Ombudsmen

El 100% de los encuestados asegura conocer tanto la existencia como las implicaciones del derecho de rectificación (**pregunta 1**), además de considerar oportuno que se regule a través de Ley Orgánica (**pregunta 2**).

Una figura que también es conocida por los periodistas, según afirma un 60% frente al 40% que cree lo contrario (**pregunta 3**) y que argumenta que no hay cultura en los medios de comunicación españoles y que éstos lo consideran negativo; o que en la teoría se conoce, pero en la práctica apenas se utiliza (**pregunta 4**).

En cuanto a si esta figura jurídica es conocida por los lectores, un 20% asegura que sí, pero la gran mayoría —el 80%— lo niega (**pregunta 5**) y aporta hasta cuatro argumentos distintos (**pregunta 6**): no hay cultura, únicamente hay un acercamiento a esta figura en el caso de que exista un interés personal, los lectores desconocen en las situaciones que se aplica y cómo se gestiona; y los lectores no

hablan de este derecho con conocimiento jurídicos y desconocen las consecuencias que comporta.

Tampoco consideran la mayoría de *ombudsmen* que la publicación de una rectificación implique limitar la libertad de información de los medios. De hecho, un 80% considera que esto no es así, frente al 20% que asegura no saberlo o prefiere no contestar a la cuestión (**pregunta 7**). Esas 8 de cada 10 personas que afirman que no se trata de un límite aportan distintos argumentos (**pregunta 8**): que el medio reconozca un error ensalza el derecho a la información, la ley así lo establece, en nada limita el derecho a la información veraz, los errores de mala praxis periodística deben subsanarse y la cuestión es muy subjetiva por lo que el juez será quien decida sobre el ejercicio de ese derecho (cada uno de ellos se corresponden con un porcentaje del 20%).

Más de la mitad de los encuestados (60%) opina que las rectificaciones no deben difundirse en la sección *Cartas al director*, frente a un 40% que lo ve de manera positiva (**pregunta 9**). Aquellos que creen que los escritos de rectificación deben publicarse en otro lugar, aportan estos argumentos (**pregunta 10**): es importante además que tenga el mismo tratamiento que la noticia a rectificar (33%), en la misma sección donde se publicó la información original (33%), si se trata de corregir un error se podría emplazar en *Cartas al Director*, pero si hay una orden del juez debe otorgarse el mismo espacio y con la misma extensión que la noticia sobre la que se solicita rectificación.

Para el 60% de los encuestados, la prensa española no actúa con diligencia a la hora de publicar las rectificaciones, mientras que sí cumple con este deber para un 20%. El 20% restante no sabe o no contesta (**pregunta 11**).

El mismo porcentaje se repite en el caso de la cuestión sobre si se cree necesario que exista una clara lesión en el honor de la persona aludida para que ésta pueda ejercitar su derecho de rectificación: un 60% responde negativamente, un 20% de forma positiva y el 20% restante prefiere no pronunciarse al respecto (**pregunta 12**).

El 80% cree que la forma en la que los códigos deontológicos y los manuales de estilo de los medios recogen el derecho de rectificación es la adecuada, frente al 20% que no contesta (**pregunta 13**). A la pregunta “¿en alguna ocasión ha recibido el medio para el que trabaja una solicitud de rectificación?”, el 40% asegura que no, frente a un 40% que afirma que sí, aunque no aporta fechas (**pregunta 14**). Uno de los encuestados sí recuerda que “se publicó una carta desmintiendo las afirmaciones de un columnista” (**pregunta 15**).

Ninguno de los *ombudsmen* recuerda que el medio en el que trabaja se haya negado en alguna ocasión a publicar de manera espontánea un escrito de rectificación, que posteriormente se viera obligado a difundir por decisión judicial (**pregunta 16**). Por lo que nadie responde a la **pregunta 17**, que pide que se precisen el título y/o fecha de aquellas informaciones y/o rectificaciones.

Por otra parte, la mayoría de los encuestados cree que el derecho de rectificación no goza de la efectividad y visibilidad que serían deseables, en concreto un 60%, frente al 40% que considera que sí (**pregunta 18**). Del mismo modo, un 60% opina que los diarios españoles son, por lo general, reticentes a publicar escritos de rectificación, aunque un 40% prefiere no contestar (**pregunta 19**). Entre las razones que aducen aquellos que efectivamente consideran que a los medios les cuesta rectificar se encuentran éstas: los medios no comprenden que el derecho a la información reside en los usuarios y no en ellos; solo rectifican cuando el error es muy evidente y, en caso contrario, no proceden a menos que lo ordene una sentencia judicial; no les gusta tener que rectificar; la reticencia —en su caso— únicamente se aplica en aquellos casos en los que la información es veraz y contrastada, ya que hay determinadas personas o grupos de interés que se amparan en la ley para ejercitar este derecho de manera recurrente. A esta **pregunta 20** han contestado todos los que a la anterior respondieron afirmativamente y, además, otra persona que en el punto anterior había preferido marcar la opción no sabe/ no contesta y a la que también se ha contabilizado.

A la cuestión de si considera necesaria la existencia del *Defensor del lector* (**pregunta 21**), un 80% ha contestado afirmativamente, frente a un 20% que no lo cree necesario. Las razones a favor son: que se trata de una vía equilibrada y coherente para mediar en el proceso, que facilita el contacto entre las dos partes y que es la única figura que defiende los intereses de los lectores en la redacción. En contra, sin embargo, se señala que se trata de una función que ya ejerce el director del periódico (**pregunta 22**).

En lo relativo a la **valoración** voluntaria de la encuesta con una puntuación del 1 al 5, un 60% no ha contestado, frente a un 40% que sí. Dentro de ese 40%, la mitad la ha valorado con 5 puntos y la otra mitad con 4 puntos.

El **perfil tipo del encuestado** de este grupo de *ombudsmen* se corresponde con el de un hombre de 60 años, licenciado en Periodismo, residente en una ciudad, con una antigüedad en la empresa y una experiencia profesional que superan en ambos casos las dos décadas.

De manera más específica, un 80% de los encuestados son hombres, la media de edad asciende a 59,8 años, todos ellos residen en una gran ciudad, capital de provincia o de comunidad autónoma; la totalidad del grupo tiene el título de licenciatura (el 80% de ellos en Periodismo), el 60% cuenta con una antigüedad en la empresa para la que actualmente trabaja superior a los 20 años (para el 40% restante el periodo es igual o inferior a 5 años) y el 80% acumula una experiencia profesional superior a las dos décadas.

Conclusiones

- Los defensores del lector/audiencia que han decidido contestar al cuestionario, aseguran en su totalidad que conocen de la existencia e implicaciones del derecho de rectificación y que la consideran una figura oportuna que debe estar regulada jurídicamente.
- Más de la mitad (60%) cree que los periodistas saben de este derecho, una cifra que cambia mucho en el caso de hablar de los lectores: el 80% opina que no es una figura de peso que la audiencia conozca.
- Para la amplia mayoría de *ombudsmen* la publicación de rectificaciones no supone un límite al derecho a informar. Sin embargo, en una de las respuestas se puede leer: “Depende de los casos. Al final es una cuestión que puede ser muy subjetiva y queda en manos de la justicia tomar una decisión que respete este derecho”.
- Sobre la idoneidad de publicar los escritos de rectificación en la sección *Cartas al director*, el 80% manifiesta que no deben publicarse aquí, aunque sorprende que un 20% afirme que sí (cuando la ley establece que las rectificaciones deben publicarse con relevancia y extensión semejante a la información de origen). También llama la atención que una de las respuestas de ese 80% distinga entre corregir un error —que, en su opinión puede resolverse dentro de la sección *Cartas al director*— o que haya una orden judicial que dé la razón al demandante —en cuyo caso, sí que debe publicarse con extensión y relevancia equivalentes—. Habría que recordar en este punto que el ejercicio del derecho no está condicionado a que exista una resolución judicial, esto es, la obligación de publicar la rectificación con extensión e importancia similares es intrínseca al pleno ejercicio del derecho, sin que deba determinarlo en cada caso concreto la autoridad jurídica competente.
- La mayoría de los *defensores* considera en todo caso que los diarios no son lo suficientemente diligentes a la hora de publicar los escritos de rectificación y que no es imprescindible que haya una clara lesión en el honor del perjudicado para que éste pueda ejercitar su derecho. Llama la atención, sin embargo, que en ambas preguntas un 20% no conteste.
- El mismo porcentaje (un 20%) no contesta a la siguiente cuestión, la que pregunta sobre la adecuada visibilidad del derecho de rectificación en

manuales de estilo y códigos de deontología periodística. No obstante, la gran mayoría (80%) contesta de manera afirmativa.

- Un 40% reconoce que el medio para el que trabaja ha recibido alguna vez una solicitud de rectificación, frente a otro 40% que asegura que no. Se trata de porcentajes algo extraños en nuestra opinión, aunque es cierto que el 60% de esos *ombudsmen* no trabajan en prensa diaria (que centra la presente investigación), sino en radio o televisión, donde presumiblemente las solicitudes de rectificación se traducen en cifras sensiblemente más bajas. En el mismo sentido, todas las respuestas niegan que el medio en el que se trabaja no haya publicado espontáneamente un escrito de rectificación que con posterioridad el juez haya obligado a publicar.
- Para el grupo de *Defensores*, el derecho de rectificación no goza de la visibilidad y efectividad deseables (60%). Sin embargo, no asocian este hecho, como antes hemos comprobado, a que los manuales de estilo no lo recojan de manera adecuada. Sí parece, no obstante, más ligado a la idea de que los diarios son reticentes a publicar los escritos (así lo piensa el 60%), aunque entre las razones encontramos también una que sorprende viniendo de un *defensor al lector*: la idea de que la ley que regula esta figura es demasiado complaciente y permite que se ejercite de forma interesada por parte de ciertas personas o grupos.
- Del mismo modo, es llamativo que un 20% considere que no es necesaria la existencia del *Defensor del lector* cuando se trata de la figura que representa. La razón que se expone en este caso es exactamente igual a la que aportaba más de un tercio de los responsables de los diarios: que se trata de una función que ya ejerce el director del medio.

C. Asociaciones de prensa

Los representantes de las asociaciones de prensa que han contestado al cuestionario aseguran en su gran mayoría (96,3%) conocer la existencia e implicaciones del derecho de rectificación (**pregunta 1**) y consideran que es necesaria su regulación jurídica (92,6%, **pregunta 2**). El porcentaje se reduce, sin embargo, cuando se plantea la cuestión sobre el conocimiento que sobre ella tienen los periodistas (**pregunta 3**). En ese caso, más de un 65% estima que los profesionales sí la conocen, frente a un tercio que opina lo contrario y que asegura que esto se debe (**pregunta 4**) a que es una figura marginal que prácticamente no se utiliza (33,3%), que apenas es necesaria (11%) y que los medios equiparan a

una pérdida de prestigio (11%); o bien a que no cuenta con la debida visibilidad (22%) o a que, entre los profesionales, falta conocimiento sobre deontología (22%).

A la misma cuestión planteada sobre los lectores (**pregunta 5**), más de la mitad (casi un 52%) opina que éstos no conocen el derecho de rectificación, frente a un 40,7% que cree todo lo contrario y un 7,4% que prefiere no contestar ni afirmativa ni negativamente. La justificación en el caso de que la respuesta sea negativa se centra en varios aspectos (**pregunta 6**): falta de información (64,3%), aplicación discutible (14,3%), pocos lectores lo ejercitan (7%), no hay suficiente práctica ni jurisprudencia al respecto (7%), desinformación por parte de las redes sociales y percepción negativa de la capacidad de la justicia (7%).

La gran mayoría (prácticamente 9 de cada 10) opina que el hecho de publicar una rectificación no limita el derecho a informar del medio (**pregunta 7**), principalmente porque (**pregunta 8**) contribuye a la necesaria veracidad del mismo (52%), ayuda a mejorar la *praxis* profesional (11%), la libertad de informar y la garantía de la rectificación deben ser compatibles (7,4%), el límite lo supone la protección de los derechos de personalidad (3,7%), solo se trata de un límite cuando se pretende rectificar una información verdadera (3,7%), nada tiene que ver la información con el respeto a la intimidad y el honor (3,7%), la libertad de expresión debe tener sus límites legales, éticos y profesionales (3,7%). Casi un 15% no justifica el porqué.

La sección de *Cartas al director* no es, según se extrae de las opiniones de los encuestados, el espacio más oportuno para publicar las rectificaciones. Así lo cree el 63%, frente a un 26% que sí considera esta sección la más apropiada a tales efectos y un 11% que no sabe/con contesta (**pregunta 9**). Aquellos que consideran que hay que buscar otros espacios para difundir las rectificaciones, explican (**pregunta 10**) que hay que insertarla en el mismo lugar y espacio que la información que origina la rectificación (55,6%); depende de su importancia, pero siempre en un lugar visible (11%); de forma destacada y notoria (5,6%); deben llegar a quién leyó la información original (5,6%); no está mal que se publique en dicha sección, pero es preferible colocarlo en la misma en la que se difundió la noticia falsa o errónea (5,6%); de hecho no todas se publican como carta al director, sino en la sección correspondiente a su naturaleza informativa (5,6%); podría habilitarse un espacio específico (5,6%); la única manera de que los medios sean creíbles es mostrando confianza y eso no lo da una carta, la sección *Cartas al director* está en desuso en los medios digitales (5,6%). En este punto se incluye la respuesta de una persona que en la anterior pregunta respondió con un no sabe/no contesta en lugar de un “no”.

En respuesta a si la prensa actúa con diligencia a la hora de difundir las rectificaciones (**pregunta 11**), el 74% de los encuestados asegura que no, frente a un 22% que opina que sí y solo un 3,7% que no contesta a la pregunta. La mayoría piensa, además, que debe existir una fehaciente lesión en el honor de la persona

para que ésta pueda remitir un escrito de rectificación (**pregunta 12**); en concreto lo cree un 63% frente al 37% que considera que no es así.

En la siguiente pregunta encontramos un resultado más ajustado: el 52% estima que los libros de estilo y los manuales deontológicos no recogen de manera adecuada ni con la relevancia necesaria el derecho de rectificación, frente a un 44,4% que cree que sí lo realizan de manera suficiente (**pregunta 13**).

Casi la mitad responde afirmativamente a la pregunta sobre si el medio para el que trabaja ha recibido alguna solicitud de rectificación (48%). Mientras que el 18,5% afirma que no y el 33% lo desconoce (**pregunta 14**). De aquellos que manifiestan que dicha situación sí se ha producido, la gran mayoría no puede precisar ni fechas ni títulos de tales informaciones y/o rectificaciones (46,2%), mientras que otros no lo precisan, pero recuerdan que fueron varias y en varios medios, que se produjeron en muy contadas ocasiones, o especifican que fue en el caso de administración de loterías o competiciones deportivas, en un conflicto portuario en 2014 o en dentro de las campañas electorales municipales. Todos estos argumentos representan un porcentaje de 7,7% (**pregunta 15**).

La gran mayoría afirma, sin embargo, que no se ha dado el caso de que el medio para el que trabaja no publicara inicialmente una rectificación de *motu proprio* y se viera después obligado por el juez a hacerlo (81,5%), frente a casi un 15% que no lo sabe y un 3,7% que asegura que sí ha sido testigo de esa situación (**pregunta 16**), aunque no puede concretar más detalles sobre la fecha o el título (**pregunta 17**).

Al menos 6 de cada 10 no creen que el derecho de rectificación goce ni de la visibilidad ni de la efectividad que le corresponden, frente a un tercio de los encuestados que asegura lo contrario (**pregunta 18**). Casi un 78% considera que, de manera general, a la prensa española le cuesta publicar las rectificaciones (**preguntas 19 y 20**) porque es reticente a reconocer los errores (38%), lo entiende como un descrédito (19%), la mayoría de veces solo las publica si hay requerimiento del juez (14,3%), lo evidencia el hecho de que no les da el mismo espacio y tratamiento que a la información que se pretende rectificar (9,5%), es reticente solo en lo relativo a la relevancia (4,8%), ha visto errores claros que no se han rectificado (4,8%); acogándose al derecho de rectificación se vierten otra serie de comentarios no relacionados, por lo que lo ideal es que decida un juez (4,8%).

También la mayoría de los representantes de asociaciones de prensa consideran necesaria la figura del Defensor del lector en los medios (un 70,4%) y sólo un 22% no la creen importante (**pregunta 21**). Entre los motivos a favor: refuerza los derechos de los lectores y ejerce el control en este tema (55,6%), va en ello la objetividad, credibilidad y seriedad del medio (3,7%), figura de apoyo interesante, aunque de difícil elección (3,7%). Aquellos que, sin embargo, opinan que es innecesaria alegan que: no se ha llegado a tal necesidad (11%), es una materia más que incumbe al Defensor del lector y no debe haber una figura aparte

en lo referente a la rectificación (7,4%), esta figura no tiene la independencia suficiente puesto que se trata de periodistas que han formado parte de la plantilla durante años (3,7%), lo más importante es la autorregulación profesional (3,7%), una figura volcada en la rectificación presupone juzgar en negativo la honorabilidad y ética de los periodistas (3,7%). El resto, un 7,4% del total no sabe o no contesta (**pregunta 22**).

Un 48% de los encuestados afirman que la asociación que presiden nunca ha recibido una petición de asesoramiento por parte de un ciudadano en referencia al derecho de rectificación, frente a un 37% que afirma que sí (**pregunta 23**) y que concreta dichas peticiones: los ciudadanos se sienten indefensos y/o el medio se niega a publicar sus rectificaciones (20%), vienen de personas que creen que tienen ese derecho, a causa de informaciones falsas, ofensivas o interesadas, informaciones erróneas aunque en muchos casos irrelevantes, columnas de opinión o informaciones relacionadas con salud y menores, ayuntamiento local que puso en tela de juicio la opinión de una periodista al considerarla imparcial, ciudadano que vio su nombre envuelto en un conflicto relacionado con unas oposiciones a funcionario, televisión local que acusó al alcalde de estar ebrio, no lo recuerda (cada uno de estos argumentos expresados en la **pregunta 24** supone un porcentaje del 10%).

En lo relativo a la **valoración** del cuestionario, el 29,6% le da una nota de 5 sobre 5, el 33,4% un 4 y el 29,6% no contesta a esta cuestión. Un 3,7% la califica con un 3 y, el mismo porcentaje, lo hace con un 2.

El **perfil tipo** de la persona que responde al cuestionario es bastante parecido al de los anteriores grupos: hombre de 53 años, licenciado y residente en ciudad, con una antigüedad en la empresa de entre 0 y 5 años y una experiencia profesional de más de dos décadas. Es interesante recordar en este punto que la gran mayoría de presidentes o representantes de asociaciones de prensa ejercen o han ejercido el periodismo en empresas privadas.

Concretamente, los datos que arroja el cuestionario indican que la gran mayoría de representantes de estas asociaciones son hombres (66,6%), de una media de edad de 53,3 años, el 100% licenciados (el 81% especifica que su titulación es, además, en Periodismo), residentes en ciudad (en el 96,3% de los casos se trata además de una capital de provincia o comunidad autónoma), con una antigüedad en el cargo (creemos que así se ha entendido en este punto, al estar refiriéndonos a asociaciones y al haber contactado con los encuestados precisamente por ser representantes de éstas y no por el trabajo que desempeñen —si lo hay— en el ámbito privado) de entre 0 y 5 años (46,6% de los que contestan), de entre 5 y 10 años (20% de los que contestan) o de más de 20 años (33,3% de los que contestan); y con una experiencia profesional superior a los 20 años (100% de los que contestan).

Conclusiones

- La gran mayoría de presidentes/representantes de las asociaciones de prensa, 9 de cada 10, conoce de la existencia del derecho de rectificación y de sus implicaciones, además de considerar oportuna su existencia y regulación jurídica.
- Más del 66% afirma que es una figura conocida por los periodistas; mientras que, de los que piensan lo contrario, un 77,7% lo achaca a que se trata de una figura muy poco empleada, al desconocimiento de los profesionales en cuanto a deontología o a la escasa visibilidad. De otro lado, solo un 40% cree que también es popular entre los lectores. En este último caso, el 52% restante opina que se debe, principalmente, a la falta de información al respecto o que se manifiesta por su discutible aplicación.
- El derecho de rectificación no supone un límite para el periodista según el 89%, sobre todo porque contribuye a la necesaria veracidad que se le exige al derecho a informar. En este punto llama la atención que varios encuestados señalen que dicho límite sí existe en el caso de que se pretenda corregir una información que es veraz (vuelve a colación el debate sobre si se debe entrar a valorar la veracidad de la información original y, por tanto, la ausencia de veracidad debe imponerse como condición necesaria para el ejercicio del derecho).
- Para más del 60% de los encuestados la sección de *Cartas al director* no es la más adecuada para publicar los escritos de rectificación, ya que lo más idóneo es que sean difundidos en el mismo lugar y con la misma extensión que la información que se solicita rectificar. Si bien otras respuestas minoritarias ponen de manifiesto que éste no es un tema crucial para la credibilidad del medio, que dicha sección (*Cartas al director*) está claramente en desuso en el caso de los medios digitales o que podría habilitarse un lugar específico.
- En opinión también de la mayoría, más de un 74%, los diarios españoles no actúan con la diligencia debida a la hora de publicar los escritos.
- No es imprescindible que exista una clara lesión en el honor del aludido por una información para que éste solicite su rectificación (63%).

- Los manuales de estilo y códigos de deontología periodística recogen de manera adecuada y con la relevancia necesaria el derecho de rectificación, según el 52%.
- No todos los encuestados reconocen haber visto cómo el medio donde trabajan/trabajaban ha recibido solicitudes de rectificación: únicamente el 48% asegura que sí, frente a un 18,5% que lo niega y un 33% que prefiere no contestar a la pregunta. En el caso de aquellos que contestan afirmativamente, la mitad no puede precisar cuándo ni sobre qué. El resto sí menciona distintos casos, aunque en más de un 15% se habla de rectificaciones escasas o poco relevantes.
- En un porcentaje bajísimo (3,7%) se recuerda algún caso en el que el medio no publicara de manera espontánea una rectificación que posteriormente sí se viera obligado a difundir por requerimiento judicial y, además, no se aporta más información sobre ello. Por el contrario, 8 de cada 10 contestan con un “no” a esta pregunta.
- Según la mayoría de los encuestados el derecho de rectificación no cuenta con la visibilidad y efectividad deseables y los diarios son claramente reticentes a publicar los escritos, entre otras cosas porque les cuesta reconocer sus errores, lo entienden como un demérito, únicamente proceden si existe una orden judicial que les obligue o es algo que pone de manifiesto el hecho de que no se dé a las rectificaciones ni el mismo espacio ni el mismo tratamiento que se otorgó en su día a la información original.
- Para 7 de cada 10 la figura del *ombudsman* es necesaria, siendo la principal razón que refuerza los derechos de los lectores. Sin embargo, para un 11% de los encuestados no es necesario, para un 3,7% esta figura no es imparcial (pues ha ejercido por muchos años como periodista dentro de la plantilla del medio) o supone cuestionar desde el principio la honorabilidad del periodista en el caso de que esté volcada en la rectificación (3,7%). Otra de las respuestas pone de manifiesto la que es, a su juicio, otra realidad: el aspecto clave es la autorregulación más que la existencia de la figura del *ombudsman*.
- No alcanza el 40% el número de casos en los que las asociaciones de prensa han recibido una petición ciudadana relativa a rectificar una información; de hecho, casi un 50% de los encuestados confirman que nunca les ha llegado una solicitud de información en torno a este tema.

D. Asociaciones de consumidores y usuarios

El 83% de los encuestados afirma que los medios de comunicación (en concreto, la prensa) no representa a ninguno de los “gigantes” contra los que habitualmente usuarios y consumidores hacen valer sus derechos. El 16,7% restante asegura, por contra, que sí lo es (**pregunta 1**).

En lo que respecta al número de quejas hacia la prensa que se refieren expresamente a aspectos éticos o deontológicos (**pregunta 2**), un 66,7% considera que son raras las veces en las que esto ocurre, frente a un 33,3% que afirma que sucede en la mayoría de las ocasiones. Según la totalidad de los encuestados, casi ninguna de esas quejas enfocadas a los medios está vinculada al derecho de rectificación (**pregunta 3**).

Únicamente un tercio asegura que la asociación que preside o representa ha recibido alguna petición de asesoramiento acerca del derecho de rectificación o de ayuda en el caso de querer denunciar una práctica irregular sobre esta cuestión (**pregunta 4**), mientras que el 66,7% restante contesta que nunca le ha llegado una solicitud de este tipo.

De manera específica, los casos en los que se producen denuncias en este sentido son: los de personas que consideran que la información es errónea y que lesiona sus derechos de personalidad o los de llamada de atención sobre titulares “falsos” o publicidad engañosa que aparece en algún medio de comunicación (**pregunta 5**).

En cuanto a la **valoración** del cuestionario, todos los encuestados contestan y las opciones elegidas se reparte en tres tercios: un tercio pone nota de 5, otro de 4 y el último de 2.

El **perfil de este grupo** es el de un hombre de 51 años, licenciado en Economía, que reside en una ciudad y que cuenta con una antigüedad en la empresa donde trabaja y una experiencia profesional superior a los 20 años en ambos casos.

Más en concreto, el 83,3% de los encuestados son hombres, la media de edad es de 50,8 años (una de las personas no contesta), todos ellos viven en una gran ciudad (capital de provincia y de comunidad autónoma), el 66,6% asegura tener una antigüedad en la empresa para la que trabaja de más de 20 años y el 83,3% contar también con un bagaje profesional que supera las dos décadas.






















Conclusiones

- Para las asociaciones de consumidores y usuarios, la prensa no es uno de los grandes “gigantes” contra las que el ciudadano suele hacer valer sus derechos, de hecho, así lo piensa más del 83%. Además, en el caso de que se produzcan esas quejas hacia los medios, raras veces están relacionadas





con aspectos éticos y/o deontológicos. En lo que tiene que ver expresamente con el derecho de rectificación, ese porcentaje se reduce aún más: según los encuestados, casi ninguna de estas quejas tiene vínculo alguno con el derecho de rectificación.

- Un tercio de los encuestados reconoce, sin embargo, haber recibido en alguna ocasión una petición de asesoramiento sobre el derecho de rectificación o una solicitud de ayuda para denunciar una práctica irregular en ese sentido. Se trata, por lo general, de personas que consideran que la información que les alude es errónea y que lesiona su derecho al honor, la intimidad o la propia imagen. Otra de las respuestas recogidas señala un momento en el que se denuncia un mal tratamiento de la información (titular engañoso) o la presencia de publicidad engañosa difundida por un medio de comunicación. En esos dos últimos casos no hablamos de derecho de rectificación, lo que nos lleva a pensar que es posible que el encuestado no conozca muy bien dicha figura jurídica, o bien no entendiera correctamente la pregunta.

Tabla 3. Resumen de los principales resultados de los cuestionarios

	<i>DIRECTORES DE PERIÓDICOS</i>	<i>OMBUDSMEN</i>	<i>ASOCIACIONES DE PRENSA</i>	<i>ASOCIACIONES DE USUARIOS</i>
Conoce el derecho de rectificación y sus implicaciones				
Cree oportuna su regulación jurídica				
Figura conocida por los periodistas				
Figura conocida por los lectores				
Supone un límite al derecho a informar				
Es adecuada su inserción en <i>Cartas al director</i>				
La prensa es diligente a la hora de publicar los escritos de rectificación				

	DIRECTORES DE PERIÓDICOS	OMBUDSMEN	ASOCIACIONES DE PRENSA	ASOCIACIONES DE USUARIOS
Es condición para ejercitar el derecho que exista lesión en el honor				
Libros de estilo lo recogen adecuadamente				
Ha recibido alguna vez una solicitud de rectificación		 		
Obligado alguna vez a publicar una rectificación por orden judicial				
El derecho de rectificación es efectivo y visible				
Los diarios son reticentes a la hora de publicar rectificaciones				
La figura del <i>Defensor del Lector</i> es necesaria				

	DIRECTORES DE PERIÓDICOS	OMBUDSMEN	ASOCIACIONES DE PRENSA	ASOCIACIONES DE USUARIOS
Ha recibido petición de asesoramiento sobre este derecho				
La prensa es una de las 'grandes empresas' contra las que actúa el consumidor				
Muchas de esas quejas hacen referencia a aspectos éticos y varias a este derecho				

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones generales

Como podemos observar en la tabla-resumen del cuestionario, los tres primeros grupos (responsables de diarios, *defensores* y representantes de asociaciones de prensa) coinciden en varios puntos: **la mayoría de encuestados en cada conjunto asegura conocer el derecho de rectificación y sus implicaciones y considera además que es oportuno que esté regulado jurídicamente.**

Más de la mitad de los encuestados de cada uno de esos grupos opina que **esta figura jurídica es conocida entre los periodistas**; aunque tal unanimidad no existe al preguntar por el caso de los lectores: **los ombudsmen y los representantes de asociaciones de prensa creen que el derecho de rectificación no es popular entre los lectores mientras que la mayoría de los directores de diarios se muestran convencidos de lo contrario.**

Los grupos encuestados vuelven a coincidir en varias afirmaciones: **el derecho de rectificación no supone un límite al derecho a la información, los escritos o solicitudes de rectificación no deben publicarse en la sección de Cartas al director, la prensa no actúa con diligencia al difundirlos y, a pesar de todo, esta realidad no puede achacarse a los libros de estilo o manuales deontológicos, ya que éstos —en su opinión— recogen de manera adecuada y con la relevancia necesaria el derecho de rectificación.**

Solo en el cuestionario a las asociaciones de prensa observamos que la mayoría de encuestados cree que debe existir una fehaciente lesión en el honor de la persona aludida por una información para que ésta pueda ejercer su derecho a rectificar.

Los tres grupos reconocen que el medio para el que trabaja ha recibido alguna vez una solicitud de rectificación, si bien en el caso de los *ombudsmen* las respuestas afirmativas y negativas se equiparan con un porcentaje del 40% cada una.

En el siguiente punto **sorprende que la gran mayoría de encuestados no recuerden que el medio para el que trabajan haya tenido que publicar alguna vez un escrito de rectificación por orden judicial tras haberse negado a difundirlo espontáneamente.**

El único colectivo que asegura que el derecho que estudiamos goza de la debida visibilidad y efectividad es el de los directores de diarios, que también se desmarcan de los otros dos grupos al afirmar que la prensa no muestra reticencias a la hora de publicar los escritos de rectificación y que la figura del *ombudsman* o Defensor del lector es innecesaria. En este último punto, argumentan que esas funciones las debe y puede asumir sin ningún problema la dirección del periódico.

Con respecto a la pregunta planteada a las asociaciones de prensa acerca de si alguna vez han recibido alguna petición de asesoramiento en cuanto al ejercicio del derecho de rectificación, la mayoría contesta que no, al igual que ocurre con las asociaciones de consumidores y usuarios. A este último grupo se le plantean otras cuestiones —como si la prensa constituye uno de los 'gigantes' contra los que los usuarios normalmente solicitan ejercer sus derechos o si esas quejas a la prensa están en concreto relacionadas con aspectos éticos y deontológicos—, a las que asimismo responden de modo negativo.

Por tanto, la situación actual del derecho de rectificación no parece suponer un problema para **los medios de comunicación** que, **aunque reconocen ciertas carencias, no creen que se trate de una figura marginal o poco visible ni que sea, por tanto, necesario reforzar su protección**; y que, además, afirman no ser reticentes a la hora de publicar los escritos de rectificación.

Para las asociaciones de consumidores y usuarios ésta tampoco parece representar uno de sus campos de batalla, del que, por otro lado, tampoco demuestran tener amplios conocimientos.

El aspecto más controvertido y sobre el que tampoco parece existir un conocimiento profundo (ni siquiera entre los propios *ombudsmen*, a los que se les presupone mayor preparación en cuanto a aspectos de deontología profesional) es **el relativo a dónde y cómo deben ser publicados los escritos de rectificación**. Si a eso unimos que los libros de estilo y manuales deontológicos recogen adecuadamente las pautas a seguir a la hora de su puesta en práctica (según la opinión de la mayoría de encuestados), solo cabe deducir dos cosas: o bien la jurisprudencia no es suficientemente explícita en este sentido, o los libros y manuales de conducta profesional están sobrevalorados y/o son poco consultados dentro de la profesión. En el siguiente apartado se intentará demostrar cómo estos manuales recogen el derecho de manera muy sucinta, arrojando poca luz sobre cómo debe actuar el medio cuando recibe un escrito de rectificación.

5. La responsabilidad de los medios

Aunque imprescindible en un Estado democrático, la protección jurídica del derecho de rectificación representa solo uno de los pilares en los que se apoya su eficacia. En el ámbito de la comunicación, la manera de proceder del periodista y su concepto de la ética alcanzan un valor destacadísimo con relación a este deber-libertad amparado constitucionalmente. La deontología, por tanto, se erige como ese segundo cimiento en la garantía de un derecho de rectificación eficaz para los ciudadanos. Coincidimos con la afirmación de que “la solución no puede ser únicamente jurídica, porque un concepto jurídico, es decir, en cierto modo inadecuado de la responsabilidad, ni puede acabar con esa desmesura” (Asensi, 1997: 464). Por 'desmesura', el autor se refiere aquí a la desigualdad de posiciones entre informadores y ciudadanos dentro del proceso esencialmente unilateral de la comunicación.

5.1. Deontología, autorregulación y rectificación

La forma de actuar de los medios entorno a unos criterios éticos desempeña un papel muy destacado en la eficacia del derecho de rectificación. El presente trabajo se estructura, de hecho, en una parte de análisis y dos grandes bloques teóricos: la configuración jurídica del derecho (que ya hemos visto en el capítulo 2) y su importancia y efectividad real entorno a los manuales de conducta y códigos de autorregulación profesional (cuestión que centra este capítulo 5).

La responsabilidad de los periodistas conforma el punto de partida que justifica esta ligazón de la que venimos hablando. Nuestro sistema democrático otorga a los medios de comunicación social un papel esencial: el del deber y la libertad de comunicar información veraz con el objetivo último de garantizar el pluralismo político dentro de la sociedad. Una responsabilidad de enorme magnitud, tal y como se desprende de la jurisprudencia constitucional: sin la libertad de comunicar (y, por tanto, sin la libertad de recibir información) quedarían vaciados de contenido el resto de los derechos fundamentales que la Constitución consagra (STC 6/1981). Libertades, la de comunicar información y la de recibir dicha información, que se configuran como dos caras de la misma moneda, que están indisolublemente unidas. De forma, que no puede entenderse el derecho a la información como una libre concesión por parte del Estado a los medios, sino más bien como un deber, una responsabilidad para con la ciudadanía.

Así las cosas, nadie niega que la labor periodística es una profesión dignificada, con un marcado carácter de compromiso social (De Carreras, 1996). Un hecho que viene a demostrarse cuanto el Tribunal Constitucional dota a la libertad de información de la más alta protección precisamente cuando “es

ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa, entendida en su más amplia acepción” (STC 105/1990). Los periodistas suelen ser identificados como parte de un grupo de élite, precisamente debido a la certeza de que en las sociedades democráticas avanzadas la información es un instrumento de capital importancia (Cuevas, 1998).

En este escenario donde los informadores y los medios institucionalizados a través de los cuales desarrollan su trabajo “se han convertido en una especie de clase dominante: una clase responsable y que se resiste a someterse a las normas de la decencia y el respeto debidos por igual a la información y a los informados [...]”, las cuestiones éticas tienen un interés urgente, también porque “el consumidor final de noticias, bajo la teoría del mercado, se vuelve un objeto, un medio para un fin” (Greenfield, 1985: 68 y 72).

Una situación de ventaja con respecto al resto de la población en la que coincide la mayor parte de la doctrina, que destaca que la información no es otra cosa que un bien de propiedad social, de la que propietarios de medios, directores y periodistas ostentan la concesión (Restrepo, 2004: 250); e identifica un nuevo tiempo en la comunicación, “el mejor tiempo para la ética” (Soria, 1997: 41), donde se hace imprescindible pensar en términos de autocontrol más allá de la teoría neoliberal de mercado: “Se trata de ajustar la exigencia de responsabilidad y cuidado de los medios a la importancia y dimensión que han adquirido y a las nuevas funciones que ellos, quieran o no, desempeñan” (Aznar, 2005: 23).

Para ello no basta con reflexionar sobre cuáles son los parámetros y normas éticas que deben regir la profesión periodística, lo que se conoce como deontología, sino también crear mecanismos que la hagan efectiva, “convirtiéndola en una exigencia que la sociedad proyecta” (Aznar, 2005: 15-16). **La autorregulación es clave para mejorar el estado de salud de los medios de comunicación y adquiere un valor muy destacado en tanto que se traduce en un compromiso libremente adquirido por parte de los informadores:** “una autorregulación que nace de la propia profesión aporta una dosis de autocrítica e intencionalidad que son el inicio para un cambio consciente y responsable” (Echaniz y Pagola, 2004: 182). En definitiva, la autorregulación “tiene como objetivos preservar las libertades informativas con responsabilidad social” (Villanueva, 2002: 286).

La clave de la relación entre medios y ciudadanos es la confianza, la lealtad y la manera de ganársela es ofreciendo un buen servicio, admitiendo y corrigiendo errores y huyendo de las malas prácticas (Bilbeny, 2012). Y, en efecto, la mejor autodefensa de la credibilidad es la corrección ética (Blázquez, 2002), credibilidad que fundamenta la imprescindible autoridad moral que precisa el informador para cumplir con su deber (Soria, 1997).

Al mismo tiempo, entre los principios que deben guiar la labor periodística está el de ser justos y defender el interés público, el bien común (Brajnovic, 1969),

y sería ahí donde se puede colocar el derecho de rectificación. Un derecho que es, para el receptor, un derecho vinculado a la justicia informativa; y, para el periodista, un deber de conciencia (Echaniz y Pagola, 2004). Reconocer errores, corregirlos de manera que el público al que le llegó la información inicial conozca la verdad es un principio general de transparencia y de minimización del daño (McBride y Rosenstiel, 2014) y provoca que aumente la credibilidad tanto del periodista, como la del medio y la de la profesión en general (Soria, 1997).

Es necesario señalar que **la autorregulación profesional no tiene un componente coercitivo, sino que su adhesión es de carácter libre por parte de los profesionales**. En efecto, el primer punto de referencia de la autorregulación es la conciencia personal (Bel Mallén, 2003: 305), la conciencia del periodista (Jareño, 2009; Billbeny, 2012). **Su única capacidad coactiva es la de su trascendencia en la opinión pública**; algo que, aunque al principio puede resultar poco efectivo, “es, sin embargo, enormemente valioso y necesario, porque constituye una prueba de madurez de una sociedad cuyos son capaces de asumir libremente responsabilidades y compromisos más allá de sus intereses particulares” (Aznar, 2000: 41-42).

En definitiva, la enorme responsabilidad social del periodista dentro de un estado democrático, donde trabaja con una materia prima tan importante y sensible como es la información, convierte a la autorregulación en un aliado de primer orden. Su asunción de responsabilidades, su compromiso a la hora de enfrentarse a determinados conflictos éticos y, en definitiva, su labor en pos del bien común se materializan en la autorregulación. Una forma de “limitar” la actividad que se asume desde dentro de la profesión, que es prueba y parte de su madurez y que supera la simple regulación jurídica, en ciertos casos poco efectiva debido a su propia esencia coercitiva.

Lejos de la autocensura o de convertirse en un ideal de comunicación perfecto y que no admite discusión, **la autorregulación en el periodismo debe construirse en base a la imparcialidad, la transparencia, la mayor adhesión posible de interlocutores y la referencia** última de que la verdadera orientación de la profesión no es otra que la del **servicio público**.

Por lo tanto, el primer y último paso para caminar hacia una autorregulación sólida, madura y efectiva, parte de la voluntad. De la voluntad de todos los protagonistas implicados en el proceso comunicativo, de los propietarios de los medios de comunicación, de sus responsables y de los periodistas. Pero también de **los ciudadanos, que tienen el derecho y el deber de enfrentarse a la información con un espíritu crítico, de poder vigilar la labor periodística y de exigir que la misma cuente con la calidad democrática que se le presupone**.

La autorregulación, además de reforzar ese lazo de credibilidad del público hacia los medios, ayuda a establecerla entre los propios colegas de profesión, que

refuerzan lazos entre sí, confiando en la integridad del otro (Belsey y Chadwick, 1992).

5.1.1. El derecho de rectificación en los códigos éticos. Breve repaso histórico y principales manuales en España

Para persuadir a los informadores de la necesidad de seguir esas pautas éticas, además de establecer cuáles sean éstas y cómo deben aplicarse, nacieron los códigos deontológicos o de práctica profesional. Se trata de textos que “se sitúan en el estadio intermedio entre lo ético y lo jurídico, posiblemente porque en realidad no son una cosa ni otra” (Buxarrais, Prats y Tey, 2004: 98). No implican sanciones jurídicas ni consecuencias morales, lo que para algunos autores es la clave de que los profesionales y estudiantes de Periodismo pongan en cuestión su viabilidad y utilidad (Pérez-Fuentes, 2004); pero que, sin embargo, es lo que conforma su quintaesencia pues, como ya hemos adelantado, no existe otra ratio en los códigos de conducta que no sea la de la libre voluntad.

El antecedente más reciente lo encontramos a principios del siglo XX, con el *Código Ético de los Editores de Kansas* (1910), el de la Asociación de la Prensa de Missouri (1921) y el *Código de Ética del Periodismo de Oregón* (1922); si bien el más reconocido por los profesionales estadounidenses sigue siendo el *Código de Ética de la Sociedad de Periodistas Sigma Delta Chi*, revisado en varias ocasiones y cuya primera redacción se remonta a 1926 (Aznar, 2005). En Europa estos manuales éticos llegaron algo más tarde, destacando el del Sindicato Nacional de Periodistas Franceses (1918).

Al principio eran pocos y con escasa repercusión, pero la situación cambió **a partir de la entrada en vigor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos** de 1948 y su reconocimiento expreso del derecho a la información. **Los códigos empezaron a extenderse en muchos países y a internacionalizarse y en los años 70 surgen los primeros códigos internos** de los propios medios. La siguiente etapa se sitúa tras el fin de la Guerra Fría, con códigos implantados y renovados en función de los nuevos retos a los que se enfrenta la comunicación (intereses mercantiles, nuevas tecnologías, problemas político-sociales, como la discriminación, la corrupción, el terrorismo, los nacionalismos, etc.) (Aznar, 2005).

En el ámbito supranacional⁴⁰, concretamente, en relación al derecho de rectificación, conviene señalar el art. 5 de la *Declaración de Principios sobre la Conducta de Periodistas* de la Federación Internacional de Periodistas (elaborada en 1954 y reformada en 1986), el art. 5 del *Código Latinoamericano de Ética Periodística* de la Federación Latinoamericana de Periodistas (1979), el art. 5 de

⁴⁰ Para una información más detallada acerca de los códigos de autorregulación en los países de nuestro entorno véanse Pérez-Fuentes, 2004; Blázquez, 2002; y Aznar, 2000.

los Principios Internacionales de Ética Profesional del Periodismo de la UNESCO (1983), el art. 26 de la Resolución 1003 del Consejo de Europa (1993), el art. 6 de las *Normas de Ética y Deontología Profesional* de la Asociación Iberoamericana de Periodistas Especializados y Técnicos (1994). En todos estos artículos se recoge un derecho de rectificación y/o de réplica sin mucha más concreción que la del mero respeto a este derecho.

En la declaración de principios del **código de la FIP** de 1986, leemos:

“5. El periodista se esforzará —con todos los medios— por rectificar cualquier información publicada y revelada inexacta y perjudicial”

Entre los **principios éticos del periodista** enumerados por la **UNESCO** en el texto de 1983, destaca el quinto:

“*Acceso y participación del público*: El carácter de la profesión exige, por otra parte, que el periodista favorezca el acceso del público a la información y la participación del público en los ‘medios’, lo cual incluye la obligación de la corrección y del derecho de réplica”.

En España los manuales deontológicos tardaron en llegar a causa de las cuatro décadas de dictadura franquista. **En 1992, el Colegio de Periodistas de Cataluña da luz verde al que sería el primero de nuestra historia**, al que muy poco después siguió el de la **FAPE (1993)** y un tercero destacable, el del **Colegio de Periodistas de Madrid** en el año **2000** (Aznar, 2005).

La *Declaración de Principios de la Profesión Periodística*, del Colegio de Periodistas de Cataluña, recoge la rectificación en su segundo apartado, titulado Criterios, en el punto tercero:

“Rectificar con diligencia y con tratamiento adecuado a la circunstancia, las informaciones —y las opiniones que se deriven de ellas— cuya falsedad haya sido demostrada y que, por tal motivo, resulten perjudiciales para los derechos o intereses legítimos de las personas y/u organismos afectados, sin eludir, si fuera preciso, la disculpa, con independencia de lo que las leyes dispongan al efecto”.

El Código Deontológico de la Profesión Periodística de la FAPE determina la obligación del periodista de rectificar con diligencia en el art. 13 b) de los Principios de Actuación:

“Admitida la difusión de material falso, engañoso o deformado, estará obligado a corregir el error sufrido con toda rapidez y con el mismo despliegue

tipográfico y/o audiovisual empleado para su difusión. Asimismo, difundirá a través de su medio una disculpa cuando así proceda”.

El art. 17 del Código de Periodistas de la Comunidad de Madrid lleva por título 'Asunción de errores', y reza:

“Cualquier error informativo propio deberá ser rectificado y reconocido públicamente en el menor tiempo posible. Y el/la periodista asumirá las disculpas y responsabilidades a que hubiera lugar”.

Como vemos, los tres textos coinciden en recoger **la rectificación como un deber de diligencia del periodista** y añaden la **difusión de disculpas cuando fuera necesario**. Esa rectificación espontánea demuestra el deseo real del informador de comunicar información veraz (De Carreras, 1996) y demuestra “que el error fáctico no fue malicioso y que, por consiguiente, no actuó el informador con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz” (STC 240/1992).

Como ya hemos apuntado, el derecho de rectificación se traduce en un instrumento para proteger el honor de una persona aludida por la información de un medio de comunicación al mismo tiempo que la veracidad de la misma. La responsabilidad del medio pasa entonces por rectificar voluntariamente dicha información o, en su caso, por aceptar y difundir la rectificación que el sujeto afectado le remite. De este modo, se demostraría el interés por parte del medio de llegar hasta el final en la búsqueda de la veracidad de la información publicada.

Por tanto, reiteramos que no compartimos la interpretación del Tribunal Constitucional de que la inserción obligatoria de la réplica no puede considerarse una sanción jurídica derivada de la inexactitud de lo publicado (STC 168/1986, FJ 5). ¿Qué sentido tendría entonces la rectificación, sólo exponer dos versiones distintas de los hechos sin que sea probada la veracidad en ninguna de ellas? ¿Dónde queda entonces la exigencia de veracidad de la información que impone la CE para la adecuada formación de una opinión pública libre?

En nuestra opinión, en el momento en el que el director del medio de comunicación está facultado para negarse a publicar el escrito de rectificación siempre que éste no cumpla con los requisitos legalmente establecidos, no tiene por qué difundir un escrito rectificador que no responde a la exigencia de veracidad. Y es que, a tenor de la LO 2/1984, la importancia de la rectificación radica precisamente en alcanzar esa veracidad, de modo que la información difundida por un medio de comunicación no lesione los derechos de personalidad del individuo ni tampoco socave la necesaria veracidad de la información a la que todo ciudadano tiene derecho.

La veracidad es precisamente ese otro pilar, el otro gran requisito que se autoexige a la profesión periodística⁴¹, así como, por extensión, respetar los derechos fundamentales de todos los individuos. En efecto, el periódico con mayor tirada y difusión, *El País*, recoge en el punto segundo del artículo tercero de su Estatuto de redacción el que es su *leitmotiv*:

“El País se esfuerza por presentar diariamente una información veraz, lo más completa posible, interesante, actual y de alta calidad, de manera que ayude al lector a entender la realidad y a formarse su propio criterio”.

En el punto tercero se detalla que la independencia y no manipulación de las noticias son una garantía para los derechos de los lectores, cuya salvaguarda constituye la razón última del trabajo de redacción; y también que “la información y la opinión estarán claramente diferenciadas entre sí”. Entre sus principios éticos, destaca:

1.4. “El medio informativo ha de ser el primero en subsanar los errores cometidos en sus páginas, y hacerlo lo más rápidamente posible y sin tapujos. Esta tarea recae manera muy especial en los responsables de cada área informativa. Véanse los apartados 1.51 y siguientes”.

En los citados apartados 1.51 y siguientes, resulta interesante fijarse en lo que se expone:

1.51. “El periódico ha de ser el primero en subsanar los errores cometidos en sus páginas, y hacerlo lo más rápidamente posible y sin tapujos. Esta tarea recae manera muy especial en los responsables de cada área informativa. No obstante, todo redactor tiene obligación de corregir sus propios originales”.

1.52. “Los duendes de imprenta no existen. Tampoco los hay en la Redacción. Cuando se comete un error, se reconoce llanamente, sin recursos retóricos”.

1.56. “Los textos que den lugar a cartas al director que maten o contradigan su contenido incorporarán en su versión digital y en lugar visible el siguiente aviso: ‘Este texto dio lugar a los comentarios o matizaciones en la sección *Cartas al director* que figuran al pie’. Tales cartas se reproducirán, por tanto, al final de esa información”.

⁴¹ Para un repaso de los estatutos de redacción de los principales medios impresos en España y también por los de algunas televisiones, véase García Castillejo (2008: 166-289).

Su inmediato perseguidor, el diario *El Mundo*, sienta los principios ideológicos de la profesión periodística en su artículo 2 y declara que constituyen principios fundacionales del periódico la independencia informativa, la objetividad, el rigor y la no manipulación de los contenidos. Aunque no menciona de forma específica el derecho de rectificación, en el capítulo relativo a las *Normas de práctica y ética* leemos lo siguiente con relación a la función de autocontrol dentro de cada medio:

“Estatutos como éste, o códigos deontológicos como los adoptados, en España, por la Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE) y por el Colegio de Periodistas de Cataluña tienen un denominador común: han sido libremente pactados y suscritos por periodistas y editores y les comprometen personal y moralmente, a diferencia de las limitaciones jurídicas coercitivas. Estas han de ser evitadas siempre que sea todavía posible, porque cuando se dicta una ley represiva en el terreno de la expresión y la información no sólo se persigue una conducta reprobable, sino que se reduce un ámbito general de libertad. El remedio, en esos casos, es desproporcionado a la enfermedad y establece unos diques duraderos que castigan a toda la sociedad, que ve mermadas sus posibilidades de recibir información de hechos ocultos y relevantes, más que a unos cuantos periodistas desaprensivos.

El autocontrol profesional no sólo se realiza a través de códigos generales o gremiales, sino dentro de cada medio” (Libro de estilo de *El Mundo*: 63)

Esos propósitos básicos de los periodistas (independencia, objetividad, veracidad) son también derechos fundamentales de los lectores. El libro de estilo de *Abc* y *La Vanguardia*, o los Estatutos de Redacción de *La Vanguardia* y *El Periódico de Cataluña*, son otros ejemplos de códigos deontológicos propios, que establecen ese mismo compromiso por una información veraz, rigurosa y honesta.

En el caso de *Abc* destaca, dentro de las Normas deontológicas, un artículo relativo a las rectificaciones:

“Todo error cometido en una información, que pueda inducir a confusión o malentendido, deberá rectificarse inmediatamente por medio de una ‘fe de errores’ que será sometida por el responsable del error al jefe de Sección respectivo para su publicación.

Asimismo, las erratas tipográficas deslizadas en el proceso de composición deberán subsanarse mediante una ‘fe de erratas’, siempre que alteren el sentido de una frase, impidan su correcta comprensión o

induzcan a interpretación errónea. Se rectificarán especialmente los nombres de personas transcritos incorrectamente.

Las peticiones ajenas de rectificación se considerarán con la máxima cortesía y ponderación, y se publicarán siempre que resulten justificadas. Los casos dudosos, desproporcionados o abusivos serán sometidos a la Asesoría jurídica del periódico para su dictamen.

Tanto la ‘fe de errores’ como la ‘fe de erratas’ tienen su acomodo, en este orden, al final de la página de ‘Cartas al director’.

Al igual que éste, también en conexión con la rectificación, y bajo el epígrafe ‘Respeto a la verdad’:

“[...] El redactor deberá contrastar sus fuentes y dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos. Si difundiera involuntariamente material falso, engañoso o deformado, deberá esmerarse para corregir el error sufrido con toda diligencia y con el mismo despliegue empleado para su difusión, haciendo constar su disculpa cuando así proceda. Sin necesidad de que los afectados acudan a la vía judicial, deberá facilitar a las personas físicas o jurídicas la adecuada oportunidad de replicar a las inexactitudes”.

El Libro de redacción de *La Vanguardia* recoge tanto la ‘Fe de errores’ como el derecho de rectificación:

6.3. “El diario tiene un compromiso profesional y de rigor con el lector que va más allá del ejemplar publicado. Cuando aparecen errores en las informaciones o algún protagonista considera parcial o incompleta la información publicada que le atañe, el diario posee mecanismos correctores que debe utilizar sin dilación.

6.3.2. “Derecho de rectificación o réplica. La ley reconoce el derecho de rectificación de los protagonistas informativos, cuando éstos consideran que la información o el artículo publicado ofrece una visión sesgada, incompleta o tendenciosa de los hechos acaecidos o de las personas que aparecen citadas. El sujeto en cuestión tiene derecho a ejercer el derecho de rectificación, que normalmente consiste en una carta insertada en las Cartas de los Lectores”.

El Estatuto de redacción del mismo periódico, *La Vanguardia*, recoge también expresamente el derecho de rectificación de los lectores:

3.15. “Sin perjuicio de lo que disponga la ley, para garantizar el derecho a rectificar informaciones incompletas o erróneas se dispondrá un espacio diario en la sección Cartas al Director o similar, que quedará al alcance del público y de cualquier miembro de la Redacción. Cualquier miembro de la Redacción ha de conocer, antes que se hagan públicas, las rectificaciones sobre sus trabajos y manifestar su parecer sobre su publicación. En caso de duda, se optará preferentemente por hacer pública la rectificación una vez comprobadas la identidad y la pertinencia del rectificante por los responsables de la sección afectada”.

En el caso concreto del estatuto de *El Periódico de Cataluña*, se recoge también el compromiso de favorecer la rápida difusión de los escritos de rectificación y de disponer de un espacio para que el público ejerza su derecho de réplica en su art. 18:

“EPC dispondrá de un espacio abierto al público para garantizar el derecho de rectificar o matizar informaciones incompletas o erróneas, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley.

EPC instará a los medios a que usen textos y material gráfico suyo al publicar las rectificaciones y matizaciones que sobre ellos se realicen.

Los miembros de la redacción tienen derecho a conocer, antes de su publicación, las rectificaciones sobre sus trabajos y a manifestar su opinión sobre la pertinencia o no de publicarlas.

Cualquier miembro de la redacción que detecte un error en una información, sea suyo o de otro, puede proponer su rectificación mediante los mecanismos establecidos en el diario. Si se confirma el error y el tema es significativo, la rectificación será publicada”.

El código de la *Agencia EFE*, significativo al tratarse de una empresa que sirve información a los propios medios, en su apartado de obligaciones de los periodistas detalla que “la imparcialidad, la exactitud, la carencia de tendenciosidad y la honradez son principios ineludibles para lograr una información objetiva y rigurosa en cualquiera de los soportes” y que “los periodistas de EFE deben presentar los puntos de vista significativos, exponer los hechos en su contexto, sin

omisiones deliberadas y con las palabras adecuadas, sin que repercutan sus creencias o ideologías, y actuar con diligencia y métodos dignos en la obtención y tratamiento de la información”.

Si nos fijamos en empresas de comunicación de titularidad estatal, como es el caso de *Telemadrid*, destacan sobre todo tres de los doce principios de deontología:

- “1. Observar siempre una clara distinción entre los hechos y opiniones o interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión deliberada de ambos conceptos, así como la difusión de rumores.
2. Difundir únicamente informaciones fundamentales, evitando en todo caso, afirmaciones, datos imprecisos y sin base suficiente que puedan lesionar o menospreciar la dignidad de las personas o provocar daño o descrédito injustificado a instituciones y a entidades públicas y privadas, así como la utilización de expresiones o calificativos injustos.
3. Rectificar con diligencia y con tratamiento adecuado a la circunstancia las informaciones (y las opiniones que de ellas se derivaran) que se haya demostrado ser falsas para los derechos o intereses legítimos de las personas u organismos afectados, sin eludir, si fuese preciso, el ofrecimiento de la disculpa, con dependencia de lo que las leyes dispongan al respecto”.

En el mismo ámbito también es destacable el Estatuto de la Radio Televisión Valenciana, que inicia su preámbulo haciendo alusión al reconocimiento y significado constitucional del derecho a la información: “Los responsables del hecho informar son las empresas informativas, tal y como se desprende del art. 20 de la Constitución española, que asigna a los periodistas y a los propietarios de las empresas informativas la obligación de ofrecer una información auténtica y rigurosa. Ni los unos ni los otros se pueden considerar propietarios del hecho informativo, pues es un derecho humano de cada individuo, como señala el art. 19 de la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Los empresarios de la información y los periodistas pueden considerarse como depositarios del mandato social tácito de desarrollar este derecho humano y su cumplimiento es, en consecuencia, su primer deber profesional”. Este Estatuto, en concordancia con los principios establecidos por la Ley 7/1984 de las Cortes valencianas, establece que los informativos (tanto de la Televisión como de la Radio valenciana) deben ser veraces, imparciales, objetivos y defensores de la democracia pluralista.

Volvemos en este punto a la Ley 4/1980, de obligada mención si queremos conocer cuáles son los principios que inspiran la actividad del ente RTVE. En el artículo cuarto de dicha Ley, por la que se aprueba el Estatuto de RTVE, se dispone que dichos principios son:

“a. La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones; b. La separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quienes sustentan estas últimas y su libre expresión, con los límites del apartado cuatro del art. 20 de la Constitución; c. El respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico; d. El respeto al honor, la fama, la vida privada de las personas y cuantos derechos y libertades reconoce la Constitución; e. La protección de la juventud y de la infancia; f. El respecto de los valores de igualdad recogidos en el art. 14 de la Constitución”.

Más tarde, en 2008, se aprobaría el Estatuto de Información de la Corporación RTVE, que observaría varias normas de carácter deontológico para los profesionales de la información audiovisual: observar siempre una clara distinción entre los hechos y las opiniones, intentando evitar la confusión entre ambas cosas y la difusión de conjeturas y rumores; ofrecer sólo información suficientemente contrastada, para evitar lesionar o menospreciar la dignidad de las personas, el derecho a su propia imagen, o provocar daño o descrédito injustificado a institucionales públicas y privadas; tampoco se permite la utilización de expresiones o calificativos injuriosos. Destaca al mismo tiempo otro principio, que exige rectificar “con diligencia y con el tratamiento adecuado a las circunstancias las informaciones que se hayan demostrado falsas o erróneas, sin eludir, si es necesario, la disculpa”.

Al mismo tiempo, estos códigos deontológicos reconocen que el director del periódico es el responsable profesional del contenido de las informaciones publicadas por el diario y de su línea editorial. Por lo que al derecho de rectificación se refiere, esta afirmación se traduce en que será el director del medio el que tenga que responder por el contenido de lo publicado.

La legitimidad democrática de los medios de comunicación como garantes de la formación de una opinión pública libre se traduce en una responsabilidad de gran calibre. Responsabilidad que no sólo reconoce la Constitución (manifestada a través de los límites al derecho reconocidos en el art. 20.4 CE) y la jurisprudencia, sino también las propias normas éticas y deontológicas que muchos medios imponen en sus propias redacciones informativas.

En cualquier caso, la realidad suele ser bien distinta. En primer lugar, del incumplimiento de los principios de autorregulación de los medios no se deriva en ningún caso sanción jurídica. Dichos **códigos deontológicos son, en la práctica, simples orientaciones para el buen desempeño de la labor periodística, pero**

no llevan aparejada ningún tipo de sanción que los convierta en auténticas normas de obligado cumplimiento. A ello se une que, **en nuestro país, pese a lo que se ha avanzado en los últimos años, todavía son escasos estos mecanismos, que se encuentran ciertamente aislados y carecen hoy en día de la repercusión social necesaria.**

Es importante tener en cuenta que la efectividad de la autorregulación no se debe medir exclusivamente por la eficacia aislada de cada uno de los mecanismos, sino más bien por la eficacia conjunto de un importante número de ellos. También influye el hecho de que son instrumentos que no llevan demasiado tiempo implantados, lo que también repercute en que una gran parte de la sociedad no conozca nada o conozca muy poco sobre ellos. A pesar de ello, los mecanismos de autorregulación de la profesión periodística son un paso muy importante para mejorar y dotar de mayor calidad a la actividad. No cabe duda de que, **aunque no hay que identificarlos como la panacea que resolverá definitivamente todos los problemas que rodean a la comunicación social, son el mejor reflejo de que las empresas informativas van tomando conciencia de la enorme responsabilidad que tienen para con el conjunto de la sociedad.**

Algunos autores se muestran convencidos de la necesidad de que el legislador desarrolle a través de Ley Orgánica el art. 20 de la CE. Debido a que en él se recogen derechos especialmente reforzados y merecedores de una singular protección, su ejercicio precisa debidas garantías. Una Ley Orgánica debería brindar un Estatuto del Periodista Profesional, que idealmente recogería su objeto y ámbito de aplicación, los sujetos destinatarios, una carta de derechos y deberes de los profesionales de la información, un código deontológico, una serie de elementos de organización de la labor periodística, los órganos de representación y participación en el seno de la empresa informativa y un Consejo de la Información a nivel estatal y autonómico (García Castillejo, 2008).

Un segundo problema que atenaza a los medios de comunicación y que se enfrenta a estas buenas intenciones es su propia configuración, marcada por la doble finalidad de informar y de obtener beneficios económicos. También la concentración de los medios de comunicación, su estrecho vínculo con la política y la situación que viven las redacciones: premura, falta de contraste informativo, precariedad laboral, bajos salarios y un largo etcétera. Un conjunto explosivo y, en la mayoría de las ocasiones, difícilmente compatible con los postulados ético

s que se han empezado a proponer desde las propias empresas de comunicación.

De todos estos aspectos destacaremos en el siguiente epígrafe los que consideramos más importantes a efectos del derecho de rectificación: la falta de contraste de fuentes por la escasez de tiempo en la elaboración de las informaciones y la dependencia económica y política de los medios. La escasez de tiempo para contrastar de manera diligente las noticias que se publican conlleva en

muchas ocasiones errores que lesionan los derechos de terceros. Por su parte, la dependencia económica de los medios y su interés por aumentar sus ventas o su audiencia les ha convertido en esclavos del sensacionalismo y de la espectacularidad de las informaciones, de los grandes titulares provocativos que rozan la tergiversación. La estrecha vinculación de los medios de comunicación españoles con las distintas ideologías y, más allá, con los distintos partidos políticos, les convierten en voceros casi institucionales de los mismos, buscando en todo momento el ataque y derribo del rival político, en ocasiones con menosprecio a la veracidad de la información y a los derechos de los aludidos.

5.1.2. Recomendaciones de los códigos en torno a la rectificación

Tal y como hemos podido observar con este repaso por varios libros de estilo y/o estatutos de redacción, los periódicos establecen como **principios deontológicos la independencia, la objetividad y la veracidad**.

En lo que respecta al derecho de rectificación, también suelen recogerlo, si bien de manera sucinta y atendiendo a estos parámetros:

- **Se reconoce el deber del periodista de rectificar de manera inmediata los errores en los que haya incurrido su información.**
- **No se debe eludir, pues, ni la responsabilidad; ni tampoco, si fuera necesario, la disculpa.**
- **Los preceptos deontológicos deben cumplirse sin perjuicio de lo que disponga la Ley.**
- **En ocasiones los términos réplica y rectificación se confunden o emplean como sinónimos (*La Vanguardia*).**
- **Algunos medios hacen referencia directa a que las rectificaciones se publicarán en la sección de *Cartas al Director*.**
- **En ningún caso se menciona expresamente cómo puede ejercerse el derecho de rectificación por parte de los lectores.**
- **No se dan pautas ni para saber cómo deben publicarse los escritos de rectificación, ni el cuándo.**

En definitiva, se habla de la debida corrección de errores por parte del periodista, pero no se ahonda en el derecho de rectificar que tiene el público ni en cuáles son los requisitos para la publicación de los escritos de rectificación, a saber: en qué número del periódico, en qué sección (algunos establecen al efecto las *Cartas al Director*) y cuál debe ser su relevancia. Tampoco se alude a la acción de rectificación que puede emprender el lector en el caso de que no se publique su escrito.

Si bien es cierto que los códigos deontológicos deben circunscribirse en exclusiva al ámbito de la ética profesional, estableciendo unos mínimos exigibles en este sentido, consideramos que también es importante que sirvan de guías efectivas para el trabajo diario de los profesionales. Solo así pueden evitar quedarse en agua de borrajas.

5.1.3. La figura del Defensor u *Ombudsman*

Otra forma de autorregulación profesional complementaria a la de los códigos es la de la figura del *Defensor*, cuya presencia es aún bastante escasa en los medios de comunicación a pesar de su importante papel y de que la propia FAPE recomienda que los medios implanten esta figura. Se trata de “la persona que un medio de comunicación designa para que vele, ante todo, por la defensa de ciertos derechos fundamentales de los ciudadanos mediante la vigilancia y supervisión de la labor que desarrollan sus periodistas y el producto periodístico que elabora el diario, revista, emisora radiofónica o cadena televisiva” (Maciá, 2006: 49).

La doctrina coincide en destacar que la adopción de esta figura para muchos medios es vista como un paso destacado tanto para mejorar la relación con el público como para hacer lo propio en cuanto al rigor de la información (Getlin, 2000), favoreciendo la cultura del reconocimiento y la corrección de errores (Aznar, 2005).

El Defensor se erige, de este modo, como la figura que media entre la redacción y el público, defendiendo los derechos de aquel frente a posibles injerencias de la información y mejorando la calidad de los contenidos. Su mera implantación supone, en definitiva, un ejercicio de autocrítica dentro de la profesión (Maciá, 2006).

En la parte de análisis de este trabajo se incluyen varios cuestionarios a profesionales donde se les plantea la siguiente pregunta: *¿Considera necesaria la existencia de la figura del Defensor del lector en materia de rectificación?* Y en este punto encontramos ciertas críticas o voces detractoras de la figura. **Entre los argumentos negativos**, se encuentran: es **innecesaria porque esa labor ya la realiza el director del medio**, los medios no se la pueden permitir, **no goza de la independencia necesaria** (suele ser un periodista que ha trabajado muchos años en la casa), supone prejuzgar en negativo la labor de los profesionales.

La escasa independencia del Defensor es precisamente el argumento del diario *El Mundo* para no haber incluido esta figura en su redacción:

“Algunos han acudido a la figura del ombudsman, creada en la prensa estadounidense hace tres decenios a semejanza de la institución escandinava de un defensor del pueblo. Pero en los propios Estados

Unidos la mayoría de los grandes medios la ha rechazado al comprobarse la dificultad de que las personas que hacían la autocrítica en nombre de los lectores mantuviesen una verdadera independencia frente a la Dirección y la propiedad del medio, incluso en los casos en que procedían de fuera de éste (a menudo, jueces o periodistas prestigiosos y ya jubilados). El defensor se convertía demasiado a menudo en una coartada de la publicación, pero no se enfrentaba a sus más serias deficiencias” (Libro de estilo de *El Mundo*: 64).

A lo anterior se une que **aún son una minoría los medios de comunicación que han implantado para sí esta figura**, en algún momento, a saber: *RTVE*, *El País*, *La Vanguardia*, *La Voz de Galicia*, *eldiario.es*, *El Punt Avui*, *Canal Sur Radio y Televisión*, *Corporación Catalana de Medios Audiovisuales* (CCMA) y *Trece Tv*.

Por lo tanto, puede afirmarse que, a pesar de los avances y esfuerzos en los últimos años, **la del Defensor no es aún una figura plenamente implantada ni reconocida entre medios y profesionales y, además, es vista con frecuencia como una inversión poco rentable** económicamente hablando.

En España los diarios *El País* y *La Vanguardia* sí recogen dentro de sus respectivos libros de redacción el Estatuto del Defensor.

Los puntos 1 y 2 del Estatuto del Defensor del Lector de *El País* establecen:

“1. El Defensor del Lector desarrollará su actividad con total autonomía e independencia. La Dirección del periódico proveerá los medios materiales para ello.

2. El Defensor del Lector no podrá ser despedido o sancionado por motivos relacionados con el ejercicio de su cargo. A estos efectos, gozará de garantías laborales similares a las de los representantes sindicales”.

El Estatuto de *La Vanguardia* asegura que la finalidad de crear esta figura en su redacción es la de “proteger y garantizar los derechos de los lectores, atender sus dudas, quejas y sugerencias sobre los contenidos del diario y sus suplementos, y para vigilar que el tratamiento de textos, titulares y material gráfico esté acorde con las reglas éticas y profesionales del periodismo”. Además, “El Defensor podrá intervenir a instancias de cualquier lector o a iniciativa propia, con plenas garantías de autonomía e independencia en la realización de su trabajo” (Libro de redacción de *La Vanguardia*: 489).

En ambos casos, se pretende salvaguardar la independencia del *Defensor*, algo que, sin embargo, parece complicado en la totalidad de los casos: recordemos

que **el cargo de *ombudsman* es siempre para un periodista de la casa, con una larga trayectoria profesional y que no es bien visto entre sus colegas si éstos entienden que se ‘enfrenta’ a su trabajo.** De hecho, “al Defensor al que la propiedad o la Redacción, o ambas, llegan a considerar díscolo o peligroso, se le acaba por expulsar” (Maciá, 2006: 195).

5.1.4. Los Consejos de Prensa

El Consejo de prensa (también llamado Consejo de información) “es un organismo independiente que estudia las quejas que le llegan sobre la actuación de los medios y que, cuando lo merece el caso, emite una resolución juzgando dicha actuación desde un punto de vista deontológico” (Aznar, 2005: 261). Para Aznar es muy posiblemente también el mecanismo de autorregulación más completo de todos y cuenta con una ventaja frente al Defensor, que es su desvinculación de un medio en concreto.

Su función de control es doble: de un lado, los abusos que comete la prensa y, de otro, los que se cometen contra ella, si bien su capacidad decisoria no va más allá del arbitraje moral, de una reprimenda en el caso de los medios de comunicación. Su virtualidad práctica “es solo posible en la medida en que las partes implicadas asuman la responsabilidad de aceptar sus resoluciones con independencia de que les afecten negativamente” (Carrillo, 1986: 90).

Los Consejos de Prensa suelen estar formados por un grupo heterogéneo de periodistas y ciudadanos procedentes de organizaciones no vinculadas a los medios, su objeto es el del arbitraje y también se encargan de revisar y —en su caso modificar— los códigos deontológicos (Aznar, 2005).

En nuestro país existen dos Consejos de Prensa. De un lado, el **Consejo de la Información de Cataluña, creado en 1997** por el Colegio de Periodistas de esa comunidad autónoma. Y, de otro, la **Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la FAPE, que nace en 2004.**

El Consejo de la Información de Cataluña (CIC) se autoproclama en su sitio web como:

“Una entidad sin ánimo de lucro constituida por la manifestación de voluntad del Colegio de Periodistas de Catalunya (CPC) en el año 1997. Tiene la finalidad de velar por el cumplimiento de los principios de ética profesional periodística contenidos en el Código Deontológico, el cual fue aprobado por la Junta de Gobierno del CPC y por el II Congreso de Periodistas del año 1992.

El CIC asumió personalidad jurídica propia en el año 1999,

convirtiéndose en la Fundació Consell de la Informació de Catalunya (FCIC) con el objetivo de ser un órgano de arbitraje privado e independiente. Como tal, ejercerá sus funciones sobre los profesionales y medios que desarrollen sus actividades informativas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Catalunya.

Se trata, pues, de un organismo representativo y plural que, al margen de las atribuciones de los órganos judiciales, vela por el cumplimiento de los principios y criterios del Código Deontológico de la profesión periodística en Catalunya. Al tratarse de un instrumento de la profesión, sus recomendaciones son de carácter moral.

El CIC es el órgano compuesto por personas físicas de solvencia reconocida provenientes del mundo de la comunicación, de la universidad, de las fundaciones, de los colegios profesionales, de los institutos de ciencias sociales y asociaciones cívicas y de carácter social. Además de los vocales, el CIC está integrado por el presidente/a i el secretario/a general. Que lo son también del Patronato.

En el ejercicio de sus funciones, el CIC aprueba resoluciones que vinculan a las partes que voluntariamente aceptan su arbitraje. Para recibir el arbitraje del CIC cualquier persona o entidad puede presentar una queja por la lesión cometida por parte de un profesional o medio de comunicación. No obstante, la presidencia, a criterio propio, del Patronato o del CIC, puede declarar de oficio cualquier asunto que considere de trascendencia social”.

La Comisión de Arbitraje de la FAPE se define en su sitio web de la siguiente manera:

“La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo se constituye como órgano de autocontrol deontológico interno de la profesión periodística. El objetivo es fomentar el periodismo ético desde la autorregulación independiente y responsable, a través de la mediación y el entendimiento.

Se trata de una instancia arbitral entre la profesión y los ciudadanos que se sientan afectados por determinadas informaciones. Sin ningún poder sancionador, su autoridad moral viene otorgada por las organizaciones profesionales y los periodistas adheridos a ella y

supone una alternativa complementaria a la regulación jurídica.

La actuación de la Comisión vela por el cumplimiento del Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) [...]

La Comisión está integrada por personalidades pertenecientes al periodismo, al derecho, al mundo académico y a otras actividades relevantes de la vida social. La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo forma parte la *Alliance of Independent Press Councils of Europe*".

Ambos consejos coinciden, efectivamente, en señalar que **son órganos de arbitraje cuya labor es independiente, que velan por el cumplimiento de sus respectivos códigos deontológicos, que emiten sanciones de carácter exclusivamente moral y que están integrados por personalidades de diferentes áreas** (periodismo, derecho, mundo académico, asociaciones y organizaciones sociales, etc.).

Para autores como Villanueva, la función del Consejo de Prensa es, además, la de "promover la transmisión del conocimiento, de educar para la democracia informativa" entre los profesionales de la comunicación y la sociedad (Villanueva, 2002: 31).

5.1.5. Asociaciones de usuarios y otros colectivos

Como hemos visto, la autorregulación en los medios pasa por los códigos deontológicos, la figura del Defensor y el Consejo de Prensa. Pero, en la medida en la que el público que consume los medios es el que suele dirigir las quejas contra los mismos, en este contexto se ha de tener también en cuenta las asociaciones de usuarios y consumidores, las ONG y los colectivos sociales.

Desde principios de nuestro siglo, el público tiende cada vez más a organizarse y exigir unos medios de comunicación más éticos, y ya no muestran la imagen de masa pasiva como ocurría antaño. "Probablemente sea éste uno de los cambios más significativos y de mayor alcance en la comunicación social de este nuevo siglo" (Aznar, 2005: 249).

Lo cierto es que **el público ha adquirido un protagonismo en el proceso comunicativo que ya no es posible arrebatarse, debido principalmente a su autoconciencia de elemento esencial dentro del mismo.**

Precisamente las organizaciones y consumidores de usuarios conforman el cuarto grupo al que se dirige la encuesta de calidad dentro del análisis del presente

trabajo, a través de la cual se les permite expresarse acerca de las quejas de índole ética dirigidas a los medios.

5.2. Premura, precariedad, intereses espurios y actitud negligente

Varios son los males que aquejan al periodismo desde su existencia, pero que se hacen más patentes en la sociedad actual, hasta el punto de que no pocos autores hablan de una verdadera crisis del periodismo (Lippmann, 2011). En el caso concreto del papel, el reparto de la propiedad de los medios en grandes grupos mediáticos (Bouzat, 1989) o la feroz competitividad con la prensa gratuita e internet (Ramonet, 2005). Pero las causas de la crisis también se encuentran dentro de las propias redacciones, entre ellas, la falta de objetividad y la manipulación. Situación que provoca que, de manera paradójica, en plena sociedad de la información vivamos en un estado de inseguridad informativa (Ramonet, 2005), y también de ‘sobredosis’ de noticias, por el bombardeo de las agencias hacia los medios de comunicación (Bettetini y Fumagalli, 2001).

En el caso de la **manipulación informativa**, abundan los autores la achacan al ritmo frenético de trabajo, que en repetidas ocasiones provoca la falta de contraste o acceso a las fuentes (Restrepo, 2004; Fernández y López, 2008); y a la búsqueda de la espectacularidad para atraer al público (Soler, 2010). Kapuscinsky escribirá en *Los cínicos no sirven para este oficio* que “los medios de comunicación, la televisión, la radio, están interesados no en reproducir lo que sucede, sino en ganar a la competencia. En consecuencia, los medios de comunicación crean su propio mundo y ese mundo suyo se convierte en más importante que el real” (Kapuscinski, 2007: 113).

Lippmann habla en términos de conflictos a los que se enfrenta el periodista: de un lado, elegir entre el periodismo amarillo y el periodismo responsable; de otro trabajar por la búsqueda de la verdad o estar en buenos términos con los poderosos (Lippmann, 2011), “los periodistas caminan sobre una cuerda floja muy difícil, entre la prudencia y el sensacionalismo, para seleccionar sus palabras y sus fotografías” (Goodwin, 1990: 231). También Goodwin destaca la dependencia financiera de la publicidad por parte de los medios como un factor que merma la calidad del producto periodístico. En el mismo sentido, Ortega (2006) habla de un modelo de no información, que se sirve a intereses particulares y a la defensa de poder político y económico.

Otro de los conceptos que se ha manejado al hablar de la problemática de los medios es el del periodista como élite, alejado de la realidad del público (Goodwin, 1990). Como resultado, nos encontramos con un **profesional que no interpreta adecuadamente la realidad social y que se coloca en una posición alejada de la de las personas a las que pretende informar** y explicar la realidad.

A estos factores se une, sin duda, **la precariedad laboral que caracteriza al sector**, que **convierte la situación del periodismo en realmente calamitosa**. El ejercicio de la profesión lo sostienen periodistas de baja cualificación y experiencia, lo que lleva aparejado un “casi nulo control de calidad” (Iglesias, 2015: 3). En efecto, la precariedad e inseguridad laboral es la cuestión que más preocupa a los periodistas, según el estudio llevado a cabo por Herrera y Maciá (2010) entre los profesionales de la Comunidad de Madrid, seguida del predominio de los intereses económicos y políticos sobre la finalidad informativa.

La degradación del periodismo no es algo nuevo, pero sus consecuencias sociales van más allá que en el caso de cualquier otra actividad comercial. Lo que se pone en peligro son los derechos reconocidos en el art. 20 de la Constitución (García Castillejo, 2008).

La problemática es bien conocida entre los propios periodistas, que recuerdan el verdadero valor de su trabajo: “El periodismo es un sacerdocio, el periodismo es el único termómetro de la salud democrática, los periodistas tenemos la sagrada misión de ser el permanente vigía de los poderosos, el implacable censor de los malvados, el gato de siete colas de los corruptos” (Izquierdo, 2013: 16).

En este contexto, los periodistas cometen más errores en las informaciones de lo que sería deseable. Buena parte de ellos evitables si a la actitud diligente del profesional pudieran unirse unas mejores condiciones laborales en un amplio sentido, incluyendo más formación (desde las Facultades y en las propias redacciones) en aspectos deontológicos.

5.3. ¿Qué impide a los medios rectificar?

En ocasiones, la difusión de informaciones erróneas o falsas se produce de manera involuntaria, a causa de una serie de factores que el periodista no siempre puede controlar. Y si bien hemos de recordar que un error no intencionado no le convierte en culpable, sí que se hace patente la resistencia dentro del sector a difundir rectificaciones.

En efecto, según reconocen los propios periodistas, “una de las características diferenciales de los medios de comunicación españoles es su incapacidad para rectificar” (Aguilar, 1997), su “resistencia como gato panza arriba de los periódicos españoles —incluso, los que presumen de más empaque— a las rectificaciones, aclaraciones y réplicas; como si así se disimularan las equivocaciones. Una actitud que demuestra mezcla de soberbia y de complejo de inferioridad” (González Urbaneja, 2008: 29).

Concretamente, “pareciera que rectificar o dar espacio a las réplicas de quienes se hayan sentido perjudicados por una información equivaliese a incurrir en el deshonor. Aquí el que calla, otorga. El que replica —si alcanza a ver publicada

su réplica— comprueba el oscuro rincón en que aparece, el cuerpo de letra indescifrable en que se imprime y la nota de infamia que se añade como castigo a semejante osadía. Y no digamos del que acude a los tribunales; va servido” (Aguilar, 1997). Los escritos de rectificación, según Lucía Méndez, “no se ponen ni en la misma página, ni con similar categoría que la noticia original. Los textos de rectificación normalmente no vienen precedidos por la palabra rectificación sino por la de aclaración y su lugar natural de publicación es la sección de Cartas al Director, cajón de sastre en donde todo cabe. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la rectificación se logra a base de insistir. Cuanto más insistes, más consigues” (Gil, 2008: 28). Ese despliegue menor de la rectificación en comparación con la información lesiva es también puesto de manifiesto por Suárez-Castillo (2007).

González Urbaneja cree que ni siquiera una decisión judicial favorable a la rectificación dota a este instrumento de efectividad: “Hay ciudadanos que recurren a los tribunales para ejercer ese derecho, que incluso ganan el pleito en sucesivas instancias. Pero el resultado final suele estar bastante alejado de la pretensión inicial. La rectificación forzosa, por imperativo legal, suele salir tarde y mal, con ubicación deplorable, poco legible, sin explicaciones... es decir, con manifiesta resistencia al mandamiento judicial. Y lo sorprendente es que no pasa nada; el juez, burlado, mira a otro lado, y el ciudadano, frustrado, se promete no volver a insistir (González Urbaneja, 2008: 29).

Otros autores califican la aplicación del derecho de rectificación como decepcionante y se preguntan si sirve de algo que el aludido acuda a este derecho, “pensemos [...] en esa ‘N de R’ o nota de redacción, que en otra ocasión hemos explicado, en virtud del cual el medio volverá a ‘machacar’ al osado que se había atrevido a protestar por alguna información a su juicio inveraz” (De Vega, 1998: 100). Una reflexión que se repite dentro de la doctrina: “Muchas veces —y no es una exageración— es preferible ser víctima de un robo a mano armada dentro de la propia casa, con la consiguiente pérdida de bienes muebles e inmuebles, que ser víctima de algún titular de los periódicos. Los daños patrimoniales a menudo son menores y los morales infinitamente inferiores” (Bettetini y Fumagalli, 2001: 33).

La arrogancia parece ser, pues, ese mal endémico que aqueja a los medios. Acostumbrados a observar el mundo de forma crítica, parecen incapaces de mirar hacia dentro y de entender que reconocer y corregir los errores no les hace más débiles ante su público, sino que refuerza su tesoro más valioso, su credibilidad. Asegura la antigua Defensora del lector de *El País*, Milagros Pérez Oliva (2016), que “el periodista debería ver en la rectificación una oportunidad de corregir sus errores, aunque suele vivirla como un ataque a su imagen profesional”. Para Restrepo, “la arrogancia es el talón de Aquiles del periodista, quien sólo la puede evitar si primero la reconoce como verdadero peligro de esta profesión” (Restrepo, 2004: 113).

Esa reticencia a reconocer errores y a difundir su rectificación es absurda y destruye la confianza entre los medios y el público (McBride y Rosenstiel, 2009), “si el periodista no corrige, engaña” (Fernández y López, 2008: 472).

Para dignificar la profesión se han de reconocer públicamente esos errores, sinceridad que sin duda agradecerá la audiencia, que es una oportunidad de ofrecer la verdad completa de los hechos y que facilita cumplir ese contrato tácito que existe entre el medio y el público, en el que el periodista se compromete a ofrecer información veraz y la audiencia a comprarla y/o consumirla (Restrepo, 2004).

5.4. Ejemplos de la insignificancia de los escritos de rectificación

A continuación, a mero título ilustrativo, se analizan varios casos paradigmáticos que demuestran cómo el ejercicio del derecho de rectificación no cuenta con la efectividad deseada y queda poco menos que en agua de borrajas para la persona física o jurídica afectada por la información.

EJEMPLO 1. El diario *El País* es obligado por sentencia judicial a rectificar una información. La rectificación llega, pero tres años después de que se publicara la información inicial, lo que dificulta que el público que en su día leyó la noticia (el 14-12-2014, ver **Imagen 1**) se acuerde de la misma tanto tiempo después (la rectificación se publica el 28-12-2017, ver **Imagen 2**).

Como vemos, *El País* sí respeta en inicio incorporar una llamada en portada sobre la sentencia judicial (la información controvertida también fue presentada en portada —**Imágenes 1 y 4**—), si bien la inserta en un lugar muy poco visible y bajo el título de sentencia, es decir, otorgándole muy poca trascendencia (ver **Imagen 5**). En definitiva, ya desde la ‘llamada’ a la información en portada no se puede hablar de relevancia semejante.

La información del 14 de diciembre se publicó en la sección de *España*, como también la rectificación exigida por la Audiencia Provincial de Barcelona. Sin embargo, *El País* no recoge en el título la palabra rectificación y, simplemente, habla de sentencia. Con esta manera de proceder, el diario no es claro con sus lectores y, a primera vista, la que parece la reproducción sin más de una sentencia judicial, puede inducir a confusión.

Del mismo modo lo entendieron los aludidos. A través de un comunicado, *Mediapro* denunció que la relevancia con la que se había difundido la rectificación no fue la misma que la dada a la información inicial, que contaba con titulares más contundentes y claros sobre a quién se refería la misma, y, además, fue publicada en domingo, mientras que la rectificación se difundió un jueves.

El Juzgado de Primera Instancia número 28 de Barcelona ordenó a *El País* que volviera a rectificar la información, ya que la primera vez había incumplido con los parámetros exigidos por la ley. En cumplimiento de esa nueva sentencia, el

diario difundió la segunda rectificación el 22 de julio de 2018, casi siete meses después (ver **Imagen 3**).

En esta ocasión, *El País* sí ubica la llamada de la información en portada prácticamente en el mismo lugar que en su día ocupó la noticia controvertida. No obstante, en ningún caso se destaca con un titular o tipografía en negrita la palabra rectificación (ver **Imagen 6**), como tampoco procede en las páginas interiores, limitándose a aportar un titular que desmiente el original: *‘Roures no posee 250 millones en 15 cuentas, ni en paraísos fiscales’*.

El descrito es un caso poco habitual por varios motivos. En primer lugar, no es usual que un diario se vea obligado a rectificar una misma información por mandato judicial dos veces. Por otro lado, y por fortuna, tampoco suele ser común que la rectificación tarde tanto tiempo en difundirse. Si bien en este caso existe una sentencia judicial de la Audiencia Provincial de Barcelona a favor de los rectificantes (*Mediapro* y Jaume Roures), lo que ciertamente dilata el proceso, recordemos que la rectificación debe ser ante todo un proceso sumario, rápido, con el propósito de ‘reparar’ lo antes posible cualquier perjuicio causado al afectado o afectados y de facilitar al público información veraz.

El contexto en el que se enmarca esta información es la guerra que, por aquel entonces, libraban estos dos grandes grupos mediáticos (*Prisa* y *Mediapro*) por conseguir los derechos de las emisiones de partidos de fútbol en España.

Imagen 1. Portada del diario *El País* (14-12-2014)



España sufre un récord de asaltos cibernéticos desde Rusia y China

Los cuatro ministerios vinculados a la seguridad han recibido ataques de 'hackers' con los virus más sofisticados que se conocen

JOAQUÍN GIL
Madrid

Piratas informáticos ubicados en Rusia y China han atacado este año los ordenadores personales y los teléfonos móviles de varios ministros y secretarios de Estado del Gobierno, con el objetivo de sustraer datos e interceptar comunicaciones. Los intentos de infiltración, frustrados por la ciberseguridad española, tenían en la mira a los Ministerios de Interior, Defensa, Asuntos Exteriores y Presidencia.

Los asaltos procedían de grupos coordinados de hasta una veintena de hackers, que emplean unos programas muy sofisticados para enviar correos maliciosos e infectar los equipos. Los virus, de gran complejidad y similares a los hallados en organismos gubernamentales de otros países, tenían su origen en ordenadores situados en Rusia y China, si bien es difícil saber quién está detrás de la trama. El rastro de los ataques se diluye porque los autores recurren a servidores ubicados en terceros países.

Se trata de una ofensiva sin precedentes en España, donde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha detectado este año 13.000 ciberataques, un 80% más que en 2013. **PÁGINA 22**



HARTOS DE LA VIOLENCIA POLICIAL EN EE UU. Miles de personas llegadas de todo el país recorrieron ayer el centro de Washington para denunciar la violencia policial, que en los últimos meses se ha cobrado la vida de cinco afroamericanos, y mostrar su rechazo a un sistema judicial al que acusan de castigar a la minoría negra. Los manifestantes reclamaron reformas ante el Congreso. / SAUL LOEB (AFP) **PÁGINA 8**

Rajoy presenta la defensa de la Constitución como gran baza electoral

CARLOS E. CUÉ, Madrid

Con la vista puesta en la campaña electoral de 2015, la dirección del PP se unió ayer en bloque en torno a Mariano Rajoy y en defensa de la Constitución frente al independentismo. **PÁGINA 14**

MARÍA CORINA MACHADO
Líder venezolana

"El régimen chavista llegará hasta donde le dejemos"

ALFREDO MEZA, Caracas

La líder opositora venezolana María Corina Machado, bajo persecución judicial, asegura a EL PAÍS que el Gobierno ha cerrado todas las puertas. **PÁGINA 7**

Roures posee 250 millones en 150 cuentas, un tercio en paraísos fiscales

Los derechos del fútbol, ante un cambio decisivo **PÁGINA 43**

Domingo



Un horario en contra de la sensatez

Jornadas largas e improductivas. Falta de sueño. Estrés. Los expertos cuestionan el estilo de vida español Por **José Luis Barbería**

Amazon-Alibaba: Guerra de gigantes por el comercio del futuro

París expulsa a los coches diésel

Nuevo Volkswagen **Passat**
Tan avanzado como quien lo conduce.

Consumo medio (l/100 km): 4,4-5,3. Emisión de CO₂ (g/km): 104-134.

nuevopassat.es

Imagen 2. Portada del diario *El País* (28-12-2017)

EL PAÍS

www.elpais.com EL PERIÓDICO GLOBAL

JUEVES 28 DE DICIEMBRE DE 2017 | Año XLII | Número 14.782 | EDICIÓN EUROPA

El Banco de España advierte del peligro de un rebrote del 'procés'

Cataluña ha sufrido ya efectos negativos en turismo, comercio y vivienda. Si hay más tensión, "podría afectar a las decisiones de consumo e inversión"

CRISTINA DELGADO, Madrid
La economía española creció un 0,8% en el cuarto trimestre de 2017, lo mismo que entre junio y septiembre, según el cálculo provisional del Banco de España. El buen comportamiento de las exportaciones ha logrado contrarrestar "los efectos adversos derivados del aumento de la incertidumbre en Cataluña". Aunque el producto interior bruto mantiene el ritmo de crecimiento previsto, el organismo introduce una nota de alarma: la crisis derivada del *procés*, que ya ha tenido efectos negativos en la economía catalana —sobre todo en turismo, comercio y vivienda—, tendría un impacto mayor si hubiera un "rebrote de las tensiones" causadas por el reto independentista.

Los efectos se han concentrado especialmente en Cataluña: "La actividad económica se habría desacelerado en el último tramo del año en mayor medida que en la media de las comunidades consideradas". El banco ofrece cuatro ejemplos en los que se compara la evolución económica de Cataluña con la de Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid. Se muestra la afiliación a la Seguridad Social, la matriculación de vehículos, las noches de hotel de los turistas y la compra-venta de viviendas. En las cuatro categorías el comportamiento en Cataluña es el peor. **PÁGINA 39**



JORDI PUJOL FERRUSOLA SALE DE LA CÁRCEL TRAS PAGAR 500.000 EUROS DE FIANZA. El mayor de los siete hijos del expresidente catalán Jordi Pujol abandonó a las siete de la tarde la prisión de Soto del Real (Madrid), cargado con bolsas de pertenencias personales. Pujol fue encarcelado el 25 de abril por blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad documental. / SANTI BURGOS **PÁGINA 21**

HECHOS RELEVANTES QUE MARCARÁN 2018 (IV)

Un tratamiento para combatir la leucemia se aplicó este año en EE UU

La terapia génica llega al mercado

DANIEL MEDIAYLLA, Madrid
La noticia científica más relevante de este año —y que marcará los próximos— no ha sido un descubrimiento teórico, sino la aplicación comercial de anteriores indagaciones de laboratorio. Este año, en Estados Unidos, se

ha llevado a cabo por primera vez de modo comercial la modificación de un genoma humano para curar una enfermedad. En concreto, se alteraron genéticamente linfocitos de un paciente con cáncer para luchar contra esta enfermedad. **PÁGINA 26**

¿Quieres saber la verdad de los planes de pensiones?

Sigue leyendo para saber más.



ING Bank for Sustainable Finance, committed to the United Nations Sustainable Development Goals

Sube la presión a Arrimadas para que trate de formar Gobierno

Empresarios y partidos piden a Ciudadanos que tome la iniciativa

J. J. GÁLVEZ, Madrid
PSOE, PP y empresarios presionan cada vez más a Ciudadanos, ganador de las autonómicas catalanas, para que Inés Arrimadas, su candidata, tome la iniciativa y trate de formar Gobierno. Ciudadanos prefiere esperar a ver qué hacen los partidos independentistas, consciente de que sus posibilidades de gobernar son prácticamente nulas. "A los otros partidos se les ha olvidado la calculadora", se defienden. **PÁGINA 15**

El cine español recauda menos de 100 millones por primera vez en cinco años

GREGORIO BELINCHÓN, Madrid
El cine español recaudará este año menos de 100 millones. La cifra es baja —la menor desde 2013, en que se quedó en 70 millones— pero la industria no la observa con demasiado pesimismo. El año pasado se recaudaron más de 109 millones de euros. La película más taquillera fue *Tadeo Jones II*. **PÁGINA 27**

ADEMÁS

La noche en que el Popular se vendió

Desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana del 6 de junio de este año se fraguó la venta del Banco Popular. **P40**



Javier Fernández: "Me siento viejo a los 26 años" **P33**

La UE fracasa al cerrar un acuerdo con Mercosur **P3**

Sentencia

"En relación a la información publicada en portada el domingo 14 de diciembre de 2014 se rectifica la misma ya que Roura no posee 250 millones en 150 cuentas ni en paraísos fiscales". **P21**

Imagen 3. Portada del diario *El País* (22-07-2018)



Pablo Casado junto a su esposa, Isabel Torres, tras ser proclamado presidente del PP, en el congreso celebrado ayer en Madrid. / CARLOS ROSILLO

El PP da un giro conservador con la elección de Pablo Casado

El nuevo líder del partido derrota a Sáenz de Santamaría con propuestas como restringir el aborto y mayor dureza contra el independentismo

NATALIA JUNQUERA, Madrid
Pablo Casado, de 37 años, se convirtió ayer en el nuevo presidente del PP tras derrotar con un 57% de los votos a Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso del partido, celebrado en Madrid. La elección de Casado representa la victoria de la herencia de José María Aznar sobre la de Mariano Rajoy y un giro a la derecha de la formación conservadora.

El nuevo presidente popular es partidario de restringir el derecho al aborto, regresando a la

ley de 1985 basada en los supuestos y no en los plazos como la actual. También defiende una reforma de la ley electoral con una prima en escaños al partido ganador para no depender "de bisagras nacionalistas"—algo que requeriría una reforma constitucional, según los expertos—. Con

los independentistas se muestra a favor de una línea dura y rechaza una ley de eutanasia por "injusta e innecesaria".

"Vuelve el PP", anunció en el discurso tras su victoria. Casado promete integrar a Santamaría y a su equipo en el partido, que ha quedado muy tocado tras un du-

ro y traumático proceso de primarias, desencadenado por la renuncia de Mariano Rajoy tras la moción de censura que le desalojó de La Moncloa.

Mientras la candidatura de Santamaría insistía en que el programa del PP ya estaba escrito y que se trataba de elegir a un nuevo gestor, él presentó una campaña presidencial, con propuestas de cambios legislativos en justicia o educación y la promesa que nunca falta en período electoral: bajar impuestos. PÁGINAS 16 A 20

EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

El joven que resucita a Aznar

Javier Casqueiro

PÁGINA 18

Vuelve el Capitán Trueno

Íñigo Domínguez

PÁGINA 19

Pakistán vota bajo la sombra del Ejército

ÁNGELES ESPINOSA, Lahore
Analistas políticos y defensores de los derechos humanos denuncian la injerencia de los militares en las presidenciales del miércoles en Pakistán. El ex primer ministro encarcelado Nawaz Sharif se enfrenta al populista Imran Khan. PÁGINA 6

Cuba elimina el comunismo de su Constitución

PÁGINA 4

La represión de Ortega y la firmeza opositora abren una era de incertidumbres

Una nueva revolución germina en Nicaragua

JAVIER LAFUENTE, Managua
"Le troncharon sus sueños, no era para que terminara de esta manera". Gerald Vázquez quería graduarse en la universidad y seguir zapateando *El solar de Monimbó*, su canción preferida. Hace tres meses aparcó sus pla-

nes para unirse a las protestas contra Daniel Ortega. El fin de semana pasado, durante el asedio a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), último bastión de resistencia juvenil, una bomba estalló cerca de él. Le dejaron grogui. PASA A LA PÁGINA 2

Funesta celebración Gioconda Belli

PÁGINA 3

Puigdemont impone en el PDeCAT la línea dura secesionista

Marta Pascal, partidaria de la vía más posibilista, renuncia a la dirección

CAMILO S. BAQUERO, Barcelona

La renuncia ayer de Marta Pascal como coordinadora del Partit Demòcrata Català (PDeCAT), partido hegemónico del independentismo, ha dejado la puerta abierta para que el entorno del expresidente Carles Puigdemont se haga con el control de la formación. Al anunciar su decisión, Pascal dejó claro que se va porque no cuenta con el beneplácito del expresidente. "No puede ser que quien dirija el partido no tenga la confianza de Puigdemont", dijo. El cambio en la dirección empuja al PDeCAT hacia la línea dura en defensa de la república catalana, abandonando la vía más posibilista. PÁGINA 24

JORDI SÀNCHEZ

Diputado de JxCat en prisión

"El Estatut que propone Pedro Sánchez es el pasado, no una solución"

PÁGINA 21

"En relación a la información publicada en portada el domingo 14 de diciembre de 2014 se rectifica la misma ya que

Roures no posee 250 millones en 150 cuentas, ni en paraísos fiscales"

PÁGINA 24

Pide un *las cosas por su nombre*
RUEDA
cuando quieras un Verdejo

Vinos con D.O. Rueda, espíritu joven.
www.donueda.com

Sigüenza R3 R2 R1 R0

Imagen 4. Detalle del titular publicado en la portada y desarrollo de la información en la edición web. Diario *El País* (14-12-2014)



Roures posee 250 millones en 150 cuentas, un tercio en paraísos fiscales

El fundador de Mediapro, que solicitó concurso en 2010, controla los derechos televisivos de la mayoría de los clubes de fútbol

Rosario G. Gómez

Madrid 13 DIC 2014 - 19:13 CET



Jaume Roures EFE

El fútbol español, uno de los más cotizados del mundo, afronta un cambio de modelo en la comercialización de los derechos audiovisuales que supondrá la homologación con el resto de las principales ligas europeas. El Gobierno prepara un real decreto que regulará la venta conjunta de los derechos de todos los clubes, poniendo así fin a la cesión individual a los

canales de televisión, una práctica habitual en los últimos años. El nuevo sistema se aplicará a partir de la temporada 2016-2017, según las previsiones avanzadas por el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal.

El contrato en vigor para la explotación del fútbol expira al final de la actual campaña, de modo que está en juego cómo se gestionará la temporada 2015-2016, que será de transición. Los operadores ya están tomando posiciones.

Jaume Roures tiene firmados contratos con la mayoría de los clubes, entre ellos el Real Madrid. Para sellar estas alianzas, el empresario ha impulsado en el último año la compañía Futmedia, fundada en noviembre de 2013, a la que están vinculados Taxto Benet y Gerard Romy, sus socios en Mediapro, la matriz del *holding*. La nueva marca figura con un capital social de 368 millones de euros y se integra en el entramado empresarial creado por Roures.

Futmedia es una del centenar largo de sociedades en las que el inversor catalán tiene una relación directa. Son empresas enfocadas principalmente a la gestión de derechos, producción de cine y de televisión, distribución de señales para operadores nacionales e internacionales, comercialización publicitaria y servicios técnicos. Mediapro posee el canal de pago GolT y es accionista de Imagina, la entidad que impulsó el nacimiento de La Sexta, televisión integrada hoy en Atresmedia, grupo liderado por Planeta.

En 2013, Mediapro obtuvo un resultado, antes de impuestos, de 7,1 millones de euros de beneficio, frente a los 83,2 millones de pérdidas del ejercicio anterior. Según el informe de gestión, la sociedad consiguió “volver a los números positivos tras las pérdidas que venía sufriendo en los últimos ejercicios que se debían principalmente a la entrada en el negocio de la explotación de los derechos audiovisuales del fútbol en España”. En 2010 había solicitado concurso de acreedores y en 2012 cerró la edición impresa del diario Público.

Las cifras de Mediapro contrastan notablemente con los estados financieros de las empresas en las que participa Roures. Son sociedades que operan en China, Canadá, Dinamarca, India, Luxemburgo, Rumania, Holanda, Singapur y Estados Unidos, entre otros países. Roures figura en casi 150 cuentas bancarias abiertas en distintas entidades financieras, en la mayoría de las cuales aparece como cotitular con empresas. A finales de octubre, el montante rondaba los 250 millones de euros.

Estas cuentas están registradas en una veintena de países, entre ellos Argentina, Polonia, Portugal, Reino Unido, Emiratos Árabes, República Dominicana, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Y también en paraísos fiscales y centros financieros *offshore* (territorios con una tributación privilegiada) como las Islas Caimán, Singapur, Suiza, Liechtenstein o Gibraltar, en los cuales acumula unos 75 millones, casi el 30% del total, según documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Un portavoz de Mediapro ha declinado aclarar los contratos firmados a través de Futmedia y ante las preguntas sobre las cuentas en paraísos fiscales se ha limitado a responder: “Sin comentarios”.

La manera en la que Mediapro se verá afectada por el cambio de modelo en el sistema de comercialización de la Liga es una incógnita, aunque en el sector nadie niega las buenas relaciones de Roures con el presidente de la LFP, Javier Tebas. Ante el escenario que se avecina, el Gobierno no ha detallado cómo lo abordará reglamentariamente. Lo que sí parece descartada es la posibilidad de adelantar un año la venta colectiva de los derechos.

Espoleada por la muerte de un hinchado del Deportivo en los aledaños del Vicente Calderón, la Liga está volcada en la búsqueda de medidas efectivas para atajar la violencia dentro y fuera de los estadios y ha dejado aparcada —al menos ante la opinión pública— cómo se comercializarán los derechos la próxima temporada. El Barcelona, uno de los dos grandes de la Liga, todavía no se ha decantado por ninguna cadena pese a las avanzadas conversaciones mantenidas con Telefónica. La operadora, propietaria de la plataforma Movistar TV, ha sellado recientemente un acuerdo con la Real Sociedad para cederle sus derechos el curso 2015-2016, prorrogable por dos más.

Grandes o pequeños, todos los clubes tienen en la televisión su principal fuente de financiación. La negociación conjunta —a la que en su día se resistieron Madrid y Barça, los pesos pesados de la Liga y entre los más ricos del mundo por ingresos— es vista como un mecanismo de redistribución más equitativo. A partir de la temporada 2016-2017 se establecerán nuevos criterios: un 50% será lineal, un 25% por resultados históricos y un 25% por implantación social. “Nuestro objetivo es que la diferencia entre el primero y el último sea de 1 a 3,5 en lugar de 1 a 6,5, como ocurre ahora”, afirma el presidente de la LFP.

La meta es alcanzar al menos 1.000 millones de euros por temporada. Para ello sería necesario incrementar (prácticamente duplicar) los ingresos por la venta de los derechos internacionales hasta los 400-450 millones, según cálculos del sector. La adjudicación de los derechos nacionales estaría sujeta a los principios de transparencia, no discriminación y libre concurrencia, como cualquier subasta o concurso público. Su vigencia se limitaría, previsiblemente, a tres años.

Además del negocio procedente de la explotación de los derechos, el fútbol genera a su alrededor una gran actividad económica, que abarca desde la producción de las señales de los partidos hasta la gestión de los patrocinios. En este capítulo, Mediapro se ha llevado la parte más jugosa del pastel. Produce todos los partidos de la Liga, ya sean los que emiten los operadores de pago o los que se difunden en abierto. Incluso pone las cámaras en los encuentros de Primera y Segunda que retransmiten los dos gigantes de la televisión privada, Mediaset y Atresmedia, respectivamente.

Más de 250 millones en 150 cuentas

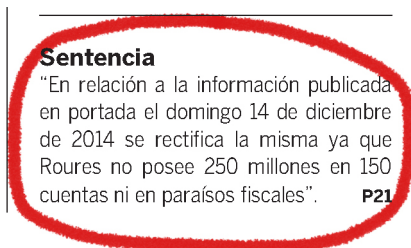
Nacido hace 20 años, el grupo Mediapro se ha convertido en una multinacional de la industria audiovisual que cuenta con sedes en España, Argentina, Estos Unidos, Portugal y Dubái. El socio fundador de la compañía, Jaume Roures, figura en casi 150 cuentas bancarias, ya sea como cotitular con empresas o como cotitular con personas. Estas cuentas, en las que aparecen depositados más de 250 millones de euros, están abiertas en entidades financieras de distintos países, entre ellos auténticos paraísos fiscales.

En estos Estados, caracterizados por tener una bajísima tributación, Roures aparece en casi una veintena de cuentas, que en conjunto suman alrededor de 75 millones de euros, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Eso significa que un 30% del dinero registrado en entidades financieras a las que está vinculado Roures y sus socios, duerme en paraísos fiscales y centros financieros *offshore*.

Por volumen económico, destaca Gibraltar, donde el saldo a mediados del pasado octubre era de 33,2 millones de euros. En San Marino constan 14,5 millones de euros y en Suiza se

contabilizan casi 14 millones de francos suizos (unos 11,5 millones de euros al cambio) a través de una decena de cuentas diferentes. Roures aparece igualmente en una cuenta de Liechtenstein en la que se contabilizan 9,5 millones de euros. Además, en las Islas Caimán mantiene otra con un saldo de cinco millones de dólares (cuatro millones de euros) y en Singapur existen también varias cuentas que suponen otros dos millones de euros.

Imagen 5. Detalle del titular publicado en la portada. Diario *El País* (28-12-2017)



————— **Sentencia de la sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona** —————

RECTIFICACIÓN SOBRE LAS REFERENCIAS AL SR. JAUME ROURES Y AL GRUPO MEDIAPRO EN LA INFORMACIÓN FACILITADA POR ESTE MEDIO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL TÍTULO “LOS DERECHOS DEL FÚTBOL SE ENFRENTAN A UN CAMBIO DECISIVO” Y EL SUBTÍTULO “ROURES PARTICIPA EN MÁS DE 20 CUENTAS EN PARAÍSO FISCAL QUE SUMAN 75 MILLONES DE EUROS PESE A QUE EN 2010 MEDIAPRO SOLICITÓ CONCURSO DE ACREEDORES”

Ante la información publicada por este diario de su edición del pasado 14 de diciembre de 2014, bajo el titular indicado, el Sr. Jaume Roures y Mediapro, ejerciendo el derecho de rectificación a dicha noticia, deben informar que:

No es cierto que Jaume Roures participe en más de 20 cuentas en paraísos fiscales.

No es cierto que las empresas del Grupo Mediapro operen en Canadá, Dinamarca, Luxemburgo, Rumania, Polonia, República Dominicana ni Nueva Zelanda tal y como aseguraba El País.

Que las cuentas en las que pueda aparecer el Sr. Roures en las sociedades donde si opera el Grupo Mediapro, lo es en su calidad de representante legal de dichas filiales.

No es cierto que el Sr. Jaume Roures y sociedades del Grupo Mediapro tengan cuentas bancarias en Polonia, República Dominicana, Nueva Zelanda o centros offshore (territorios con una tributación privilegiada) como las Islas Caimán, Suiza, Liechtenstein o Gibraltar.

RECTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE LLEVA POR TÍTULO “ROURES: MÁS DE 250 MILLONES EN 150 CUENTAS”

Ante la información publicada por este diario el pasado 14 de diciembre de 2014, bajo el titular indicado, el Sr. Jaume Roures y Mediapro, ejerciendo el derecho de rectificación a dicha noticia, deben informar que:

No es cierto que Jaume Roures tenga más de 250 millones en 150 cuentas.

No es cierto que Jaume Roures aparezca en una veintena de cuentas, que en conjunto suman alrededor de 75 millones de euros en Estados caracterizados por bajísima tributación.

No es cierto que un 30% del dinero al que se refería El País en sus informaciones duerma en paraísos fiscales y centros financieros offshore.

No es cierto que Jaume Roures ni ninguna de las sociedades de su grupo tenga cuentas en Gibraltar, por lo que

resulta imposible que a mediados del pasado mes de octubre tuviera en ese país un saldo de 33,2 millones de euros.

No es cierto que Jaume Roures ni ninguna de las sociedades de su grupo tenga cuentas en San Marino, por lo que resulta imposible que en ese país conste una cuenta o cuentas con un saldo de 14,5 millones de euros.

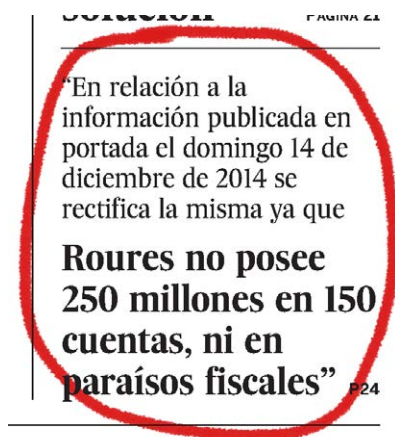
No es cierto que Jaume Roures ni ninguna de las sociedades de su grupo tenga cuentas en Suiza, por lo que resulta imposible que en ese país consten una decena de cuentas con un saldo de 14 millones de francos suizos (unos 11,5 millones de euros al cambio).

No es cierto que Jaume Roures ni ninguna de las sociedades de su grupo tenga una cuenta en Liechtenstein, por lo que resulta imposible que en ese país conste una cuenta en la que se contabilizan 9,5 millones de euros.

No es cierto que Jaume Roures ni ninguna de las sociedades de su grupo tenga una cuenta en las Islas Caimán, por lo que resulta imposible que en ese país conste una cuenta en la que consten cinco millones de dólares (cuatro millones de euros).

No es cierto que las cuentas corrientes que el Grupo Mediapro tiene abiertas en Singapur para operar en Asia, tengan un saldo de dos millones de euros.

Imagen 6. Detalle del titular publicado en la portada y desarrollo de la información en la edición web. Diario *El País* (22-07-2014)



“Roures no posee 250 millones en 150 cuentas, ni en paraísos fiscales”

En relación a la información publicada en portada el domingo 14 de diciembre de 2014 se rectifica la misma

22 JUL 2018 - 00:24 CEST

“RECTIFICACIÓN SOBRE LAS REFERENCIAS AL SR. JAUME ROURES Y AL GRUPO MEDIAPRO EN LA INFORMACIÓN FACILITADA POR ESTE MEDIO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL TÍTULO “LOS DERECHOS DEL FÚTBOL SE ENFRENTAN A UN CAMBIO DECISIVO” Y EL SUBTÍTULO “ROURES PARTICIPA EN MÁS DE 20 CUENTAS EN PARAÍDOS FISCALES QUE SUMAN 75 MILLONES DE EUROS PESE A QUE EN 2010 MEDIAPRO SOLICITÓ CONCURSO DE ACREEDORES.

Ante la información publicada por este diario de su edición del pasado 14 de diciembre de 2014, bajo el titular indicado, el Sr. Jaume Roures y Mediaproducción S.L.U. conocida como Mediapro, ejerciendo el derecho de rectificación a dicha noticia, deben informar que:

No es cierto que Jaume Roures participe en más de 20 cuentas en paraísos fiscales.

No es cierto que las empresas del Grupo Mediapro operen en Canadá, Dinamarca, Luxemburgo, Rumania, Polonia, República Dominicana ni Nueva Zelanda tal y como aseguraba El País.

Que las cuentas en las que pueda aparecer el Sr. Roures en las sociedades donde sí opera el Grupo Mediapro, lo es en su calidad de representante legal de dichas filiales.

No es cierto que el Sr. Jaume Roures y sociedades del Grupo Mediapro tengan cuentas bancarias en Polonia, República Dominicana, Nueva Zelanda o centros offshore (territorios con una tributación privilegiada) como las Islas Caimán, Suiza, Liechtenstein o Gibraltar.

RECTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE LLEVA POR TÍTULO ROURES: MÁS DE 250 MILLONES EN 150 CUENTAS”.

Ante la información publicada por este diario el pasado 14 de diciembre de 2014, bajo el titular indicado, el Sr. Jaume Roures y Mediaproducción S.L. conocida como Mediapro, ejerciendo el derecho de rectificación a dicha noticia, deben informar que:

No es cierto que Jaume Roures tenga más de 250 millones en 150 cuentas.

No es cierto que Jaume Roures aparezca en una veintena de cuentas, que en conjunto suman alrededor de 75 millones de euros en Estados caracterizados por bajísima tributación.

No es cierto que un 30% del dinero al que se refería EL PAÍS en sus informaciones duerma en paraísos fiscales y centros financieros offshore.

No es cierto que Jaume Roures ni ninguna de las sociedades de su grupo tenga cuentas en Gibraltar, por lo que resulta imposible que a mediados del pasado mes de octubre tuviera en ese país un saldo de 33,2 millones de Euros.

No es cierto que Jaume Roures ni ninguna de las sociedades de su grupo tenga cuentas en San Marino, por lo que resulta imposible que en ese país conste una cuenta o cuentas con un saldo de 14,5 millones de Euros.

No es cierto que Jaume Roures ni ninguna de las sociedades de su grupo tenga cuentas en Suiza, por lo que resulta imposible que en ese país consten una decena de cuentas con un saldo de 14 millones de Francos Suizos (unos 11,5 millones de Euros al cambio).

No es cierto que Jaume Roures ni ninguna de las sociedades de su grupo tenga una cuenta en Liechtenstein, por lo que resulta imposible que en ese país conste una cuenta en la que se contabilizan 9,5 millones de Euros.

No es cierto que Jaume Roures ni ninguna de las sociedades de su grupo tenga una cuenta en las Islas Caimán, por lo que resulta imposible que en ese país conste una cuenta en la que consten cinco millones de Dólares (cuatro millones de Euros),

No es cierto que las cuentas corrientes que el Grupo Mediapro tiene abiertas en Singapur para operar en Asia, tengan un saldo de dos millones de Euros”.

EJEMPLO 2. El diario *Abc* recoge un escrito de rectificación enviado por el partido político Podemos con un titular que no le correspondería y una ubicación estratégica que favorece la confusión e incumple con los parámetros éticos.

Abc quebranta, a nuestro juicio, varios requisitos exigibles a la hora de difundir un escrito de rectificación. Entre ellos, el no identificar claramente y desde el principio la rectificación, sin detallarlo en el titular, que simplemente adquiere forma de titular informativo. De otro lado, el diario incluye con tamaño prácticamente idéntico (y en la parte derecha, más visible) una información que se hace eco de las opiniones del expresidente del Gobierno José María Aznar y que vienen a desmentir las afirmaciones de Podemos o, más allá, sirven de algún modo a *Abc* para ratificarse en la información inicial, en la que acusaba a Podemos de recibir financiación del régimen venezolano (ver **Imagen 7**).

Esta manera de mezclar una rectificación con una información que se basa en opiniones de un tercero es un claro intento por minusvalorar y restar relevancia al escrito de la persona aludida en pos de la defensa a ultranza de la versión del diario. Si bien *Abc* evita incluir comentarios y apostillas en la rectificación de Podemos, parece servirse de una estrategia dudosamente ética para seguir acusando a la formación morada. Recordemos que el hecho de que el diario mantenga su versión de los hechos es posible y deseable si él mismo considera que su información es cierta y ha sido diligentemente obtenida. Sin embargo, lo que se le puede reprochar a *Abc* en este punto es una conducta amarillista al intentar mezclar y confundir información y opinión, empujando a los lectores a que se formen una opinión negativa sobre dicho partido político no en base a información contrastada, sino a partir de las declaraciones de un político al que ideológicamente el diario es afín.

La prensa sigue teniendo la sartén por el mango en lo relativo al derecho de rectificación. Un derecho que más bien pareciera que solo puede ejercerse si el diario en cuestión decide conceder dicha gracia al aludido. Ni siquiera por orden judicial (como en el caso de *El País*) se consigue que la rectificación sea eficaz, algo en lo que tiene mucho que ver el tiempo que pasa desde que se difunde la información controvertida hasta que se hace lo propio con la versión de los hechos del afectado. En numerosas ocasiones en las que el escrito de rectificación se publica sin necesidad de que lo exija el juez, el diario busca los recursos (o artimañas) que crea convenientes para minusvalorarlo y restarle relevancia entre el conjunto de la información.

Imagen 7. Escrito de rectificación y pieza informativa publicados en Abc (22-2-2015)

26 ESPAÑA

DOMINGO, 22 DE FEBRERO DE 2015 ABC
abc.es/españa

El socialismo europeo carga contra el populismo tras el fiasco de Grecia

► Valls y los líderes del PES apoyan en Madrid a Pedro Sánchez ante el peligro de Podemos

GABRIEL SANZ
MADRID

Los líderes socialdemócratas de la UE aprovecharon la cumbre que el Partido Socialista Europeo (PSE) celebró ayer en Madrid para arropar a Pedro Sánchez. «Estamos aquí para ayudarle», dijo el primer ministro francés, Manuel Valls. Sobrevoló en todo momento el acuerdo Grecia-Eurogrupo, logrado in extremis horas antes, que supone la prórroga del rescate financiero al país heleno a cambio de que su primer ministro, Alexis Tsipras, dé marcha atrás en buena parte del programa electoral de Syriza.

El fiasco sirvió al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y a Manuel Valls para avisar a Pablo Iglesias de que no prometa «lo que no podrá cumplir». Además de tener identificado un «chivo expiatorio» de los problemas, dijo Schulz, hacen falta «soluciones» y no decir que cambiarán todo al día siguiente de ganar Podemos porque no es «realista».

En su declaración final, los 40 asistentes, incluidos el primer ministro sueco, Stefan Löfven; el vicecanciller alemán, Sigmar Gabriel y cuatro comisarios europeos —no acudió el primer ministro italiano, Matteo Renzi— se comprometieron con unos «salarios mínimos decentes». El PSE sentencia que «la austeridad no ha funcionado» y carga muy duramente contra los salarios «indecentes» de los banqueros.

Aunque en la copia escrita del discurso de Pedro Sánchez que se proporcionó a los periodistas venía la fra-



Pedro Sánchez y Felipe González, ayer en la cumbre socialista

Mensaje
Felipe González abronca a la Unión Europea delante de los líderes socialistas: «¡No perdamos el norte!»

se «tenemos que deshacernos de la troika», el secretario general del PSOE finalmente no la pronunció ante sus colegas europeos. Sánchez dijo que la solución a la crisis griega no vendrá «ni de amenazas unilaterales ni de impulsos nacionalistas», en una crítica

implícita tanto a Syriza como a la postura mantenida por el Gobierno español en la negociación. De hecho, aunque el líder socialista cree que «Grecia tiene que ayudarse a sí misma», cargó muy duramente contra Mariano Rajoy por el austericidio y porque su política está llevando a España «una desigualdad sin precedentes».

«Unidad frente al terror»

El PSE firmó otro documento, «Unidos frente al terror», en el que rechazan «firmemente cualquier forma de antisemitismo, de odio racial, de xe-

Gabilondo ya es el candidato del PSM

La Comisión Federal de Listas proclamó ayer oficialmente a Ángel Gabilondo candidato del PSM a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en sustitución de Tomás Gómez. Gabilondo ha logrado el apoyo de 132 de las 138 asambleas locales, el 94,6%. No obstante, la participación en número de militantes ha sido muy baja, no más allá del 20 por ciento del censo (15.000), según denuncian los afines a Tomás Gómez. Quedan pendientes de resolución los recursos presentados por ese sector y afrontar el «día después». En la Dirección federal preocupa que las heridas de la defenestración de Gómez no cicatricen y afecten en negativo a la campaña del PSM.

nofobia, de islamofobia y de toda forma de intolerancia» y los líderes del PSE felicitaron a Sánchez por el acuerdo PP-PSOE contra el yihadismo, que aspiran a implementar en sus países.

En su intervención inicial, abierta a los medios, Felipe González fue muy crítico con la Unión Europea. En su vehemente intervención dijo «¡No perdamos el norte!» ni en Ucrania, país que el presidente ruso, Vladimir Putin, quiere convertir en «inviable», ni en la crisis griega ni en la lucha contra el islamismo. González, quien cree que «no puede volver a pasar lo de Libia», opina que los occidentales no pueden liderar el antiyihadismo.

ABC
K MOSKOW-MAS

Videoanálisis de la cumbre de los socialistas europeos en Madrid

Podemos niega haber recibido fondos del régimen venezolano

ABC MADRID

Al amparo de la Ley Orgánica 2/1984 del derecho de rectificación la responsable de la Secretaría de Análisis Político y Social en nombre de Podemos ha solicitado sobre las noticias publicadas por ABC el 16 de febrero de 2015 que se publique su versión:

«Ni el "Chavismo" ni el gobierno de Venezuela ni ninguna otra organización vinculada al actual gobierno de Nicolás Maduro ha financiado el partido político Podemos, su personal o sus gastos. Podemos se ha financiado y se sigue financiando con las donaciones de cientos de personas que en

ningún caso, pueden ser superiores a 10.000 euros. Todas las cuentas de Podemos son públicas y pueden consultarse en la página web podemos.info. La mayoría de las donaciones que ha recibido Podemos desde su constitución en marzo de 2014 rondan los 20€. Es falso que D. Luis Alegre o D. Carolina Bescansa hayan residido en los apartamentos de lujo denominados "Residencial Country Club" situados en el Country Club de Caracas...

La Fundación CEPS no mantiene ni ha mantenido ninguna relación orgánica, económica o política con el partido político Podemos».

Aznar: «Podemos ha sido financiado por el chavismo»

ABC MADRID

«Podemos es un movimiento político que defiende modelos totalmente totalitarios y postulados populistas y que ha sido financiado, al igual que sus dirigentes, por el régimen de chavismo». Así se pronuncia el expresidente del Gobierno José María Aznar en una entrevista al Diario de las Américas, en la que también analiza la situación en Venezuela y las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. «Evidentemente, Europa y España no necesitan movimientos populistas, de un rancio marxismo, de una rancia extrema izquierda y eso es lo que real-

mente representa Podemos. Creo que además de eso, por sus conexiones con el régimen de Chávez, sus dirigentes distan mucho de cumplir los parámetros democráticos exigibles de las democracias a las cuales pertenecemos», subraya Aznar.

El expresidente también subraya que «los españoles tienen que decidir muy bien por dónde creen que deben encaminar el futuro del país. Yo sinceramente espero y creo que los españoles apostarán por un futuro de estabilidad y lejos de los riesgos que significan el comunismo y el populismo».

press reader Printed and distributed by PressReader
+1 604 270 4004
COPYRIGHT AND PUBLISHED BY APPLICABLE LAW

EJEMPLO 3. Los diarios *El Mundo* y *El País* otorgan más relevancia de la habitual a aquellas rectificaciones enviadas por personalidades políticas.

Los siguientes ejemplos sirven para demostrar cómo en los casos en los que los periódicos reciben escritos de rectificación de importantes figuras (sobre todo, del ámbito de la política) les ofrecen un tratamiento distinto. En definitiva, dotan de mayor relevancia de lo que suele ser habitual a las rectificaciones, que no se publican en *Cartas al Director* sino en la sección en la que se publicó la información controvertida (sección Nacional en el ejemplo del diario *El Mundo*, ver **Imagen 8**; y sección Internacional en el caso de *El País*, ver **Imagen 9**), con una extensión bastante importante y subrayando en el propio titular que se trata de una rectificación (no utilizan el término más común entre ellos de ‘aclaración’ o ‘puntualización’); además de identificar claramente al firmante.

Esta forma de actuar, tan distinta a si se tratara de una rectificación procedente de un ciudadano común, lleva a pensar de nuevo en el **deseo de los medios —o casi necesidad— de estar a buenos términos con los poderosos**. También sugiere que estos poderosos cuentan con más posibilidades de alzar su voz en los medios de comunicación, por lo que la posible vulneración de su derecho sería mucho más notoria y podría tener consecuencias ciertamente negativas para el periódico en cuestión.

Imagen 8. Escrito de rectificación publicado en el diario *El Mundo* (20-5-1994)

10/EL MUNDO
ESPAÑA

VIERNES 20 DE MAYO DE 1994

LA CRISIS POLITICA

Carta de rectificación del vicepresidente

NARCÍS SERRA | SERRA

EL MUNDO publica hoy, íntegra y sin apostillas, la carta remitida el miércoles por la tarde por el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. Esta es la segunda carta del vicepresidente sobre este tema que se publica en este periódico. En este caso, EL MUNDO lo hace por deferencia al vicepresidente del Gobierno.

Sr. Director:
En la edición de Madrid del diario EL MUNDO de su dirección, correspondiente al miércoles 11 del presente mes de mayo, se publica en las páginas 1, 6 y 7 una información contraria a la verdad.

Así, en titulares se dice que «Serra encargó a Roldán investigar a Conde y pagó 100 millones con fondos reservados» (páginas 1 y 6), «el vicepresidente le encomendaba "trabajos sucios" a espaldas de Corcuera» (pág. 1) y «los trabajos "sucios" de Serra» (pág. 6). Y ya dentro de la información se imputa directamente a mi persona, como vicepresidente del Gobierno, el haber encargado a Luis Roldán en enero de 1992 que elaborara un dossier sobre todas las actividades financieras de Mario Conde tanto dentro como fuera de España y que esa investigación habría de realizarse sin exar mano de los servicios de

información españoles, tanto de la Policía como del CESID (pág. 1). Asimismo se dice que la Vicepresidencia recomendó a Roldán que el trabajo se hiciera bajo la más absoluta reserva y que incluso dio instrucciones para que no informara al ministro del Interior, José Luis Corcuera, ni al secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, ambos jefes del director general de la Guardia Civil (pág. 6). Se resena igualmente que la financiación de la investigación ascendió a unos 100 millones de pesetas y corrió a cargo de los fondos reservados del Estado y que el dinero para hacer frente a los pagos fue proporcionado a Roldán directamente desde la Vicepresidencia del Gobierno, desde donde salían los maletines con dinero en metálico con destino a la sede de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno de Madrid (pág. 6). Del mismo modo se dice que en un momento dado, en enero de 1993, el dossier sobre Mario Conde y todas sus actividades financieras y económicas sufrió un parón y que los motivos esgrimidos por el vicepresidente del Gobierno para no seguir con la investigación, según manifestaciones del propio Roldán al periódico, eran que Conde había aplazado su decisión de entrar en política y ya no era necesario tener ese

arma para presionarle (pág. 7). Se concluye afirmando que el fin último, siguiendo instrucciones de la Vicepresidencia, era demostrar la participación de Mario Conde en el tráfico internacional de armas, a través de Sudáfrica y Chile, y localizar sus activos no declarados, sobre todo sus cuentas corrientes opacas en Suiza y Liechtenstein (pág. 7).

Ante los hechos anteriores, por medio de la presente vengo en rectificar expresa y formalmente las precipitadas informaciones en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo y, por lo tanto, la presente rectificación deberá ser publicada íntegramente, dentro de los tres días siguientes a su recepción, con relevancia semejante a aquella en que se publicó la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas, conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica citada.

En efecto, es del todo incierto y rigurosamente falso que en mi condición de vicepresidente del Gobierno encomendase ninguna clase de actividad al señor Roldán para investigar a Mario Conde ni, menos aún, pagar con fondos reservados dicha supuesta y falsa actuación.

Es absolutamente contrario a la verdad que haya encargado ni a Luis Roldán ni a ninguna otra persona que elabore un dossier

sobre las actividades financieras de Mario Conde; por consiguiente, cavi por su propio peso las falaces aseveraciones de su periódico en el sentido de haber recomendado que la actividad se hiciera sin informar al entonces ministro del Interior o al entonces secretario de Estado para la Seguridad. Del mismo modo, no se ajusta tampoco a la verdad la información del origen de la financiación de la supuesta investigación, pues ni se encargó tal información ni, por ello mismo, se financió ni pudo financiarse como se indica en la información.

De la misma manera, resulta igualmente falso que dicha supuesta actividad investigadora se parase en un determinado momento, dado que nunca se inició. Y, en fin, en ningún caso se ajusta a la verdad la finalidad que se imputa para llevar a cabo tan hipócrita información como la de demostrar eventualmente la participación de don Mario Conde en el tráfico internacional de armas a través de Sudáfrica y Chile y localizar sus activos no declarados, actividades todas ellas a las que soy completamente ajeno.

Le ruego, por consiguiente, que proceda a la publicación de la presente en los términos antes indicados de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.

Via libre al decreto para investigar las cuentas de altos cargos

● Convalidada la norma que regula la obligación de remitir los datos bancarios a las comisiones de investigación

MADRID.— El pleno del Congreso convalidó ayer por unanimidad el Real Decreto-Ley que regula la obligación de remitir a las comisiones de investigación parlamentaria los datos que éstas soliciten en relación con las declaraciones de la renta y patrimonio y las cuentas bancarias de altos cargos.

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, quien defendió la norma ante el pleno, consideró que el Gobierno había reaccionado con rapidez ante una carencia puesta de manifiesto durante los trabajos de la comisión del Congreso que investiga la gestión del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán.

Hasta que el Consejo de Ministros no aprobó el Real Decreto-Ley, el Gobierno no pudo atender las peticiones de los grupos parlamentarios relacionadas con las declaraciones de la renta y patrimonio de Roldán.

El ministro rechazó las acusaciones de obstruccionismo que desde el Grupo Popular y el de Izquierda Unida se realizaron al Ejecutivo por el retraso en el envío de esos datos, y subrayó que, hasta que la nueva norma fue aprobada, la remisión de esa documentación podía haber quebrado el principio de legalidad.

«Le correspondía al Gobierno mantener la serenidad ante un problema nuevo con implicaciones no sospechadas sobre los derechos de la persona», añadió Belloch, quien hizo hincapié en que «ninguna urgencia coyuntural permite soslayar el respeto a los derechos de las personas y la lucha política no puede justificar la quiebra de los principios de un Estado de derecho».

El PP se opone a crear comisiones investigadoras en Castilla y León

BUENSALEDA.— El Grupo Popular presentó ayer sendos escritos en los que manifiesta su negativa a que se creen en las Cortes de Castilla y León dos comisiones investigadoras, pedidas por la oposición, acerca de la empresa Crystaloid y de la política de personal del Gobierno regional.

El portavoz del Grupo Popular, Javier León de la Riva, señaló a Elc que la oposición a que se creen estas comisiones está argumentada en que no son necesarias porque los grupos de las Cortes tienen toda la documentación e información necesaria, y tendrán toda la que piden.

León de la Riva se mostró convencido además de que la oposición parlamentaria «va a seguir pidiendo comisiones de investigación» en las Cortes.

Acerea de la investigación sobre la gestión de la empresa pública Crystaloid, solicitada por los grupos del PSOE, CDS y Miro, León de la Riva señaló que ya ha habido multitud de comparecencias en las Cortes sobre este tema, y que la empresa está auditada.

El vicepresidente tiene una profunda creencia en la libertad de prensa, según el Ejecutivo

El Gobierno da por zanjado el conflicto con EL MUNDO con la publicación de esta nota

Narcís Serra no es partidario de perseguir penalmente a los periodistas

ANA ROMERO

MADRID.— El Gobierno se da por satisfecho con la publicación de la carta del vicepresidente Narcís Serra, y da por zanjado el conflicto surgido con EL MUNDO por una información que él considera falsa, según dijeron anoche fuentes del Ejecutivo.

En este caso, el Gobierno ha utilizado la forma más «suave» de protestar contra la información publicada por este periódico porque sostiene que «los temas de injurias no deben resolverse nunca por vía penal», añadieron las fuentes.

CAMINO AMISTOSO.— Además, como ya adelantó el día de la publicación de la información, el Ejecutivo estima que no se puede quereclar contra EL MUNDO porque en el artículo, y aun siendo falso, en ningún momento se le imputan hechos delictivos a Serra.

Una vez leído el artículo de EL MUNDO en el que se informaba de la supuesta relación entre Serra y el ex director gene-

ral de la Guardia Civil, Luis Roldán, Serra podía haber elegido entre tres fórmulas para defenderse del daño personal que le puede haber producido la publicación de una información periodística que él considera «absoluta y totalmente falsa».

La primera manera, la de menor efecto, es la que su equipo asesor ha elegido en base al convencimiento del vicepresidente Serra «de lo que es la libertad de prensa».

«Ha sido el ministro del Gobierno que ha planteado que los límites al derecho a la información los regula la profesión», declararon las fuentes. «No se trata de ir persiguiendo penalmente a nadie».

Esta primera forma, que carece de componente legal, consiste en solicitar la publicación de la carta de rectificación que se reproduce en esta página.

Recogida en el artículo 4 de la Ley Reguladora del Derecho de Rectificación, LO 2/1984, esta vía da un plazo de tres días para reproducir la carta, pasados los cuales el vicepresidente si podría acudir a un juez para que éste

obligase a EL MUNDO a publicar la citada carta.

La segunda forma, que se inscribe dentro de la vía civil, está regulada por la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.

CALUMNIAS E INJURIAS.— En este caso, Serra se habría dirigido al juez para que éste restituyera su derecho al honor con una indemnización monetaria.

Por último, el vicepresidente pudo haberse decantado por la vía penal, aunque las fuentes gubernamentales insisten que este prefirió utilizar «el camino más normal, más amistoso».

Esta tercera fórmula incluye una doble vía: o bien la querrela por calumnias, descartada porque al vicepresidente no se le imputa haber cometido un delito, o bien la querrela por injurias, descartada tras la publicación de la carta de ayer.

En respuesta a las declaraciones del director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, y según el cual la tibia reacción del vicepresiden-

te Serra no ha sido más que «una cortina de humo para distraer a la opinión pública», las fuentes gubernamentales consultadas afirman que «para defender o no la falsedad de una información el argumento no puede ser una querrela».

«Desde alguna perspectiva, qué más podría esperar alguna gente que nos metiésemos todos en una historia de una demanda judicial penal que no se resuelve ni en 15 ni en 20 días, sino en meses o años», concluyeron las fuentes del Ejecutivo. «No tiene sentido».

En cuanto a la calificación de «profundo ignorante» que le dirige este periódico en su editorial, las fuentes del Gobierno explicaron que Serra se equivocó, y que quiso decir «acción de rectificación» en lugar de «demanda».

Según las mismas fuentes, el Gobierno ha actuado de manera tan templada siguiendo los consejos que se derivan del informe elaborado por el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, a petición del propio vicepresidente Serra.

Imagen 9. Escrito de rectificación publicado en el diario *El País* (26-5-2001)

EL PAÍS

Sección: INTERNACIONAL IN (Internacional)

8

26/05/2001

Rectificación de Berlusconi

Los abogados de Silvio Berlusconi, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, puntualizan las siguientes informaciones:

'El diario EL PAÍS, en un artículo aparecido el 20 de mayo de 2001 con el título 'Los testimonios que relacionan a Silvio Berlusconi con la Mafia. Berlusconi: sus relaciones con la Mafia', ha vuelto sobre el tema de las presuntas relaciones de mi defendido, Silvio Berlusconi, con la Mafia, basándose sobre algunas investigaciones desarrolladas por la Fiscalía de Palermo y, en especial, sobre las declaraciones testificales de algunos arrepentidos. La publicación de tal artículo hace evidente el mantenimiento de una campaña mediática (ejecutada utilizando como instrumento la desinformación) tendente a deslegitimar, en el ámbito europeo, la figura de Berlusconi que hoy representa al primer partido político de Italia y que ha conducido a la coalición por él presidida a una abrumadora victoria electoral'.

'Es oportuno subrayar que la grave falta de cualquier fundamento de cuanto se ha ofrecido a los lectores, resulta de la omisión de una circunstancia fundamental y absolutoria: el archivo, solicitado por el fiscal de Palermo y acordada por el juez, de las investigaciones preliminares de febrero de 1997, relativas a la hipótesis de colaboración para la asociación mafiosa, así como el archivo, el 1 de diciembre de 1999, de las diligencias relativas a la hipótesis de blanqueo de dinero, resoluciones judiciales que eliminan de raíz cualquier insinuación o especulación contra Berlusconi'.

'En efecto, la Fiscalía de Palermo primero, y el juez de Instrucción del mismo Tribunal después, no podían sino disponer el archivo de tales actuaciones teniendo en cuenta que las únicas fuentes de acusación estaban constituidas por las declaraciones de arrepentidos, de cuyo contenido, no obstante las profundas investigaciones realizadas, no se ha encontrado el más mínimo indicio. Por el contrario estas declaraciones han sido ampliamente contradichas por otros arrepentidos. Contra los principales acusadores se ha presentado una denuncia por calumnia ante la Fiscalía de Caltanissetta que ha puesto en marcha las investigaciones correspondientes'.

'Con el artículo del 20 de mayo de 2001 el diario ofrece a los lectores un cuadro absolutamente distorsionado de las relaciones con Vittorio Mangano, que ha desarrollado funciones de empleado en la finca de Arcore por un breve periodo en los años 70, cuando no resultaba a su cargo ni investigación de ninguna clase ni condena alguna por vinculación con la Mafia. También en este caso el periodista, a pesar de que declara haber consultado los autos del proceso, omite cualquier referencia a la sentencia de 24 de mayo de 1990, con la cual el juez instructor del Tribunal de Milán ha excluido cualquier relación de naturaleza mafiosa entre Marcello dell'Utri y Mangano. En tal sentencia se afirma expresamente que 'ningún elemento, ni aún a nivel de mero indicio, ha resultado contra Marcello dell'Utri que pueda servir ni lejanamente de apoyo a una acusación tan grave como la de asociación para delinquir de carácter mafioso o no mafioso'.

'De tal realidad ha dado cuenta EL PAÍS en su artículo del día 21 de mayo con el título 'El Fiscal de Palermo dice que la Mafia es un poder 'invisible' del Estado'. En él se da cuenta de las declaraciones del Fiscal de Palermo, señor Grasso que ha afirmado que 'no se han encontrado pruebas que sostengan la hipótesis inicial: por eso se ha archivado la investigación'.

5.5. El difícil acceso del ciudadano a los medios

Como adelantábamos al principio, el presente trabajo parte de la dualidad de la rectificación, como instrumento jurídico y también como mecanismo entroncado con la ética periodística. Faceta que, en el propio seno del proceso de rectificación, se vuelve triple, con tres protagonistas indiscutibles: el medio de comunicación, la persona aludida y el público que consume la información.

En el derecho de rectificación, por tanto, no existen únicamente dos actores (el medio que publica una información y la persona física o jurídica que es aludida por la misma y la considera errónea o inexacta), sino que hay que tener en cuenta un tercer factor determinante: la audiencia a la que llega la información.

Partiendo de que el derecho fundamental de la información está reconocido constitucionalmente no solo en su vertiente activa (informar) sino también en la pasiva (ser informado) y, sobre todo, de que el deber de informar es una simple concesión de la ciudadanía a los medios de comunicación, que deben entender su resultado, el producto informativo, como un bien común, es imprescindible tener en cuenta la participación del público en el proceso comunicativo.

En la actualidad, el público sigue siendo visto en la mayoría de los casos como un ente abstracto, cuya participación en el marco comunicativo se restringe a la de la compra del periódico o el consumo de radio, televisión o internet. En definitiva, su participación se produce siempre desde afuera y es muy limitada: la realidad de los medios de comunicación de masas es la realidad de la observación de segundo orden. Los medios sustituyen las tareas del conocimiento que en otros momentos de la historia estaban reservadas a actores privilegiados, como los sabios, los sacerdotes, los nobles o el Estado (Luhmann, 2000: 123 y 124). De ese modo, el público solo accede a la realidad del mundo mediante una observación de segundo orden, cediendo la observación directa a los medios de comunicación.

No obstante, “si bien el público está hoy fuera del *proceso de funcionamiento de los medios*, no está ni se le puede considerar fuera del *proceso de la comunicación social*. El interés del público por ejercer un papel más activo en la relación con los medios no debe ser visto desde ellos como una injerencia externa sino, muy al contrario, como el intento legítimo de recuperar la posición que le corresponde. Lo que se sigue entonces es la necesidad de establecer mecanismos que hagan posible y habitual esa participación” (Aznar, 2005: 215-216).

Como bien señala Herrera, la actuación de la sociedad civil en los últimos años, pone en evidencia que son necesarias fórmulas de participación del público en los medios de comunicación, ya sea para amplificar sus reivindicaciones o para denunciar las malas prácticas periodísticas (Herrera, 2003).

Esa búsqueda de nuevos cauces de acceso por parte del público constituye un deber ético más de los medios de comunicación. Más allá de las opiniones que los lectores de un periódico remiten a la sección de *Cartas al Director* o la posibilidad de expresar su punto de vista en encuestas y sondeos, deberían abrirse otras puertas a la participación del público, como su representación en los órganos de control y de gestión de las emisoras públicas (participación indirecta) o el llamado derecho de antena, que se traduce en una participación directa mediante su intervención en ciertos espacios de la programación (Herrera, 2003).

Como garantes de estas nuevas formas de participación, podemos señalar la propia autorregulación de los medios, a la que se suman los Consejos de Prensa, la figura del *ombudsman* o las distintas organizaciones cívicas.

6. Conclusiones

El objeto de estudio del presente trabajo es comprobar si existe una satisfacción real del derecho de rectificación en la prensa diaria española, tal y como éste está configurado y es aplicado en la actualidad.

Junto con éste, otro de los propósitos generales que se planteaban al inicio de la investigación, era evaluar si los códigos de autorregulación contribuyen al conocimiento general de esta figura jurídica entre los periodistas.

Entre los objetivos específicos, se encontraban detectar la presencia (abundante o escasa) de las rectificaciones en los diarios seleccionados durante el periodo de análisis, además de observar la importancia que los manuales de autorregulación le conceden; detectar si los profesionales de la información conocen las verdaderas implicaciones del derecho y cómo debe ser su práctica efectiva; analizar hasta qué punto algunas de las características que le son inherentes a la profesión (premura, falta de contraste de fuentes, intereses políticos y económicos, etc.) merman la satisfacción de este derecho y demostrar, mediante algunos ejemplos y con carácter general, el difícil acceso del ciudadano a los medios para ejercer la rectificación.

Con todo, señalamos a continuación, las que consideramos son las principales conclusiones de esta tesis doctoral. Conclusiones que se identifican, en su mayor parte, con las hipótesis de trabajo ya detalladas al principio del trabajo:

A. El derecho de rectificación es una figura residual y no encuentra satisfacción real en la prensa diaria española

En primer lugar, se puede afirmar que el número de escritos de rectificación publicados es relativamente bajo en comparación con el número de noticias publicadas por estos diarios en el periodo seleccionado (1984-2017), con una media de 362 rectificaciones por periódico en más de tres décadas.

A ello se une que, en la mayoría de las ocasiones, las rectificaciones se publican en la sección de *Cartas al Director*, un cajón de sastre dentro del periódico que es concebido para que los lectores puedan ejercer su libertad de expresión pero que, como venimos señalando a lo largo del presente trabajo, no constituye el lugar idóneo para difundir esos escritos de rectificación. Esta sección no debería ser el sitio prioritario para publicar las rectificaciones por varios motivos: el ejercicio del derecho de rectificación permite al aludido corregir la versión de los hechos – y no las opiniones- que ha difundido el periódico en una información; y normalmente esa información se ha publicado en una sección del diario distinta a la de *Cartas al*

Director, por lo que, siguiendo el requisito legal de relevancia semejante, el periódico debería publicar la rectificación del afectado en la misma sección y con extensión y caracteres ortotipográficos semejantes en tamaño e importancia. Muchos directores de periódico justifican la inclusión de los escritos de rectificación como *Cartas al Director*, asegurando que es una de las secciones más populares y leídas entre los lectores. Un argumento pobre e injustificado que, sin embargo, parece servirles en su propósito de relegar las rectificaciones a un segundo plano y separarlas del resto de la información del diario.

En cuanto a la extensión de los escritos de rectificación, el análisis de los diarios seleccionados demuestra que suele ser breve, siendo la extensión más repetida no superior a 4 medias columnas.

Además, 9 de cada 10 escritos de rectificación no mencionan en absoluto la LO 2/1984 que regula este derecho, lo que puede explicarse por un cierto desconocimiento de esta figura entre el público general y a lo que tampoco ayuda el hecho de que los propios periódicos utilicen preferentemente el término ‘aclaración’ o ‘puntualización’ al de ‘rectificación’ para titular estos escritos y, con ello, minimizar el posible impacto negativo en su orgullo —que no en su reputación—. Algo que también es reprochable desde un punto de vista ético, puesto que recordemos que la legislación habla claramente de un derecho de ‘rectificación’ y no de ‘aclaración’ o ‘puntualización’. En cuanto a los aludidos, el término ‘rectificación’ es el segundo más empleado detrás del de la simple corrección o negación de datos o afirmaciones. Hasta cierto punto, entendemos de nuevo que el lector demuestra la asunción implícita de la desigualdad de fuerzas que existe entre medios y público, y busca la manera de que el periódico publique su versión de los hechos gracias a una actitud menos hostil por su parte. En cualquier caso, el concepto ‘rectificación’ sí está más extendido entre los aludidos por la información que entre los responsables de los diarios.

Los resultados de las encuestas realizadas a profesionales (responsables de periódicos, *ombudsmen*, representantes de asociaciones de prensa y a organizaciones de consumidores y usuarios) confirman algunas de las afirmaciones anteriores. Entra ellas, la idea de que el derecho de rectificación no es suficientemente conocido ni popular entre el público, que la sección de *Cartas al Director* no es el lugar deseable para publicar las rectificaciones, que la prensa no actúa con la diligencia necesaria a la hora de difundirlas y, en definitiva, que este derecho no goza ni de la visibilidad ni de la efectividad necesarias.

B. Los directores de periódicos se muestran reticentes a la rectificación, aunque intentan disimularlo

Dentro de los grupos a los que se dirigen los cuestionarios de opinión, el que se desmarca claramente de la línea general es el de los responsables de los

periódicos. Al contrario que el resto de encuestados, éstos consideran que los lectores sí conocen las implicaciones del derecho de rectificación; a lo que se une que, en su opinión, el derecho goza de la adecuada visibilidad y efectividad y que la prensa no es reticente a la hora de publicar los escritos de rectificación. Se trata de una realidad muy distinta a la que venimos comprobando, si bien hay que señalar que la mayoría de altos cargos en prensa sí conciben como necesaria la regulación jurídica de esta figura y, en general, la autorregulación del sector.

Los directivos de los diarios se muestran poco convencidos de las bondades de la figura del Defensor *del Lector* y, por tanto, de la necesidad de implantar esta figura (aún muy escasa) en las redacciones. Entre los argumentos que aducen se encuentran los económicos —los diarios no pueden permitírselo— y también los relativos a la duplicidad de funciones: la labor del *ombudsman* puede —y debe— ser asumida por el director del periódico e, incluso, puede suplirse con el adecuado asesoramiento jurídico.

Para la prensa, la precaria situación del derecho de rectificación no representa un problema que deba solventarse, por lo que en ningún caso se identifica ni como parte responsable ni como parte de la solución.

De algún modo, se escudan en el recurso a la autorregulación profesional —necesaria— y que, a su juicio, recoge adecuadamente el derecho de rectificación para eximir cualquier atisbo de culpa o responsabilidad en este sentido.

C. La configuración actual del derecho es anticuada y debe superar ciertas limitaciones

El derecho de rectificación que recoge la LO 2/1984 y su interpretación jurisprudencial no mantienen una línea coherente entre sí. A saber, la regulación del derecho en la LODR enmarca esta figura con relación al derecho a la información (en su vertiente activa y pasiva del art. 20.1d) CE y la protección de los derechos de personalidad recogidos en el art. 18 CE.

En efecto, entendemos que el derecho de rectificación es un mecanismo necesario para la rápida reparación de un eventual perjuicio en la fama o buen nombre de la persona física o jurídica afectada por una información, pero también cuenta con una función instrumental nada desdeñable: el derecho de toda la ciudadanía a recibir información veraz.

Es en este punto precisamente donde, a nuestro juicio, la definición e interpretación del derecho toman caminos separados, ya que la jurisprudencia constitucional reduce el derecho de rectificación a un simple derecho de acceso por alusiones, donde no es importante —ni se debe entrar a juzgar— la veracidad de la información y la rectificación, sino que se entiende suficiente la simple oferta de versiones distintas y contrapuestas de una misma realidad, independientemente de si éstas son o no ciertas.

Una de las causas de la interpretación errónea del Tribunal Constitucional respecto del derecho de rectificación puede encontrarse en la propia indefinición del derecho recogido en la LODR, que abre la puerta a múltiples concepciones del derecho de rectificación en función del tiempo histórico y del caso que se analice.

A nuestro juicio, siendo la rectificación ampliamente entendida como el mecanismo más eficaz para resarcir el posible daño por parte de un medio de comunicación (por su rapidez y porque existe la posibilidad de difundirlo a través del mismo medio por el que se originó el daño) y con el objetivo satisfacer la necesidad de formar debidamente a la opinión pública, es preciso que se introduzcan mecanismos judiciales que garanticen la veracidad de lo que se publica (sea información, sea rectificación) una vez que nos situamos en la acción civil de rectificación, sin que la sumariedad del proceso pueda servir de excusa para evitarlos.

Como antes hemos señalado, la limitación que introduce la ley a rectificar solamente hechos y no opiniones es, a nuestro entender, demasiado estricta y deja sin protección al afectado en aquellas ocasiones —múltiples— en las que es difícil distinguir entre pura información y elementos valorativos u opinativos del periodista. La rapidez de la protección del honor que se pretende con este derecho no puede utilizarse como un argumento que justifique su papel secundario respecto de otras acciones penales y civiles de protección de los derechos de personalidad. El perjuicio al honor, como también lo entiende la jurisprudencia, se produce no solo por informaciones no veraces, sino también por expresiones que producen un daño moral. Por lo tanto, el perjuicio se deriva no sólo del relato de los hechos en una noticia, sino también de valoraciones que aparecen conectadas con ese relato.

En este sentido y dentro del contexto europeo, destaca el derecho de respuesta portugués (*direito de resposta*), con el que no coincidimos en todos los aspectos, pero que sí cuenta con elementos positivos, como contemplar la rectificación tanto de hechos como de opiniones y juicios de valor, y que recoge expresamente el derecho como fundamental dentro del ordenamiento. Esto último tampoco sucede en el caso español, ya que, aunque el derecho de rectificación es regulado por ley orgánica como el resto de los derechos fundamentales, existen otros elementos que lo alejan de esta consideración constitucional, principalmente que no puede invocarse su lesión en recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

En lo referente al derecho de rectificación en Internet, otra de las grandes carencias de la actual regulación en la LODR, hay que señalar que el actual Proyecto de Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales que se encuentra pendiente de aprobar en el Congreso y el Senado amplía en su art. 85 la protección del derecho de rectificación al ámbito de Internet.

D. Los códigos de autorregulación recogen la rectificación como un deber del

periodista, pero no aportan pautas que ayuden a su efectividad

La autorregulación está llamada a jugar un papel determinante en el presente siglo, a dar solución a los múltiples males que aquejan a los medios de comunicación y que socavan los pilares deontológicos que deben regir su relación con el público.

Tanto a nivel supranacional como nacional, pasando por los códigos de conducta y libros de estilo de cada medio de comunicación, se pone de manifiesto la necesidad de que el periodista sea honesto, reconozca sus errores, permita al afectado su rectificación y, en su caso, se disculpe ante los afectados y el público. Pero en la práctica no recogen cómo deben difundirse los escritos de rectificación: lugar del periódico, relevancia en cuanto a su extensión y caracteres ortotipográficos, no inclusión de comentarios ni de apostillas...

Si bien es cierto que los códigos de autorregulación funcionan como simples guías de actuación de los medios, deberían ofrecer pautas más concretas que ayuden a los profesionales que trabajan en ellos a comprender las verdaderas implicaciones de este derecho, así como a formarles sobre cómo debe ser su inserción y cómo ellos mismos pueden contribuir a su efectividad. A la postre, el silencio en este sentido conduce a una cierta inseguridad y un desconocimiento por parte de los profesionales a la hora de enfrentarse a la publicación de estos escritos.

E. La presencia de figuras de autorregulación como el *Defensor* o el Consejo de Prensa son todavía muy escasas

En España son pocos los diarios que cuentan con un *ombudsman* que proteja los intereses de los lectores. A ello se une una realidad que, aunque no parece suponer un problema para la prensa, sí lo es desde un punto de vista objetivo: la imparcialidad de esta figura.

Si bien los diarios que han incluido en sus redacciones la figura del *Defensor* postulan y protegen su independencia en sus propios libros de estilo, lo cierto es que en la práctica asegurar esa independencia es difícil, por el simple hecho de que el *ombudsman* suele ser un periodista de la casa con una dilatada trayectoria profesional. A nadie se le escapa lo complicado de navegar entre dos aguas, compañeros periodistas y lectores, y que en ocasiones el *Defensor* no es precisamente bien visto en la redacción.

Aunque la autorregulación nunca puede significar ningún tipo de censura ni una imposición desde fuera a los medios, sí creemos que sería interesante que se establecieran mecanismos dentro de cada diario para garantizar que la figura del *Defensor* fuera lo más independiente posible: ya sea porque se tratara de un periodista no necesariamente perteneciente a la casa o fuera propuesto por un Consejo de Prensa a nivel nacional o, en su caso, al menos fuera elegido

democráticamente dentro de la redacción y no designado a dedo por la dirección del periódico.

En el caso de los Consejos de Prensa, únicamente existen dos en España, el Consejo de la Información de Cataluña y la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la FAPE. Su importante papel como órgano de autocontrol dentro de la profesión y árbitro entre los conflictos de carácter ético que puedan producirse entre los medios de comunicación y los ciudadanos afectados por ciertas informaciones implican que sea determinante su adhesión por parte de los periodistas a nivel individual y también de los medios de comunicación.

La existencia de los Consejos de Prensa parte de una importante premisa: de no existir el autocontrol dentro de la propia profesión, serán los poderes públicos quienes asuman dicho control sobre los medios, con los consiguientes peligros para la libertad de prensa que eso supondría.

F. La lógica de los medios aboca al periodista a cometer errores

El ritmo frenético que se impone en la difusión de información y la consiguiente falta de contraste de fuentes no es precisamente el mejor aliado del periodista para evitar errores. Como tampoco lo es la espectacularidad que se impone como requisito para ganar lectores, ni los intereses económicos y políticos que se encuentran detrás de la actividad. La crisis del periodismo, que parece no acabar nunca, pone en peligro no solo a la profesión, sino también su fin último, la de proteger el derecho consagrado en el art. 20.1 CE.

A ello se une una marcada precariedad laboral en el sector, donde en demasiados casos es evidente la falta de experiencia (el cómo las empresas de comunicación se alimentan de becarios constituiría en sí otra tesis doctoral aparte) y la escasa inversión en formación de capital humano.

G. Los medios suelen equiparar la publicación de una rectificación con una reprimenda, por lo que tratan de minimizar su impacto

El problema es bien conocido dentro de la doctrina, pero también dentro de las redacciones. Se trata de otro de los grandes males endémicos que sufre el periodismo: la arrogancia del que se cree superior. Paradójicamente, los profesionales que convierten la observación crítica del mundo en su mayor tesoro se muestran incapaces de llevar a cabo un ejercicio de autorreflexión y de análisis de sus puntos débiles, el principal, el de asumir sus errores y reconocerlos sin tapujos ante el público.

Esta actitud lleva a intentar ‘tapar’ las meteduras de pata y, en su caso, sus correspondientes rectificaciones, entendiendo que suponen un ataque hacia la imagen del periodista y su credibilidad. Nada más lejos de lo que realmente ocurre,

puesto que dicha estoica -y absurda- resistencia a negar que también el periodista es humano y falible es la que precisamente coloca en la cuerda floja la relación de confianza que tiene con el público. No olvidemos que el periodista es únicamente aquél a quien la ciudadanía concede tácitamente el derecho y deber de informar y que la información no le pertenece, sino que es un bien común dentro del estado democrático.

H. El ciudadano sigue relegado a una participación menor en los medios de comunicación

En parte de ese concepto que los propios periodistas tienen de sí mismos deviene el papel marginal que hoy en día continúan desempeñando los ciudadanos en el proceso comunicativo.

A pesar de los esfuerzos de ampliar su presencia en los medios de comunicación, todavía son escasos los mecanismos de participación directa (*Cartas al Director* y presencia en ciertos espacios de radio y televisión, principalmente opinativos) o indirecta (representación en órganos de control y gestión de empresas públicas).

Si bien es cierto que es difícil que el público pase a formar parte directa del funcionamiento de un medio de comunicación, sí deberían articularse mecanismos que garanticen su presencia, así como sus reivindicaciones y denuncias de malas prácticas en los medios.

I. La relevancia con la que se difunde la rectificación es directamente proporcional a la importancia del cargo político o económico que desempeñe el afectado

Como hemos podido comprobar a partir de varios ejemplos desarrollados en el punto 5.4. del presente trabajo, los diarios se toman mucho más en serio cumplir con el criterio de relevancia semejante en aquellos casos en los que los escritos de rectificación proceden de importantes personalidades del ámbito político.

Esta clara orientación del criterio del medio en función de sus intereses vuelve a demostrar una falta absoluta de empatía hacia el público y su clara dependencia del poder político y económico, del que se deriva una casi imperiosa necesidad de, a pesar de todo, estar a bien con los poderosos.

7. Futuras líneas de investigación

Varios aspectos han quedado en el tintero en el presente trabajo. Nos hubiera gustado tratarlos, pero superaban los límites de la investigación, principalmente por razones físicas y temporales. Los destacamos a continuación a modo de líneas de investigación que bien pueden desarrollarse en un futuro próximo a partir de que esta Tesis Doctoral vea la luz:

A. La eficacia del derecho de rectificación en la radio y la televisión

Si la localización y análisis de los escritos de rectificación en prensa suponen, por sí mismo, un trabajo de importante envergadura, más complejo es aún adentrarse en el análisis de la figura de la rectificación en medios como la radio y la televisión, donde ciertamente su existencia es menor pero la detección de su presencia es más complicada. Hay que tener en cuenta que, tanto en radio como en televisión, no existe un archivo histórico fácilmente accesible, como sí ocurre con la prensa y los diarios digitales.

Sería muy interesante poder complementar el análisis de la efectividad del derecho de rectificación en la prensa diaria española con el de su homólogo en la radio y la televisión informativas.

B. Alcance y particularidades del derecho de rectificación en Internet

A la espera de que se extienda la protección del derecho de rectificación al ámbito digital, algo que todo parece indicar se va a producir en muy breve periodo de tiempo —recordemos que está pendiente la votación en el Congreso y en el Senado sobre la nueva ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, en cuyo art. 85 se reconoce un derecho de rectificación en Internet—, ya pueden empezar a investigarse de manera más exhaustiva las implicaciones y la efectividad del derecho en ese ámbito, apenas explorado dentro de la doctrina.

C. La rectificación de fotografías e imágenes

Aunque dentro de las categorías de análisis de los escritos de rectificación estudiados en esta Tesis Doctoral se ha incluido la aparición y/o referencia a rectificaciones que aludían a informaciones que presentaban fotografías o imágenes, no se ha entrado de lleno a analizar esta cuestión.

Sería interesante, por tanto, investigar con más detalle aquellas rectificaciones que se centran en denunciar la aparición de fotografías de la persona aludida (física o jurídica) y abrir con ello una nueva rama en el estudio de las pautas éticas a seguir por los periódicos en este sentido. Recordemos que hay casos en los que la presencia de la fotografía o imagen del afectado junto con una información que le alude puede ciertamente agravar la lesión en su fama o buen nombre.

En el mismo sentido, cabría añadir la posibilidad de que el derecho de rectificación no quede reducido por ley a la remisión de un texto escrito, sino que se ofrezca al aludido ofrecer su versión de los hechos acompañada de una fotografía (en el caso de que se trata de una rectificación a una información en prensa acompañada de fotografía), de un vídeo (si la rectificación se va a difundir en televisión) o de una pieza de audio (si la rectificación tiene como destino un espacio radiofónico). Sobre esta necesidad ya han llamado la atención otros autores.

D. Posibles correcciones en los mecanismos de autocontrol para garantizar una mayor efectividad del derecho de rectificación

A partir de las limitaciones que se dan a conocer sobre los instrumentos actuales de autocontrol en lo relativo al derecho que venimos estudiando, sería posible entrar a investigar posibles mecanismos correctores que garanticen una mayor protección y efectividad del derecho en los medios de comunicación.

En este sentido, podríamos hablar, por ejemplo, de manuales deontológicos que incluyan pautas concretas a seguir a la hora de difundir las rectificaciones. También de la inclusión de una figura del *Defensor* más independiente o de Consejos de Prensa que establecieran, asimismo, un criterio estandarizado tanto para la publicación de rectificaciones como para la redacción de las mismas y que fueran de conocimiento público para periodistas y ciudadanos.

8. Referencias bibliográficas

- Abad, L. (2003). El derecho de rectificación. En Bel Mallén, J.I. y Corredoira, L., *Derecho de la información* (pp. 397-417). Barcelona: Ariel.
- Aguilar, M.A. (1997, 8 de julio). La nobleza de rectificar. *El País*. Recuperado de https://elpais.com/diario/1997/07/08/espana/868312810_850215.html
- Andreu, J. (2000). Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. *Fundación Centro Estudios Andaluces, Universidad de Granada*. Volumen 10, núm. 2, 1-34. Recuperado de <http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf>
- Aznar, H. (2000). *Ética y periodismo: códigos, estatutos y otros documentos de autorregulación*. Barcelona: Paidós.
- (2005, 2ªed). *Comunicación responsable. La autorregulación de los medios*. Barcelona: Ariel.
 - (2005). *Ética de la comunicación y nuevos retos sociales. Códigos y recomendaciones*. Barcelona: Paidós.
- Arroyo, M. (2012). *Metodología de la investigación social. Técnicas innovadoras y sus aplicaciones*. Madrid: Síntesis.
- Asensi, J. (1997). Rectificación, responsabilidad, censura (a propósito del derecho de rectificación). En Asensi J. (coord.), *Ciudadanos e Instituciones en el Constitucionalismo actual* (pp. 449-464). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Bardin, L. (1996, 2ªed). *El análisis de contenido*. Madrid: Akal.
- Bel Mallén, J.I. (2003). El autocontrol. En Bel Mallén, J.I. y Corredoira, L., *Derecho de la información* (pp. 293-308). Barcelona: Ariel.
- Belsey, A. y Chadwick, R. (1992). *Ethical issues in journalism and the media*. London: Routledge.
- Benito, J.M. (2001). *La universalización del acceso a la información en el derecho de rectificación* (Tesis Doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- (2006). *La protección de la verdad en Internet: la rectificación electrónica*. Madrid: Cie Dossat.
 - (2007). El derecho de rectificación electrónica: una forma interactiva de participación. En Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad, (Ed.): *La ética y el derecho de*

la información en los tiempos del postperiodismo (pp.161-186). Valencia, España: Fundación COSO.

Bettetini, G. y Fumagalli, A. (2001). *Lo que queda de los medios. Ideas para una ética de la comunicación*. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra.

Bilbeny, N. (2012). *Ética del periodismo. La defensa del interés público por medio de una información libre, veraz y justa*. Barcelona: Universitat de Barcelona Publicacions.

Blázquez, N. (2002). *La nueva ética en los medios de comunicación: problemas y dilemas de los informadores*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

Bouzat, G. (1989). Libertad de expresión y estructura social: el derecho de réplica. *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, Argentina, número 3, 87-101. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/1048965.pdf>

Brajnovic, L. (1969). *Deontología periodística: ensayos entorno de la ética profesional del periodista*. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra.

Buxarraís, A. R., Prats, E. y Tey, A. (2004). *Ética de la información*. Barcelona: UOC.

Caballero, J.A. (2007). *Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Derecho de rectificación. Calumnia e injuria: síntesis y ordenación de la doctrina de los tribunales y la fiscalía general del Estado*. Madrid: Dykinson.

Cáceres, L. (2006). *El derecho de rectificación en la jurisprudencia*. Madrid: Vision Net.

Callejo, J. (2009). El instituto sociológico de la opinión pública libre. En Torres del Moral, A. (dir.), *Libertades informativas* (pp.111-134). Madrid: Colex.

Carrillo, M. (1986). Libertad de expresión y derecho de rectificación en la Constitución española de 1978. *Revista de Derecho Político*, núm. 23, 41-66. Recuperado de <http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Derechopolitico-1986-23-FE90E350&dsID=PDF>

- (1986). Los Consejos de prensa como forma de autocontrol: propuestas y prevenciones respecto a su viabilidad en España. *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*, núm. 54, 77-103. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/26925.pdf>

Casasús, J.M. (2003, 4 de abril). La libertad de prensa nos incumbe a todos. *La Vanguardia*. Recuperado de <http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2003/05/04/pagina-12/34013523/pdf.html?search=casas%C3%BAs>

- Chinchilla, C. (1987). Sobre el derecho de rectificación (en torno a la Sentencia del Tribunal Constitucional 168/1986, de 22 de diciembre). *Poder Judicial*, número 6, 71-82.
- Cucarella, L.A. (2008). *Rectificación, Tribunales y Medios de Comunicación*. Madrid: La Ley.
- Cuevas, J.C. (1998). La élite periodística española. En Cotarelo, R. y Cuevas, J.C., *El cuarto poder. Medios de comunicación y legitimación democrática en España* (pp. 137-155). Melilla: UNED.
- De Carreras, L. (1996). *Régimen jurídico de la información. Periodistas y medios de comunicación*. Barcelona: Ariel.
- De Vega, J.A. (1998). *Libertad de expresión. Información veraz. Juicios paralelos. Medios de comunicación*. Madrid: Universitas.
- Desantes Guanter, J.M. (1974). *La información como derecho*. Madrid: Editora Nacional.
- Echaniz, A. y Pagola, J. (2004). *Ética del profesional de la comunicación*. Bilbao: Desclée de Brouwer.
- Eliades, A. G. (2011). El derecho de rectificación o respuesta en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recuperado de https://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/eliades_rectificacion.pdf
- Esquembre, M. (1997). Una propuesta para rectificar la Ley orgánica de rectificación. En Asensi J. (coord.), *Ciudadanos e instituciones en el Constitucionalismo actual* (pp. 527-538). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Farré, P. (2008). *El derecho de rectificación. Un instrumento de defensa frente al poder de los medios*. Madrid: La Ley.
- Fernández, A. y López, A. (2008). Información y rectificación. El problema de la diligencia y el derecho de rectificación desde el punto de vista de los periodistas. *Estudios sobre el mensaje periodístico*, núm. 14, 449-467.
- Gaitán, J.A. y Piñuel, J.L. (1998). *Técnicas de investigación en comunicación social. Elaboración y registro de datos*. Madrid: Síntesis.
- García Castillejo, Á. (2008). *Autorregulación y deontología de la profesión periodística*. Madrid: GPS.
- García Ferrando, M. (2000, 3ª ed.). La encuesta. En García Ferrando, M., Alvira, F.R., Alonso, L.E., Escobar, R.M., *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación* (pp. 167-201). Madrid: Alianza Editorial.

- García Soriano, M.V. (1999). El derecho de rectificación y sus peculiaridades cuando se ejerce por los actores del proceso electoral. *Revista de Derecho Político*, núm. 46, 153-171.
- Getlin, J. (2000). Ombudsman. *Columbia Journalism Review*, tomo 38, núm. 6, 51-65. Recuperado de https://search-proquest-com.biblioteca5.uc3m.es/docview/230336907?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
- Gil, X. (2008). El derecho de rectificación: una ley anticuada. *Escritura Pública*, núm. 51, 26-28. Recuperado de http://www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?folderId=12092&name=DLFE-10551.pdf
- Gómez Mendoza, M.A. (1999). Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo. Definición, clasificación y metodología. *Revista de Ciencias Humanas*, Volumen 20, 103-113. Recuperado de <https://metodologiaecs.wordpress.com/2012/05/20/analisis-de-contenido-cualitativo-y-cuantitativo/>
- Goodwin, H.E. (1990). *A la búsqueda de una ética en el periodismo*. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.
- González Ballesteros, T. (1981). *El derecho de réplica y rectificación en prensa, radio y televisión*. Madrid: Reus.
- González Urbaneja, F. (2008). Rectificar es de sabios. *Escritura pública*, núm. 51, 29. Recuperado de http://www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?folderId=12092&name=DLFE-10551.pdf
- Greenfield, J. (1985). Un respecto decente. En Schmuhi, R. (ed.), *Las responsabilidades del periodismo* (pp. 65-74). Barcelona: Mitre.
- Gutiérrez Goñi, L. (2003). *Derecho de rectificación y libertad de información. Contenidos constitucional, sustantivo y procesal de la LO 2/1984 de 26 de marzo*. Barcelona: J.M. Bosch Editor.
- Herrera, S. (2003). La participación del público en los medios: análisis crítico e intentos de solución. *Comunicación y sociedad, volumen XVI* (núm. 1), 57-94.
- Iglesias, M. (2015). El ciudadano, en las crisis, busca la verdad con avidez. *Revista TELOS*, núm. 100, febrero-mayo 2015, 65-68. Recuperado de <https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero100/el-ciudadano-en-las-crisis-busca-la-verdad-con-avidez/>
- Izquierdo, J.M. (2013). *¿Para qué servimos los periodistas? (hoy)*. Madrid: La Catarata.
- Jareño, J. (2009). *Ética y periodismo*. Bilbao: Desclée de Brouwer.

- Kapuscinski, R. (2007). *Los cínicos no sirven para este oficio*. Barcelona: Anagrama.
- Landry R. (1998). L'analyse de contenu. En Benoit Gauthier (Ed.), *Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données* (pp. 329-356). Sillery: Presses de l'Université du Québec.
- Latiesa, M. (2000, 3ªed.). Validez y fiabilidad de las observaciones sociológicas. En García Ferrando, M.; Alvira, F; Alonso, L.E.; Escobar, M., *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación* (pp. 409-443). Madrid: Alianza Editorial.
- Ledesma, L. (1984, 14 de febrero). Dictamen de la Comisión de Constitución en relación con el Proyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación. Diario de Sesiones del Senado, Sesión Parlamentaria número 47, 2358-2360. Madrid, España.
- Lippmann, W. (2011). *Libertad y prensa*. Madrid: Tecnos.
- Lizarraga, I. (2005). *El derecho de rectificación*. Navarra: Aranzadi.
- López, H. (1998). La metodología de la encuesta. En Galindo, J. (coord.), *Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación* (pp. 33-73). México D.F., México: Pearson.
- Luhmann, N. (2000). *La realidad de los medios de masas*. Barcelona: Anthropos.
- Maciá, C. (2006). *La figura del defensor del lector, del oyente y del telespectador. Los paladines contra el periodismo desencaminado*. Madrid: Universitas.
- (2006). Un modelo de Defensor del Lector, del Oyente y del Telespectador para el perfeccionamiento del ejercicio del periodismo en España. *Comunicación y Sociedad*, volumen XIX, núm. 1, 47-66.
- Maciá, C. y Herrera, S. (2010). *Ética y excelencia informativa. Los conflictos y retos en el quehacer periodístico desde la perspectiva de los profesionales de la Comunidad de Madrid*. Madrid, España: Universidad Carlos III de Madrid, Asociación de la Prensa de Madrid.
- McBride, K. y Rosenstiel, T. (ed.) (2009). *The New Ethics of Journalism*. Thousand Oaks (Cal.): CQ Press.
- Monzón, C. (2006, 2ª ed.). *Opinión pública, comunicación y política*. Madrid, España: Tecnos.
- Moreno, V. (2011). *El derecho de rectificación: regulación jurídica y eficacia práctica* (Trabajo Fin de Máster). UNED, Madrid.

- Navarro, V. (1998). La veracidad como límite interno del derecho a la información. *Revista Latina de Comunicación Social*, núm. 8. Recuperado de <https://www.ull.es/publicaciones/latina/a/56vic.htm>
- Navas Alvear, M. (2005). El derecho a la rectificación en la perspectiva actual. *Revista jurídica online*, 125-133. Recuperado de https://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2005/01/18_Derecho_Rectificacion.pdf
- Navas del Castillo, F. (2009). Libertad de expresión y derecho a la información. En Torres Del Moral, A. (dir.), *Libertades informativas* (pp.89-109). Madrid, España: Colex.
- Nogueira, F. (2001) El Derecho de Declaración, Aclaración o de Rectificación en el Ordenamiento Jurídico Nacional. *Ius et Praxis, Volumen 7*, núm. 2, 327-356. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19770215>
- Onecha, C. (1985). La rectificación de noticias inexactas. *BIMJ*, núm. 1405, 5-11.
- Ortega, F. (coord.) (2006). *Periodismo sin información*. Madrid: Tecnos.
- Ortí, A. (2000, 3ªed). La apertura y el enfoque cualitativo o estructural: la entrevista abierta semidirectiva y la discusión de grupo. En García Ferrando, M.; Alvira, F; Alonso, L.E.; Escobar, M., *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación* (pp. 219-282). Madrid: Alianza Editorial.
- Pérez Oliva, M. (2016). La rectificación, un derecho que no se ejerce. *Cuadernos de Periodistas*, núm. 32. Recuperado de <http://www.cuadernosdeperiodistas.com/la-rectificacion-derecho-no-se-ejerce/>
- Pineda, A. (2009). Regulación del derecho de réplica en México. *El Cotidiano*, núm. 158, 25-30.
- Ramonet, I. (2005, 3 de enero). Medios de comunicación en crisis. *Le Monde Diplomatique* (versión española). Recuperado de <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=9510>
- Rebollo, L. (2008). *Límites a la libertad de comunicación pública*. Madrid: Dykinson.
- (2009). Estudio de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. En Torres del Moral, A. (dir.), *Libertades informativas* (pp. 459-484). Madrid: Colex.
- Restrepo, J.D. (2004). *El zumbido y el moscardón. Taller y consultorio de ética periodística*. México DF., México: Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano: Fondo de Cultura Económica.
- Rivero Ysern, E. (1968). Los derechos de rectificación y réplica en la prensa, la radio y la televisión a la luz de nuestro derecho positivo. *Revista de Administración Pública*, núm. 57, 141-182.

- Rosas, A. (2011). ¿Derecho de rectificación, derecho de respuesta o derecho de réplica? *Derecho Comparado de la Información*, núm. 18, 67-103.
- Ruiz Romero, M. (2003). Censura y consignas en la prensa franquista. Algunos ejemplos de dirigismo informativo. *Revista Ámbitos*, núm. especial 9-10, 507-529. Recuperado de <http://institucional.us.es/revistas/Ambitos/9-10/Ambitos.2002-2003.i09-10.27.pdf>
- Sierra, R. (1992, 8ªed.). *Técnicas de investigación social*. Madrid: Paraninfo.
- Sobrao, F. (1974). *Información y derecho de réplica*. Madrid: Editora Nacional.
- (1978) El derecho de rectificación. *Persona y Derecho*, núm. 5, 145-226. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10171/12335>
- Soler, P. (2010). Algunas claves de la manipulación *informativa*. En Aparici, R., *La construcción de la realidad de los medios de comunicación* (Capítulo 8). UNED, Madrid: UNED. Recuperado de https://www2.uned.es/ntedu/asignatu/9_PEDRO_SOLER.html
- Soria, C. (1989). El derecho de rectificación (Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional español de 22 de diciembre de 1986). *Documentación de las Ciencias de la Información*, núm.12, 27-40. Recuperado de <https://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/download/DCIN8989110027A/20384>.
- (1997). *El laberinto informativo: una salida ética*. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra.
- Suárez-Castillo, G. (2007). Derecho a la rectificación, responsabilidad jurídica y géneros de opinión. *Palabra Clave, Volumen 10*, núm. 1, 108-113. Recuperado en <http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/1278/1418>
- Suárez Crothers, C. (2000). El derecho de rectificación, declaración o respuesta y la libertad de emitir opinión y de informar. *Ius et Praxis, Volumen 6*, núm. 1, 483-501. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/197/19760125.pdf>
- Torres-Díaz, M.C. (2011). Identidad y reputación digital: el derecho de rectificación en Internet y la LO 2/1984, de 26 de marzo. En Cotino, L. (coord.), *Libertades informativas en Internet: ejercicio, amenazas y garantías* (pp.375-385). Valencia: Publicaciones de la Universitat de València. Recuperado de <https://www.uv.es/cotino/elibertades2010.pdf>
- Urías, J. (2003). *Lecciones de derecho de la información*. Madrid: Tecnos.
- Vallés, M.S. (1999). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid: Síntesis.

- Vilas, J. (1988). El derecho a la información mendaz (Algunas consideraciones sobre la Jurisprudencia Constitucional acerca de la libertad de información). *Revista de derecho político*, núm. 27-28, 281-290. Recuperado de <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:Derechopolitico-1988-27-28-E0AE01C7/PDF>
- Villanueva, E. (2002). *Autorregulación de la prensa. Una aproximación ético-jurídica a la experiencia comparada*. México DF., México: Universidad Iberoamericana.
- Villaverde, I. (1994). *Estado democrático e información: el derecho a ser informado*. Oviedo: Junta General del Principado de Asturias. Recuperado de http://www.academia.edu/20021803/ESTADO_DEMOOCR%C3%81TICO_E_INFORMACI%C3%93N._EL_DERECHO_A_SER_INFORMADO
- (1995). *Los derechos del público*. Madrid: Tecnos.

9. Anexos

Anexo 1. Fichas técnicas elaboradas para la recogida de datos en los diarios *El País*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *Abc*.

Tablas de recogidas de datos análisis cuantitativo de escritos de rectificación

Sección											
Cartas al director	Otras										
	Nacional	Internac.	Local	Ed. regional	Sociedad-Educación-Sanidad	Economía	Cultura	Deportes	Espectác.	Defensor	Otros

Extensión						
Página entera	Media página	1-2 columnas	1-4 medias columnas	5-6 medias columnas	Edición web	
					1-4 párrafos	5 o más párrafos

Referencia a la LO 2/1984	
Sí	No

Reproducción literal del escrito	
Sí	No

Título del escrito											
Rectif.	Aclarac.	Réplica	Puntualiz.	Sin título	Otros	Error	Comunicado o nota	Contestac.	Precision.	Matizac.	Respuesta

Defensa del buen nombre

De persona física	De persona jurídica	De ambas

Título y tratamiento de noticia

Sí	No

Extras

Gráficos/ tablas	Con foto	Carta grupal	Comentarios críticos	Ordenada por el juez	A través de abogado	A foto/ pie de foto	A inform. de terceros	Varias rectif. en mismo escrito	Cambios en su escrito o artículo

Número total de escritos de rectificación publicados en función de cómo se autodefinen

Como se autodefinen los escritos

Rectificación	Puntualización	Aclaración	Precisiones	Error	Matización	Derecho que la ley otorga	Réplica	Corrigen o niegan

Análisis de los escritos por años en cada diario

	Número de rectificaciones publicadas	Porcentaje sobre el total	Referencia a la LODR	Título que reciben	Cómo se autodefinen
AÑO					
1984					
...					
2017					

Anexo 2. Guión de los cuestionarios de calidad realizados a responsables de medios, *ombudsman*, asociaciones de prensa y asociaciones de consumidores y usuarios.

Introducción (común para los cuatro cuestionarios)

“Si le ha llegado este cuestionario es porque su aportación es relevante para que logre completar la investigación que desarrollo. **Por eso necesito su ayuda y le agradezco sinceramente que dedique 15 minutos de su valioso tiempo a cumplimentarlo.**

De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, todos los datos obtenidos de esta investigación se tratarán de forma confidencial y anónima, y con el único objeto científico enunciado.

Por favor, conteste a las siguientes preguntas con una de las opciones que se presentan. Sólo en el caso de que se le solicite una respuesta diferente, emplee sus propias palabras y con una extensión razonable”.

Cuestionario matriz (responsables de medios, *ombudsman*, asociaciones de prensa)

1. ¿Conoce la existencia e implicaciones del derecho de rectificación?
2. ¿Cree oportuna su existencia, así como su regulación jurídica a través de Ley Orgánica?
3. ¿Por su experiencia, puede afirmar que se trata de una figura de peso, conocida por los periodistas?
4. Si su respuesta es negativa, ¿podría decirnos por qué cree que es así?
5. ¿Por su experiencia, puede afirmar que se trata de una figura de peso, conocida por los lectores?
6. Si su respuesta es negativa, ¿podría decirnos por qué cree que es así?
7. ¿Cree que la publicación de rectificaciones supone un límite al derecho a informar?
8. Justifique el porqué de su respuesta.

9. ¿Considera oportuno que los escritos de rectificación se publiquen en la sección de Cartas al Director?
10. Si la respuesta es negativa, ¿dónde cree que deberían publicarse?
11. En su opinión, ¿la prensa diaria española publica los escritos de rectificación con la debida diligencia, es decir, cumpliendo los requisitos de relevancia semejante y de no introducción de comentarios y/o apostillas?
12. ¿Considera que debe existir una fehaciente lesión en el honor de la persona aludida por una información para que ésta remita al diario un escrito de rectificación?
13. ¿Cree que los libros de estilo de los medios, así como los códigos deontológicos periodísticos en general, recogen de manera adecuada y con la relevancia necesaria, el derecho de rectificación?
14. ¿En alguna ocasión ha recibido el medio para el que trabaja una solicitud de rectificación?
15. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿podría precisar título y fecha de la(s) información(es) y/o de la(s) rectificación(es)?
16. ¿Recuerda algún caso en el que el medio para el que trabaja no publicara espontáneamente un escrito de rectificación y se viera posteriormente obligado a hacerlo por orden del juez?
17. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿podría precisar título y fecha de la(s) información(es) y/o de la(s) rectificación(es)?
18. A su juicio, ¿goza el derecho de rectificación de la debida visibilidad y efectividad?
19. En su opinión y con carácter general, ¿son los diarios españoles reticentes a publicar escritos de rectificación?
20. En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿podría decir por qué cree que es así?
21. ¿Considera necesaria la existencia de la figura del Defensor del lector en materia de rectificación?
22. Justifique el porqué de su respuesta.

Preguntas añadidas en el cuestionario a las asociaciones de prensa

23. ¿En alguna ocasión la asociación que preside ha recibido petición de ayuda o de asesoramiento por parte de un ciudadano o de un periodista en relación con el derecho de rectificación?

24. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿podría precisar en qué consistía(n) el/los caso(s)?

Cuestionario a las asociaciones de consumidores y usuarios

1. ¿Representa la prensa diaria una de “las grandes empresas” contra las que habitualmente el consumidor hace valer sus derechos?

2. ¿En qué proporción las quejas hacia la prensa hacen referencia expresa a los aspectos éticos y/o deontológicos de tratamiento periodístico?

(En la mayoría de ocasiones/ en la mitad de los casos aproximadamente/ Rara vez o casi nunca/ No sabe-no contesta)

3. ¿Cuántas de ellas, en particular, tienen relación con el derecho de rectificación?

(Más de la mitad/ menos de la mitad/ casi ninguna/ no sabe-no contesta)

4. ¿Ha recibido en alguna ocasión la asociación que preside/representa una petición de asesoramiento sobre el derecho de rectificación ante un medio de comunicación o una solicitud de ayuda para denunciar una práctica irregular en este sentido?

5. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿podría precisar cuál(es) fue (ron) ese o esos casos y en qué consistía exactamente la solicitud?

Valoración del cuestionario e información sobre el perfil de los encuestados

Al final de los cuatro cuestionarios, se les pide a los encuestados que rellenen los siguientes datos, con el propósito de poder

- Nombre
- Edad
- Localidad
- Formación
- Empresa para la que trabaja

-Cargo actual

-Antigüedad en la empresa

(0-5 años, 5-10 años, 10-20 años, más de 20 años)

-Experiencia profesional (abrir cuadro por diferentes soportes y expresado en décadas)

(0-5 años, 5-10 años, 10-20 años, más de 20 años)

Al mismo tiempo, se les ofrece -si lo desean- valorar el cuestionario con una nota numérica:

-Gracias por haber contestado este cuestionario. Si lo desea, puede valorar aquí la encuesta (del 1 al 5).